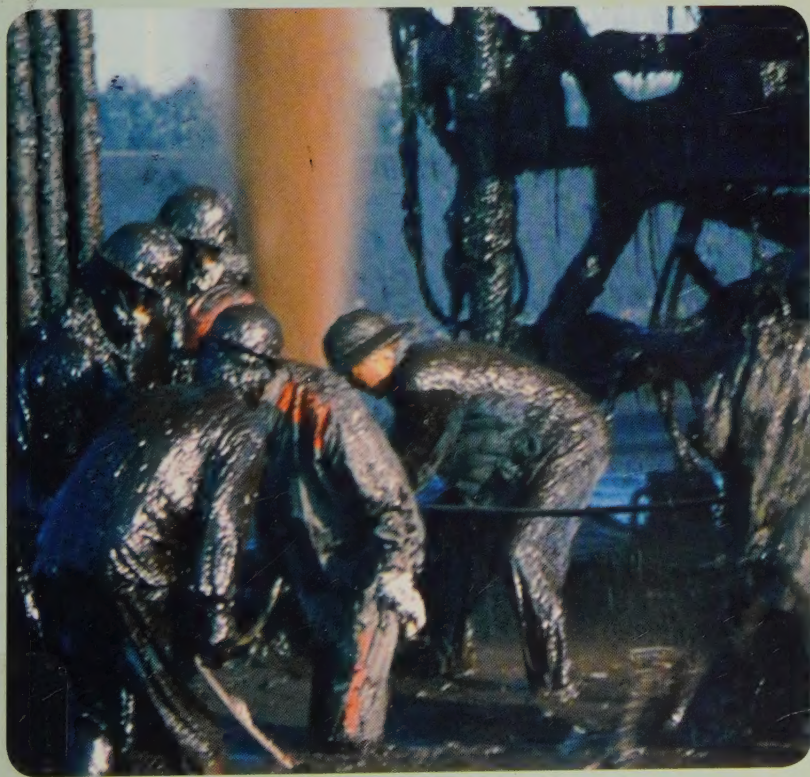


[a la izquierda]

EE.UU., el Petróleo y el (des)orden Mundial

Garry Leech



HARTFORD PUBLIC LIBRARY
500 MAIN STREET
HARTFORD, CT 06103-3075



3 2520 10489 0586

all

EE.UU., el petróleo y el (des)orden mundial

[a la izquierda]

HARTFORD PUBLIC LIBRARY
500 MAIN STREET
HARTFORD, CT 06103-3075

[a la izquierda]

El Otro Davos. François Houtart y François Polet (coordinadores)

La tiranía del mercado y sus alternativas. François Houtart

En el nuevo desorden. Carlos Taibo

La privatización en América Latina. Maura De Val

Cuba. Transición... ¿hacia dónde?. Coordinación: Carlos Tablada

El Mundo Islámico. Alessandro Aruffo

El caos que viene. Adrián Mac Liman

El imperialismo en el siglo XXI. James Petras y Henry Veltmeyer

La cultura del terrorismo. Noam Chomsky

El triángulo fatal. Noam Chomsky

El sueño era posible. Marta Harnecker

Ilusiones de Oriente Medio. Noam Chomsky

¿Otro mundo es posible? Giulio Girardi

Petróleo, poder y civilización. Carlos Tablada y Gladys Hernández

El sistema en crisis. James Petras y Henry Veltmeyer

El otro Israel. Roane Carey y Jonathan Shainin (coordinadores)

Alimentos para todos. John Madeley

Las batallas del agua. Mohammed Larbi Bouguerra

Movimientos y poderes de izquierda

en América Latina. AA.VV.

Cien proposiciones del Foro Social Mundial. AA.VV.

El milagro chino visto desde el interior. AA.VV.

Deng Xiaoping y la revolución cultural. Deng Rong

Objetivos de Desarrollo para el Milenio. AA.VV.

El mundo según Al Qaeda. Brad K. Berner

Turismo hoy: ganadores y perdedores. AA.VV.

El clima: cambios, peligros y perspectivas. AA.VV.

EE.UU., el petróleo y el des(orden) mundial. Garry Leech

EE.UU., el petróleo

y el (des)orden mundial

Garry Leech

Editorial  Popular

*La primera edición de este libro fue publicada
en inglés por Zed Books con el título*
Crude Interventions: the US, oil and the new world (dis)order

© **Editorial Popular, S.A.**

C/ Doctor Esquerdo, 173. 6º Izqda. 28007 Madrid

Tel: 91 409 35 73 Fax: 91 573 41 73

E-mail: epopular@informet.es

<http://www.editorialpopular.com>

Diseño de portada: José Luis del Río

Traducción: Erkins Rumayor

Imprime: Cargraphics

I.S.B.N. (13): 978-84-7884-361-9

I.S.B.N. (10): 84-7884-361-2

D. L.: B-31005-2007

Printed in Spain – Impreso en España

Quedan rigurosamente prohibidas sin la autorización escrita de los titulares del «copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Índice

Introducción | 9

Capítulo 1

Irak: en búsqueda de las riquezas de Babilonia | 17

El advenimiento de Saddam Hussein | 18

Las relaciones Estados Unidos-Irak en la década de 1980 | 26

La Guerra del Golfo y las sanciones de la ONU | 33

La invasión estadounidense y la ocupación | 42

La reestructuración neoliberal de Irak | 58

Conclusión | 68

Capítulo 2

Asia Central: la estrategia de la Ruta de la Seda | 71

El renacer del Islam | 75

Kazajistán: la apertura económica | 79

Azerbaiyán: El nuevo auge del petróleo | 90

Turkmenistán: nadando contra corriente | 99

La militarización de la región | 104

Conclusión | 114

Capítulo 3

África Occidental: explorando el otro golfo | 115

Nigeria: la tierra sin mañana | 116

Angola y la mercancía corruptora | 136

El papel de Washington en África Occidental | 145

Conclusión | 152

Capítulo 4

Colombia: alimentando la adicción a Washington | 155

Las raíces del conflicto | 156

De las drogas al terrorismo | 161

El estado de seguridad nacional | 173

El gran regalo del petróleo | 186

La guerra del petróleo en Arauca | 191

La guerra del petróleo en Putumayo | 202

Conclusiones | 207

Capítulo 5

Venezuela: ¿una alternativa para el siglo XXI? | 211

Petróleo en el patio trasero | 212

La reforma política | 223

La Revolución Bolivariana | 242

La respuesta de Estados Unidos | 255

Conclusiones | 267

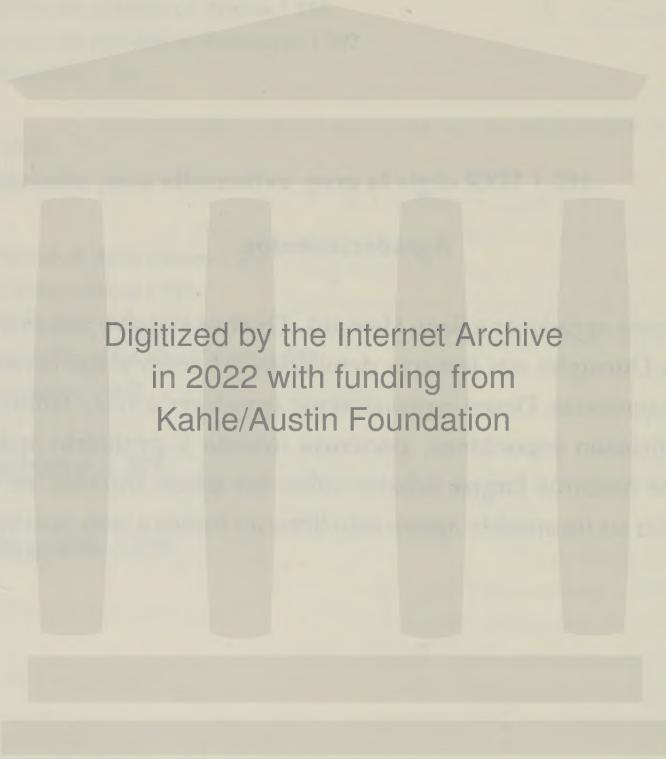
Conclusión | 271

Bibliografía | 279

Introducción

Agradecimientos

Deseo agradecer a Sean Howard, Thomas Wright, Eric Fichtl y Emeka Duruigbo sus lecturas detalladas del texto y sus invalorable sugerencias. Deseo especialmente agradecer a Terry Gibbs por su dedicación espontánea, paciencia infinita y profundo análisis durante nuestros largos debates sobre los temas tratados en este libro. Sin su incansable apoyo este libro no hubiera sido posible.



Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
Kahle/Austin Foundation

Introducción

Al inicio del siglo XXI, está surgiendo un nuevo desorden mundial en el que las batallas por los recursos juegan un papel cada vez más prominente. La importancia del petróleo en este panorama queda enfatizada por las políticas exteriores unilaterales y militaristas del mayor poder mundial en sus intentos de asegurarse el acceso a este recurso crítico. En su contexto global, las comunidades del Sur, ricas en petróleo, han quedado desangradas en sus luchas por defender su soberanía, integridad cultural, derechos humanos y ecosistemas amenazados.

Con sólo el 4% de la población mundial, Estados Unidos consume el 25% de la producción energética mundial. En 2004, Estados Unidos consumió más de 16 millones de barriles de petróleo diarios, de los que fueron importados más de 10 millones de barriles al día, lo que representa el 65% de su consumo¹. Esta sed de energía ha jugado un papel significativo en determinar la política exterior estadounidense en las últimas décadas. El deseo de asegurarse el acceso a fuentes de petróleo confiables ha jugado un papel aún más importante en la determinación de la política exterior del gobierno de George W. Bush que en las administraciones anteriores.

Este libro examina las políticas económica y militar de la administración Bush en las regiones del mundo ricas en petróleo. Con

1. "US Daily average supply and disposition of crude oil and petroleum products, 2004", Departamento de Energía de Estados Unidos, 2004.

más exactitud, examina las consecuencias socioeconómicas y los derechos humanos de estas políticas, así como las de administraciones estadounidenses recientes y de compañías transnacionales energéticas, para los pueblos de las naciones del Sur productoras de petróleo.

Cuando el presidente George W. Bush asumió su cargo el 20 de enero de 2001, el nuevo orden mundial anunciado por su padre una década antes, después del fin de la guerra fría, ya mostraba síntomas de tensión. El aumento de la resistencia por parte de las compañías transnacionales a la globalización económica, sin embargo, no disuadió a la Casa Blanca, llena de neoconservadores de las administraciones de George H. W. Bush y Ronald Reagan, al intentar defender y expandir el sistema capitalista global respaldado por Estados Unidos. Dos temas que dominaron las iniciativas de la política exterior de la nueva administración Bush –tanto antes como después de los ataques terroristas del 11/9– fueron la promoción continua de reformas económicas neoliberales o de “libre mercado” para asegurarse el acceso a nuevas fuentes de petróleo y para satisfacer las crecientes necesidades energéticas estadounidenses.

Uno de los factores distintivos de la administración Bush ha sido la preponderancia de funcionarios de alto rango que fueron antiguos ejecutivos de la industria petrolera: el presidente Bush prestó servicios en la junta directiva de Harken Energy desde 1986 hasta 1993; el Vicepresidente Dick Cheney amasó una fortuna de más de 50 millones de dólares como CEO* de Halliburton durante 1990; la Consejera de Seguridad Nacional y después Secretaria de Estado Condoleezza Rice prestó servicios en la junta de directores de Chevron; el Secretario de Comercio Donald Evans fue el CEO de Tom Brown Inc., una firma exploradora de petróleo y gas. Las compañías petroleras también fueron los principales contribuyentes de

*N. del T.: CEO, siglas de Chief Executive Officer. Jefe oficial ejecutivo, que viene a ser el gerente principal de una empresa o de una organización grande.

las campañas presidenciales de George W. Bush, suministrando al ex gobernador de Texas más de 1,8 millones de dólares en contribuciones para su exitosa campaña de 2000 y más de 2,5 millones de dólares cuatro años después².

Las políticas petroleras de la administración Bush no sólo han sido dictadas por su estrecha conexión con las compañías energéticas de Estados Unidos; también han estado influenciadas por la apremiante realidad geopolítica. Primero, la fuente mundial de petróleo es finita. Y segundo, el consumo creciente de energía por parte de las naciones industrializadas del Sur tales como China y la India ha incrementado significativamente la demanda global de petróleo y ha originado una competencia por controlar las reservas mundiales. En 2003, China sobrepasó a Japón convirtiéndose en el segundo mayor consumidor mundial de energía. Este rápido crecimiento de la sed por el petróleo ha llevado a Pekín a buscar a través del mundo nuevas fuentes, incluyendo lugares tan alejados como América del Sur. El crecimiento económico de China indica que pronto se podrá convertir en la próxima superpotencia que dispute seriamente la hegemonía de Estados Unidos, lo que puede conducir potencialmente a una nueva guerra fría que estaría motivada no por la ideología –a pesar del comunismo oficial de China– sino más bien por el deseo de controlar los recursos mundiales, en particular el petróleo y otros combustibles fósiles.

Para asegurar el acceso a las mayores reservas de petróleo del mundo, Washington ha mantenido una estrecha conexión con algunos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Las naciones miembros de la OPEP –Irán, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Venezuela, Qatar, Libia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos, Argelia y Nigeria– controlan cerca del 40% de la producción mundial de petróleo. Como consecuencia, la OPEP

2. "President George W. Bush: top industries", Center for Responsive Politics, 21 de julio de 2005.

puede manipular los precios globales del petróleo cuantas veces sus miembros acuerden incrementar o disminuir la producción de forma unísona. En Estados Unidos, la OPEP ha sido descrita frecuentemente como una coalición peligrosa con una influencia excesiva sobre la economía estadounidense. En realidad, las políticas de producción de la OPEP raramente están determinadas por el deseo específico de ayudar o dañar los intereses de Estados Unidos, con la obvia excepción del boicot árabe de 1973 que tenía como objetivo apoyar a Israel en la guerra árabe-israelí de ese año. Las políticas de producción de los países de la OPEP están determinadas principalmente por sus propias economías dependientes de la exportación de petróleo, lo que a menudo provoca desacuerdos entre las naciones miembros sobre el establecimiento de las cuotas de producción.

La OPEP también representa un importante componente de la contradicción que existe entre las dos principales preocupaciones energéticas estadounidenses: satisfacer la demanda nacional de energía y los intereses de las compañías energéticas estadounidenses. El pueblo estadounidense prefiere que los precios globales del petróleo se mantengan bajos, lo que se traduce en mejores precios para la gasolina y la calefacción. Los intereses de la industria petrolera a menudo están en conflicto con los intereses nacionales estadounidenses debido a que las compañías energéticas obtienen mayores ganancias cuando los precios son elevados. En consecuencia, la estrategia de la administración Bush en la elaboración de su política exterior influenciada por la energía no ha sido monolítica. Por una parte, algunos miembros de la administración buscan socavar la OPEP y alcanzar un mayor control por parte de Estados Unidos sobre las reservas mundiales para asegurar el acceso a petróleo barato y satisfacer las crecientes necesidades energéticas estadounidenses. Pero otros miembros de la administración se han concentrado en asegurar que las compañías energéticas estadounidenses

puedan acceder a las reservas globales en condiciones de obtener ganancias, lo que puede significar defender a la OPEP y los altos precios del petróleo. En cualquier caso, el objetivo principal de la política externa estadounidense es asegurarse el acceso a las reservas mundiales de petróleo.

En ocasiones, la política externa de Estados Unidos beneficia a las compañías estadounidenses y otras veces beneficia a las compañías transnacionales radicadas en Europa que suministran petróleo al mercado estadounidense. Las políticas petroleras estadounidenses no se construyen en el vacío; han crecido entrelazadas con la implementación del proyecto neoliberal global estadounidense y, desde el 11/9, con la guerra contra el terrorismo. En este libro pretendemos dar un vistazo a cómo la política energética estadounidense ha conducido a intervenciones en varias regiones del mundo ricas en petróleo. En particular, se concentra en tres tipos de intervenciones: militar, económica y corporativa. Las intervenciones militares estadounidenses han jugado un importante papel en asegurar el acceso a las reservas mundiales de petróleo a las compañías energéticas transnacionales y a satisfacer sus propias necesidades energéticas. Han ayudado a brindar seguridad a las operaciones petroleras –aunque haya sido imperfecta en algunas ocasiones– en países tales como Irak y Colombia, y en las regiones ricas en petróleo de Asia Central y África Occidental. Al mismo tiempo, las intervenciones militares estadounidenses, particularmente escudadas tras la guerra contra el terrorismo, han trabajado para establecer condiciones favorables para implementar el proyecto neoliberal estadounidense en Irak y Colombia.

Estados Unidos, de forma directa o a través de instituciones financieras internacionales radicadas en Washington tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, ha intervenido económicamente en el Sur implementando reformas económicas neoliberales que han abierto sus economías y sus recursos a

las compañías transnacionales. Las intervenciones económicas estadounidenses han sido particularmente evidentes en las naciones ricas en petróleo de Kazajistán, Azerbaiyán, Irak y Colombia, y en Venezuela hasta finales de los 90. A pesar de la creciente resistencia al proceso de globalización que ha beneficiado principalmente a las compañías transnacionales y a las economías del Norte, mientras que los ciudadanos del Sur han enfrentado el aumento de la pobreza y la desigualdad, la administración Bush ha continuado promoviendo sus doctrinas de “libre comercio” alrededor del mundo.

Por su parte, las compañías petroleras transnacionales no han dependido solamente de las intervenciones militares estadounidenses y del neoliberalismo para crear condiciones favorables en las naciones ricas en petróleo; han desarrollado sus propios vínculos con regímenes corruptos y represivos en Asia Central y África Occidental. También han trabajado estrechamente con los aparatos militares de Nigeria y Colombia, que han sido responsables de violaciones de derechos humanos mientras protegen las operaciones de las compañías extranjeras.

Mientras que las tres estrategias de intervención –militares, económicas y corporativas– están presentes a menudo en la mayoría de los casos, el grado en que cada forma de intervención es relevante varía de un caso a otro.

Comenzamos observando la historia de la política de Estados Unidos respecto a Irak y cómo ésta ha estado influenciada por el petróleo. Examinamos cómo la invasión y la subsecuente ocupación en marzo de 2003 han sido utilizadas por la administración Bush para preparar el terreno para la implementación de políticas neoliberales concebidas para abrir las reservas petroleras de Irak a la explotación de las compañías transnacionales.

El capítulo 2 enfoca a las regiones ricas en petróleo de Asia Central y el Sur del Cáucaso después del colapso de la Unión Soviética. Examina cómo la intervención económica neoliberal después

de la guerra fría ha hecho accesibles para la explotación por parte de las transnacionales, particularmente las compañías petroleras estadounidenses, los recursos naturales de Kazajistán y Azerbaiyán, los dos países con las mayores reservas de petróleo de la región. La administración Bush también ha usado la guerra contra el terrorismo para establecer su presencia militar en lo que tradicionalmente ha sido el “patio trasero” de Rusia y China. El costo para las poblaciones locales ha sido un dramático incremento de la pobreza y el aumento de la represión a manos de los regímenes autoritarios respaldados por Estados Unidos.

El capítulo 3 explora el papel que han desempeñado las corporaciones transnacionales en las naciones ricas en petróleo de África Occidental. Los estrechos vínculos que las compañías extranjeras han desarrollado con el autoritario gobierno nigeriano y el brutal ejército han contribuido a incrementar la pobreza y las violaciones de los derechos humanos. La vida de las personas en la región del delta del río Níger se ha visto aún más afectada por la destrucción medioambiental resultante de las operaciones petroleras. En Angola, entre tanto, la falta de transparencia en las relaciones entre las compañías extranjeras y el gobierno angolano ha contribuido a los exorbitantes niveles de corrupción de los funcionarios y al aumento de la pobreza.

El capítulo 4 examina cómo en Colombia se han llevado a cabo de manera simultánea las tres formas de intervención. Las políticas neoliberales han producido algunos de los términos contractuales más favorables del mundo para las compañías petroleras extranjeras. La guerra contra las drogas y el terrorismo, entre tanto, ha sido usada para justificar la intervención militar estadounidense en el conflicto civil colombiano, en parte para brindar seguridad a las compañías petroleras extranjeras. Al mismo tiempo, las compañías petroleras extranjeras trabajan estrechamente con unidades militares colombianas respaldadas por Estados Unidos, que son responsables de masivas violaciones de los derechos humanos. A los ojos

de muchos colombianos, la intervención estadounidense y la explotación petrolera han incrementado la pobreza y alimentado la guerra sucia contra la población civil.

El último capítulo examina cómo Venezuela ha desafiado las doctrinas neoliberales y las formas tradicionales en que las naciones del Sur ricas en petróleo manejan sus recursos naturales. El presidente Hugo Chávez ha usado las ganancias petroleras del país para financiar su "revolución para los pobres". En agudo contraste con su vecina Colombia, Venezuela ha reestructurado los términos de los contratos petroleros para beneficiar más al Estado y al pueblo venezolano. Chávez ha implementado políticas sociales y económicas que contradicen directamente la visión neoliberal prevaleciente para poder llevar a cabo programas de redistribución que intentan beneficiar a las masas empobrecidas del país. Como resultado, Chávez ha provocado la ira de la administración Bush, que ha intervenido en los asuntos internos de Venezuela en una variedad de intentos por alcanzar un cambio de régimen.

Los esfuerzos de la administración Bush para asegurar la hegemonía de Estados Unidos en el siglo XXI han contribuido a crear desordenes políticos, sociales, económicos, étnicos y religiosos en muchas regiones del mundo. Cuando este libro iba a la imprenta, la Casa Blanca continuaba sus intervenciones en las regiones ricas en petróleo, a pesar de encontrar cada vez mayor resistencia. En consecuencia, muchos de los asuntos aquí tratados permanecen sin resolver. Tengo la esperanza, sin embargo, de que este libro demostrará ser una útil herramienta para todos aquellos interesados en la política exterior estadounidense y para lograr una mejor comprensión de las conexiones entre las necesidades energéticas estadounidenses, las guerras contra el terrorismo, la globalización, las violaciones de los derechos humanos y otras injusticias sociales enfrentadas por aquellos pueblos del Sur que han sido maldecidos con la abundancia del recurso más buscado del mundo.

Irak: en búsqueda de las riquezas de Babilonia

El 16 de marzo de 2003, cuatro días antes de que Estados Unidos invadiera Irak, el Vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney declaró que el conflicto estaría resuelto “en semanas y no en meses” y que “desde el punto de vista del pueblo iraquí, creo que seremos, de hecho, recibidos como libertadores”¹. Seis semanas después, el presidente George W. Bush aterrizó en el portaaviones *USS Abraham Lincoln*, y bajo una pancarta en la que se leía “Misión cumplida”, declaró que las operaciones de gran envergadura en Irak habían concluido. Para ese entonces, 109 soldados norteamericanos habían muerto en la campaña para derrotar al líder iraquí Saddam Hussein. Sin embargo, un año después, el sondeo de la opinión pública *USA Today/CNN/Gallup Poll*, la encuesta nacional más abarcadora realizada hasta ese momento, mostraba que el 71% de los iraquíes veían a las tropas de coalición lideradas por Estados Unidos como “fuerzas de ocupación” y no como “libertadoras”². En septiembre de 2004, el número de soldados estadouni-

1. Dana Milbank, “Upbeat tone ended with war: officials forecasts are questioned”, *Washington Post*, 29 de marzo de 2003.

2. Cesar G. Soriano y Steven Komarow, “Poll: Iraqis out of patience”, *USA Today*, 30 de abril de 2004.

denses que habían muerto en Irak sobrepasaba la cifra de 1.000, mientras que la resistencia iraquí continuaba intensificándose³. Un hecho que provocó gran preocupación al pueblo iraquí y que contribuyó al incremento de la insurgencia, fue que los “libertadores” del país eran los principales responsables de la muerte de 100.000 iraquíes durante los primeros dieciocho meses de ocupación⁴.

Mientras se hacía evidente que la administración Bush había subestimado el grado hasta el cual el pueblo iraquí se resistiría a la ocupación, el presidente de Estados Unidos no desistió en su intento de implementar su plan para “la promoción de la democracia” e imponer reformas económicas neoliberales o de “libre mercado” en Irak. Tal política estaba concebida para facilitar el acceso de las compañías energéticas estadounidenses al petróleo iraquí, un recurso que ha permanecido fuera del alcance de las transnacionales desde que Bagdad nacionalizara la industria del petróleo en 1972. Irak posee la segunda mayor reserva de petróleo después de Arabia Saudita, con una existencia acreditada de 112 mil millones de barriles. Con sus vastas reservas de petróleo, Irak ha sido de gran interés para la política exterior norteamericana durante las últimas décadas del siglo veinte. La posición de Washington hacia Bagdad ha cambiado significativamente durante este período de sabotear al régimen iraquí en los años setenta, apoyarlo en los ochenta y finalmente, tratar de derrocarlo en los noventa.

El advenimiento de Saddam Hussein

Hasta 1967, un consorcio de compañías petroleras extranjeras irónicamente nombrado Compañía de Petróleo de Irak (CPI) prácticamente monopolizaba las capacidades iraquíes de producción de petróleo. El consorcio CPI consistía fundamentalmente en compa-

3. “US death toll in Iraq passes 1.000”, CNN, 8 de septiembre de 2004.

4. Les Roberts, Riyadh Lafta, Richard Garfield, Jamal Khudhairi y Gilbert Burnham, “Mortality before and after the 2003 invasion of Iraq: cluster sample survey”, *Lancet*, 29 de septiembre de 2004.

ñas británicas incluyendo la Shell Oil, aunque los gigantes energéticos estadounidenses Standard y Mobil compartían a partes iguales un 23,75% de los beneficios (Tripp 2000: 60). Como resultado, Irak fue dependiente durante décadas de las compañías petroleras occidentales, y por ende, de los mercados occidentales. Sin embargo, la guerra árabe-israelí de 1967 ayudó a crear el estado de cosas necesario para que Irak finalmente nacionalizara la CPI.

La respuesta de Bagdad ante el apoyo a Israel por parte de los estadounidenses y británicos durante la guerra fue romper relaciones diplomáticas con las dos potencias occidentales y estrechar lazos con la Unión Soviética. El golpe militar del 17 de julio de 1968, trajo al poder el partido Ba'ath, lo que no afectó la floreciente relación internacional con la Unión Soviética. Si acaso, el nuevo gobierno liderado por Hassan al-Bakr y Saddam Hussein, estrechó aún más sus lazos con la superpotencia comunista.

El nuevo régimen apoyó su retórica socialista introduciendo subsidios para las necesidades básicas, brindando servicios sociales y estableciendo cooperativas agrícolas. Estas iniciativas gubernamentales, junto con el desarrollo de programas de ayuda social en las principales regiones sunitas del país, ayudaron al partido Ba'ath, mayoritariamente sunita, a consolidar su control sobre las esferas económicas y políticas de Irak. Sin embargo, al presidente al-Bakr le seguía preocupando la creciente vulnerabilidad de la economía iraquí frente a las decisiones de la CPI con respecto a la producción de petróleo. En 1969, al-Bakr decidió abordar este problema negociando un tratado con la Unión Soviética para ayudar a la recién establecida Compañía Nacional de Petróleos de Irak (CNPI) a explotar nuevos yacimientos. Cuando, según lo acordado en el tratado de amistad y cooperación soviético-iraquí, estos yacimientos empezaron a producir en 1972, la CPI trató de castigar a Irak inmediatamente reduciendo a la mitad su producción en los yacimientos de Kirkuk al norte del país. Descontento con este hecho,

último de una larga serie de intentos por manipular la economía iraquí por parte de la CPI cada vez que los intereses del consorcio se veían amenazados, al-Bakr finalmente lo nacionalizó en junio de 1972.

Irak se preparó para paliar cualquier represalia económica de la CPI y/o los gobiernos occidentales, enviando a Saddam Hussein a negociar un tratado de comercio con la Unión Soviética, que garantizara la compra del petróleo iraquí por parte de la superpotencia comunista. La nacionalización fue enormemente popular entre los iraquíes y el momento en que se produjo no pudo ser mejor pues fue casi un año antes del significativo aumento en los precios mundiales del hidrocarburo a causa de la guerra árabe-israelí de 1973. La firma del tratado con los soviéticos, sin embargo, colocó a Irak en medio de la Guerra Fría.

En 1972, Washington respondió a las crecientes relaciones con los soviéticos brindando ayuda encubierta a Mustafa Barzani y su Partido Democrático del Kurdistan (PDK). Los rebeldes del PDK buscaban establecer un Kurdistan independiente en el norte de Irak, que incluía la ciudad de Kirkuk, rica en petróleo. El Sha de Irán, respaldado por los Estados Unidos y ya de por sí suspicaz de las crecientes relaciones del régimen iraquí con los soviéticos y su retórica nacionalista y socialista, también brindó ayuda a los kurdos iraquíes. El apoyo de Estados Unidos e Irán al PDK contribuyó a un aumento del conflicto entre los militares iraquíes y los rebeldes kurdos. Irak e Irán comenzaron a preocuparse progresivamente de que el problema kurdo condujera a una guerra entre los dos países. Con el fin de resolver estas preocupaciones, Saddam Hussein se reunió con un grupo de funcionarios iraníes en Algiers en 1975. En la reunión se acordó que Irak aceptaría las reclamaciones territoriales iraníes en la región fronteriza de Shatt al-Arab a cambio del cese del apoyo de Teherán a los kurdos. No queriendo debilitar la posición del Sha, Estados Unidos también suspendió el



Mapa 1: Iraq.

apoyo a los kurdos. El Secretario de Estado Henry Kissinger, ante la pregunta de: qué había de moral en abandonar a un pueblo que Estados Unidos impulsó a la rebelión, solo porque ya no era provechoso desde el punto de vista político, simplemente contestó “que no se debía confundir el brindar cobertura militar con trabajo de misioneros”⁵.

Muchos líderes kurdos acusaron a Estados Unidos y a Kissinger en particular, de haberlos traicionado. El Dr. Sami Abdul-Raman, miembro del PDK, declaró: “Esta ha sido la más cruel trai-

5. James Akins, “Interview with James Akins”, PBS, *Frontline: The Survival of Saddam*, enero de 2000.

ción de nuestra historia –la cual está llena de traiciones. Kissinger fue quien instrumentó esta traición. Y ha sido totalmente injusto prometer al pueblo kurdo ayuda logística y dar la impresión de que si el gobierno iraquí ataca nosotros les ayudaremos– lo cual hicieron al principio. Entonces, a mitad del camino, te abandonan.”⁶ Con el cese de la ayuda iraní y de Estados Unidos, muchos kurdos aceptaron la amnistía ofrecida por el gobierno mientras que otros escaparon a través de la frontera hacia Irán ante la ofensiva militar iraquí. El PDK se dividió en dos facciones, con Jalal Talabani liderando la recién organizada Unión Popular del Kurdistan (UPK). Después de dejar Irak, el líder del PDK Barzani se exilió en Estados Unidos, donde murió en 1979.

En un intento de asegurar que el conflicto kurdo no se inflamara nuevamente, el gobierno iraquí trasladó cerca de medio millón de kurdos de sus aldeas y pueblos en el norte a comunidades chiitas en el sur. Mientras, estimulaba a la población árabe a moverse al norte con miras a incrementar la población árabe en la ciudad de Kirkuk, rica en petróleo.

No sólo había conflicto entre el gobierno iraquí y los kurdos; también existía una historia de confrontaciones entre la minoría sunita y la mayoría chiita –los dos grupos musulmanes constituían aproximadamente el 25% y el 65% de la población iraquí respectivamente. Muchas tribus árabes en el sur de Irak, particularmente cerca de las ciudades de Najaf y Karbala, se habían pasado a los chiitas a mediados del siglo XIX. En la segunda mitad de ese siglo, pensaron en establecer un Estado chiíta independiente al de Irak, una aspiración a la que los británicos pusieron fin cuando establecieron las fronteras del nuevo Estado iraquí en 1921. Los sunitas del país mantuvieron el dominio político sobre los chiitas bajo el gobierno británico y después de la independencia. A diferencia del

6. Dr. Sami Abdul-Rahman, “Interview with Dr. Sami Abdul-Rahman”, PBS, *Frontline: The Survival of Saddam*, enero de 2000.

vecino Irán, donde la mayoría de la población era chiita de origen persa, las variadas sectas chiitas árabes de Irak no pudieron establecer una jerarquía religiosa centralizada. Consecuentemente, según el historiador del Medio Oriente Yitzhak Nakash (2003: 87), “Gobiernos iraquíes sucesivos alcanzaron una mayor separación entre religión y Estado que la alcanzada en Irán, evitando de esta forma que los *mujtahids* [estudiosos de las leyes islámicas] emergieran como fuerza importante en la política nacional iraquí”.

En febrero de 1977, un gran número de chiítas protestó contra la continua marginación a que eran sometidos por parte del gobierno en los programas de ayuda financiados mediante los grandes ingresos petroleros, que habían alcanzado la cifra de 8 mil millones de dólares anuales. El gobierno respondió a la protesta arrestando miles de chiitas y ejecutando 8 *mujtahids*. Al mismo tiempo Saddam Hussein, convertido ya en un experto de la estrategia de la zanahoria y el garrote, introdujo ciertos valores islámicos en las políticas del gobierno, seculares en su mayoría, y expandió los programas de ayuda para incluir más comunidades chiitas. Durante este período, Hussein además consolidó su control de las fuerzas de seguridad del Estado y, en septiembre de 1977, asumió la autoridad sobre las políticas petroleras del país.

Cuando el movimiento revolucionario del ayatolá Jomeini derrocó al sha de Irán en 1979, a Bagdad comenzó a preocuparle que la revolución islámica del país vecino influyera en la población chiita iraquí. En un golpe preventivo, las fuerzas de seguridad de Hussein llevaron a cabo una ofensiva despiadada contra grupos chiítas clandestinos como al-Da'Wa y arrestaron a líderes religiosos, incluyendo el ayatolá Sayyid Mohammad Baqir al-Sadr, quien había pronunciado discursos en contra del predominio sunita en la elite gobernante. Entonces las fuerzas de seguridad de Hussein reprimieron violentamente las protestas chiitas que siguieron al arresto de al-Sadr, ejecutando algunos líderes religiosos, arrestando

a miles de chiitas y enviando a muchos más al exilio. Los chiitas en el sur se alzaron y, con el país en una crisis nacional, al-Bakr presentó su renuncia como presidente. Hussein tomó juramento como nuevo líder de la nación e inmediatamente lanzó sus fuerzas de seguridad contra cualquiera del partido Ba'ath que en su opinión, pudiera desafiar su ascenso a la presidencia. Cientos de enemigos inmediatos y potenciales dentro del partido fueron ejecutados. Según el experto del Medio Oriente Charles Tripp, Saddam Hussein, a sus 42 años, "ha triunfado usando la desconcertante mezcla de carisma, generosidad y terror despiadado, que le sería de tanta utilidad para conservar su posición como gobernante de Irak durante más tiempo que ninguno de sus predecesores" (Tripp 2000: 223).

Después de consolidar su posición en el partido, Hussein la emprendió contra aquellos chiitas que, incitados por el nuevo régimen de Teherán, continuaban sus revueltas en contra del gobierno. El nuevo presidente ordenó a sus fuerzas de seguridad una redada contra miles de chiitas, muchos de los cuales fueron ejecutados. El alcance de la crueldad de Hussein fue evidente cuando, después del intento de asesinato al diputado a Primer Ministro Tariq Aziz, el nuevo presidente ordenó la ejecución del ayatolá al-Sadr, su hermana y cientos de chiitas. Nunca antes un gobierno iraquí había asesinado a un líder religioso tan prominente. Entonces Hussein expulsó del país a unos 100,000 chiitas⁷.

No es sorprendente que las relaciones entre Irak e Irán comenzaran a deteriorarse. A pesar de sus continuas confrontaciones con ciertos sectores de la población chiita iraquí, Hussein trató de crear un sentido de identidad nacional tanto en la población sunita como en la chiita, enfatizando los rasgos distintivos entre iraquíes y árabes. Trató de inculcar en la población una conciencia de Irak toman-

7. Efraim Karsh, "Making Iraq safe for democracy", *Commentary*, abril de 2003.

do el liderazgo en el mundo árabe. En un esfuerzo por concentrar al pueblo iraquí en la causa nacionalista y creyendo que el nuevo régimen iraní era vulnerable al no haberse consolidado aún en el poder, Hussein decidió reafirmar la soberanía iraquí sobre la región de Shatt al-Arab entregada a Irán tres años antes. Hussein además tomaba ventaja de la ruptura de relaciones entre Irán y Estados Unidos después de la revolución y el cese resultante de ayuda militar a Teherán. A finales de septiembre de 1980, creyendo que un abrumador despliegue de fuerzas llevaría al Ayatolá Jomeini a pedir negociaciones rápidamente, Hussein ordenó a los militares iraquíes invadir Irán.

Irán no respondió al ataque de la manera que Hussein había previsto. De hecho, el nuevo régimen iraní congregó exitosamente al pueblo para defender a la nación. Para 1982 los militares iraníes ya contraatacaban exitosamente recuperando el control, eventualmente, del terreno arrebatado por los iraquíes al inicio. El conflicto degeneró en una guerra de desgaste donde cada país tomaba como blanco las instalaciones petroleras del oponente en un intento por incapacitar su economía. En 1982 el conflicto empeoró cuando Irak comenzó a usar armas químicas en el campo de batalla en un intento desesperado de detener la ofensiva iraní. Para cuando los dos países acordaron el cese al fuego en 1988, la Unión Soviética y muchos países occidentales, particularmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, brindaban ayuda a Irak. La marina de Estados Unidos se vio directamente involucrada en la guerra del golfo en función de procurar paso seguro a los tanqueros de petróleo. En el cumplimiento de esta misión las fuerzas estadounidenses destruyeron virtualmente las capacidades navales iraníes e incluso derribaron un avión de pasajeros iraní, matando 290 personas.

Entre tanto, en 1985 los partidos opositores en Kurdistán, PDK y UPK, formaron una alianza y, con ayuda iraní, se volvieron cada vez mas efectivos atacando fuerzas iraquíes emplazadas en regio-

nes kurdas. Hussein respondió enviando a su primo Ali Hassan al-Majid al Kurdistán para organizar una brutal respuesta a los rebeldes. En 1987, los rebeldes capturados fueron ejecutados sumariamente, mientras las aldeas eran destruidas y sus habitantes enviados a campamentos dirigidos por el gobierno. Al siguiente año, los iraquíes dejaron de transferir la población local a campamentos; en su lugar lanzaron una estrategia de tierra arrasada llamada *al-anfal* [despojos de guerra] que incluía la destrucción de aldeas y la masacre de todos sus habitantes. El ejército iraquí amplió el uso de armas químicas, atacando no sólo a la oposición armada sino también a la población kurda en general, incluyendo mujeres y niños. Durante un ataque en marzo de 1988 al pueblo kurdo de Halabja, fuerzas iraquíes asesinaron al menos a tres mil residentes con armas químicas⁸.

En el mes de agosto de 1988, la resistencia del PDK y la UPK era prácticamente inexistente. Alrededor del 80% de los asentamientos kurdos habían sido destruidos y 60.000 kurdos asesinados. Como señaló Tripp: "La devastación causada por *al-anfal* ha demostrado no solo a los kurdos, sino a todos los iraquíes, en los círculos del poder o en cualquier parte, el destino de aquellos que se apartan de los 'estándares nacionales', como los define el mismo Saddam Hussein" (Tripp 2000: 245-6). El costo de los conflictos con los iraníes y los kurdos resultó desconcertante, con cerca de un cuarto de millón de iraquíes y kurdos asesinados y una deuda nacional de 80.000 millones de dólares (ibíd.: 248).

Las relaciones Estados Unidos-Irak en la década de 1980

Después de derrocado el Sha en 1979 y de la captura de 52 rehenes estadounidenses, Washington rompió relaciones diplomáticas con Irán y cortó la ayuda al nuevo régimen revolucionario.

8. "Whatever happened to the Iraqi Kurds?", Human Rights Watch, 11 de marzo de 1991.

Estados Unidos veía al gobierno fundamentalista islámico iraní y a su posición anti-occidental como una nueva fuerza desestabilizadora en el Medio Oriente. La ruptura de Washington con Irán significó que Estados Unidos había perdido un importante suministrador de petróleo. Asegurar una fuente alternativa de petróleo se convirtió en un asunto aún más crítico cuando la administración Reagan anunció un embargo al petróleo libio en 1982. Como consecuencia, Estados Unidos se giró hacia Irak. A pesar de su posición oficial como “neutral” con respecto a la guerra entre Irán e Irak, la administración Reagan comenzó a brindar ayuda a Irak con vistas a asegurarse un flujo estable de petróleo desde la región –aunque las relaciones diplomáticas no se renovaron oficialmente hasta 1984. Durante la década de 1980-90, las importaciones desde Irak aumentaron significativamente de menos de 500 barriles diarios en 1982 a más de medio millón de barriles diarios cuando Hussein invadió Kuwait en 1990⁹.

James Akins, agregado de la embajada estadounidense en Bagdad de 1963 a 1965 y posteriormente embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita, afirmó que después de la caída del Sha de Irán, “la estructura de poderes en el Medio Oriente ha cambiado significativamente, con el país más importante del golfo convirtiéndose, no en uno de los pilares de la política norteamericana en el área sino en uno de los más fuertes oponentes de Estados Unidos y el mundo entero, debido a nuestra cercana relación con el Sha¹⁰.” Desde el inicio de la guerra, los Estados Unidos suministraron a Irak inteligencia militar sobre los movimientos de tropas iraníes. En marzo de 1982, el mismo mes en que la administración Reagan impuso el embargo al petróleo a Libia por sus vínculos con el terrorismo internacional, Estados Unidos borró a Irak de su lista de Esta-

9. “Petroleum imports by country of origin, 1960-2004”, *Annual Energy Review* 2004, Departamento de Energía de Estados Unidos.

10. Akins, “Interview with James Akins”.

dos que brindaban apoyo al terrorismo internacional, permitiendo de esta forma a las compañías estadounidenses exportar tecnología química y biológica de “dual use” (doble propósito) al gobierno de Hussein. La categoría “dual use” incluye tecnología que puede ser usada lo mismo para propósitos civiles que militares. Durante los siguientes 5 años, la venta de equipamiento “dual use” incluyó no solo tecnología química y biológica sino además aviones y helicópteros.

Howard Teicher, un antiguo miembro del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Reagan, testificó en la declaración jurada de 1995 que: en junio de 1982, “El presidente Reagan decidió que Estados Unidos no podía permitir que Irak perdiera la guerra contra Irán”. Como resultado, Teicher declaró:

El director de la CIA [William] Casey encabezará personalmente los esfuerzos para asegurar que Irak tenga suficientes armas, municiones y vehículos para ganar la guerra contra Irán. En conformidad con el secreto NSDD [National Security Decision Directive, Orden Directiva de Seguridad Nacional emitida por el presidente Reagan en junio de 1982], Estados Unidos ayudó activamente a la industria bélica de Irak suministrando a los iraquíes créditos de miles de millones de dólares, proporcionando inteligencia y consejo militar además de supervisar de cerca ventas de armas realizadas por terceros países para asegurarse de que Irak contaba con el armamento necesario. Estados Unidos también brindó consejo sobre operaciones estratégicas... Por ejemplo, en 1986, el presidente Reagan envió un mensaje secreto a Saddam Hussein diciendo que Irak debería aumentar su guerra aérea y bombardear Irán. Este mensaje fue entregado por el Vicepresidente Bush al presidente egipcio Mubarek, quien a su vez pasó el mensaje a Hussein¹¹.

11. “Declaration of Howard Teicher”, Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, 31 de enero de 1995.

Los funcionarios de la administración Reagan ya estaban al tanto del uso de armas químicas por Irak desde 1983. Un memorando interno del Departamento de Estado norteamericano, parcialmente desclasificado, fechado el 21 de noviembre de 1983 plantea: "En octubre de 1982, oficiales extranjeros no especificados dispararon armas químicas letales por orden de Saddam durante las batallas en el área de Mandali... Según se informa, en julio y agosto de 1983, los iraquíes usaron un agente químico de efectos letales contra [sic] fuerzas invasoras iraníes en Haj Umran, y más recientemente contra insurgentes kurdos"¹².

Otro memorando interno del Departamento de Estado emitido tres semanas antes declaraba: "También sabemos que Irak ha recibido la capacidad de producción de armas químicas (AQ), principalmente de firmas occidentales, incluyendo posiblemente una sucursal externa norteamericana"¹³. El memorando además resaltaba el "uso casi diario de AQ" por Irak y sugería al Secretario de Estado George Schultz que si el Consejo de Seguridad Nacional "decide que se deben tomar medidas para asistir a Irak, actualmente nuestra mejor opción de influir en el cese del uso de AQ podría estar en el contexto de informar a Irak de estas medidas"¹⁴. Este memorando parecía sugerir que si la administración Reagan iba a decidir proporcionar ayuda directa a Irak entonces debía usar eso como palanca para lograr que Hussein dejara de usar armas químicas. En otras palabras, en lugar de condenar y castigar a Irak por usar armas químicas, el memorando proponía recompensarlo con asistencia militar por parte de Estados Unidos.

A principios de diciembre de 1983, a Estados Unidos comenzó a preocuparle que la guerra interrumpiera las exportaciones de

12. "Background on Iraqi use of chemical weapons", Departamento de Estado de Estados Unidos, 21 de noviembre de 1983.

13. "Information memorandum: Iraq use of chemical weapons", Departamento de Estado de Estados Unidos, 1 de noviembre de 1983.

14. Ibid.

petróleo iraquíes, las cuales se volvían cada vez más importantes para Estados Unidos. El Departamento de Estado se acercó a la corporación Bechtel para discutir la posibilidad de construir un oleoducto desde Irak hasta el Golfo de Aqaba en Jordania lo que significaba evitar las terminales de exportación del Golfo Pérsico iraquí, que habían sido dañadas por ataques iraníes. Anteriormente, ese mismo mes, el presidente Reagan despachó al enviado especial Donald Rumsfeld para el Medio Oriente, donde se reunió con Saddam Hussein en Bagdad. El informe del Departamento de Estado parcialmente desclasificado dice: "Rumsfeld le dijo a Saddam que Estados Unidos e Irak tenían el interés común de evitar la expansión de Siria e Irán. Dijo además que Estados Unidos estaba presionando a otros Estados para que restringieran la venta de armas a Irán y creía que había cerrado exitosamente las exportaciones estadounidenses a Irán a través de terceros países". El informe continuaba: "Nuestra valoración inicial es que esta reunión ha marcado positivamente el desarrollo de las relaciones Estados Unidos-Irak [sic] y demostrará ser del más amplio beneficio a la postura de Estados Unidos en la región"¹⁵. Entonces Rumsfeld planteó la posibilidad de construir el oleoducto de Aqaba, Hussein dijo que lo consideraría. Sin embargo, varios años más tarde, el líder iraquí rechazaría la propuesta del oleoducto. Según las partes desclasificadas del informe de la reunión de 90 minutos entre Rumsfeld y Hussein, el uso de armas químicas por parte de Irak no fue discutido.

En marzo de 1984, en respuesta al planteamiento iraní del asunto de las armas químicas en las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos emitió una condena pública contra Irak por el uso de tales armas. Algunas semanas más tarde Rumsfeld regresó a Bagdad para arreglar el deterioro en las relaciones que provocó la condena de Washington. Mientras discutía la visita de Rumsfeld a

15. "Rumsfeld mission: december 20 meeting with Iraqi [secret]", Departamento de Estado de Estados Unidos, 21 de diciembre de 1983.

Irak, un miembro oficial del Departamento de Estado dijo que el uso de armas químicas por parte de Irak no afectaría los esfuerzos de Estados Unidos por expandir el comercio y reparar las relaciones diplomáticas entre los dos países. El funcionario añadió: "Estamos interesados en tener un diálogo más cercano con Irak"¹⁶. Dos meses después de esta condena a Irak por usar un tipo de arma de destrucción masiva, la administración Reagan revisó su política de vender tecnología "dual use" al programa nuclear de Irak. Un memorando del Departamento de Estado recomendaba que "Las relaciones comerciales en la esfera nuclear entre Estados Unidos e Irak no deben incluir la más mínima venta de tecnología 'dual use'" y añadía: "El gobierno iraquí no está dispuesto a dar garantías reales" de que esta tecnología no será usada en el desarrollo de armas nucleares¹⁷. El 26 de noviembre de 1984, el diputado a Primer Ministro iraquí Tariq Aziz y el Secretario de Estado estadounidense George Schultz se reunieron en Washington para reanudar oficialmente las relaciones diplomáticas entre los dos países.

A principios de 1986, las Naciones Unidas enviaron un equipo de especialistas para investigar nuevos reclamos iraníes sobre el uso de armas químicas por fuerzas iraquíes. El equipo examinó sobrevivientes así como el suelo y la metralla en las zonas afectadas, concluyendo unánimemente en que efectivamente, Irak había usado armas químicas contra las tropas iraníes. En marzo el Consejo de Seguridad emitió una declaración diciendo que los miembros del Consejo estaban:

Seriamente preocupados por la conclusión unánime de los especialistas de que los iraquíes habían, en múltiples ocasiones, usado armas químicas contra las tropas iraníes y más recientemente

16. "Department press briefing: march 30, 1984", Departamento de Estado de Estados Unidos, 30 de marzo de 1984.

17. "US dual-use exports to Iraq: specific actions", Departamento de Estado de Estados Unidos, 9 de mayo de 1984.

te durante la ofensiva iraní en territorio iraquí, los miembros del Consejo condenan fuertemente este uso de armas químicas en flagrante violación del Protocolo de Ginebra de 1925, el cual prohíbe el uso en la guerra de armas químicas. (UNSC 1987: 11-12)

Estados Unidos fue el único miembro del Consejo de Seguridad que votó en contra de emitir la declaración.

La administración Reagan también se opuso a los esfuerzos del Congreso de poner riendas al uso de armas de destrucción masiva por parte de Hussein. Después del ataque iraquí con armas químicas en Halabja, que mató al menos a tres mil kurdos, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley titulado "Prevención de Actos Genocidas de 1988". El proyecto de ley hacía un llamamiento a terminar la ayuda estadounidense militar y no militar a Irak y a la aplicación de sanciones, incluyendo boicotear el petróleo iraquí. La administración Reagan anunció su oposición al proyecto de ley y trabajó con sus aliados en la Cámara de Representantes para asegurar que este no trascendiera.

La administración Reagan no se limitó a impedir las legislaciones y las condenas a Irak por el uso de armas de destrucción masiva; sino que de hecho ayudó a Bagdad al desarrollo de programas de armas químicas y biológicas. Según un informe emitido por el senador Donald Reigle en 1994, miembro del Comité del Senado para la Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos con respecto a la Administración de Exportación, entre 1985 y 1989 el Departamento de Comercio de Estados Unidos autorizó docenas de ventas de ántrax, botulismo y otros materiales de investigación biológica. El informe de Reigle señalaba: "Estados Unidos suministró al gobierno iraquí materiales "dual use" autorizados los cuales ayudaron al desarrollo de programas iraquíes químicos, biológicos y de sistema de misiles". Aún más, el informe del senador reveló que "los microorganismos exportados por Estados Unidos fueron idénticos a aquellos que

los inspectores de las Naciones Unidas encontraron y recuperaron del programa iraquí para armamento biológico”¹⁸.

Después del ataque químico iraquí en 1988 contra civiles kurdos, Estados Unidos continuó emitiendo licencias de exportación a compañías que vendían equipamiento “dual use” a fábricas de armamentos controladas por el Ministerio de Industria e Industrialización Militar Iraquí (MIMI). La administración del Presidente George H. W. Bush emitió docenas de estas licencias de exportación a pesar de la información de la CIA “mostrando que las entidades controladas por el MIMI estaban involucradas en programas clandestinos de armamento nuclear, químico, biológico y programas de misiles”¹⁹. Durante la década de 1980-90 no fueron solo las corporaciones estadounidenses las que contribuyeron a los programas iraquíes de armamento no convencional; compañías británicas, francesas, italianas, austriacas, suizas y de Alemania Occidental también jugaron su rol. Cuando Irak invadió Kuwait en 1990, según el Departamento de Defensa estadounidense “el agresivo y avanzado programa iraquí de armamento biológico era el más adelantado en el Mundo Árabe”²⁰. También, alrededor de 1990, los fuertes lazos que las administraciones de Ronald Reagan y George H. W. Bush forjaron con Saddam Hussein conllevaron a la importación de cantidades récord de petróleo iraquí –más de medio millón de barriles al día– para satisfacer las necesidades energéticas de Estados Unidos.

La Guerra del Golfo y las sanciones de la ONU

A pesar de haber aumentado exitosamente sus exportaciones de petróleo durante la década del 80, Irak seguía agobiado por una

18. Senador Donald W. Reigle, “The Reigle Report: US chemical and biological warfare-related dual use exports to Iraq and their possible impact on the health consequences of the Gulf War”, Senado de Estados Unidos, 25 de mayo de 1994.

19. Rep. Henry B. Gonzalez, “Details on Iraq’s procurement network”. Acta del Congreso, 10 de agosto de 1992.

20. Reigle, “The Reigle Report”.

enorme deuda adquirida por el costo de la guerra con Irán. Con la economía del país arrastrándose por el suelo, Hussein solicitó a Arabia Saudita, Kuwait y otros Estados de la región condonar la deuda de 40 mil millones de dólares en préstamos que habían dado para ayudar a la industria bélica de Irak. De acuerdo con Tripp, la negativa llevó a Hussein a la decisión de invadir Kuwait y amenazar al régimen Saudita para “extraer recursos y concesiones de los Estados del golfo en general y particularmente de Arabia Saudita” (Tripp 2000: 252). Hussein justificó públicamente la invasión declarando que Kuwait era parte de Irak debido a que históricamente era un distrito de la provincia de Basra, el cual, junto a otras dos antiguas provincias otomanas, Bagdad y Mosul, constituían Irak cuando se formó el país a principios de la década de 1920. En los tiempos de la formación de Irak, sin embargo, los británicos separaron Kuwait de la provincia de Basra y mantuvieron el control del pequeño reino hasta que le otorgaron la soberanía en 1961.

En agosto de 1990, tropas iraquíes invadieron Kuwait y exitosamente se adueñaron del control del país en menos de veinticuatro horas. Hussein estaba convencido de que tal muestra de poder presionaría a Arabia Saudita para renegociar la deuda. También creía que Estados Unidos apoyaría su nueva empresa militar de la misma forma en que había apoyado su invasión a Irán diez años antes. Tales pensamientos por parte de Hussein puede que no hayan sido tan absurdos como ahora parecen. Como apuntó Akins, diplomático de Estados Unidos:

Fuimos muy tolerantes con Saddam. No hubo muchas protestas cuando las aldeas kurdas eran destruidas y los kurdos eran asesinados. No hubo realmente muchas protestas después que Saddam presuntamente usó gas contra los kurdos. Saddam pudo muy razonablemente llegar a la conclusión de que, con todas estas señales, la declaración en el Congreso, la gente hablando acerca de la impor-

tancia económica de Irak, podría salirse con la suya en lo que intentaba hacer en Kuwait²¹.

Como se vería, esto fue un craso error de cálculo por parte del líder iraquí. Arabia Saudita pidió inmediatamente ayuda militar a Estados Unidos, la Liga Árabe condenó la invasión y las Naciones Unidas impusieron un embargo comercial a Irak. Realmente, Estados Unidos respondió en gran medida de la misma forma que cuando Irak invadió Irán: defendieron sus intereses petroleros. En 1990 Arabia Saudita exportaba 1,3 miles de millones de barriles de petróleo al día a Estados Unidos, casi tres veces tanto como los iraquíes. Como había hecho una década antes, Estados Unidos tomó partido por su proveedor de petróleo más importante.

En noviembre de 1990, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 678, la cual exigía que Irak se retirara de Kuwait antes del 15 de enero de 1991 o se expusiera a una expulsión militar. Hussein mantuvo su posición y el 16 de enero una coalición encabezada por Estados Unidos lanzó la Operación Tormenta del Desierto, con una campaña de seis semanas de bombardeo contra Irak, tomando como blanco tanto infraestructuras civiles como militares. Después de la campaña aérea, las fuerzas de coalición retomaron Kuwait, aunque en su retirada las tropas iraquíes incendiaron los pozos de petróleo del país. Las tropas de la coalición no invadieron también Irak porque la Resolución 678 autorizaba sólo la expulsión de las fuerzas iraquíes de Kuwait. El 28 de febrero de 1991, se firmó un cese al fuego y la familia real kuwaití retornó al poder. Mientras la guerra y las correspondientes sanciones de la ONU limitaron el flujo de petróleo iraquí a Estados Unidos, la Tormenta del Desierto liderada por Estados Unidos había eliminado la amenaza contra Arabia Saudita, el suministrador de petróleo más importante para Estados Unidos en el Medio Oriente.

21. Akins, "Interview with James Akins".

Las bajas civiles en los dos bandos fueron masivas. Los soldados iraquíes masacraron a los civiles kuwaitíes antes de la llegada de las tropas de coalición. Entre tanto, el bombardeo aéreo de la coalición a Irak mató a cientos de civiles, si es que no fueron miles, siendo el peor caso el bombardeo de Amirya el 13 de febrero. En ese incidente, un bombardero estadounidense no detectable por radar arrojó dos bombas de 900 libras guiadas por láser en un refugio, asesinando a 314 civiles, entre ellos 130 niños²².

Las atrocidades continuaron después de la guerra. Casi inmediatamente después de la firma del cese al fuego, se produjo un levantamiento chiita en todo el sur de Irak en un intento de tomar ventaja de la aparente posición vulnerable del gobierno. Pero Hussein había mantenido como reserva durante la breve guerra a la mayoría de sus tropas elite de la Guardia Republicana para proteger su régimen en caso de que se produjera tal revuelta. El líder iraquí envió estas tropas a las ciudades conflictivas, donde despiadadamente terminó con el levantamiento. Los chiitas habían respondido a la llamada del presidente Bush al pueblo iraquí a levantarse en contra de Hussein, pero la ayuda estadounidense que ellos esperaban nunca se materializó. Aparentemente, la administración Bush tenía dudas con respecto al caos y la posible desintegración de Irak que podría resultar del derrocamiento de Hussein. En su lugar, los funcionarios estadounidenses creían que, en esos momentos, un Hussein controlado era mejor que el posible establecimiento de un régimen chiita similar al del vecino Irán.

Al mismo tiempo, los kurdos también creían que Estados Unidos vendría en su ayuda si encabezaban la llamada de Bush a la revuelta. Los rebeldes lucharon contra las fuerzas iraquíes y tomaron el control de muchos pueblos del norte, inclusive Kirkuk. Pero después de eliminar el levantamiento chiita, Hussein envió sus tropas de la Guardia Republicana al norte a lidiar con los kurdos. La

22. Tarik Kafala, "Flashback: Desert Storm", BBC News, 15 de enero de 2001.

rebelión pronto colapsó y dos millones de kurdos huyeron a Irán y Turquía, aterrados de que Hussein pudiera usar nuevamente armas químicas contra ellos. Cuando Hussein se dio cuenta de que las fuerzas militares estadounidenses concentradas en las fronteras iraquíes no iban a intervenir para proteger a los kurdos, el ejército iraquí reprimió brutalmente a la población kurda. Finalmente, según Frank Anderson, jefe de la División para el Cercano Oriente de la Agencia Central de Inteligencia en 1991, “ni los chiitas en el sur, ni los kurdos en el norte, ni alguna combinación de los dos, tenía los medios para derrotar, incluso lo que quedaba del ejército de Saddam, sin una ayuda militar externa realmente significativa²³.

Las Naciones Unidas decidieron continuar con el régimen de sanciones impuesto a Irak aun sabiendo que su objetivo original, terminar con la ocupación de Kuwait, había sido alcanzado. Los nuevos objetivos post-guerra de las sanciones de la Resolución 687 incluían la eliminación de las armas de destrucción masiva iraquíes y los misiles de largo alcance, el reconocimiento por parte de Bagdad de la soberanía de Kuwait, el pago de las reparaciones y el cese de la represión al pueblo iraquí. Extraoficialmente, Estados Unidos y Gran Bretaña también esperaban que las sanciones en algún momento condujeran a la caída de Hussein.

Durante los siguientes cinco años se hizo evidente que las fuertes medidas no estaban debilitando el aferramiento de Hussein al poder. Estaban, sin embargo, causando grandes privaciones de comida, agua y medicinas al pueblo iraquí. Las sanciones restringieron las importaciones de muchos productos necesarios para producir comida y medicinas así como para reparar las plantas generadoras de electricidad, equipos hospitalarios, las plantas de tratamiento de agua y las de residuos albañales, muchas de las cuales habían sido dañadas en los bombardeos de la Operación Tor-

23. Frank Anderson, “Interview with Frank Anderson”, PBS, *Frontline: The Survival of Saddam*, enero de 2000.

menta del Desierto. Las sanciones demostraron ser especialmente severas para los niños. Un informe de 1995 publicado por *The Lancet*, una revista médica británica, afirma que 567.000 niños menores de cinco años de edad murieron entre 1990 y 1995 como consecuencia de las sanciones²⁴. A pesar de las impactantes estadísticas de los informes la administración Clinton no pareció conmoverse por la progresiva crisis humanitaria en Irak. El 12 de mayo de 1996, en una entrevista en el programa televisivo de noticias *60 minutes*, a la embajadora de Estados Unidos en la ONU Madeleine Albright le preguntaron sobre la moralidad de mantener sanciones que eran responsables de la muerte de más de medio millón de niños, a lo cual respondió: "Pensamos que es un precio justo."²⁵

En 1995 el Consejo de Seguridad de la ONU intentó arreglar la crisis humanitaria emitiendo la Resolución 986, que proponía el Programa de Petróleo-por-Alimentos. Esto permitió a Irak vender al año 4 mil millones de dólares en petróleo para ser depositado en una cuenta bancaria controlada por la ONU. Los fondos serían empleados en cubrir los costos administrativos y comprar alimento y medicinas para el pueblo iraquí.

El Programa de Petróleo-por-Alimentos, sin embargo, se quedó corto en proveer la asistencia necesaria para aliviar eficientemente el sufrimiento de los niños iraquíes. Tres años después de implantado el programa, un estudio de la UNICEF indicaba que los niños seguían muriendo como resultado de las sanciones. Según el estudio, las cifras de mortalidad infantil –niños que mueren antes del año– se habían duplicado con respecto a la década anterior. La directora ejecutiva de la UNICEF Carol Bellamy, declaró: "Cualesquiera que sean las sanciones que se impongan deben ser diseñadas e implementadas en forma tal que se evite un impacto negati-

24. Sarah Zaidi y Mary C. Smith Fawzi, "Health of Baghdad's children", *Lancet*, 2 de diciembre de 1995.

25. "Autopsy of a disaster: The US sanctions policy on Iraq", Institute for Public Accuracy, 13 de noviembre de 1998.

vo sobre los niños".²⁶ El diplomático estadounidense James Akins fue más lejos cuando declaró: "La mayoría de los árabes en la región piensan que las sanciones deben ser retiradas, que las sanciones no han debilitado a Saddam en forma alguna. Las sanciones han debilitado ciertamente al pueblo iraquí y no existen motivos racionales para que continúen."²⁷ Un estudio de 2000 conducido por El Programa Mundial de Alimentación de la ONU confirmó que "las raciones suministradas por el Programa de Petróleo-por-Alimentos no son suficientes para cubrir las necesidades nutricionales de la población" y que "las familias más pobres difícilmente se las arreglan con las raciones, enfrentando cada mes varios días sin alimentos"²⁸. En diciembre de 2000 la distribución del dinero proveniente del Programa de Petróleo-por-Alimentos fue reestructurada para que el mayor porcentaje de los fondos se usara en necesidades humanitarias²⁹. Después de finalizado el programa en marzo de 2003, se dijo que Hussein se había embolsado miles de millones de dólares en sobornos pagados por compañías privadas extranjeras que deseaban participar en el programa.

El Programa de Petróleo-por-Alimentos facilitó la reinserción del petróleo iraquí en el mercado mundial. Como consecuencia, las importaciones estadounidenses de petróleo iraquí ascendieron rápidamente de cero en 1995 a 795 millones de barriles diarios en 2001, convirtiendo a Irak en el séptimo mayor proveedor de petróleo a Estados Unidos. Debido al Programa de Petróleo-por-Alimentos, las exportaciones de petróleo iraquí a Estados Unidos en el 2001 fueron un 50% mayor que antes de la invasión de Hussein a Kuwait³⁰.

26. "Iraq surveys show 'humanitarian emergency'", UNICEF, 12 de agosto de 1999.

27. Akins, "Interview with James Akins".

28. "Oil for food - food basket adequacy assessment survey", WFP Iraq-North Coordination Office, noviembre de 2000.

29. "Iraqi oil sales fund humanitarian action", Oficina del Programa Iraquí Petróleo-por-Alimentos, Naciones Unidas, 21 de noviembre de 2003.

30. "Petroleum imports by country of origin, 1963-2003", *Annual Energy Review* 2003, Departamento de Energía de Estados Unidos.

Además de las sanciones económicas a Irak, el Consejo de Seguridad de la ONU exigió a Hussein permitir la entrada al país de equipos de inspectores de la ONU para asegurar que los programas nucleares y de armas químicas y biológicas así como los misiles balísticos de largo alcance, fueran totalmente desmantelados. El 3 de abril de 1991 se estableció la Comisión Especial de Desarme de las Naciones Unidas (UNSCOM) mediante la Resolución 687, que tenía la responsabilidad, junto a representantes de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), de conducir la inspección de armamento en Irak.

En los años subsiguientes, Irak impidió repetidamente las actividades de los inspectores de armas de la UNSCOM, aunque Hussein se retractó de ello en la mayoría de las ocasiones en que fue presionado por el Consejo de Seguridad. Todo parece indicar, que las obstrucciones de Hussein estaban motivadas más por el deseo de convencer al pueblo iraquí de que él permanecía firme en el control, que por el deseo de esconder armas de destrucción masiva (ADM). También es posible que Hussein quisiera crear la impresión de que él estaba aún en posesión de ADM, creyendo que era menos probable que Estados Unidos invadiera Irak ante la posibilidad de que él utilizara tales armas.

El juego del gato y el ratón entre Hussein y los inspectores de armas continuó durante esta década. Se intensificó, sin embargo, en 1998 cuando el líder iraquí acusó a los miembros estadounidenses de la UNSCOM de ser espías, negándose a cualquier cooperación futura. El 6 de junio de 1999 el *Washington Post* publicó en la primera página una historia que confirmaba las repetidas reclamaciones de Hussein. En el artículo, un consejero del Secretario General de la ONU Kofi Annan, declaró: "El Secretario General está advertido del hecho de que la UNSCOM facilitó directamente la creación de un sistema de recolección de información para Estados Unidos, violando sus órdenes. Las Naciones Unidas no pueden tomar parte

de una operación para derrocar a uno de sus Estados miembro"³¹. Un antiguo miembro de los grupos de inspectores de armas, Scott Ritter, también admitió que Estados Unidos estaba recolectando información mediante UNSCOM. Ritter admitió que su grupo de inspección de la UNSCOM incluía "nueve operativos encubiertos de la división de operaciones encubiertas de la CIA"³².

Estados Unidos y Gran Bretaña, sin ninguna autorización del Consejo de Seguridad, respondieron a la negativa de Hussein a cooperar con la UNSCOM lanzando la operación Zorro del Desierto, que consistía en arrojar misiles contra múltiples objetivos militares y estratégicos. Ante los inminentes bombardeos, el Secretario-General de la ONU Annan ordenó el retiro de los inspectores de la UNSCOM. Francia y Rusia, miembros del Consejo de Seguridad, se opusieron tanto a la operación Zorro del Desierto como a la existencia de "Zonas de no-vuelo", patrulladas por los británicos y los estadounidenses en las que se prohibía volar a los aviones iraquíes en el norte y sur de Irak. Francia y Rusia insistieron en que estas zonas no estaban autorizadas por ninguna resolución del Consejo de Seguridad y eran por tanto ilegales.

Las revelaciones de que la administración Clinton usara el grupo de inspectores de armas en labores de espionaje, demostró que la misión de la UNSCOM ya no era viable. La situación empeoró más adelante en noviembre de 1999 cuando las Naciones Unidas renovaron el Programa de Petróleo-por-Alimentos sólo por dos semanas en lugar de los seis meses solicitados por Irak. Hussein respondió con el cese de las exportaciones de petróleo, lo que aumentó el precio mundial a 27\$ el barril, su cifra más alta en nueve años.

31. Gellman Barton, "Annan suspicious of UNSCOM role", *Washington Post*, 6 de enero de 1999.

32. Scott Ritter, "Interview with Scott Ritter", PBS, *Frontline: Spying oil Saddam*, abril de 1999.

En 1999 el Consejo de Seguridad disolvió oficialmente la UNSCOM y la reemplazó por la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (UNMOVIC). En un intento por evitar la repetición de las actividades de espionaje que echaron por tierra a la UNSCOM, los equipos de inspectores de la UNMOVIC se formaron con personal directamente empleado por la ONU en vez de representantes de las naciones miembros. Al año siguiente la ONU renovó el Programa de Petróleo-por-Alimentos por seis meses y el petróleo iraquí fluyó nuevamente. Pero no fue sino el 16 de septiembre de 2002 cuando Hussein permitió finalmente la entrada al país de los inspectores de armas de la UNMOVIC. Antes de cumplirse un mes de que los inspectores de armas regresaran a Irak, el Congreso de Estados Unidos autorizó al presidente Bush el uso de medios militares en Irak según lo considerara necesario en orden de “(1) Defender la seguridad nacional de Estados Unidos ante la postura amenazante sostenida por Irak; y (2) Obligar a obedecer todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU concernientes a Irak”³³.

La invasión estadounidense y la ocupación

El 8 de noviembre de 2002 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1441 respaldada por Estados Unidos y el Reino Unido (RU), la cual deploraba “el hecho de que Irak no proporcionó una acertada, completa, y final apertura, según lo exigido en la Resolución 687 (1991), de todos los aspectos relacionados con sus programas para desarrollar armas de destrucción masiva y misiles balísticos”. También condenaba “la ausencia en Irak de vigilancia, inspección y verificación internacional desde diciembre de 1998, según lo requerido en las resoluciones pertinentes”. La resolución concluye declarando: “El Consejo ha advertido a Irak en repetidas ocasiones de que tendría que afrontar serias consecuen-

33. “Authorization for use of military force against Iraq, Resolution 2002”, Congreso de Estados Unidos, 16 de octubre de 2002.

cias como resultado de sus repetidas violaciones con respecto a estas obligaciones”³⁴.

Los detractores de la Resolución 1441, preocupados por el enfoque cada vez más militarista de la administración Bush con respecto a Irak, pensaban que la intención de la resolución era brindar una justificación para futuras acciones militares. Inmediatamente después de adoptada la resolución, el embajador de Estados Unidos en la ONU, John Negroponte, esquivó las críticas declarando: “Como hemos dicho en numerosas ocasiones a los miembros del Consejo, esta resolución no contiene ‘detonadores ocultos’ o ‘automaticidad’ con respecto al uso de la fuerza. De existir una futura violación por parte de Irak, notificada al Consejo por la UNMOVIC, la AIEA o un Estado miembro, el asunto regresará al Consejo para su discusión, como lo establece el párrafo 12”³⁵. Negroponte sugirió también, sin embargo, que Estados Unidos podía responder unilateralmente en caso de no estar de acuerdo con alguna decisión futura de la ONU: “Si el Consejo fracasa en actuar decididamente en el caso de una nueva violación por parte de Irak, esta resolución no limita a ninguno de los Estados miembros para actuar en su propia defensa contra la amenaza que Irak representa, o para hacer cumplir las resoluciones pertinentes y proteger la paz y la seguridad mundial”³⁶.

Era evidente que la administración Bush buscaba justificar la intervención militar en Irak con el objetivo de alcanzar un cambio de régimen. La Casa Blanca se había convertido en detractora del programa de inspección de armamento y se oponía a cualquier propuesta que permitiera a Hussein continuar en el poder. Los funcio-

34. “Resolution 1441 (2002)”, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 8 de noviembre de 2002.

35. Embajador John D. Negroponte, “Explanation of vote by Ambassador John D. Negroponte, United States Permanent Representative to the United Nations, following the vote on the Iraq resolution, Security Council, 8 de noviembre de 2002”, Misión de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, 8 de noviembre de 2002.

36. *Ibíd.*

narios de la administración Bush intensificaron su retórica en contra de Irak para convencer a la opinión pública estadounidense de que Hussein representaba una amenaza inminente para Estados Unidos. Un mes antes de que se adoptara la Resolución 1441, Bush declaró públicamente: "La evidencia indica que Irak está reconstituyendo su programa de armas nucleares" y que "podría tener un arma nuclear en menos de un año"³⁷. Estos comentarios de Bush se hacían eco de los realizados por la Asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, un mes antes, cuando declaró: "Nosotros sabemos que él [Hussein] está tratando de conseguir un arma nuclear... No queremos que el cañón humeante se convierta en un hongo atómico".³⁸

Durante la segunda mitad de 2002, funcionarios de la administración Bush anunciaron un torrente de demandas acerca de la capacidad de Irak para producir armas químicas y biológicas para inculcar el miedo en la opinión pública nacional y justificar la intervención militar. En agosto de 2002, el Vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, anunció: "Dicho de forma sencilla; no existe duda de que Saddam Hussein posee en estos momentos armas de destrucción masiva. No existe duda de que las está reuniendo para usarlas contra nuestros amigos, contra nuestros aliados y contra nosotros"³⁹. El mes siguiente, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, dijo al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado que Hussein "clandestinamente había reunido grandes cantidades de armas biológicas que incluían ántrax, botulismo, toxinas y posiblemente varicela"⁴⁰. Una semana más tarde, en su

37. Presidente George W. Bush, "President Bush outlines Iraqi threat". Oficina de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, 7 de octubre de 2002.

38. Anton LaGuardia y Toby Harnden, "Saddam is 'Months Away from a Nuclear Bomb'", *Daily Telegraph*, 9 de septiembre de 2002.

39. Vice-presidente Dick Cheney, "Vice-President speaks at VFW 103rd National Convention", Oficina de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, 26 de agosto de 2002.

40. Secretario Donald H. Rumsfeld, "Testimony of US Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld before the Senate Armed Forces Committee regarding Iraq". Departamento de Defensa de Estados Unidos, 19 de septiembre de 2002.

discurso nacional de radio, Bush dijo al público estadounidense: "El régimen Iraquí posee armas químicas y biológicas... y, según el Gobierno británico, puede lanzar después de emitida la orden un ataque químico o biológico en el breve lapso de 45 minutos".⁴¹

El presidente de Estados Unidos también llamó la atención sobre las atrocidades de Hussein en el pasado en un intento de denigrar al líder iraquí: "Las armas de destrucción masiva en Irak están controladas por un tirano asesino... Él ya ha ordenado ataques químicos en Irán y en más de cuarenta aldeas de su propio país. En estas acciones murieron o resultaron heridas más de 20.000 personas, más de seis veces el número de personas que murió en los ataques del 11 de septiembre"⁴². Naturalmente, Bush tuvo cuidado de no recordar al público estadounidense que Estados Unidos no sólo había apoyado a Hussein cuando cometió estos crímenes en contra de la humanidad, sino que además lo había ayudado a desarrollar armas de destrucción masiva.

La campaña propagandista continuó en el 2003 cuando en enero, Rumsfeld declaró: "El régimen [de Hussein] tiene grandes existencias de armas químicas y biológicas sin contabilizar, inclusive VX, sarín, ciclosarín y gas mostaza; ántrax, botulismo y posiblemente viruela"⁴³. Como una semana después, Bush anunció al país en su discurso del informe presidencial sobre el estado de la nación: "Nuestros oficiales de inteligencia opinan que Hussein tiene materiales suficientes para producir hasta 500 toneladas de sarín, mostaza y el agente nervioso VX"⁴⁴. Y en febrero, sólo un mes antes de que Estados Unidos invadiera Irak, el Secretario de Estado Colin

41. Presidente George W. Bush, "Radio address by the President to the nation", Oficina de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, 28 de septiembre de 2002.

42. Bush, "President Bush outlines Iraqi threat".

43. Secretario Donald H. Rumsfeld, "Secretary Rumsfeld contrasts Iraq and North Korea", Departamento de Defensa de Estados Unidos, 20 de enero de 2003.

44. Presidente George W. Bush, "President delivers 'State of the Union'", Oficina de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, 28 de enero de 2003.

Powell dijo al Consejo de Seguridad de la ONU: "No puede existir duda alguna de que Saddam Hussein tiene armas biológicas y la capacidad para producir más en breve tiempo, muchas más... Nuestro estimado conservador es que posee almacenadas en este momento entre 100 y 500 toneladas de agentes químicos. Esto es suficiente para cargar 16.000 cohetes battlefield"⁴⁵.

El discurso de la administración Bush no se limitó a tratar de convencer al público estadounidense y a la comunidad internacional de que Irak poseía armas de destrucción masiva. Sus funcionarios trataron desesperadamente de vincular a Saddam Hussein con Al-Qaeda y los ataques del 11/9, buscando una justificación para convertir Irak en blanco de la guerra contra el terrorismo. El 25 de diciembre de 2002, Bush declaró ante periodistas que "No se puede hacer distinciones entre Saddam y Al-Qaeda cuando se habla de la guerra contra el terrorismo"⁴⁶. En enero de 2003 el Vicepresidente Cheney declaró en la Radio Pública Nacional: "Existe evidencia abrumadora de una conexión entre Al-Qaeda y el gobierno iraquí. Estoy más que seguro de que existía una sólida relación entre ellos"⁴⁷. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos no pudo obtener ni una sola evidencia de la conexión entre el gobierno iraquí y Al-Qaeda o los ataques del 11/9, un porcentaje significativo de la opinión pública creyó en las afirmaciones del gobierno.

En una encuesta de la opinión pública llevada a cabo en febrero de 2003, uno de cada cinco estadounidenses creía que Irak estaba directamente involucrado en los ataques de 11/9, estando el 13% de los estadounidenses convencidos de que les habían dado evi-

45. Secretario Colin L. Powell, "Remarks to the United Nations Security Council", Departamento de Estado de Estados Unidos, 5 de febrero de 2003.

46. Presidente George W. Bush y Presidente Álvaro Uribe, "President Bush, Colombia President Uribe discuss terrorism", Oficina de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, 25 de septiembre de 2002.

47. Greg Miller, "Cheney is adamant on Iraq 'evidence'", *Los Angeles Times*, 23 de enero de 2003.

dencia definitiva. Otro 36% creía que Irak brindaba apoyo sustancial a Al-Qaeda⁴⁸. Los argumentos de la administración Bush fueron confirmados por los principales medios de comunicación, que querían desafiar seriamente las afirmaciones sin base del gobierno. El 18 de marzo, con un 56% de estadounidenses seguros de que Irak estaba involucrado de forma directa o indirecta en los ataques del 11/9, Bush envió una carta al Congreso explicando que una invasión a Irak estaba permitida por la legislación que autorizaba la fuerza contra “aquellas naciones, organizaciones o personas que planearon, autorizaron, llevaron a cabo o ayudaron a los ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001”⁴⁹.

A principios de marzo de 2003, Estados Unidos, Gran Bretaña y España redactaron el borrador de una resolución del Consejo de Seguridad autorizando el uso de la fuerza contra Irak. La resolución nunca se llevó a votación porque sus patrocinadores sabían que ésta jamás sería aprobada. Una declaración tripartita integrada por Rusia, Alemania y Francia dos días antes señalaba que ellos creían que el desarme completo y eficiente de Irak podía “lograrse por el medio pacífico de las inspecciones. Observamos que, a pesar de todo, las inspecciones están produciendo resultados cada vez más alentadores... En estas circunstancias nosotros no aprobaríamos una propuesta de resolución autorizando el uso de la fuerza”⁵⁰. Un informe emitido al Consejo de Seguridad el 7 de marzo por el presidente ejecutivo de la UNMOVIC, Hans Blix, apoyaba los señalamientos de la declaración tripartita con respecto a los avances alcanzados: “Existe un significativo esfuerzo iraquí encaminado a esclarecer las incertidumbres así como la cantidad de armas quími-

48. “Americans on Iraq and the UN inspections II”, PIPA/Knowledge Networks Poll, 21 de febrero de 2003.

49. President George W. Bush, “Presidential letter”, Oficina de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, 18 de marzo de 2003.

50. “Tripartite declaration on Iraq by France, Russia and Germany”, Misión Permanente de Alemania en las Naciones Unidas, 5 de marzo de 2003.

cas y biológicas, que fueron destruidas unilateralmente en 1991... El trabajo de inspección continúa y puede rendir resultados”⁵¹. Aún así el Consejo de Seguridad no pudo alcanzar un consenso, por lo que el Secretario General de la ONU Annan advirtió: “Los miembros del Consejo de Seguridad enfrentan ahora una dura alternativa. Si no logran llegar a un consenso y se llevan a cabo acciones sin la autorización del Consejo de Seguridad, estarán seriamente comprometidos la legitimidad y el apoyo a cualquier acción que se emprenda”⁵².

Bush eligió ignorar los avances informados por Blix y la advertencia de Annan de que el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de Seguridad sería ilegítimo. El 19 de marzo, Estados Unidos apoyado por los británicos y por casi una docena de países en una “coalición de voluntarios”, atacó Irak. La invasión a Irak parecía contradecir las declaraciones del embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas John Negroponte cuando aseguró que la Resolución 1441 “no contenía ‘detonadores ocultos’ ni ‘automaticidad’ con respecto al uso de la fuerza” y que “el asunto regresará al Consejo para su discusión”. Las acciones de la administración Bush, sin embargo, se ajustaban a otros comentarios de Negroponte cuando declaró que “esta resolución no limita a ninguno de los Estados miembros de actuar en su propia defensa contra la amenaza que Irak representa, o hacer cumplir las resoluciones de la ONU”. De hecho la Casa Blanca declaró que estaba lanzando un “golpe preventivo” porque las armas de destrucción masiva de Irak representaban una amenaza inminente para Estados Unidos. Los miembros de la administración Bush intentaron además presentar la guerra como una acción legítima al declarar que la Resolución 1441 autorizaba el uso de la fuerza cuando advertía a Irak de que

51. “Security Council bypassed, inspections swept aside by Operation Iraqi Freedom”, *Disarmament Diplomacy*, abril / mayo de 2003.

52. Secretario General Kofi Annan, “The Hague, Netherlands - Secretary General’s press conference”, Centro de Información de las Naciones Unidas, 10 de marzo de 2003.

“afrentaría serias consecuencias como resultado de la continua violación de sus obligaciones”. Mientras la administración Bush mostraba públicamente a Irak como una amenaza militar para Estados Unidos y como violador de las resoluciones de la ONU, la Casa Blanca minimizaba sus segundas intenciones para desear quitar del poder a Saddam Hussein: asegurar un largo período de acceso al petróleo iraquí e implantar reformas económicas neoliberales que integrarían a ese país a la economía global capitalista.

El objetivo militar inicial de la guerra, destituir a Saddam Hussein, se alcanzó rápidamente al mostrar poca resistencia el ejército iraquí y Saddam huir a un escondite. Seis semanas después de la invasión, el presidente Bush aterrizó en el portaaviones *Abraham Lincoln* y declaró que los combates de gran envergadura habían terminado. El anuncio de Bush mostró, sin embargo, ser prematuro cuando, a pesar de la captura de Hussein en diciembre de 2003, aumentó la resistencia a la ocupación. Un año después del inicio de la guerra, el 71% de los iraquíes veía las tropas estadounidenses como de “ocupación más que de liberación”, mientras que sólo el 13% creía que la invasión era moralmente justificable⁵³. El reportero fotográfico Jason Howe fue testigo de la animosidad que muchos iraquíes sentían en contra de la ocupación de Estados Unidos. Inmediatamente después de la mayoría de los bombardeos, dice Howe, circulaban rumores de que “fueron los americanos los que lo hicieron para justificar quedarse por más tiempo... En todos los coches bombardeados que veíamos venía alguien y nos decía que habían visto un helicóptero estadounidense disparar cohetes a la estación de policía o al hotel o a lo que fuese⁵⁴.”

Tristemente, el sentimiento de ira y desconfianza no era de un solo bando, de acuerdo al soldado de infantería del ejército esta-

53. Cesar G. Soriano y Steven Komarow, “Poll: Iraqis out of patience”, *USA Today*, 30 de abril de 2004.

54. Jason P. Howe, correo electrónico al autor desde Bagdad, 20 de marzo de 2004.

dounidense Darrell Anderson, quien sirvió ocho meses en Irak y prefirió buscar asilo político en Canadá antes que regresar al servicio en combate al terminar su permiso. Anderson declaró que el comportamiento y la actitud de muchos soldados estadounidenses hacen evidente que “odian a esta gente (iraquíes). Hay un odio hacia el pueblo iraquí⁵⁵.” Las aseveraciones de Anderson fueron respaldadas por una encuesta de la opinión pública de 2004, en la que el 58% de los iraquíes decían que los soldados de Estados Unidos “se conducían mal o muy mal” y el 46% declaró que las tropas estadounidenses se mostraban faltas de respeto con las mujeres iraquíes⁵⁶.

Que muchos iraquíes tuvieran un punto de vista cínico con respecto a Estados Unidos no es sorprendente cuando se cuenta el número de iraquíes muertos por las tropas estadounidenses. En septiembre de 2004, el número de soldados estadounidenses que habían muerto rebasó los 1.000, pero este número es pálido en comparación con el de más de 100.000 de iraquíes que murieron durante los dieciocho meses anteriores. Según un estudio de campo publicado en *The Lancet* (revista médica británica), el riesgo de los iraquíes de sufrir una muerte violenta era cincuenta y ocho veces mayor después de la invasión que antes. Según la revista, “la muerte violenta era muy común... y se atribuía principalmente a las fuerzas de coalición. La mayoría de las personas notificadas asesinadas por las fuerzas de coalición eran mujeres y niños.”⁵⁷

Kelly Dougherty, un soldado estadounidense que sirvió en Irak desde abril de 2003 hasta febrero de 2004, se hizo eco de las afirmaciones de *The Lancet*: “Ustedes no escucharon todos los días cómo sufre el pueblo iraquí bajo las manos del ejército estadouni-

55. Darrell Anderson, entrevista con el autor, Sydney, Nueva Escocia, Canadá, 12 de marzo de 2005.

56. Soriano y Komarow, “Poll: Iraqis out of patience”.

57. Roberts et al., “Mortality before and after the 2003 invasion of Iraq”.

dense y cómo muchas personas son arrestadas o detenidas, disparadas y asesinadas o cualquier otra cosa, que son completamente inocentes, o que sólo trataban de ir a sus asuntos diarios⁵⁸."

Tratando de contrarrestar el creciente número de detractores nacionales e internacionales que reclamaban que invadir Irak no tenía mucho que ver con la campaña de guerra antiterrorista, Bush declaró: "No hay duda de que Saddam Hussein tuvo lazos con Al-Qaeda⁵⁹." Menos de una semana después, el 23 de septiembre, el presidente de Estados Unidos dijo ante la Asamblea General de la ONU que los insurgentes "han convertido Irak en el frente central en la guerra terrorista"⁶⁰. Dado que los insurgentes no existían antes de la invasión y ocupación estadounidense, la declaración de Bush de que una insurgencia surgida después de la invasión "ha convertido a Irak en frente central en la guerra terrorista" sugiere que no era el frente central de la guerra terrorista antes de la invasión de Estados Unidos, lo cual contradice una de sus justificaciones para ir a la guerra.

El 22 de julio de 2004 la Comisión Nacional de Ataques Terroristas sobre Estados Unidos, también conocida como la comisión del 11/9, hizo público su informe final del análisis de los eventos que causaron los ataques del 11/9 y la respuesta de la administración Bush a los mismos. El informe dejó claro que después del 11/9, algunos funcionarios de la administración Bush intentaban usar los sucesos del 11/9 para justificar una invasión a Irak. El Secretario de Estado Powell dijo a la comisión que el Subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz "fue siempre de la opinión de que Irak era un problema que había que afrontar. Y vio esto (11/9) como algo que se

58. Celina R. De Leon, "A soldier speaks: Kelly Dougherty", *Altetnet*, 24 de agosto de 2005.

59. Presidente George W. Bush, "Remarks by the President after meeting with members of the Congressional Conference Committee on Energy Legislation", Oficina de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, 17 de septiembre de 2003.

60. Presidente George W. Bush, "President Bush addresses United Nations General Assembly", Oficina de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, 23 de septiembre de 2003.

podría utilizar para enfrentar el problema de Irak⁶¹.” El informe menciona la reunión del Consejo Nacional de Seguridad del 17 de septiembre de 2001 en la que “el presidente Bush ordenó al Departamento de Defensa estar listo para enfrentar a Irak si Bagdad actuaba en contra de los intereses estadounidenses, con planes que incluyeran la posible ocupación de los campos de petróleo iraquíes⁶²”. La evidencia presentada en el informe de la Comisión del 11/9 y la retórica pre-guerra de la administración Bush sugiere que era de poca importancia para la Casa Blanca si los inspectores de armas de la ONU tenían éxito o no neutralizando el potencial militar iraquí.

Poco después de la invasión estadounidense, el presidente ejecutivo de UNMOVIC, Hans Blix, instruyó al Consejo de Seguridad de la ONU sobre las inspecciones llevadas a cabo hasta el día antes de comenzar la guerra. Según Blix, “la Comisión no ha encontrado en ningún momento durante las inspecciones en Irak evidencia de que se continuaran o se reestructuraran los programas de armas de destrucción masiva o cantidades significativas de productos prohibidos, ya fuera antes o después de 1991.” Después pasó a destacar que “durante el último mes y la mitad de nuestras inspecciones, la parte iraquí hizo considerables esfuerzos para brindar explicaciones... No tuvimos tiempo para entrevistar más que un puñado del gran número de personas que hubieran declarado por Irak, al haber participado en la destrucción unilateral de armas biológicas y químicas en 1991”.⁶³

Después de la invasión, la administración Bush desplegó su propio equipo de inspectores de armas, el Grupo de Vigilancia de Irak. Los inspectores estadounidenses determinaron que las decla-

61. “The 9-11 Commission Report”, Comisión Nacional de Ataques Terroristas contra Estados Unidos, 22 de julio de 2004.

62. *Ibíd.*

63. Hans Blix, “Notes for the briefing of the Security Council on the thirteenth quarterly report of UNMOVIC”, Naciones Unidas, 5 de junio de 2003.

raciones iraquíes de haber destruido unilateralmente la mayoría de sus armas biológicas y químicas después de la Guerra del Golfo eran aparentemente verdaderas. David Kay, director del Grupo de Vigilancia de Irak, admitió en su testimonio del 2 de octubre de 2003 ante el Congreso de Estados Unidos que "Irak no continuó llevando a cabo un gran programa centralizado de armas químicas después de 1991. La información encontrada hasta la fecha sugiere que la capacidad iraquí para desarrollar y producir nuevas armas químicas fue reducida –si no enteramente destruida– durante las operaciones Tormenta del Desierto y Zorro del Desierto, además de 13 años de sanciones e inspecciones de la ONU"⁶⁴. Kay además apuntó que sus inspectores de armas "no ocultaron evidencia de que Irak había dado pasos significativos después de 1998 para construir realmente armas nucleares o producir material fusible"⁶⁵.

A finales de 2003 ya se había aclarado que Irak no tenía armas de destrucción masiva por lo que no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos. Si la administración Bush hubiera permitido a los inspectores de la UNMOVIC continuar llevando a cabo sus inspecciones, estos pronto hubieran descubierto que Irak no poseía armas de destrucción masiva. O quizás la Casa Blanca estaba consternada ante la idea de que futuras inspecciones eliminaran la justificación primaria para derrocar a Hussein del poder y que pudiera gobernar hasta el cese de las sanciones.

Tampoco existía evidencia que soportara las declaraciones preguerra de la administración Bush de que Saddam Hussein y Al-Qaeda eran aliados y de que Irak participó de alguna forma en los ataques del 11/9. El informe final de la Comisión del 11/9 declaró que el poco contacto que existió entre el secular régimen de Bagdad

64. David Kay, "Statement by David Kay on the interim progress report on the activities of the Iraq Survey Group (ISG)", House Permanent Select Committee on Intelligence, House Committee on Appropriations, Subcommittee on Defense, and the Senate Select Committee on Intelligence, 2 de octubre de 2003.

65. *Ibíd.*

y el fundamentalismo islámico Al-Qaeda nunca “evolució hacia una relación operacional y de colaboración. Tampoco se ha encontrado evidencia que indique que Irak haya colaborado con Al-Qaeda en desarrollar algún ataque contra Estados Unidos⁶⁶.”

La justificación de la administración Bush sobre los derechos humanos para derrocar a Saddam Hussein del poder también perdió su brillo el 28 de abril de 2004, cuando la cadena televisiva CBS mostró en *60 Minutes II* fotografías de soldados estadounidenses abusando de prisioneros iraquíes en la prisión Abu Ghraib de Bagdad. Un informe hecho público después de una investigación interna del ejército describe algunos de los abusos: “Romper luces químicas y poner el líquido fosfórico sobre los detenidos... golpear a los detenidos con un mango de escoba y una silla; amenazar a los detenidos masculinos con la violación... sodomizar a un detenido con una luz química y quizás un palo de escoba, utilizar los perros militares para asustar e intimidar a los detenidos con amenazas de ataque y en una ocasión dejarlo morder realmente al detenido⁶⁷.”

Entre las muchas fotografías de abusos había una que mostraba a un prisionero con cables eléctricos conectados a sus testículos. Otra mostraba a un soldado sosteniendo una de las puntas de una correa para perros mientras la otra punta estaba atada alrededor del cuello de un prisionero desnudo que yacía en el suelo. Había también una foto de un soldado estadounidense forzando aparentemente a un prisionero desnudo cuyo cuerpo estaba embadurnado de algo que parecía excremento, a caminar sobre una línea recta con los brazos extendidos y los tobillos atados. Al mismo tiempo que se cometían estos abusos, el General del Ejército de Estados Unidos, Janis Karpinsky, decía a los medios estadounidenses que, para los presos iraquíes, “las condiciones de vida eran mejores

66. “The 9-11 Commission Report”.

67. Seymour M. Hersh, “Torture at Abu Ghraib”, *New Yorker*, 30 de abril de 2004.

ahora en prisión que antes en sus hogares. En un momento tuvimos la preocupación de que no se quisieran ir⁶⁸."

Muchas personas del Mundo Árabe se horrorizaron con las imágenes de soldados estadounidenses humillando y abusando de los prisioneros iraquíes en uno de los antiguos centros de tortura de Saddam Hussein. Poco después de las revelaciones de Abu Ghraib, insurgentes iraquíes comenzaron a decapitar a occidentales secuestrados, declarando que lo hacían en venganza por las humillaciones que sufrían los prisioneros iraquíes. Muchas de las decapitaciones, que fueron grabadas en vídeo, se llevaron a cabo con las víctimas vestidas con uniformes anaranjados similares a los que llevan los detenidos presos en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo en Cuba.

También era evidente a principios de 2004 que una enorme mayoría de los insurgentes no eran antiguos terroristas, como declaró repetidamente la administración Bush, sino iraquíes de las poblaciones chiitas y sunitas que simplemente se oponían a la ocupación estadounidense. Esto se hizo clarísimo después del asalto militar de noviembre de 2004, contra los insurgentes dirigidos por el jordano de nacimiento Abu Musab al-Zarqawi en la ciudad de Faluya, mayoritariamente sunita. Las tropas de Estados Unidos tomaron la ciudad después de una semana de intensos combates y según el coronel de la marina estadounidense Michael Regner, al menos 1.030 de los 1.052 insurgentes capturados eran iraquíes. En otras palabras, mientras su líder era extranjero de nacimiento y vinculado con Al-Qaeda, menos de veintidós de más de mil insurgentes eran realmente extranjeros⁶⁹.

Después del ataque, las tropas de Estados Unidos negaron la entrada a Faluya durante varios días a los trabajadores de la salud,

68. *Ibíd.*

69. Robert Burns/Prensa Asociada, "Few foreigners are among insurgents captured in Fallujah", *Boston Globe*, 15 de noviembre de 2004.

limitando de esta forma la información acerca del número de bajas civiles causadas por una semana de incesantes bombardeos. Siete meses antes, en abril de 2004, aviones estadounidenses ya habían llevado a cabo una intensa campaña de bombardeos contra Faluya, pero detuvieron el ataque antes de capturar la ciudad debido a los reportajes de la cadena de televisión árabe al-Jazeera de que cientos de civiles, incluso mujeres y niños, estaban siendo asesinados en la ofensiva estadounidense. La administración Bush negó los reportajes de al-Jazeera, pero el foto-reportero británico Jason Howe entró en Faluya inmediatamente después de los ataques y describió lo que vio: "fotografié las nuevas tumbas colectivas de Irak que esta vez no eran el resultado del mañoso trabajo de Hussein, sino el resultado del ataque estadounidense a la ciudad. En un solo lugar más de 200 cadáveres habían sido enterrados en un campo de fútbol. Uno de quince años estaba de luto por su hermano con el que solía jugar en ese mismo terreno"⁷⁰.

Unas semanas después del fallido intento de capturar Faluya en abril, el Secretario de Estado Powell visitó Qatar, donde está la sede de al-Jazeera, y presionó al gobierno para que frenara en sus reportajes a la estación árabe más vista en el Medio Oriente. Powell fue tan lejos como para sugerir que de no tener éxito en esto se verían afectadas las relaciones entre los dos países⁷¹. Dos meses más tarde, la Consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, criticó públicamente a al-Jazeera, declarando que la estación brindaba un recuento tendencioso de los sucesos de Irak. En agosto de 2004, después que fallara el intento estadounidense de influir en las transmisiones de al-Jazeera, el primer ministro provisional de Irak, Iyad Allawi, cerró los estudios de la cadena en Bagdad y prohibió a sus corresponsales trabajar en el país. Esta violación de la libertad de prensa contradice claramente la meta establecida por la administra-

70. Howe, correo electrónico al autor.

71. Paul Richter, "US airs critical views of Arab TV", *Los Angeles Times*, 28 de abril de 2004.

ción Bush de llevar democracia a Irak. El problema para la Casa Blanca era que el pueblo iraquí prefería las noticias críticas de al-Jazeera a las ofrecidas en el canal iraquí al-Iraqiya, financiado por el Pentágono, al que la mayoría de los iraquíes consideran poco más que el vocero de la ocupación.

Finalmente, funcionarios iraquíes admitieron que más de dos mil personas habían muerto en el ataque de Faluya en noviembre. Sin la presencia de los corresponsales de al-Jazeera en la ciudad, Allawi estuvo en condiciones de decir que ninguna de estas bajas fue civil; todos eran terroristas⁷². El infante de la Armada estadounidense Darrel Anderson cuestionó la visión de etiquetar a los insurgentes como terroristas, declarando que aquellos que luchan contra la ocupación son sólo simples iraquíes que defienden su tierra de invasores extranjeros. Basado en sus experiencias en Irak, Anderson declara: "No existe realmente una insurgencia. Es sólo gente que lucha por defender sus hogares, por defender sus vidas⁷³."

En septiembre de 2004, el Secretario General de la ONU Kofi Annan finalmente criticó la invasión estadounidense a Irak. El Secretario General declaró que la invasión no debió llevarse a cabo "sin la aprobación de la ONU y un mayor apoyo de la comunidad internacional". Annan también dijo que "debía haber existido una segunda resolución, pues el Consejo de Seguridad indicó que, si Irak no cumplía, habría consecuencias. Pero correspondía al Consejo de Seguridad aprobar o determinar cuáles serían estas consecuencias". En su crítica más fuerte el Secretario General de la ONU declaró que la guerra violaba las leyes internacionales porque "no estaba conforme con la Carta de la ONU; desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la Carta era ilegal"⁷⁴.

72. Harvey McGavin, "The civilian death toll", *Independent*, 15 de noviembre de 2004.

73. Anderson, entrevista con el autor.

74. Secretario General Kofi Annan, "Excerpts: Annan interview", BBC News, 16 de septiembre de 2004.

La reestructuración neoliberal de Irak

En sus discursos sobre un cambio de régimen en Irak y refiriéndose a reformas políticas y económicas en el Medio Oriente en general, Bush esgrime otra justificación para derrocar a Saddam Hussein: promoción de la democracia y reformas económicas neoliberales. Según la iniciativa para el libre comercio en el Medio Oriente de Bush, anunciada en febrero de 2003, Estados Unidos pretende “continuar con acuerdos integrales de libre comercio con países que estén preparados y deseosos de tomar el compromiso profundo de llevar a cabo reformas económicas, liberalizar los sistemas de comercio y abrir sus economías”⁷⁵. La administración Bush intentaba convertir Irak en un ejemplo económico y democrático para el resto del Medio Oriente incorporando el país en el sistema capitalista global mediante la implementación de reformas neoliberales. Inevitablemente, estas reformas requerirían la completa o parcial privatización de entidades estatales y la apertura de la economía del país, especialmente en el sector petrolero, a inversiones extranjeras.

El sociólogo William Robinson describió la estrategia de la administración Bush para la reestructuración de Irak:

Estados Unidos tiene tres metas para el sistema político que intentará llevar a cabo en Irak. La primera es atraer a las elites de orientación transnacional a compartir el interés de Washington en integrar a Irak en el sistema de capitalismo global y a quien pueda administrar el Estado local que se construye bajo la tutela de las fuerzas de ocupación. La segunda es aislar a las elites contrarias que no estén de acuerdo con el proyecto estadounidense, tales como las elites de orientación nacional (como opuesto de transnacional) y a otros que estén en posición de liderazgo, autoridad e influencia y que no compartan las metas de Estados Unidos. La tercera es esta-

75. Presidente George W. Bush, “Middle East Free Trade Initiative”, Office of the United States Trade Representative, 27 de febrero de 2003.

blecer la hegemonía de esta elite sobre las masas iraquíes, para prevenir que las mismas se politicen y se muevan independientemente o en dirección contraria al proyecto de Estados Unidos, mediante su incorporación "consecuente" con el orden político que desea establecer Estados Unidos⁷⁶.

El 13 de julio de 2003, Paul Bremer, Director de la Autoridad Provisional de Coalición, dirigida por Estados Unidos, designó veinticinco personas al Consejo de Gobierno Iraquí para dirigir a Irak; además Bremer se reservó el derecho de vetar cualquier decisión tomada por el Consejo. Los funcionarios de la administración Bush se apresuraron en destacar que el Consejo era representativo de la población iraquí con la mayoría de sus miembros chiitas y el resto compuesto por sunitas, kurdos, turcos y cristianos asirios. Técnicamente el maquillaje demográfico del Consejo de Gobierno era representativo de la población iraquí, pero en realidad la mayoría de los chiitas eran moderados que habían vivido en el exilio en Estados Unidos durante años y que mantenían estrechos lazos con funcionarios estadounidenses. En este sentido no eran realmente representativos de la población chiita, sino elites transnacionales que apoyaban el proyecto estadounidense descrito por Robinson.

Ahmed Chalabi e Iyad Allawi representan dos ejemplos de la selección estratégica de la administración Bush de chiitas iraquíes como miembros del Consejo de Gobierno. Chalabi fundó en 1992 el Congreso Nacional Iraquí, financiado por el Pentágono, mientras se encontraba en un exilio de cuarenta y cinco años. Según el diplomático estadounidense James Akins, "él probablemente tenga más apoyo en el Congreso de los Estados Unidos que el que tiene en todo Irak y ha explotado eso. Él obtiene apoyo de nosotros"⁷⁷. Las

76. William I. Robinson, "What to expect from US 'democracy promotion' in Iraq", *Focus on the Global South*, 1 de julio de 2004.

77. Akins, "Interview with James Akins".

declaraciones de Akins fueron confirmadas cuando en una encuesta llevada a cabo en mayo de 2004 los iraquíes declararon abrumadoramente que Chalabi era el último de los líderes nacionales en quien confiarían, incluso menos que en Saddam Hussein. Mientras el 42% de los iraquíes dijo que no confiaba en Chalabi para nada, sólo el 14% dijo lo mismo acerca de Hussein. De hecho cuando se les preguntó qué líder nacional elegirían como presidente, casi tres veces más iraquíes optarían por Hussein antes que por Chalabi⁷⁸.

Al mismo tiempo que se realizaba la encuesta, la elección estratégica de Chalabi para el Consejo de Gobierno por parte de la administración Bush comenzaba a explotar en su cara. Chalabi comenzó a distanciarse de la administración Bush reclamando el completo control iraquí sobre las fuerzas de seguridad del país y criticando las tácticas militares estadounidenses. En mayo, la Casa Blanca ordenó al Pentágono romper relaciones con Chalabi, alegando que éste pasaba secretos estadounidenses al gobierno iraní. El Pentágono suprimió sus 340.000\$ al mes del fondo de la organización de Chalabi (Congreso Nacional Iraquí) y las tropas estadounidenses asaltaron la antigua residencia del exiliado, en Bagdad, con orden de arrestar a su jefe de inteligencia, Aras Habib⁷⁹. Chalabi declaró que las acusaciones de Washington sobre espionaje eran una excusa para reprimirlo por su reciente retórica nacionalista: "Yo estoy ahora reclamando políticas para liberar al pueblo iraquí y recuperar nuestra completa soberanía y estoy llevando estos problemas de una forma que a los americanos no les gusta⁸⁰."

Algunos meses después, el Congreso Nacional de Chalabi se unió a la coalición chiita Alianza Unida Iraquí, la cual estaba estrechamente relacionada con el líder religioso chiita, Gran Ayatolá Ali

78. "National survey of Iraq, June 2004", *Oxford Research Council*, junio de 2004.

79. Michael Isikoff y Mark Hosenball, "Rethinking the Chalabi connection", *Newsweek*, 20 de mayo de 2004.

80. Richard Sale/UPI, "The NSA's tangle with Chalabi", *Washington Times*, 29 de julio de 2004.

al-Sistani. La ruptura de Chalabi con Estados Unidos y su decisión de vincularse con la Alianza Unida Iraquí, que intentaba competir en las próximas elecciones con el Partido Nacional de Reconciliación de Allawi, respaldado por Estados Unidos, ayudó a legitimar al antiguo exiliado ante los ojos de muchos chiitas iraquíes.

Por su parte Allawi también había desarrollado fuertes lazos con funcionarios estadounidenses durante sus treinta y tres años en el exilio, mientras su grupo Acuerdo Nacional Iraquí consistía primordialmente en desertores militares iraquíes. El Consejo de Gobierno nombrado por Estados Unidos eligió a Allawi como Primer Ministro provisional después de la transferencia de la soberanía a Irak el 30 de junio de 2004. Finalmente Allawi fue nombrado Primer Ministro provisional debido a sus estrechas vinculaciones con Estados Unidos y su apoyo al proyecto estadounidense.

Al mismo tiempo que la administración Bush implementaba su proyecto de "promoción de la democracia", también supervisaba la reestructuración física y económica de Irak. Sumados a las decenas de miles de dólares de los contribuyentes que servían de fondo a la reconstrucción, las ganancias del petróleo iraquí estaban siendo utilizadas para pagar los contratos dados a compañías extranjeras. Sin embargo, ni el Consejo de Gobierno ni su sucesor, el gobierno provisional de Allawi, controlaban los ingresos que generaban las exportaciones iraquíes después de la invasión. Todos los ingresos de las exportaciones de petróleo del país fueron depositadas en una cuenta llamada Fondo de Desarrollo para Irak, la cual era controlada por la administración Bush bajo mandato de la ONU requiriendo que el dinero fuera usado para beneficiar al pueblo iraquí.

Durante los primeros catorce meses de la ocupación, la Autoridad Provisional de Coalición (APC) de Paul Bremer declaró que la mayor parte del dinero iraquí en el Fondo de Desarrollo había pagado contratos arrendados a compañías iraquíes. Pero poco

tiempo después de que la APC entregara el poder al gobierno provisional, se descubrió que diecinueve de los treinta y siete contratos principales costeados con el dinero del petróleo iraquí, que sumaban el 85% de los 2,2 miles de millones gastados, habían terminado en compañías de Estados Unidos⁸¹. Según el informe de un Inspector General de la APC sobre los gastos del fondo iraquí en contratos no declarados, quien más recibió con mucho fue Kellogg, Brown & Root, una sucursal de Halliburton, la antigua compañía del Vicepresidente Dick Cheney, la cual se embolsó 1,66 mil millones de dólares, sumados a los controvertidos 7 mil millones de dólares en un contrato no declarado que ya había recibido del Pentágono inmediatamente antes de la invasión. Otros pagos a compañías de Estados Unidos ascendían a 48 millones de dólares para la Corporación Harris, 16,8 millones para Custer Battles y 15,6 millones para Motorola. Según Fareed Yaseen, un diplomático iraquí del gobierno provisional de Allawi, “no existía prácticamente ninguna voz iraquí en el destino de estos fondos⁸².”

La administración Bush comenzó su reestructuración de la industria petrolera iraquí menos de dos meses después de la invasión. En mayo de 2003, la Casa Blanca nombró a un ciudadano estadounidense ex miembro de Shell Oil, CEO Philip Carroll, para supervisar la reconstrucción y reestructuración de la industria del petróleo iraquí. Poco después de su nombramiento, Carrol sugirió que los contratos que Hussein había firmado con compañías extranjeras debían ser derogados. Durante los años 90, Hussein había firmado contratos de exploración y explotación de petróleo con compañías francesas, rusas y chinas preparándose para cuando la ONU levantara sus sanciones. El líder iraquí rehusó sin embargo negociar con compañías de Estados Unidos. La sugerencia de que

81. Ariana Eunjung Cha, “\$1,9 billion of Iraq’s money goes to US contractors”, *Washington Post*, 4 de agosto de 2004.

82. *Ibíd.*

Irak derogara todos los contratos firmados por el gobierno de Hussein contrastaba visiblemente con las demandas estadounidenses en años anteriores de que gobiernos recién establecidos en otros países, Cuba en 1959 y Nicaragua en 1979, por ejemplo, respetaran los contratos que las compañías estadounidenses habían firmado con los ex-dictadores. Como era de esperar, a finales de mayo el recién nombrado por Estados Unidos ministro del petróleo iraquí, Thamer Gadhban, comenzó a cancelar los contratos anunciando la suspensión de tres negocios petroleros con compañías rusas y chinas y declaró que los futuros contratos petroleros con Irak estarían abiertos al mejor postor entre todas las compañías extranjeras.

Cuando quedaban pocas dudas de que uno de los objetivos principales de la ocupación estadounidense era asegurar el acceso de las compañías estadounidenses al petróleo iraquí, existían diferentes puntos de vista en la administración Bush acerca de cómo alcanzar este objetivo. Los neoconservadores de la administración querían que se privatizara este sector y que Irak se retirara de la OPEP para disminuir la influencia del cartel en los precios globales. El Departamento de Estado y las compañías petroleras, por otra parte, estaban temerosos de que la privatización tuviera efectos políticos adversos, recordando el caos que siguió a la privatización del sector energético en Rusia, que dejó de lado a las compañías petroleras estadounidenses.

Finalmente, la estrategia propuesta por el Departamento de Estado y las compañías petroleras prevaleció y se desarrolló un nuevo plan que se pronunciaba por una compañía petrolera estatal y por continuar participando en la OPEP. Las compañías petroleras tenían poco interés en socavar los esfuerzos de la OPEP por mantener altos los precios porque esto les afectaría negativamente. La relación entre los intereses de las compañías petroleras estadounidenses y los de la OPEP fueron puestos de manifiesto por Amy Jaffe, del Instituto Baker, una de los arquitectos del nuevo plan de

Estados Unidos para el sector petrolero iraquí: “No estoy segura de que si yo estuviera en la presidencia de una compañía americana y ustedes me sometieran a un detector de mentiras, yo diría que los precios altos del petróleo son malos para mí o para mi compañía⁸³.”

Las ganancias potenciales para las compañías energéticas extranjeras prometían ser enormes incluso sin privatizar el sector petrolero. En una reestructuración neoliberal similar a las implantadas en otras naciones del Sur productoras de petróleo, las compañías extranjeras podrían firmar acuerdos de producción en términos tan favorables que la privatización no sería necesaria para asegurar inmensas ganancias. Según la ONG Global Policy Forum, radicada en Nueva York, las concesiones para negocios favorables en Irak permitirían a las compañías extranjeras obtener un mínimo de 600 mil millones de dólares en ganancias en los próximos cincuenta años⁸⁴.

En diciembre de 2004, el Consejo de Gobierno designado por Estados Unidos reveló la nueva estrategia de Irak respecto al petróleo. Según el consejero económico del Primer Ministro Provisional Allawi, Hilal Aboud al-Bayati, la estrategia convocaba a la Compañía Nacional de Petróleos de Irak (CNPI) a continuar operando los yacimientos existentes, mientras que se permitiría a compañías extranjeras desarrollar todos los nuevos yacimientos; un premio sustancial si se considera que se estima que un 95% de las reservas de petróleo de Irak permanecen sin explotar⁸⁵. Aun cuando el gobierno no anunció los términos para las concesiones petroleras propuestas, la nueva estrategia supuso la primera vez, desde que Irak nacionalizara el petróleo en 1972, en que compañías extranjeras tendrían acceso a las vastas reservas del país. Muchas grandes compañías firmaron contratos con el ministro del petróleo iraquí

83. Greg Palast, “Secret US plans for Iraq’s oil”, BBC News, 17 de marzo de 2005.

84. James A. Paul, “The Iraqi oil bonanza: estimating future profits”, Foro de Política Global, 28 de enero de 2004.

85. David R. Francis, “Exploring new oil fields in Iraq: a risky business”, *Christian Science Monitor*, 3 de enero de 2005.

después de la invasión para brindar asistencia técnica en estudios geológicos, reparación de oleoductos e infraestructura.⁸⁶ Los contratos a largo plazo de producción de petróleo eran muy solicitados; sin embargo, no podrían ser firmados hasta que el gobierno iraquí estableciera sus términos, incluyendo el porcentaje de petróleo cuyos derechos obtendrían las compañías extranjeras.

Mientras tanto, una reunión en Londres en junio de 2005, convocó a funcionarios del Ministerio del Petróleo Iraquí y ejecutivos de Exxon Mobil, BP, Shell, Halliburton y otros gigantes energéticos, con el aparente objetivo de preparar el terreno para el reingreso de las compañías extranjeras en Irak. Según Hasan Juma'a, director del Sindicato General de Trabajadores del Petróleo de Irak, "la segunda fase de la invasión comenzaría con esta conferencia que serviría para repartirse la industria. Se trata de dar pedazos de Irak a quienes lo invadieron; ellos obtienen un pedazo de las acciones como recompensa."⁸⁷ Las preocupaciones del líder sindical acerca de que los manejos del gobierno sobre el petróleo del país beneficien a las compañías extranjeras parecen estar validadas por el vocero de Shell, Simon Buerk, quien admitió: "aspiramos a establecer una presencia de largo plazo en Irak"⁸⁸.

Dos años después de invadir Irak, la administración Bush ha tenido éxito en asegurar la explotación del petróleo del país por compañías de Estados Unidos. La falta de seguridad en Irak, no obstante, continúa siendo un gran impedimento para la mayoría de las compañías. A principios de 2005, debido a los repetidos ataques de la insurgencia contra las infraestructuras petroleras, Irak estaba produciendo sólo 500.000 barriles diarios, muy por debajo de la capacidad del país de 1,5 millones de barriles diarios⁸⁹.

86. Laurence Frost, "Oil companies hopeful on Iraqi politics", *Associated Press*, 14 de marzo de 2003.

87. Tom Burgis, "Iraq: the carve-up begins", *London Line*, 23 de junio de 2005.

88. *Ibíd.*

89. Francis, "Exploring new oil fields in Iraq".

La apertura de la industria petrolera iraquí fue sólo una de las muchas reformas económicas neoliberales establecidas durante los dos años después de la invasión. En octubre de 2004, el Ministro de Finanzas de Irak, Adel Abdul Mahdi, describió los progresos realizados hasta ese punto: “Un profundo trabajo de ajuste macroeconómico, ha fortalecido la actividad económica y un buen comienzo en un amplio rango de reformas legales y estructurales que son cruciales para realizar la transición de una economía centralizada a una economía basada en la propiedad privada, en mercados abiertos, en transparencia y en regulación legal⁹⁰.” En septiembre de 2004, el fondo Monetario Internacional (FMI) concedió a Irak 436,3 millones de dólares en préstamo como recompensa por implementar reformas neoliberales similares a las que el mismo FMI ha impuesto a muchos países del Sur. Además de dar el préstamo, la institución financiera internacional también hizo un llamamiento al gobierno iraquí para que disminuyera los subsidios alimentarios al pueblo, a pesar del hecho de que casi la mitad de la población estaba desempleada⁹¹. La demanda del FMI era especialmente perturbadora después de un informe de la ONU publicado en marzo de 2005 en el que se declaraba que el porcentaje de niños hambrientos en Irak casi se había duplicado desde la invasión estadounidense: de un 4% bajo el gobierno de Hussein a cerca de un 8% en el 2004.⁹²

El 30 de junio de 2005 los iraquíes fueron a las urnas para elegir un nuevo parlamento, que sería responsable de redactar el borrador de la nueva constitución del país. Las elecciones no fueron exactamente como la administración Bush pretendía. Primero, la validez del proceso fue puesta en duda por el hecho de que la mayoría de la población sunita del país boicoteó las elecciones. Y

90. Adel Abdul Mahdi, “A conversation with Adel Abdul Mahdi, the Iraqi Minister of Finance”, American Enterprise Institute, 6 de octubre de 2004.

91. “Iraq official vows tough action”, CBS News, 18 de junio de 2004.

92. “Children ‘starving’ in new Iraq”, BBC News, 30 de marzo de 2005.

segundo, el candidato respaldado por Estados Unidos no sólo no ganó sino que finalizó tercero con solo el 14% de los votos. La Alianza Unida Iraquí, en su mayoría chiita, ganó fácilmente con un 48%, mientras la coalición de partidos kurdos finalizó segunda con un 26%⁹³. El principal problema después de las elecciones que tuvo que enfrentar la administración Bush fue que el nuevo primer ministro iraquí de procedencia chiita, Ibrahim Jafaari, mantenía relaciones cercanas con Irán, donde estuvo exiliado durante el mandato de Saddam Hussein. Jafaari además creía que la nueva constitución iraquí debía tomar sus orígenes del Islam. Como dijo el historiador Juan Cole poco después de las elecciones: "Si Estados Unidos hubiera decidido hace tres años bombardear Irán, esto hubiera producido alegría en Bagdad. Ahora podría producir fuertes protestas de Bagdad"⁹⁴.

Más de dos años después de la invasión de Estados Unidos, aún no queda claro cuán inclusivo será el nuevo gobierno iraquí, hasta qué grado el Islam influirá en la política iraquí en el futuro, o incluso si la nueva "democracia" continuará existiendo una vez que las tropas de Estados Unidos se retiren del país. Algunos observadores del Medio Oriente ven la ocupación y las elecciones como una sombra para futuros esfuerzos por parte de Estados Unidos de promover la democracia y las reformas económicas neoliberales en la región. Otros ven las elecciones iraquíes y la creciente insurgencia como reveses para la administración Bush. Según Rami Khouri, editor del *Daily Star* de Beirut, "la idea de que Estados Unidos obtendrá pronto un Irak estable, próspero, pro americano y pro israelita no se ha materializado. La mayoría de la conjeturas neo-conservadoras acerca de lo que pasaría, han resultado falsas"⁹⁵.

93. David Enders y Daniel Howdon, "Iraqi vote gives Shia parties a mandate for Islamic law", *Independent*, 14 de febrero de 2005.

94. Robin Wright, "Iraq winners allied with Iran are the opposite of US vision", *Washington Post*, 14 de febrero de 2005.

95. *Ibíd.*

Conclusión

A principios de 2005 parece haber abundancia de sentimientos tanto anti-Estados Unidos como anti-Saddan en Irak, mientras la población civil continúa sintiendo el peso de la violencia. En abril, decenas de miles de manifestantes pro-islámicos marcharon por las calles de Bagdad reclamando el fin de la ocupación estadounidense. Los manifestantes llevaban en alto efigies de George W. Bush y Saddam Hussein, mientras entonaban consignas como: “¡No a América! ¡No a Saddam! ¡Sí al Islam!”. Los iraquíes estaban cada vez más furiosos por lo precario de la vida en la capital, donde había mucha violencia pero pocas necesidades cubiertas. La electricidad, por ejemplo, aún permanecía racionada y estaba disponible para el pueblo iraquí sólo durante dos horas al día.

La administración Bush había lanzado una amplia campaña de propaganda pre-invasión para justificar la intervención militar en Irak. La invasión tuvo lugar en el momento en que los inspectores de la ONU estaban a punto de dictaminar que Hussein no tenía armas de destrucción masiva. Tal dictamen hubiera llevado de cualquier forma, al cese de las sanciones de la ONU y a la apertura de las segundas reservas de petróleo más grandes del mundo a compañías rusas, chinas y francesas marginando a las firmas de Estados Unidos. Tal escenario no era aceptable para la administración Bush, que buscaba activamente asegurar nuevas fuentes de petróleo para abastecer sus crecientes necesidades.

Después de dos años de ocupación, la administración Bush ha establecido exitosamente un sistema económico que asegura el acceso de compañías energéticas de Estados Unidos a las vastas reservas de petróleo iraquí. Las tropas militares norteamericanas y las recién entrenadas tropas iraquíes, sin embargo, permanecieron empantanados en una lucha para contener a los casi 40.000 insurgentes, en su mayoría sunitas. La persistencia de la insurgencia fue haciendo difícil para los Estados Unidos establecer la seguridad y

estabilidad requerida para que ambos proyectos, el neo-liberal y el de promoción de la democracia, enraizaran firmemente. Al mismo tiempo, el apoyo público de Estados Unidos a la guerra en Irak fue decayendo y la administración Bush comenzó a disminuir sus expectativas de establecer un gobierno democrático aliado estrechamente con Washington. El sociólogo William Robinson se expresó en estos términos: "Si la invasión y ocupación de Irak es la intervención más masiva de los Estados Unidos desde Vietnam, es también el más abrumador –de hecho insuperable– abismo que hemos visto desde el lodazal de Washington en Indochina entre las intenciones de Estados Unidos por una parte, y su habilidad real para controlar eventos y resultados por la otra⁹⁶."

⁹⁶. Robinson, "What to expect from US 'democracy promotion'".

Asia Central: la estrategia de la Ruta de la Seda

La existencia de petróleo en la región del mar Caspio se conoce desde hace más de mil años. Sin embargo, el primer gran *boom* del petróleo no se produjo hasta finales del siglo XIX, cuando las familias Rothschild y Nobel se establecieron en la capital de Azerbaiyán, Bakú. A principios del siglo XX, Azerbaiyán era responsable del 50% de la producción mundial de petróleo, desplazando a la Standard Oil Company como primer productor mundial de energía. Pero el petróleo del mar Caspio no dominaría el mercado mundial por mucho tiempo. Después de la Revolución Bolchevique de 1917, la Unión Soviética heredó Asia Central y el sur del Cáucaso de la Rusia zarista y pasarían veintisiete años antes de que la región del mar Caspio experimentara otro *boom* del petróleo.

Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, las repúblicas de la región, antiguamente controladas por el gobierno comunista de Moscú, se volvieron de pronto naciones independientes. Las nuevas repúblicas son Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán en Asia Central y Azerbaiyán, Georgia y Armenia en el sur del Cáucaso. En medio de estos nuevos países está el mar Caspio, que no tiene salida al océano y es de hecho el mayor lago del mundo. Los Estados del litoral Caspio son Rusia, Kazajistán, Turk-

menistán, Azerbaiyán e Irán; todos ellos reclaman una parte de los 200 millones de barriles (según lo estimado) de petróleo, situados debajo del lago y a lo largo de sus costas¹.

Al obtener la independencia en 1991, muchas de estas nuevas repúblicas tuvieron conflictos civiles mientras trataban de establecerse como Estados adultos. Los gobiernos de Uzbekistán y Tayikistán en Asia Central hicieron la guerra a los militantes islámicos, mientras que Azerbaiyán y Georgia en el sur del Cáucaso combatían los movimientos separatistas en sus fronteras. Al mismo tiempo, mucha gente que había pasado toda su vida bajo el ateo régimen soviético comenzó a redescubrir el Islam. Se abrieron escuelas musulmanas a lo largo de la región, financiadas por organizaciones de Irán, Arabia Saudita y Turquía.

Estados Unidos también jugó un importante rol en la transición política y económica que tuvo lugar en Asia Central y el sur del Cáucaso durante la década de 1990-2000. Pero no fue hasta después del 11/9, cuando Estados Unidos estableció una presencia militar significativa en una región históricamente fuera de su esfera de influencia. La administración Bush no sólo desplegó tropas contra Afganistán en su lucha contra el terrorismo; también estableció bases en Uzbekistán, Kirguistán y Georgia. Al mismo tiempo, Estados Unidos desarrolló estrechos lazos militares con Kazajistán y Azerbaiyán, los mayores productores de petróleo de la región. Washington empujó a las nuevas repúblicas independientes a implementar políticas económicas neoliberales durante los años 90 y entonces, como parte de su guerra contra el terrorismo, incrementó significativamente su presencia militar en la región para proteger sus florecientes intereses económicos, particularmente los relacionados con el petróleo y el gas.

En 1997, el Subsecretario de Estado de la administración Clinton, Strobe Talbott, dijo que las nuevas repúblicas de Asia Central y

1. "Oil: the world over a barrel", *CBC Newsworld*, 28 de julio de 2004.



Mapa 2: Asia Central y el Cáucaso Sur.

el Cáucaso “habían estado mucho tiempo de su historia bajo el dominio extranjero” pero ahora “tienen la oportunidad de superar para siempre la experiencia de ser peones de ajedrez en un tablero desde el punto de vista de los grandes poderes y cambiarla por otra de poder e influencia por sus propios méritos”². En la época en que Talbott hacía estas declaraciones, más de cinco años después del colapso de la Unión Soviética, era evidente que las nuevas repúblicas se habían convertido en peones de un nuevo ajedrez político entre Estados Unidos, Rusia, Irán y China. Fue de hecho una nueva versión del “Gran Juego” llevado a cabo en el siglo XIX entre Gran Bretaña y Rusia por el control de Asia Central.

2. Subsecretario Strobe Talbott, “A farewell to Flashman: American policy in the Caucasus and Central Asia”. Despacho del Departamento de Estado de Estados Unidos, julio 1997.

El “Gran Juego” original fue una pelea por controlar el acceso a las riquezas de la India. En la nueva versión, sin embargo, se luchaba por las grandes reservas de petróleo y gas de la región. Irán respondió a la escalada militar estadounidense en la región reforzando sus propias fuerzas militares en la costa del Caspio y negociando contratos para oleoductos y gaseoductos con las nuevas repúblicas independientes. Por su parte, China llevó a cabo ejercicios militares conjuntos con Kirguistán, compró el 60% del tercer mayor yacimiento de Kazajistán y acordó la construcción de un oleoducto desde Kazajistán hasta Xinjiang, su provincia más occidental. Mientras tanto, el embajador ruso en Irán, Alexander Maryasov, declaraba que el despliegue de tropas de Estados Unidos tenía poco que ver con la guerra contra el terrorismo: “Para los americanos se trata de intereses económicos, especialmente el petróleo del mar Caspio”. Maryasov dejó claro que Rusia no tenía intenciones de ceder su influencia en la región a los Estados Unidos: “Tan pronto como nuestra economía recupere su fuerza, restableceremos nuestras viejas relaciones con Asia Central y el sur del Cáucaso y reafirmaremos nuestra esfera de influencia en la región” (Kleveman 2003:141).

En 1998, el entonces CEO de Halliburton Dick Cheney dejó clara la actitud de Estados Unidos respecto a la región al declarar: “No puedo pensar en ninguna época en que una región se haya convertido de forma tan súbita en estratégicamente significativa como el Caspio³.” Ese mismo año, el Comité del Senado de Estados Unidos para Relaciones Exteriores publicó un reporte sobre un proyecto de ley pendiente titulado Acta de la Estrategia de la Ruta de la Seda. El informe establece que “la meta de la legislación es concentrar adecuadamente la asistencia estadounidense para alcanzar sus intereses de la mejor manera posible” en Asia Central y el sur del Cáucaso. El informe advierte que “los poderes hegemónicos

3. George Monbiot, “Oil, Afghanistan and America’s pipedream”, *Dawn magazine*, 25 de octubre de 2001.

locales” –principalmente Rusia e Irán– se esforzaban por expandir su control político en el área “mientras buscaban mantener el control sobre el flujo de petróleo y gas natural en la región”⁴. El Comité no notó que en su estrategia por “alcanzar los intereses de Estados Unidos de la mejor manera posible” estaba simplemente llevando a la región a caer víctima del poder hegemónico mundial en vez de los “poderes hegemónicos locales”.

El siguiente año, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Acta de la Estrategia de la Ruta de la Seda, la cual establecía: “La política de Estados Unidos en los países del sur del Cáucaso y Asia Central debe ser... ayudar a promover principios y prácticas orientados al mercado... para ayudar a mantener los intereses mercantiles e inversiones en la región”. El proyecto de ley también explicaba por qué era importante que Estados Unidos participara en el nuevo Gran Juego: “Las regiones del sur del Cáucaso y Asia Central pueden producir gas y petróleo suficientes para reducir la dependencia energética de Estados Unidos de la volátil región del Golfo Pérsico”⁵. El acta tomó el nombre del antiguo Camino de la Seda, que era una serie de rutas de transporte usadas para mover riquezas y mercancías desde el Lejano Oriente y Asia Central hacia Europa entre el 500 a.C. y el 1500 d.C.. La motivación del nuevo Camino de la Seda era el transporte de gas y petróleo desde Asia Central y el sur del Cáucaso a los mercados occidentales.

El renacer del Islam

Después del 11/9, Asia Central y el sur del Cáucaso se convirtieron en el principal campo de batalla de la guerra contra el terrorismo, mientras prometía también convertirse en una vital fuente alternativa de petróleo para disminuir la dependencia de los pro-

4. “The Silk Road Strategy Act of 1998”, Comité del Senado de Estados Unidos para las Relaciones Exteriores, 9 de octubre de 1998.

5. “The Silk Road Strategy Act of 1999”, Congreso de Estados Unidos, 10 de marzo de 1999.

ductores del Golfo Pérsico. Como en los países del Golfo Pérsico, la mayoría de la población de Asia Central es musulmana. Aún más, el Islam ha experimentado un renacimiento en la región, que había estado controlada por el régimen ateo de Moscú durante más de medio siglo.

El Islam llegó a Asia Central y lo que es hoy Azerbaiyán en el siglo VIII y floreció hasta que los comunistas se hicieron con el poder en Moscú en 1917. La Unión Soviética heredó gran parte del Asia Central del imperio zarista y en 1920 también se hizo con Azerbaiyán. En las primeras décadas del gobierno soviético, las prácticas islámicas eran reprimidas y la población musulmana local sometida a campañas de secularización. El mandatario soviético Josef Stalin dividió Asia Central, entonces conocida como Turkistán, en cinco repúblicas distintas, creando Uzbekistán y Turkmenistán en 1924, Tayikistán en 1929 y Kazajistán y Kirguistán en 1936. Según el experto en Asia Central Shirin Akiner, “estas Repúblicas eran Estados completamente nuevos sin precedentes históricos como naciones o Estados. No fueron creadas por demanda popular sino a instancias de Moscú” (Akiner 1995:7). Stalin creó las cinco repúblicas basado en las poblaciones de los distintos grupos étnicos con el objetivo de que las personas se identificaran con su etnia particular y no como musulmanes.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Moscú suavizó su posición con respecto al Islam publicando una versión oficial de la religión, que toleraba prácticas aceptables al régimen soviético. Existía también, sin embargo, un “islam clandestino” que preservaba intactas las prácticas tradicionales. Finalmente bajo la política de transparencia o apertura del primer mandatario soviético Mikhail Gorbachov, hubo un resurgimiento del Islam en el Asia Central, particularmente en Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Mucha gente abandonó la cultura rusa y comenzó a reasumir su propia identidad cultural, que estaba basada en las enseñanzas islámicas.

Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, las cinco repúblicas de Asia Central y las naciones del sur del Cáucaso, Azerbaiyán, Georgia y Armenia –siendo las dos últimas naciones principalmente cristianas– se volvieron naciones-Estado independientes. Antiguos funcionarios comunistas de alto rango de la era soviética se convirtieron en los líderes de las nuevas repúblicas independientes, que se establecieron como Estados seculares. Con su población casi siempre dividida entre islámicos y la iglesia cristiana ortodoxa rusa, Kazajistán era la única república de Asia Central en la que los musulmanes no constituían al menos el 75% de la población. Como en tiempos de la Unión Soviética, cada uno de los líderes de las cinco nuevas repúblicas publicó una versión del Islam aprobada por el Estado y reprimió a aquellos grupos que se negaron a aceptar la versión oficial de la religión, principalmente a los fundamentalistas.

La persecución fue particularmente severa en Uzbekistán, donde el presidente Islam Karimov reprimió brutalmente toda la oposición de los grupos islámicos que pensaron en practicar alguna forma de Islam independiente a la aprobada por el Estado. La represión se intensificó después de los ataques de Al-Qaeda a Estados Unidos cuando Karimov usó la guerra contra el terrorismo para justificar su persecución de grupos islámicos de oposición. El gobierno de Karimov no sólo usó la violencia contra grupos armados como el Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU), sino que también reprimió brutalmente el Hizb ut-Tahrir (Partido de Liberación), cuyos miembros pensaban establecer un Estado islámico por medios pacíficos.

Por su parte Estados Unidos particularmente después del 11/9 se alió con los regímenes represivos de la región e ignoró su persecución contra los musulmanes. La administración Bush rehusó incluir a alguna de las nuevas repúblicas independientes en su lista de países que violaban la Ley de No Persecución Religiosa de 1997,

incluso sabiendo el Departamento de Estado de Estados Unidos, por informes de los Derechos Humanos, que el Gobierno de Uzbekistán “restringe la libertad de religión”⁶. La Ley de No Persecución Religiosa prohíbe a Estados Unidos brindar ayuda a los países incluidos en la lista, algo que la administración Bush estaba renuente a considerar dado su punto de vista de las nuevas repúblicas independientes como aliados estratégicamente importantes en la guerra contra el terrorismo. Según el investigador político Shahram Akbarzadeh, la política de la administración Bush contribuía a “aumentar la radicalización de la disidencia al enfrentar la continua represión estatal y decepcionarse de los Estados Unidos por su apoyo a los gobiernos autoritarios en Asia Central”⁷.

En la década de 1990 surgió el conflicto entre las elites seculares y la oposición islámica para determinar la identidad nacional de los nuevos Estados independientes. Desde 1992 hasta 1997 Tayikistán soportó una guerra civil entre el gobierno secular y las fuerzas de la oposición islámica que dejó 50.000 muertos. En Asia Central y el sur del Cáucaso, como en muchas otras partes del globo, el mundo islámico vio reemplazada la ideología comunista como la principal alternativa del capitalismo occidental que dominó el proceso posguerra fría de globalización económica. Este giro en los eventos llevó a Estados Unidos a tildar de fundamentalistas a muchos de aquellos musulmanes que desafiaron su agenda de globalización, a menudo retratándolos como terroristas incluso aunque sus tácticas incluyeran poca o ninguna violencia. Por tanto, además de asegurar el acceso al petróleo e implementar reformas de libre comercio, la política de Estados Unidos en Asia Central y el sur del Cáucaso también comprendía eliminar a los “extremistas” islámicos.

6. “Uzbekistan: country reports on human rights practices - 2000”, Departamento de Estado de Estados Unidos, 23 de febrero de 2001.

7. Sharam Akbarzadeh, “Keeping Central Asia stable”, *Third World Quarterly*, 25 (4), 2004.

Kazajistán: la apertura económica

Cuando Kazajistán se independizó después del colapso de la Unión Soviética en 1991, automáticamente se convirtió en el cuarto mayor poder nuclear del mundo al ser poseedor de miles de antiguas ojivas soviéticas localizadas en sus fronteras. Pero el gobierno de la nueva república decidió el desarme unilateral de todo su armamento nuclear. También cerró el mayor polígono del mundo para pruebas nucleares y una instalación para la producción de ántrax. Un horroroso legado nuclear soviético, que afectó negativamente a la salud de 1,5 millones de los 15 millones de kazajos tras años de pruebas de armamento nuclear, fue una de las principales motivaciones de la decisión del nuevo gobierno a favor del desarme. En 1995 Kazajistán había eliminado todas sus armas de destrucción masiva.

Kazajistán no sólo se encontró en posesión de misiles nucleares después de la independencia, sino que también rebosaba de importantes reservas de petróleo y gas. De hecho Kazajistán posee las mayores reservas de petróleo de toda Asia Central y el sur del Cáucaso. Sin embargo carece de la capacidad de desarrollar a tope sus reservas energéticas y de transportar sus valiosos bienes a los mercados allende los mares. Sumado a esto, su economía controlada por el Estado estuvo bajo el control de Moscú durante décadas, y el súbito colapso de la Unión Soviética dejó a la nueva nación independiente en grandes apuros para pagar el salario de sus trabajadores, alimentar a su población, brindar servicios médicos y educación. Mientras Arabia Saudita, Irán y Turquía abrieron escuelas e instituciones islámicas para los musulmanes de Kazajistán, que constituyen casi la mitad de la población del país; el gobierno de Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales también ayudaron a Kazajistán a establecerse como nación. A cambio de esta ayuda desesperadamente necesaria, sin embargo, exigieron que Kazajistán implementara reformas económicas neoliberales.

Primero la administración de George H. W. Bush y después la de Clinton exigieron que las nuevas repúblicas de Asia Central y el sur del Cáucaso reemplazaran su economía controlada por el Estado por sistemas basados en el mercado para integrarlas completamente a la economía capitalista global. Según el Subsecretario Talbott, “estamos exhortando a los Estados de toda la región a establecer lazos con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional... y otras instituciones políticas y financieras”⁸. No pasó mucho tiempo antes de que el FMI impusiera programas de ajuste estructural brindando condiciones favorables para que las compañías extranjeras tuvieran acceso a las vastas reservas de petróleo y gas de la región. Como dijo Akbarzadeh, “Washington estaba impaciente por integrar las economías de Asia Central, especialmente sus industrias de extracción de gas y petróleo, al mercado global para reducir la dependencia mundial de los hidrocarburos del Golfo Pérsico”⁹.

Nursultan Nazarbayev, antiguo primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Kazajistán se convirtió en presidente de la nueva república independiente en diciembre de 1991. Ocho meses después, Kazajistán se unió al FMI y al año siguiente recibió su primer crédito. A cambio del crédito, el FMI impuso al país un programa de ajustes estructurales que demandaba que el gobierno privatizara las empresas estatales, bajara las tarifas y alcanzara estabilidad macroeconómica restringiendo los gastos públicos para mantener la deuda contraída con el FMI proporcionada al PIB. En julio de 1995, el FMI autorizó un préstamo de 290 millones de dólares señalando que “Kazajistán ha realizado progresos en 1994 en la estabilización macroeconómica... Y que el logro de los objetivos del programa de 1995 estaría vinculado en gran medida al progreso en la reestructuración empresarial y a la privatiza-

8. Talbott, “A farewell to Flashman”.

9. Akbarzadeh, “Keeping Central Asia Stable”.

ción. El programa de privatización se ha acelerado al incrementar el número de empresas a privatizar¹⁰.”

En 1998, el FMI inundaba Kazajistán con elogios por la implementación de políticas neoliberales: “Kazajistán ha hecho progresos sustanciales transformando su economía en un sistema que se basa en las leyes del mercado. La estabilidad macroeconómica se ha alcanzado ampliamente, el mercado interno está equitativamente liberalizado y abierto a la competencia extranjera y el rol del Estado en la economía se ha reducido considerablemente¹¹.” El FMI también elogió la reducción del rol del Estado en el sector bancario y la creciente participación de bancos extranjeros en el país. La institución de préstamos estaba, sin embargo, preocupada por “la suspensión temporal de la venta de empresas en los sectores del gas y del petróleo”.¹² En 1998, el presidente Nazarbayev había consolidado las compañías estatales productoras de gas y petróleo que quedaban en una entidad conocida como KazMunaiGaz, supuestamente preparada para su privatización.

Pero Nazarbayev inesperadamente firmó una ley convirtiendo KazMunaiGaz en una compañía mixta en la que el gobierno controlaba todas las acciones. Bajo apariencias nacionalistas, esta medida para conservar la posesión del Estado sobre los recursos que aún quedaban, realmente apuntaba a cerrar la puerta del granero antes de que se escapara el caballo. Cinco años de medidas neoliberales impuestas por el FMI habían permitido a docenas de compañías energéticas extranjeras beneficiarse de la privatización de algunas entidades de gas y petróleo y obtener favorables negocios. De hecho las medidas impuestas por el FMI dieron por resultado que Kazajistán virtualmente regalara sus reservas de petróleo requi-

10. “IMF approves stand by credit for Kazakhstan”, Fondo Monetario Internacional, 5 de junio de 1995.

11. “IMF Concludes Article IV consultation with the Republic of Kazakhstan”, Fondo Monetario Internacional, 1 de julio de 1998.

12. *Ibid.*

riendo sólo que las compañías extranjeras pagaran derechos de explotación de entre el 2 y 6% por barril¹³. Los derechos de explotación de Kazajistán son con mucho los más bajos del mundo y están en fuerte contraste con los que Venezuela comenzó exigir en el 2001, que oscilan entre el 20 y 30% por barril¹⁴.

El FMI no fue la única institución financiera internacional en elogiar a Kazajistán por la implementación de reformas neoliberales. En diciembre de 2001, el Dr. Peter Watson, presidente de la agencia gubernamental de Estados Unidos Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (CIPE), dijo al Ministro de Economía y Comercio de Kazajistán, Zhaksybek Kulekeev: "La CIPE está motivada por el alcance de las reformas económicas llevadas a cabo por el gobierno desde su independencia hace diez años y comprende que aún pueden ser aprovechadas un gran número de oportunidades de inversión por parte de compañías americanas¹⁵." Parte de la misión de la CIPE bajo la legislación del Congreso que autoriza su existencia es "movilizar y facilitar la participación de técnica y capital privado estadounidense en... países en transición hacia una economía de mercado"¹⁶. Para cumplir esta misión obviamente neoliberal, la CIPE brinda créditos y garantías de créditos para proyectos extranjeros que involucren a compañías de Estados Unidos. Entre 1992 y el 2001, la CIPE suministró 98 millones de dólares en préstamos y garantías para proyectos en Kazajistán, en los que se incluyen 50 millones de dólares para los sectores del gas y el petróleo¹⁷.

En 2004, el FMI señaló: "Las reformas estructurales están bien avanzadas en comparación con otros países de la región, pero la

13. "Legislative alert: changes to subsurface use taxation discussed in the Senate", Ernst y Young, 27 de noviembre de 2003.

14. "Country analysis briefs: Venezuela", Departamento de Energía de Estados Unidos, junio de 2004.

15. "OPIC welcomes Kazakh trade minister, urges US investment", Fondo para la Inversión Privada en el Extranjero, 21 de diciembre de 2001.

16. "22 USC Sec. 2191", Office of the Law Revision Counsel, US House of Representatives, 6 de enero de 2003.

17. "OPIC welcomes Kazakh trade minister".

agenda de implementación de reformas ha disminuido algo su ritmo desde el 2000.¹⁸ El informe del FMI también encomiaba el impresionante crecimiento económico de Kazajistán, que se debía principalmente al aumento de inversiones extranjeras en la industria del petróleo. En 1993, por ejemplo, el consorcio Tengizchevroil encabezado por ChevronTexaco y ExxonMobil –que poseían el 50% y el 25% de las acciones del consorcio respectivamente– acordaron invertir 20 millones de dólares para desarrollar el enorme yacimiento de Tengiz en el oeste de Kazajistán.¹⁹ Se estima que existen de 6 a 9 millones de barriles de reserva extraíble en Tengiz, donde ya se estaban produciendo un promedio de 280.000 barriles diarios a finales de 2003²⁰. Para poder transportar el petróleo a los mercados de Occidente, el Consorcio del Oleoducto del Caspio (COC), dirigido por la compañía ChevronTexaco, construyó un oleoducto de 935 millas desde Tengiz hasta el puerto ruso de Novorossiysk en el mar Negro.

El 24 de julio de 2000, ExxonMobil anunció el descubrimiento de un yacimiento en el litoral de Kashagan, en una sección del norte del mar Caspio que no había sido explorada anteriormente porque era un área natural protegida durante la era soviética. Con reservas de petróleo estimadas en 13 mil millones de barriles, Kashagan es el mayor descubrimiento del mundo en los últimos treinta años. La compañía Offshore Kazajistán International Operating Company (OKIOC), integrada por ExxonMobil, Agip, British Gas, Shell, Total, ConocoPhillips e Inpex, espera que el yacimiento de Kashagan comience a producir petróleo en el 2008. El antiguo Ministro de Relaciones Exteriores de Kazajistán, Erlan Idrissov, declaró que la producción deberá alcanzar los 400.000 barriles diarios para el 2013 y sobrepasar el millón de barriles dos años más tarde. Según Jona-

18. "IMF concludes Article IV consultation with the Republic of Kazakhstan".

19. "Tengizchevroil celebrates two-year anniversary operating the giant Tengiz oil field in Kazakhstan", ChevronTexaco, 6 de abril de 1995.

20. "ChevronTexaco in Eurasia", ChevronTexaco, 2004.

than Waghorn, analista de la industria petrolera Goldman Sachs, “[Kashagan] brindará un flujo estable de líquido durante los próximos 30 ó 40 años, así que es ciertamente una buena inversión para las compañías que tienen la posibilidad de incorporar ese proyecto a sus portafolios”.²¹

Más de una década de reajustes estructurales impuestos por el FMI abrieron los recursos de Kazajistán para que fueran explotados por compañías transnacionales, pero la mayoría de sus habitantes no se han beneficiado de la inversión extranjera en su país. Las compañías extranjeras estaban invirtiendo fuertemente en el sector energético –petróleo y combustible constituyen el 60% de las exportaciones del país– pero ignoraban otros sectores vitales de la economía²². Incluso en el sector energético, es cuestionable si los trabajadores de Kazajistán se están beneficiando de la producción petrolera del país. Según el grupo ambientalista local Caspian Nature, aproximadamente cien trabajadores del yacimiento de Tengiz murieron y muchos más enfermaron entre 1996 y el 2004, la mayoría hombres jóvenes que tuvieron problemas en la sangre o el hígado. El grupo declara que los exámenes de 30.000 focas que murieron en el 2002 revelaron síntomas similares. Halliburton, con sede en Estados Unidos, que se ha visto implicada en varios proyectos de producción de petróleo y construcción de oleoductos en Kazajistán desde 1992, es uno de los subcontratistas responsables por las operaciones en el yacimiento de Tengiz. Caspian Nature reclama que la compañía ha sido negligente en el manejo del sulfuro de hidrógeno, altamente tóxico, gas que debe ser eliminado del petróleo pesado de Tengiz. Según el grupo ambientalista, este gas es el responsable de las muertes y enfermedades de los trabajadores. Mientras Halliburton admite haber despedido ilegalmente a un

21. Heather Timmons, “Kazakhstan: oil majors agree to develop field”, *New York Times*, 26 de febrero de 2004.

22. “Kazakhstan country brief 2004”, Grupo del Banco Mundial, septiembre de 2004.

trabajador enfermo que ha presentado una demanda legal contra la compañía, niega ser responsable de las enfermedades y las muertes.²³

ChevronTexaco entretanto declara que su proyecto de Tengiz incluye programas de alcance comunitario que han beneficiado a la población local y que la presencia de la compañía en el país ha suscitado un incremento de "los salarios, los bienes y servicios adquiridos por proveedores locales, tarifas y honorarios pagados a compañías estatales y pagos de derechos al gobierno"²⁴. Pero, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en mayo de 2004, las provincias de Mangistau y Atyrau, donde está ubicado el yacimiento de Tengiz, se encuentran entre las regiones más pobres del país debido a "los altos niveles de desigualdad económica impulsados por el carácter monopolista de las empresas del gas y el petróleo"²⁵. Mientras las comunidades de Tengiz permanecen sumidas en la pobreza, las operaciones globales ChevronTexaco, la mayor de las cuales es Tengiz, ha tenido una cifra de ganancias casi récord de 7,2 miles de millones de dólares en el 2003.²⁶

La transición de Kazajistán de una economía controlada por el Estado a una economía de mercado ha demostrado ser devastadora para gran parte de la población. En 1998, el Banco Mundial ha declarado que "la aguda contracción en los resultados [económicos] desde la independencia ha contribuido significativamente al incremento de la pobreza". La declaración prosigue diciendo que "los salarios han bajado más del 50% en términos reales, con serias consecuencias para la familia y el consumo"²⁷. Cuatro años más tarde, según el PNUD, la vida diaria de la mayoría de los habitantes

23. Burt Herman, "The losing side of the Kazakhstan oil boom", Associated Press, 21 de julio de 2004.

24. "ChevronTexaco in Eurasia".

25. "Poverty in Kazakhstan: causes and cures", Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 11 de mayo de 2004.

26. "ChevronTexaco reports net income of \$1,7 billion in fourth quarter and \$7,2 billion for year", ChevronTexaco, 30 de enero de 2004.

27. "Kazakhstan: living standards during the transition", Grupo del Banco Mundial, 1998.

de Kazajistán ha mejorado poco con el 71% de la población sumida aún en la pobreza, viviendo con menos de 2 dólares diarios²⁸. El porcentaje de kazajos que viven en la pobreza en el 2002 fue sustancialmente mayor que el 15% de la población que subsistía en la pobreza en 1989, dos años antes del colapso de la Unión Soviética²⁹.

Un informe del PNUD en el 2004 señala el declive de muchos indicadores de salud causado por la disminución de los gastos en el sector de la salud y el deterioro de las instalaciones médicas. Finalmente, dice el informe, el reciente crecimiento económico mediante reformas neoliberales “no ha podido mejorar la vida de la mayoría del pueblo kazajo”³⁰. Las conclusiones del PNUD están respaldadas por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU, el cual mide la calidad de vida de un país basado en la expectativa de vida, el acceso a la educación y el poder adquisitivo de sus ciudadanos. En 1993, un año antes de que comenzaran las medidas impuestas por el FMI, el índice de IDH de Kazajistán era el número 54 entre 173 países (PNUD 1993: 11). Once años más tarde este índice ha caído al número 78 entre 177 países (PNUD 2004: 140).

A los ojos de Washington, Kazajistán ha hecho grandes progresos. El 27 de marzo de 2002, la administración Bush otorgó a Kazajistán el estatus de economía de mercado –el primer país exsoviético en alcanzar tal estatus– permitiendo a los productos kazajos mayor acceso a los mercados de Estados Unidos. El embajador de Kazajistán en Estados Unidos, Kanat Saudabayev, declaró que el nuevo estatus de su país era “un reconocimiento objetivo por parte de Estados Unidos a nuestros logros en reformar la economía y los cambios democráticos alcanzados en nuestro país”³¹.

28. “Poverty in Kazakhstan: causes and cures”.

29. “Measurement of poverty in Kazakhstan”, Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (UNESCAP), 13 de febrero de 2004.

30. “Poverty in Kazakhstan: causes and cures”.

31. Dr. Alexandr Nemets y Dr. Thomas Torda, “The battle for Kazakhstan continues”, *NewsMax*, 27 de junio de 2002.

A pesar de las declaraciones del embajador, la política de Kazajistán permanece lejos de la democracia incluso en el sentido más elemental del término: elecciones libres y justas. Kazajistán no celebró elecciones multipartidistas hasta el 10 de enero de 1999, ocho años después de obtener la independencia. Nazarbayev ganó las elecciones ampliamente con el 81% de los votos. Monitores de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) declararon que "el proceso de elección estuvo muy por debajo de los estándares requeridos, al ser Kazajistán un país miembro de la OSCE"³². Entre los muchos problemas informados por la OSCE estaban la designación por el presidente de los funcionarios del proceso electoral, la descalificación de candidatos de la oposición, la cobertura realizada por los medios de comunicación, que favorecía desproporcionadamente al presidente, e irregularidades el día de las votaciones.

Como señaló el congresista Christopher Smith en la Casa de Representantes: "Todo el proceso electoral fue cuidadosamente orquestado y el único problema real era si la votación oficial [de Nazarbayev] sería más de 90% –típico de dictadores post-soviéticos de Asia Central– o estaría en el rango de 80 a 90, lo cual sería una puntuación sensible en las susceptibilidades de Occidente y del OSCE"³³. Las elecciones parlamentarias de Kazajistán llevadas a cabo en septiembre de 1999 estuvieron también llenas de irregularidades, según el OSCE. Resulta interesante que un año después Washington impusiera sanciones a Haití debido a irregularidades electorales, que resultaban pequeñas comparadas con las ocurridas en Kazajistán.

32. Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, "The Republic of Kazakhstan presidential elections 10 January 1999, Assessment Mission", Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, 5 de febrero de 1999.

33. Christopher H. Smith, "Kazakhstan's presidential election", Acta del Congreso, 23 de febrero de 1999.

Como la mayoría de las otras naciones del sur productoras de petróleo, Kazajistán se sitúa como uno de los países más corruptos del mundo, una distinción ignominiosa que juega un importante papel en el fracaso del país en hacer que su población se beneficie del gas y el petróleo que posee. En 2004, Kazajistán fue el número 122 de 145 países clasificados por índice de corrupción en una lista de Transparencia Internacional. Según Transparencia Internacional, países como Kazajistán, ricos en petróleo, están “invadidos de recursos que se desvanecen en los bolsillos de los ejecutivos occidentales del petróleo, intermediarios y funcionarios locales”³⁴.

La exploración de yacimientos de petróleo y el poder político centralizado van con frecuencia de la mano. Como resultado, las comunidades locales y los grupos civiles de la sociedad, a menudo, son marginados; además hay poca auditoría o transparencia con respecto a la recolección y distribución de las ganancias del petróleo. Un informe publicado en el 2003 por Open Society Institute, con sede en Nueva York, que trataba sobre la corrupción en el mar Caspio, señala: “Debido a que las ganancias del petróleo van a un gobierno centralizado y a que las transnacionales prefieren trabajar en cualquier país con un árbitro central todopoderoso, la producción de petróleo a menudo coincide con la expansión del poder ejecutivo y la desaparición de una oposición efectiva, dentro o fuera del gobierno” (Bagarov et al. 2003: 98).

En uno de los mayores escándalos de soborno enfrentados por una compañía estadounidense en décadas recientes, funcionarios de la entonces Mobil Oil Company –la Mobil se fusionó con la Exxon convirtiéndose en la ExxonMobil en 1998– fueron acusados de pagar y recibir sobornos relacionados con la adquisición de contratos del petróleo por compañías estadounidenses en Kazajistán, inclusive la parte de Mobil del yacimiento de Tengiz en 1993. En junio de 2003, el ex vicepresidente de Mobil, J. Bryan Williams, fue

34. “Corruption Perceptions Index 2004”, Transparencia Internacional, octubre de 2004.

declarado culpable en la Corte de Distrito de Estados Unidos por no pagar impuestos sobre ganancias por un monto de 7 millones de dólares, incluidos dos millones que admitió haber recibido de ciertas personas y gobiernos mientras dirigía los negocios de la Mobil. Otra investigación llevó a acusar a James Giffin, presidente del banco comercial estadounidense Mercator, por hacer pagos ilegales por 78 millones de dólares a funcionarios kazajos para asegurar contratos petroleros. Giffin fue acusado de violar el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la cual prohíbe el soborno de funcionarios extranjeros por parte de ciudadanos estadounidenses. Giffin actuó como intermediario en negociaciones entre la Mobil y el gobierno de Nazarbayev e instrumentó que la compañía asegurara su parte del 25% del consorcio de Tengiz³⁵. La falta de transparencia en los negocios petroleros contribuye a las prácticas corruptas, que evitan que el pueblo kazajo se beneficie de las riquezas de su país. Un informe de 2003 de la ONG británica Ayuda Cristiana señala que las compañías extranjeras “firman acuerdos estrictamente confidenciales de repartición de productos con el gobierno de Kazajistán, prohibiendo revelar la suma que pagan para que se les permita la extracción de petróleo”³⁶.

No son sólo las compañías occidentales las que han ganado acceso al petróleo de Kazajistán; China también ha hecho sentir su presencia. La Compañía Nacional de Petróleo de China (CNPC) posee un 63% de las acciones del yacimiento de Aktobe, que contiene un estimado de mil millones de barriles³⁷. La CNPC y Kazajistán están también construyendo un oleoducto de 2.000 millas para transportar petróleo desde el mar Caspio hasta la provincia china de Xinjiang. En septiembre de 2004, el embajador kazajo en Rusia, Krymbek Kusherbaev, describió los crecientes lazos petroleros

35. Associated Press, “Tax rap for bribed oil exec”, CBS News, 13 de junio de 2003.

36. “Fuelling poverty: oil, war and corruption”, Ayuda Cristiana, 12 de mayo de 2003.

37. “Kazakhstan: major oil and gas projects”, Departamento de Energía de Estados Unidos, julio de 2002.

entre su gobierno y China: "La cooperación energética entre Kazajistán y China es ahora a gran escala. La construcción del oleoducto al oeste de China, con capacidad para 20 millones de toneladas al año, ha comenzado. Nosotros no estamos regulando la participación de los chinos en la exploración y desarrollo de yacimientos de petróleo en el sector del mar Caspio perteneciente a Kazajistán"³⁸.

No queriendo lastimar los intereses de las compañías estadounidenses en su carrera contra Rusia y China por el acceso al petróleo kazajo, la administración Bush ha hecho la vista gorda con la rampante corrupción del país, fallos en la democratización y violaciones de los derechos humanos. Es la economía y no la democratización la que ha sido priorizada por los gobiernos de Estados Unidos y Kazajistán. El presidente Nazarbayev lo hizo evidente en la entrevista de febrero de 2004 cuando, refiriéndose a la democratización de Kazajistán, declaró: "Primero la economía, segundo la política"³⁹. La razón por la que la administración Bush desea mantener estrechos lazos con el corrupto y poco democrático régimen kazajo se hizo evidente en un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos: "El país ya no es un pequeño exportador mundial de petróleo como lo fue en la década de los 90 y está dispuesto a convertirse en un jugador aún más significativo en el mundo del mercado del petróleo en la próxima década"⁴⁰.

Azerbaiyán: El nuevo auge del petróleo

Mientras los fallos en la democratización, los altos niveles de pobreza y corrupción más el control externo de los sectores del gas y del petróleo en Kazajistán son evidentemente un problema, la situación de Azerbaiyán, un país mucho más pequeño, es aún más

38. "Company news: oil and gas", *Kazakhstan News*, 21 de septiembre de 2004.

39. Presidente Nursultan Nazarbayev, "Democracy, with traditional values", *Kazakhstan's Echo*, 12 de febrero de 2004.

40. "Kazakhstan country analysis brief", Departamento de Energía de Estados Unidos, noviembre de 2004.

problemática. El primer auge del petróleo de Azerbaiyán terminó después de la Revolución Bolchevique de 1917, cuando el régimen comunista de Moscú nacionalizó las operaciones petroleras de las familias Rothschild y Nobel a principios de la década de 1920. Durante la era soviética, la importancia de Azerbaiyán como productor de petróleo disminuye pues Moscú se beneficiaba principalmente de sus reservas en Siberia y Kazajistán. Sólo hasta que alcanzó la independencia, después del colapso de la Unión Soviética en 1991, Azerbaiyán experimentó un renacer significativo en la exploración y producción de petróleo.

Azerbaiyán ha estado envuelto en una guerra civil incluso desde antes de ganar su independencia. En 1987, la región occidental de Nagorno-Karabaj trató de sacar partido de la política de transparencia o apertura del *premier* Mijaíl Gorbachov, solicitando que a la provincia parcialmente autónoma y poblada principalmente por armenios, le fuera permitido escindirse de la Unión Soviética y convertirse en parte de Armenia. Cuando el gobierno soviético rechazó la solicitud, Karabaj unilateralmente anunció su escisión en julio de 1988. El gobierno regional de Azerbaiyán y Moscú la declararon ilegal y se enviaron tropas soviéticas a la región. El conflicto surgido entre azeríes y armenios en Karabaj aumentó con la retirada de las tropas soviéticas después del colapso soviético de 1991. Armenia entró en el conflicto, combatiendo a Azerbaiyán hasta la firma de un cese al fuego en mayo de 1994. Durante el conflicto, las fuerzas de Armenia se hicieron con el control de Karabaj y casi el 20% de Azerbaiyán. En el conflicto murieron miles de personas; 250.000 armenios y 1,1 millones de azeríes se convirtieron en refugiados⁴¹.

El 24 de octubre de 1992, la camarilla armenia convenció al Congreso de Estados Unidos de acatar la sección 907a del Acta de

41. Carol Migdalovitz, "Armenia-Azerbaijan conflict", División de Investigaciones del Congreso, 8 de agosto de 2003.

Apoyo a la Libertad, la cual prohibía la ayuda estadounidense a Azerbaiyán en respuesta al bloqueo económico impuesto a la región de Karabaj por el gobierno azerí. Mientras tanto, la ayuda estadounidense a Armenia continuaba, creando tensiones con los rusos, quienes acusaban a Estados Unidos de intervenir en su “patio trasero”.

En medio de este conflicto con Armenia y Karabaj, en su mayoría cristianas, Azerbaiyán, mayoritariamente musulmán, se convirtió en una república independiente en diciembre de 1991. Después de una serie de cambios de régimen durante los primeros dieciocho meses de existencia, un golpe militar dirigido por antiguos líderes comunistas, llevó al oficial de la KGB Heydar Aliyev a la presidencia en junio de 1993. Varios meses después, Aliyev fue “electo” presidente en unas elecciones boicoteadas por los partidos opositores y condenada por observadores internacionales como fraudulenta.

El gobierno del presidente Aliyev estuvo marcado por flagrantes violaciones de los derechos humanos. Su gobierno reprimió los movimientos políticos y sociales y, como resultado, las cárceles del país se llenaron de prisioneros políticos. Las fuerzas de seguridad del Estado arrasaron con los medios de comunicación independientes, incluyendo el cierre de los medios de comunicación de la oposición. El régimen de Aliyev también persiguió a los musulmanes, particularmente a los fundamentalistas, que no estaban de acuerdo con la forma de Islam dictada por el Estado. Según la asociación Human Rights Watch radicada en Nueva York, “El Ministerio del Interior se negó a entregar los documentos de identidad a las mujeres musulmanas que se negaron a fotografiarse con la cabeza descubierta”⁴².

A diferencia de Kazajistán, Azerbaiyán no recibió ayuda de Estados Unidos durante la década 1990-2000 debido a la prohibi-

42. “World Report 2003: Azerbaijan”, Human Rights Watch, 14 de enero de 2003.

ción de la sección 907a del Acta de Apoyo a la Libertad. Mientras el Congreso ataba las manos de las administraciones Bush y Clinton con respecto a la ayuda monetaria a Azerbaiyán, no impedía a los funcionarios de la Casa Blanca consolidar las alianzas entre el gobierno de la nueva república y las compañías petroleras estadounidenses.

Durante el caos político de los dos primeros años de independencia de Azerbaiyán, las compañías petroleras de Estados Unidos y Gran Bretaña se propusieron obtener los derechos de las reservas de petróleo del país, las segundas de la región después de Kazajistán. British Petroleum (BP) ganó la baza en 1992 cuando la ex Primera Ministra Margaret Thatcher visitó personalmente Azerbaiyán para interceder a nombre de la compañía. A comienzos de 1993, funcionarios de compañías petroleras estadounidenses y de la administración Clinton comenzaron a trabajar en conjunto y pronto sobrepasaron a los ingleses en la carrera por el acceso al petróleo de Azerbaiyán. El 20 de septiembre de 1994 se firmó en Bakú el “contrato del siglo”. Un consorcio llamado Compañía Internacional de Operaciones de Azerbaiyán (CIOA) comenzó a explotar tres grandes yacimientos del litoral: Chirag, Azeri y Gunashli. Las compañías estadounidenses –Amoco, Unocal, Pennzoil y McDermott– dominaban el consorcio con el 40% de las acciones, mientras BP mantenía el 17% y la compañía de petróleo de la Compañía Estatal de Petróleo de la República de Azerbaiyán (CEPRA) recibía el 10%. Al año siguiente, las acciones de las compañías estadounidenses aumentaron cuando Exxon se unió al consorcio⁴³. Paradójicamente, BP se convertiría en el miembro dominante del consorcio después de su fusión con Amoco en diciembre de 1998.

Los rusos y los iraníes protestaron por el “contrato del siglo”, pero fue en vano. Moscú y Teherán reclamaron que Azerbaiyán esta-

43. Dan Morgan y David B. Ottaway, “Azerbaijan’s riches alter the chessboard”, *Washington Post*, 4 de octubre de 1998.

ba vendiendo un petróleo que no necesariamente le pertenecía. Los Estados del litoral Caspio nunca han llegado a un acuerdo demarcando la posesión del petróleo bajo el lago. La cuestión de los derechos sobre el petróleo del mar Caspio salió a colación el 23 de julio de 2001 cuando un buque de guerra iraní ordenó a un barco de exploración azerí contratado por BP-Amoco, abandonar las aguas del sur del Caspio cuyo petróleo reclamaba Teherán como un derecho.

La ruta más corta de BP-Amoco para transportar el petróleo del mar Caspio a un puerto oceánico era a través de Irán. Pero para acatar las sanciones impuestas a Irán por Estados Unidos y para no depender de los oleoductos rusos en el norte, el gigante petrolero decidió encontrar medios alternativos para transportar el petróleo azerí a los mercados occidentales. Un consorcio de firmas petroleras dirigido por BP, que incluía las firmas petroleras estadounidenses Unocal y ConocoPhillips, junto a los gobiernos de Azerbaiyán, Georgia y Turquía, acordaron en noviembre de 1999 la construcción de un oleoducto de 1.087 millas, Bakú-Tgilisi-Ceyhan (BTC), para transportar el petróleo del mar Caspio desde Azerbaiyán a través de Georgia hasta el puerto turco de aguas profundas de Ceyhan, en el Mediterráneo. El consorcio del oleoducto BTC obtuvo financiamiento de la Compañía Financiera Internacional del Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, haciendo caso omiso de las protestas de grupos ambientalistas acerca del uso de tecnología no probada en los oleoductos. El gigante ingeniero estadounidense Bechtel fue contratado para supervisar la construcción de las secciones del oleoducto de Azerbaiyán y Georgia, que serían operables en el 2005.

A pesar de la firma del “contrato del siglo” y la construcción del oleoducto BTC, pasarían años antes de que los yacimientos de Chirag, Azeri y Gunashli alcanzaran plena producción y fuesen capaces de brindar ganancias sustanciales a Azerbaiyán. Mientras tanto, con una economía caótica debido a la guerra con Armenia, el

gobierno de Aliyev firmó dos acuerdos de préstamo con el FMI en 1995. A cambio de los préstamos por un monto de 176 millones de dólares, el FMI exigió que Azerbaiyán implementara programas de ajuste estructural⁴⁴. Al año siguiente, el FMI dio a Azerbaiyán otros 219 millones de dólares, aun sabiendo que el índice de implementación de reformas era bajo en comparación con Kazajistán.

El FMI declaró que su programa a mediano plazo en Azerbaiyán estaba “diseñado para preparar al país para un auge en la producción petrolera, pues estaba previsto que se duplicara la producción de petróleo para finales de siglo y se cuadruplicara poco después”⁴⁵. Dado que cantidades significativas de petróleo azerí estarían pronto fluyendo, el FMI tenía un tiempo limitado para implementar las reformas neoliberales en el país antes de que las ganancias del petróleo disminuyeran la dependencia del gobierno de esta institución. Un informe publicado por el Open Society Institute alude a esta estrategia: “La pregunta clave para Azerbaiyán es si el gobierno se comprometerá con las reformas —en la administración de impuestos, de los servicios de aduana, el tesoro, la privatización y la mejora del clima para la inversión— una vez que los incentivos para las medidas disminuyan debido a las ganancias del petróleo” (Bagarov et al. 2003: 119). Para implementar el componente de privatización de las reformas, fue lanzado en 1995 el programa estatal de privatización de la propiedad del Estado. Al año siguiente el FMI declaró que “se espera que una privatización a pequeña escala esté concluida entre finales de junio de 1997 y finales de septiembre de 1999, el 70% de las empresas estatales deberían estar privatizadas. ...Además, Azerbaiyán espera completar la liberalización del comercio durante este periodo del programa”⁴⁶.

44. “IMF approves stand-by credit and second STF drawing for Azerbaijan Republic”, Fondo Monetario Internacional, 17 de noviembre de 1995.

45. “IMF approves combined ESAF/EFF financing for Azerbaijan”, Fondo Monetario Internacional, 20 de diciembre de 1996.

46. Ibid.

Incluso las pautas macroeconómicas que utiliza el FMI para medir el progreso de las reformas neoliberales no estaban mostrando el crecimiento económico esperado. En 1998 el PIB creció un 10% más de lo esperado, pero esto fue sólo debido a la producción petrolera del país. Los sectores manufactureros no petroleros registraron una disminución del 8% ese mismo año⁴⁷. Debido a la hiperdependencia económica de las exportaciones petroleras, Azerbaiyán comenzó a mostrar los primeros síntomas de “la enfermedad del holandés”, en la cual la sobredependencia de la exportaciones de un solo artículo aumenta el valor de la moneda del país y hace que los otros bienes exportados sean prohibitivamente caros. Consecuentemente, el crecimiento económico y la creación de empleos en los sectores no petroleros disminuyeron. Un informe de 2003 publicado por el Open Society Institute declara: “La mayor parte de la producción manufacturera ha disminuido hasta casi detenerse, incluso cuando la economía comienza una recuperación general. Las exportaciones a Rusia, el mayor socio comercial de Azerbaiyán, han caído de 180,5 millones de dólares en 1997 a 77 millones en el 2001” (Bagarov et al. 2003: 94). Claramente los azeríes que no trabajan en el sector petrolero enfrentan el mismo problema de los kazajos: empeoramiento de las condiciones económicas y aumento de la pobreza.

Según un informe de 2000 del PNUD, a pesar del crecimiento económico a expensas del petróleo en la segunda mitad de la década de 1990-2000, el PIB per cápita de Azerbaiyán permanecía por debajo del de la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas. En el 2000 el promedio salarial era un miserable 1,50\$ diario; en consecuencia, el 68% de los azerbaiyanos vivían en la pobreza absoluta subsistiendo con menos de 1\$ diario. Las privatizaciones impuestas por el FMI han reducido los empleos del sector estatal de un 71%

47. “IMF concludes Article IV consultation with Azerbaijan Republic”, Fondo Monetario Internacional, 9 de agosto de 1999.

de la población en condiciones de trabajar en 1990 a un 36% al finalizar la década. El sector privado, sin embargo, no ha podido crear suficientes empleos para los antiguos trabajadores estatales y en 1999 había más de 148 azerbaiyanos desempleados por cada puesto vacante, según el PNUD⁴⁸. La situación era más que insostenible para los 789.832 desplazados internos; uno de cada diez azerbaiyanos se convirtió en desplazado interno como resultado de la guerra con Armenia. En abril de 2000 casi todos los desplazados internos vivían en la pobreza absoluta. El 69% de ellos estaban desempleados y más del 30% de los niños desplazados menores de 5 años sufrían de desnutrición crónica⁴⁹.

Las reformas neoliberales impuestas por el FMI también devastaron los sistemas de salud del país, ya que el gobierno redujo los gastos en salud en relación al PIB. Según el PNUD, incluso en medio del conflicto y en medio del desorden político de 1993, el gobierno de Azerbaiyán gastó el 3,3% del PIB en el sistema de salud de la nación. En 1999 los gastos se redujeron a un 1,1% del PIB y la salud dejó de ser gratuita. Un informe del PNUD declara que, debido al aumento de los precios, "la mayoría de las personas utilizan los cuidados médicos sólo en emergencias"⁵⁰.

En el 2001, el FMI decidió que tenía que enfrentar el problema de la pobreza en Azerbaiyán. El 6 de julio, la institución financiera aprobó un acuerdo con el gobierno de Bakú, la Ayuda para el Crecimiento y Reducción de la Pobreza (ACRP). La ACRP consiste en préstamos emitidos para países de bajos ingresos con el objetivo de continuar los ajustes estructurales en orden de mejorar el crecimiento económico mientras simultáneamente se pone énfasis en reducir la pobreza. Dado que el FMI dio el préstamo a una baja tasa de interés y con cinco años y medio de período de gracia para la

48. "Azerbaijan Human Development Report 2000", Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), marzo de 2001.

49. *Ibíd.*

50. *Ibíd.*

devolución principal, el agobio del pago de la deuda sería algo menor que lo habitual para los préstamos del FMI. En teoría, como el gobierno no tenía que hacer los pagos principales hasta dentro de cinco años y medio, tendría más dinero para invertir en programas sociales.

Algunas de las contradicciones inherentes a la ACRP se hicieron evidentes cuando el FMI aprobó al gobierno de Azerbaiyán, un incremento de los gastos en salud y educación, pero reclamó reducciones en los subsidios del combustible. Mientras por una parte la empobrecida población del país se beneficiaba con el incremento de los gastos en salud y educación, por otra parte sufría la reducción de los subsidios del combustible, lo cual se tradujo en el incremento de los precios de calefacción, cocina y transporte. No es sorprendente que después de dos años de la ACRP una revisión del FMI determinara que “la pobreza se mantiene dramáticamente extendida y la economía depende estrechamente de las ganancias del sector petrolero”⁵¹.

Entre tanto, las privatizaciones impuestas por el FMI continuaron en el 2001 cuando el presidente Aliyev anunció la implementación del Segundo Programa para la Privatización de Propiedades Estatales, que incluía sucursales de la compañía petrolera estatal CEPRA. Sólo un puñado de las unidades de producción de CEPRA fueron privatizadas, pero como dijo Valekh Aleskerov, director general de la División de Inversiones Extranjeras de CEPRA: “Algún día el mismo CEPRA será privatizado”⁵².

En agosto de 2003, el ya achacoso octogenario Aliyev nombró a su hijo Ilham para el puesto de primer ministro y se retiró de las elecciones presidenciales de septiembre. Ilham se convirtió en el

51. “IMF approves US\$18 million PRGF disbursement to the Azerbaijan Republic and requests for waivers of performance criteria and extension of arrangement”, Fondo Monetario Internacional, 15 de mayo de 2003.

52. “USOCAR: a fitting partner for the world’s great oil firms”, *International Reports*, 2001.

candidato del partido gobernante y ganó la presidencia con casi el 80% de los votos en unas elecciones que el OSCE calificó como abiertamente fraudulentas. Los manifestantes tomaron las calles y lucharon con la policía, pero Ilham asumió funciones y Azerbaiyán estableció la primera dinastía de las antiguas repúblicas soviéticas al pasar las riendas del poder de padre a hijo. Mientras la administración Bush ignoraba las evidentes irregularidades en las elecciones de septiembre en Azerbaiyán, criticó abiertamente las fraudulentas elecciones que se realizaron el mes siguiente en la vecina Georgia, cuando la oposición respaldada por Estados Unidos fue derrotada. Como había hecho en Kazajistán, Estados Unidos hacía la vista gorda con las violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la pobreza, mientras facilitaran el acceso de las compañías estadounidenses a las reservas de petróleo de Azerbaiyán.

Turkmenistán: nadando contra corriente

En agudo contraste con Kazajistán y Azerbaiyán, Turkmenistán ha mantenido una economía controlada por el Estado y se ha mantenido relativamente aislada del mundo exterior. Mientras este país de 6 millones de habitantes no es un gran productor de petróleo, se asienta en uno de los depósitos de gas natural más grandes del mundo. Como ocurrió en la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas después de la independencia de 1991, el líder del Partido Comunista de Turkmenistán se convirtió en el presidente del país. A diferencia de otros líderes de la región, el presidente Saparmurat Nyazov, quien se llama a sí mismo *Turkmanbashi* (líder de todos los turcos), ha despreciado la charada democrática de estar continuamente amañando elecciones por el simple medio de convertirse en presidente vitalicio.

Turkmenistán ha mantenido el estilo soviético en la política y la economía, que son controlados centralmente por un excéntrico

presidente que ha ido tan lejos como cambiar los nombres de los meses del año por el suyo y los de los miembros de su familia. La economía socialista de Turkmenistán permanece como una isla solitaria en medio de un mar de neoliberalismo. Acorde con esto, el Presidente Nyazov garantiza un empleo a cada ciudadano y subsidia fuertemente bienes, alimentos y servicios. También, sin embargo, reprime cualquier disidencia y limita estrictamente el acceso público a Internet, prensa escrita internacional y las transmisiones de televisión extranjeras.

Las políticas de Nyasov han mantenido al país relativamente aislado. Es difícil para los extranjeros visitar Turkmenistán y a muy pocas compañías extranjeras se les ha permitido tener negocios en el país. La notable excepción es la compañía de gas rusa Gazprom, que adquiere casi todo el gas natural de Turkmenistán. Sin otro recurso que un pequeño gaseoducto al vecino Irán, abierto recientemente, Turkmenistán depende de los gaseoductos de Gazprom para bombear su valioso recurso a Rusia y de ahí a los mercados europeos. Mientras la producción y venta de gas ha brindado al gobierno turco ganancias relativamente estables, también han dado a Moscú influencia sobre Turkmenistán. Por ejemplo, cuando Nyazov firmó un contrato preliminar con la Shell Oil en 1999 para la construcción de un gaseoducto alternativo por debajo del mar Caspio hasta Azerbaiyán, Moscú amenazó con cerrar el gaseoducto de Gazprom.

No queriendo perder su principal fuente de ingresos extranjeros, Turkmenistán se retiró del proyecto del gaseoducto a Azerbaiyán. El negocio con la Shell no fue el primer intento de Turkmenistán de entrar en sociedad con una transnacional. En 1995, Nyazov había firmado un contrato con Unocal para construir un gaseoducto a través de Afganistán hasta Pakistán, hambriento de energía. El proyecto colapsó al retirarse Unocal después de los ataques estadounidenses, con misiles, a los campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán.

En primer lugar, Nyazov ha tratado de no negociar con compañías extranjeras, prefiriendo en su lugar preservar el control estatal de la economía y los recursos de Turkmenistán. Como consecuencia, Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales no han podido integrar a Turkmenistán en la economía global con el mismo grado de éxito que han alcanzado con los otros dos principales productores de energía de la región, Kazajistán y Azerbaiyán. Como sus vecinos, la economía de Turkmenistán se contrajo en los años que siguieron a la independencia. Pero en contraste con los líderes de las otras nuevas repúblicas independientes, Nyazov no se volvió hacia el FMI y las corporaciones extranjeras en busca de préstamos e inversiones. En su lugar, tomó partido por incrementar los gastos estatales, una política que era contraria al FMI y a otros seguidores del neoliberalismo.

En 1998, la economía de Turkmenistán comenzó a recuperarse y en el 2004, según el Banco Mundial, “incluso según las cifras más conservadoras, la expansión económica de los últimos cinco años ha sido vigorosa. A esta recuperación han contribuido las inversiones estatales a largo plazo, promediando más del 30% del PIB, en refinerías, textiles, procesamiento de alimentos, transporte y grandes proyectos de construcción”. El Banco Mundial pasa a señalar que Turkmenistán ha disfrutado de un 18% de crecimiento anual desde 1999 y “en el 2000 el déficit de la contabilidad se ha convertido en importantes excedentes, promediando el 5% del PIB. ...La deuda externa disminuye establemente desde el 2000”⁵³.

Turkmenistán ha implantado políticas económicas que van en contra de la opinión económica predominantemente y ha alcanzado unas cifras de crecimiento económico más impresionantes que las de sus vecinos, que han seguido las doctrinas neoliberales impulsados por el FMI y el Banco Mundial. Asombrosamente el

53. “Turkmenistan Country Brief 2004”, Grupo del Banco Mundial, septiembre de 2004.

Banco Mundial, aun a sabiendas de que ha publicado el éxito de Turkmenistán en su propio informe, continúa exhibiendo un ciego alegato por el neoliberalismo cuando declara que entre las antiguas repúblicas soviéticas, "Turkmenistán es el que menos ha progresado en términos de reformas económicas desde la independencia... La privatización se estancó a finales de la década del 90 con la mayoría de las empresas a gran y mediana escala, así como muchas pequeñas firmas aún en manos del Estado"⁵⁴. Al finalizar el 2004, Turkmenistán no tenía deudas con el FMI ni el Banco Mundial.

Al no vender la mayoría de sus recursos, Turkmenistán aseguró una fuente segura de ingresos a largo plazo que ayudó a aliviar el sufrimiento social que se produjo después de la independencia de la Unión Soviética. Según el Banco Mundial, sólo el 7% de los turcomanos vivían en la pobreza absoluta a finales de la década del 90. Esto supone un fuerte contraste con el 68% y 32% de Azerbaiyán y Kazajistán, respectivamente, siendo este último el modelo de las reformas neoliberales en la región según el FMI⁵⁵. También, desde la independencia hasta el 2004 Turkmenistán ha subido catorce puestos hasta el ochenta y seis en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, por encima de todas las repúblicas de Asia Central, excepto Kazajistán. Como se dijo anteriormente, Kazajistán, la menos empobrecida de las repúblicas durante la era soviética, iba en dirección opuesta, cayendo veinticuatro puestos hasta el setenta y ocho durante el mismo período.

Mientras la economía de Turkmenistán se mantiene relativamente saludable según los estándares de la región, el país tiene serios problemas con respecto a las libertades civiles y los derechos humanos. Como los otros líderes de la región, el presidente Nyazov reprimió los grupos de oposición y censuró los medios de comunicación independientes. La Iglesia Ortodoxa rusa y el Islam sunita

54. *Ibid.*

55. *Ibid.*

son las únicas religiones legales en el país. Los que son sorprendidos practicando otra religión han sido multados y, en ocasiones, encarcelados. Nyazov también ha ordenado el desalojo de vecindarios enteros de la capital, Ashjabad, para abrir espacio a la construcción de grandes monumentos públicos que frecuentemente rinden honor al propio presidente⁵⁶.

Debido al aislamiento político de Turkmenistán y su dependencia de los gaseoductos rusos, Moscú ha dejado clara su ventaja en el nuevo Gran Juego en este país de Asia Central. No sólo las corporaciones de Estados Unidos han sido incapaces de obtener el acceso a las enormes reservas de gas natural del país, sino que la administración Bush no ha podido convencer a Nyazov de apoyar a Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo en la región. De hecho Turkmenistán se declaró a sí misma como nación neutral frente a la ONU en 1995 y ha tenido éxito en mantenerse así después del 11/9. Mientras Nyazov negó el permiso a las fuerzas militares estadounidense para usar sus bases o su espacio aéreo durante la invasión a Afganistán, sí permitió en cambio el uso del país como plataforma terrestre para la entrega de ayuda humanitaria a su vecino arrasado por la guerra.

Después de la invasión de Estados Unidos, Nyazov se comprometió a brindar a Afganistán 500 millones de dólares en ayuda en un período de diez años. Suministró electricidad y combustible a precios especiales, mientras ayudó a construir hospitales y a desarrollar las infraestructuras del transporte y las comunicaciones en el devastado país. Turkmenistán es uno de los pocos países que ha mantenido sus promesas de posguerra a Afganistán. Esta generosidad, sin embargo, no es totalmente altruista. Un Afganistán estable permitiría a Nyazov revivir los planes de la construcción del gaseoducto hasta Pakistán y, a fin de cuentas, reducir su dependencia

56. "World Report 2003: Turkmenistan", Human Rights Watch, 14 de enero de 2003.

de Rusia. Desde el punto de vista de Washington, un Afganistán estable puede brindar una oportunidad a las corporaciones estadounidenses de acceder finalmente a las reservas energéticas de Turkmenistán, particularmente si Unocal se involucra nuevamente en la construcción del gasoducto de Turkmenistán a Pakistán.

La militarización de la región

Para las transnacionales energéticas que operan en Asia Central y el sur del Cáucaso, el principal obstáculo logístico para explotar los recursos de la región ha sido transportarlos a los mercados occidentales y asiáticos. Debido a la centralización del sistema soviético, los únicos oleoductos existentes van al norte, hacia Rusia. Para evitar la dependencia de los oleoductos rusos, las compañías energéticas occidentales que operan en las nuevas repúblicas independientes comenzaron a buscar rutas alternativas de transporte.

Unocal era una de las compañías de Estados Unidos que operan en la región que estaba interesada en vender petróleo y gas al creciente mercado asiático, pero no había oleoductos que fueran hacia el este o el sur desde las naciones de Asia Central. En un intento por resolver este problema, Unocal firmó un negocio con Turkmenistán en 1995 antes de comenzar las negociaciones con el gobierno talibán de Afganistán para construir un gasoducto desde Turkmenistán a través de Afganistán y Pakistán hasta el océano Índico.

En noviembre de 1997, representantes del gobierno talibán visitaron Estados Unidos para discutir el proyecto con Unocal y funcionarios del Departamento de Estado. Cuatro meses más tarde, mientras explicaba el proyecto del gasoducto al Congreso de Estados Unidos, el vicepresidente de Unocal Jhon J. Maresca anunció que la compañía estudiaba además la construcción de un oleoducto a través de Afganistán: "El oleoducto se convertirá en parte integral de un sistema regional de oleoductos que reunirá el petróleo

de infraestructuras ya existentes en Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán y Rusia”⁵⁷.

En agudo contraste con la represión del fundamentalismo islámico que estaba ocurriendo en todas las ex repúblicas soviéticas, los talibanes impusieron las riendas del fundamentalismo a todos los musulmanes de Afganistán. A la administración Clinton y Unocal, sin embargo, no parecía preocuparles el poco respeto de los talibanes por los derechos humanos y especialmente el tratamiento que recibía la mujer afgana. Al mismo tiempo que los funcionarios de Estados Unidos y Unocal discutían con los talibanes, el Departamento de Estado estaba informando que a las mujeres afganas no se les permitían asistir a la escuela o salir a trabajar. También decían que “el talibán decreta lo que las mujeres pueden vestir en público. Las mujeres fueron obligadas a usar unas prendas conocidas como chador, que las cubría de la cabeza a los pies con sólo una malla para la visión. ...En Kabul y en cualquier parte donde una mujer fuera vista en público sin usar el chador, era golpeada por la milicia talibán”⁵⁸.

Grupos de justicia social estadounidenses, especialmente organizaciones feministas, lanzaron una campaña en apoyo a la mujer afgana y comenzaron a presionar al gobierno para romper relaciones con el gobierno talibán. Sintiendo la presión política interna, los funcionarios del gobierno de Estados Unidos se volvieron cada vez más reacios a apoyar el negocio de Unocal por miedo a que pareciera que apoyaba al talibán. El movimiento contra el régimen talibán en Washington fue total después de que Al-Qaeda bombardeara las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en agosto de 1998. La administración Clinton respondió al ataque lanzando misiles

57. John J. Maresca, “Testimony before the House Committee on International Relations, Sub Committee on Asia and the Pacific”. House Committee on International Relations, Sub Committee on Asia and the Pacific, 12 de febrero de 1998.

58. “Afghanistan country report on human rights practices for 1997”, Departamento de Estado de Estados Unidos, 30 de enero de 1998.

contra los campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán, lo que llevó a Unocal a abandonar el proyecto del oleoducto.

La invasión estadounidense de Afganistán que sucedió al 11/9 llevó a muchos críticos a especular que la administración Bush usaba la guerra contra el terrorismo como pretexto para asegurar el acceso a los recursos de la región y posibles rutas de oleoductos. Después de todo, el Departamento de Energía de Estados Unidos había declarado pocos meses antes de la invasión que “la importancia de Afganistán desde el punto de vista energético deriva de su posición geográfica, como ruta potencial de las exportaciones de petróleo y gas natural desde Asia Central hasta el mar Árabe”⁵⁹. En la actualidad, Estados Unidos ya ha asegurado el acceso a la mayoría de las reservas de la región debido a la imposición de medidas neoliberales a los gobiernos locales que han abierto las puertas a las transnacionales. Sin embargo, está claro que es de interés para Washington estabilizar Afganistán con la esperanza de brindar rutas alternativas y más baratas para transportar el petróleo y el gas natural de la región a los mercados internacionales. Mientras la guerra contra el terrorismo estaba concebida contra Al-Qaeda, que después de todo había atacado a Estados Unidos, también brindó a la administración Bush la oportunidad de aumentar su influencia militar en la región para proteger mejor sus florecientes intereses económicos y políticos.

La guerra contra el terrorismo brindó a Estados Unidos una justificación bien fundamentada para aumentar el despliegue militar en una región que históricamente había estado siempre bajo la esfera de influencia rusa. Estados Unidos comenzó a preparar el terreno para establecer su presencia militar en las nuevas repúblicas independientes inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética. Estados Unidos fue el primer país en abrir emba-

59. “Country analysis briefs: Afghanistan”, Departamento de Energía de Estados Unidos, septiembre de 2001.

jadas en cada una de las nuevas repúblicas. Y a pesar del hecho de que las nuevas repúblicas aún mantenían estrechos lazos militares con Rusia, según el subsecretario Strobe Talbott, "fue por la insistencia de Paul Wolfowitz cuando estaba en el Pentágono [bajo el mandato del presidente George H. W. Bush], cuando Estados Unidos estableció oficinas de defensa adjuntas a estas embajadas. Y fue a instancia suya cuando se llevaron a cabo los primeros contactos entre militares"⁶⁰.

Construyendo sobre el terreno preparado por Wolfowitz una década antes, la administración Bush desplegó fuerzas militares no sólo en Afganistán, sino que, escudándose tras la guerra contra el terrorismo, también desplegó fuerzas en Uzbekistán, Kirguistán y Georgia. Además de establecer bases en estos países, Washington aumentó la ayuda militar a los autoritarios y represivos regímenes que mantienen el poder.

La administración Bush desplegó las tropas de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos en Georgia en abril de 2002 para entrenar a los militares de ese país en combatir a los insurgentes islámicos. Los soldados estadounidenses estaban sólo a unas pocas millas de una base militar rusa y cerca del oleoducto BTC que corre desde Azerbaiyán atravesando Georgia hasta el puerto turco de Ceyhan. Mientras las tropas de Estados Unidos estaban oficialmente en el sur del Cáucaso como parte de la guerra contra el terrorismo, el embajador estadounidense en Georgia, Richard Miles, admitió que el despliegue "tiene un papel de apoyo yo diría que con respecto a la seguridad del oleoducto. El oleoducto es de gran valor estratégico para Georgia y para todos los países involucrados"⁶¹.

En Asia Central, las reservas de petróleo relativamente pequeñas de Uzbekistán no son vitales económicamente para Estados

60. Subsecretario Strobe Talbott, "A farewell to Flashman".

61. "Oil: the world over a barrel".

Unidos, pero el país ha sido importante desde el punto de vista militar para la administración Bush. En octubre de 2001 el presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, concedió permiso al ejército de Estados Unidos para establecer aviones y más de mil soldados en la base aérea de la era soviética de Khanabad para que fueran utilizados en la guerra contra Afganistán. Karimov, que ha gobernado a los 25 millones de habitantes de Uzbekistán de forma dictatorial desde la independencia de 1991, usó la guerra contra el terrorismo para justificar el aumento de la represión contra los grupos de la oposición islámica. Al aliarse con Uzbekistán, Estados Unidos se ha hecho compañero de uno de los más represivos regímenes del mundo. Después de la llegada del ejército de Estados Unidos, según la asociación Human Rights Watch (HRW), “los abusos de los derechos humanos continúan a escala masiva en Uzbekistán... El gobierno sistemáticamente viola los derechos sobre la libertad de religión, expresión y reunión. No existe un sistema judicial independiente y la tortura es bastante común en las prisiones, lo mismo antes que después de los juicios”⁶².

El trato de Karimov a los musulmanes que se niegan a practicar su religión entre los estrictos márgenes impuestos por el gobierno es particularmente severo y no eran los musulmanes militantes del Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU) los únicos blancos del régimen, sino también los miembros del Hizb ut-Tahrir (Partido de Liberación). En 1999, el gobierno de Uzbekistán sentenció a 90 supuestos miembros del MIU a muerte en lo que Human Rights Watch llamó “obviamente injustos simulacros de juicio”, mientras cientos de miembros del Hizb ut-Tahrir recibían duras sentencias a prisión sólo por sus creencias religiosas⁶³.

En 2001 y 2002, siete mil uzbekos fueron encarcelados por acusaciones políticas o religiosas, por actos no violentos, mientras más

62. “World Report 2003: Uzbekistan”, Human Rights Watch, 14 de enero de 2003.

63. “World Report 2000: Uzbekistan”, Human Rights Watch, enero de 2000.

de cuatro mil aldeanos desalojados a la fuerza por el gobierno permanecían en campos de concentración a cientos de millas de sus hogares⁶⁴. En el 2002, en vez de criticar a Uzbekistán por sus violaciones de los derechos humanos, la administración Bush expresó lo que agradecía la ayuda de Karimov en la guerra contra el terrorismo dando la asombrosa cifra de 508 millones de dólares de ayuda al país, convirtiéndose en el cuarto país en la lista de los mayores receptores de ayuda por parte de Estados Unidos después de Israel, Egipto y Colombia⁶⁵.

En lo que a Karimov concierne, la ayuda estadounidense fue vital ya que en 1996 el FMI decidió suspender el programa de préstamos a Uzbekistán debido al fracaso del gobierno en implementar reformas económicas neoliberales. Sin embargo, después que se convirtió en un fuerte aliado en la guerra contra el terrorismo, Washington convenció al FMI para que renovara sus lazos con el régimen de Karimov. Uzbekistán pronto decepcionó nuevamente al FMI al no implementar las reformas económicas que reclamaba la institución. Con el FMI incapaz de hacer avances, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos Richard Boucher anunció el 13 de julio de 2004 que la administración Bush suspendía los 18 millones de dólares en ayuda militar al régimen de Karimov, no por las atroces violaciones de los derechos humanos sino porque Washington estaba “decepcionado por la falta de progresos en las reformas democráticas y las restricciones impuestas a los asistentes estadounidenses en el terreno”.

En otras palabras, Karimov estaba siendo castigado por no implementar las reformas exigidas por el FMI. Mientras Uzbekistán es de poca importancia económica para Estados Unidos, el que implemente reformas neoliberales pondría en su lugar otra pieza

64. World Report 2003: Uzbekistan”.

65. “US assistance to Uzbekistan - fiscal year 2002”, Departamento de Estado de Estados Unidos, 9 de diciembre de 2002.

del rompecabezas del libre comercio que Washington trata de armar metódicamente en todo el planeta. Boucher dejó claro, sin embargo, que “Uzbekistán es un importante aliado de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo” y que la retención de la ayuda “no significa que ni nuestros intereses en la región ni nuestros deseos de continuar la cooperación con Uzbekistán hayan cambiado”⁶⁶.

El mes siguiente, la administración Bush fingió cara de sorpresa cuando el General Richard Meyers, presidente de la Junta de Jefes de Personal, anunció en agosto, en su visita a Uzbekistán, que Washington entregaría al gobierno de Karimov 21 millones de dólares en ayuda militar, 3 millones más que los concedidos el mes anterior⁶⁷. La decisión de restaurar la ayuda militar fue inspirada por el rechazo de Karimov a que aviones estadounidenses usaran la base de Khanabad después de la suspensión de la ayuda⁶⁸.

Mientras la administración Bush retuvo la ayuda en un intento de presionar a Uzbekistán para que implementase reformas económicas de libre mercado, no usó la misma táctica para terminar con los flagrantes abusos a los derechos humanos cometidos por el régimen de Karimov contra los musulmanes. El cuadro de Washington en el que aparece Karimov como cercano aliado en la guerra contra el terrorismo evidentemente se contradice con las justificaciones de la administración Bush de los derechos humanos para derrocar a Saddam Hussein del poder en Irak. Karimov, a quien algunos uzbekos han llamado “nuestro Saddam”, ha usado repetidamente la tortura y el encarcelamiento contra sus opositores políticos, especialmente los musulmanes. El ex emba-

66. Richard Boucher, “Secretary of State decision not to certify Uzbekistan”, Departamento de Estado de Estados Unidos, 13 de julio de 2004.

67. “Top US general tours Central Asian capitals, dispenses aid to Uzbekistan”, *Eurasia Insight*, 13 de agosto de 2004.

68. R. Jeffrey Smith y Glenn Kessler, “US opposed calls at NATO for probe of Uzbek killings”, *Washington Post*, 14 de junio de 2005.

jador británico en Uzbekistán, Craig Murray, fue el único diplomático occidental con voluntad para levantar la voz en contra de los abusos de Karimov. Murray, sin embargo, pagó un precio por su candidez cuando el gobierno de Blair lo retiró de su puesto en octubre de 2004. Un mes después de su renuncia, Murray declaró que existía “apoyo político a Karimov por todas las altas figuras del gobierno de Estados Unidos, empezando por Bush”. Prosiguió declarando que apoyar “semejante dictadura jamás será correcto y que si Estados Unidos apoya al régimen de Tashkent siendo así que tortura a musulmanes inocentes, esto sólo puede incrementar el odio de los musulmanes hacia Occidente”⁶⁹.

El Secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, minimizó los derechos humanos cuando visitó Tashkent en febrero de 2004, declarando que la relación de Washington con Uzbekistán es “multifacética” y que también comprende asuntos de política, economía y seguridad. Rumsfeld dijo que “Uzbekistán es un miembro clave de la coalición mundial en la lucha contra el terrorismo” y que la relación entre los militares de ambos países “es fuerte y se hace más fuerte cada mes”⁷⁰. La importancia de la relación entre militares para la administración Bush nunca fue tan clara como después de la masacre de miles de civiles por tropas uzbekas en la ciudad de Andijon en mayo de 2005. La brutalidad del régimen se hizo evidente para el mundo cuando sus tropas dispararon y mataron cientos de manifestantes que protestaban contra el gobierno de Karimov⁷¹.

El Departamento de Estado estadounidense se unió a las naciones europeas en su reclamo por una investigación independiente de la masacre. Cuando Karimov respondió ante la posición del

69. “Uzbekistan: interview with Craig Murray, former UK ambassador”, IRIN News, 18 de febrero de 2004.

70. Secretario Donald Rumsfeld, “Secretary Rumsfeld and Ambassador Jon Purnell press conference in Uzbekistan”, Departamento de Defensa de Estados Unidos, 24 de febrero de 2004.

71. “‘Hundreds killed’ in Uzbekistan violence”, *Guardian*, 14 de mayo de 2005.

Departamento de Estado que prohibía nuevamente el uso de la base aérea de Khanabad, la administración Bush rápidamente cambió de posición e incluso bloqueó una demanda de la OTAN para una investigación internacional de la masacre. De todas formas, Karimov continuó descontento con la respuesta del Departamento de Estado ante la masacre y demandó que las fuerzas de Estados Unidos abandonaran Uzbekistán en un plazo de seis meses. Un funcionario del Pentágono dejó clara la posición del ejército: "Queremos recuperar completamente el uso de esa base".

Los lazos militares de Estados Unidos con el vecino Kirguistán también se fortalecieron después de los ataques del 11/9. A pesar de tener un historial en derechos humanos ligeramente mejor que el de Uzbekistán, la administración Bush y el presidente de Kirguistán, Askar Akayev, se hicieron estrechos aliados en la lucha contra el terrorismo. Akayev permitió al ejército estadounidense el uso del aeropuerto de Manas en su guerra contra Afganistán. A cambio de su permiso para usar la base, la administración Bush dio al gobierno de Akayev 49,9 millones de dólares en asistencia en el 2002, de los cuales 12 millones eran ayuda militar sin condiciones de derechos humanos adjuntas⁷². En julio de 2004 aún había 1.150 soldados estadounidenses con base en Manas y el ejército estaba levantando edificios más duraderos, lo que demostraba claramente que no tenían intenciones de marcharse en un futuro inmediato⁷³. Mientras tanto, según Human Rights Watch, "con su relación con Estados Unidos cada vez más estrecha y con el realce de su perfil internacional, el gobierno parecía confiar en que las medidas represivas no tendrían consecuencias diplomáticas"⁷⁴. Pero mientras las medidas represivas del gobierno no conllevaron a reacciones negativas por parte de la administración Bush, el pue-

72. "World Report 2003: Kyrgyzstan", Human Rights Watch, 14 de enero de 2003.

73. Michael Mainville, "US bases overseas show new strategy", *Pittsburgh Post-Gazette*, 26 de julio de 2004.

74. "World Report 2003: Kyrgyzstan".

blo de Kirguistán se alzó y derrocó a Akayev en marzo de 2005, después de que los partidos de oposición fueran excluidos de las elecciones parlamentarias. Poco después del alzamiento, Rumsfeld visitó el país para asegurarse de que el gobierno provisional no tenía intenciones de exigir que las fuerzas militares estadounidenses abandonaran Kirguistán.

Aunque Kazajistán no permitió que Estados Unidos construyera bases militares en su territorio, de todos modos estableció estrechos lazos militares con Washington. La administración Bush firmó un tratado de cooperación por cinco años con el régimen de Nazarbayev en septiembre de 2003, mencionando el suministro de helicópteros, aviones y barcos a Kazajistán. El acuerdo fue firmado un mes después de que tropas de este país fueran enviadas a Irak para ayudar a las tropas estadounidenses. Después de visitar a oficiales de Kazajistán en febrero de 2004, Rumsfeld declaró: "Hablamos de la ayuda estadounidense a la independencia y soberanía de Kazajistán y de nuestras importantes relaciones entre militares"⁷⁵. Indudablemente Rumsfeld se refería al deseo de la administración Bush de asegurar la "independencia" de Kazajistán de las influencias rusas y chinas, no las de Washington.

El aumento de la presencia militar estadounidense en Asia Central ha creado tensiones entre Washington tanto con Rusia como con Pekín, ya que consideran esta región como su patio trasero. En Kirguistán continúan localizadas tropas rusas, mientras que China ha llevado a cabo ejercicios conjuntos con ese país. Sumado a esto, en julio de 2004, Tayikistán acordó albergar permanentemente 20.000 efectivos de las tropas rusas. Las alianzas encabezadas por los rusos y los estadounidenses están compitiendo por la influencia en la región. Washington está reclutando ansiosamente naciones de Asia Central para que participen en sociedad con la

75. Antoine Blua, "Central Asia: Rumsfeld wraps up visit to Uzbekistan, Kazakhstan", Radio Europa Libre/Radio Libertad, 20 de febrero de 2004.

OTAN en el programa de paz en un intento de extender la influencia de la seguridad de la alianza más allá del Atlántico Norte. Entre tanto, los miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, encabezada por Rusia –Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán– llevaron a cabo ejercicios militares en agosto de 2004. Quizás aún más preocupante para Washington fue el hecho de que Rusia y China llevaran a cabo por primera vez un ejercicio militar conjunto en agosto de 2005.

Conclusión

La presencia militar estadounidense y el apoyo de Washington a los gobiernos seculares marcados por la represión, la corrupción y el nepotismo, han incrementado el sentimiento anti-estadounidense en las regiones de población musulmana y alimentado el terrorismo. La estrategia de Washington de la Ruta de la Seda ha sido un remanente de las políticas de la guerra fría cuando Estados Unidos apoyaba dictaduras represivas con tal de proteger sus intereses económicos y políticos de los designios rusos y chinos. Las nuevas repúblicas independientes, con su deseo de evitar una larga dominación y dar su justo castigo a Rusia, se han vuelto vulnerables a las maquinaciones de Washington. Pero con gobiernos en la región que demoran la aplicación de medidas neoliberales y que mantienen estrechos lazos militares con Rusia y China, aún no queda claro quién prevalecerá finalmente en el nuevo Gran Juego.

África Occidental: explorando el otro golfo

La búsqueda por parte de la administración Bush de fuentes alternativas de petróleo la ha llevado a desarrollar estrechos lazos con naciones ricas en recursos en África Occidental. A pesar de que tres países de la región –Nigeria, Angola y Gabón– se encontraban entre los mayores suministradores de crudo a Estados Unidos durante la década de 1990-2000, el área no constituía una prioridad en la política exterior de Washington. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, sin embargo, llevaron a que Estados Unidos reconsiderara su política exterior en África Occidental, que sería cada vez más importante en la siguiente década. Estados Unidos adquiere el 15% de su petróleo del África subsahariana –la mayor parte proviene del Golfo de Guinea, que se extiende de Nigeria a Gabón– pero se espera que esta cantidad aumente significativamente. Como dijo el senador republicano Chuck Hagel, presidente del Subcomité de Política Económica Internacional del Senado, en 2004: “Podríamos importar hasta el 25-30% de nuestro petróleo del Golfo de Guinea en los próximos cinco años. Esto ciertamente rivalizará con el Golfo Pérsico como suministrador de crudo”¹.

1. Jim Landers, “African oil fields: rewards and risks”, *Dallas Morning News*, 6 de octubre de 2004.

Algunos de los países de África Occidental, particularmente Angola, han enfrentado brutales guerras civiles durante décadas. Nigeria ha pasado la mayor parte de su independencia bajo dictaduras militares, y sólo recientemente en 1999 regresó a un gobierno civil. Dictadores represivos aún mantienen el poder en otros países ricos en petróleo de la región. El presidente Omar Bongo ha gobernado Gabón con puño de hierro desde 1967, mientras el presidente Teodoro Obiang Nguema llegó al poder en Guinea Ecuatorial por un golpe militar en 1979. A pesar del amplio historial de conflictos civiles en la región, dictadores despiadados y continuas luchas étnicas, las compañías petroleras extranjeras, inclusive los gigantes energéticos de Estados Unidos ChevronTexaco y ExxonMobil han continuado operando en África Occidental. Las compañías petroleras extranjeras han trabajado estrechamente con regímenes corruptos en la región y se han beneficiado de las violaciones de los derechos humanos cometidas por los aparatos militares nacionales responsables de proteger sus operaciones. Al involucrarse más en la región para asegurar nuevas fuentes de petróleo, la administración Bush ha tenido que estrechar lazos con regímenes represivos, como resultado una política exterior heredada de las luchas estadounidenses en África durante la guerra fría.

Nigeria: la tierra sin mañana

Como muchas naciones africanas, Nigeria ha luchado por llegar a un consenso con su pasado colonial desde que obtuvo la independencia de Inglaterra en 1960 y se convirtió en República en 1963. Los británicos establecieron las fronteras del país arbitrariamente en 1907 dando poca importancia a las históricas divisiones étnicas. Hoy Nigeria es la nación más poblada de África con 137 millones de habitantes agrupados en más de 250 grupos étnicos, de los cuales los dominantes son los hausa en el norte, los yoruba en el oeste y los ibo en el este. Otro legado del colonialismo es la divi-

sión religiosa de la población, que es musulmana en su mayoría y cristiana en un 40%. Una crisis de gobierno después de la independencia, llevó además a Nigeria a ser gobernada por una brutal dictadura militar en la gran mayoría de sus primeros cuarenta años como nación-Estado. Incluso después de regresar al gobierno civil en 1999, el país permanecía como el tercero más corrupto del mundo². Como resultado de los gobiernos corruptos e ineficientes, la explotación extranjera de sus vastos recursos petroleros, el mal manejo económico y la división étnica y religiosa, muchos consideran a Nigeria como un Estado fallido que se debate por sobrevivir estos problemas endémicos que amenazan con romper el país en varias pequeñas naciones surgidas por afinidad étnica. Según Bobo Brown, un funcionario nigeriano de relaciones públicas de Shell, "Nigeria es la tierra sin mañana" (Maier 2002: xviii).

Pocos nigerianos se han beneficiado del descubrimiento de petróleo en el país en los años 50. Mientras que Nigeria es uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial —el valioso recurso constituye el 95% de las ganancias por exportaciones de Nigeria— la pobreza se ahonda en un país que es ya uno de los más pobres del mundo. La batalla por controlar los más de 30 mil millones de barriles de petróleo de reserva comprobada ha conducido a la represión masiva del gobierno y conflictos étnicos, particularmente en la región del Delta del Níger³. Como es común entre la gente en naciones del Sur ricas en petróleo, muchos nigerianos ven en el petróleo una maldición y no una bendición. Nigeria es el quinto suministrador de crudo de Estados Unidos, pero promedia un bajo lugar en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU (PNUD 2004: 141) que mide la calidad de vida de los ciudadanos de un

2. "Corruptions Perceptions Index 2004", Transparencia Internacional, 20 de octubre de 2004.

3. "World proved reserves of oil and natural gas", Departamento de Energía de Estados Unidos, 9 de noviembre de 2004.

país, con el lugar 151 en una lista de 177 naciones (PNUD 2004: 141). En el 2004, según el Banco Mundial, el 66% de los nigerianos vivía en la pobreza absoluta –subsistiendo con menos de 1\$ diario– comparado con un 43% en 1986⁴. Además de esto, más de 3,5 millones de nigerianos viven con VIH/SIDA, mientras la esperanza de vida para un recién nacido nigeriano era apenas cincuenta años en el 2004⁵.

La Shell fue la primera en descubrir petróleo en Nigeria en 1956 cuando el país era aún colonia británica. Ese mismo año, la Mobil recibió permiso para llevar a cabo exploraciones en el país. Pero a pesar del permiso de la Mobil, la Shell Petroleum Development Corporation (SPDC) mantuvo un monopolio virtual sobre la exploración de petróleo en Nigeria hasta la independencia del país en 1960. Después de la independencia, otras compañías extranjeras, inclusive la Gulf, que se convirtió en Chevron en 1984, también comenzaron a operar en Nigeria. Las principales operaciones de la Shell eran en la región del Delta del río Níger, mientras las operaciones de la Mobil se localizaban principalmente en el litoral. Gulf/Chevron operaba tanto en la costa como en el mar. A principio de la década de 1970-80, a la Shell, Mobil y Gulf/Chevron se les exigió participar en una sociedad conjunta con la Nigerian National Oil Corporation (NNOC) controlada por el Estado y que más tarde se convirtió en Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) en 1977.

Las ganancias del gobierno aumentaron significativamente con el *boom* del petróleo mundial que comenzó en 1973 a propósito de la guerra árabe-israelí. Desafortunadamente, la corrupción y las políticas de clientelismo del gobierno evitaron que la mayoría de los nigerianos se beneficiara de las riquezas del país. En los años 80, Nige-

4. "Nigeria: country brief", Grupo del Banco Mundial, septiembre de 2004.

5. "The world factbook: Nigeria", Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, 27 de enero de 2005.

neoliberales con las que condiciona sus préstamos, condujeran a un estado de descontento civil.

Conociendo completamente el sentir de la población, Babangida anunció a principios de 1986 que el pueblo nigeriano no aceptaría las condiciones del FMI; más bien, el país aplicaría sus propios "remedios caseros". De esta forma el presidente apeló a la preocupación nacionalista de los nigerianos para rechazar al FMI. Sin embargo, no dijo al pueblo nigeriano que sus "remedios caseros" eran virtualmente idénticos a los que imponía el FMI en el programa de ajustes estructurales. Más aún, el FMI supervisó el programa de ajuste estructural porque los acreedores de Nigeria y otras instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial todavía exigían la aprobación del FMI antes de conceder nuevos préstamos al país.

A principios de 1986, como parte de las reformas económicas de Babangida, Nigeria ofreció términos más atractivos para las compañías petroleras extranjeras que quisieran firmar un memorando de entendimiento (ME) con el gobierno. Un ME definía la estructura general de la empresa conjunta de la compañía extranjera con la NNPC, incluyendo las rentas petroleras, los derechos y las cifras de impuestos. Nigeria también garantiza márgenes mínimos de ganancia de 2\$ el barril para las compañías petroleras. En 1991, los ME fueron modificados para ofrecer términos más favorables a las compañías extranjeras, garantizándoles un mínimo de ganancia de 3\$ por barril⁶. La liberalización del mercado de intercambio exterior fue otra de las reformas que implementó Babangida. Esto inmediatamente provocó una depreciación del 66% de la moneda nigeriana (la naira), lo que más adelante empobreció a miles de nigerianos.

6. "Nigeria brief: harnessing gas", Shell Petroleum Development Company, agosto de 1996.

Hubo una gran oposición pública a las reformas neoliberales, particularmente por parte de los estudiantes universitarios y los trabajadores, quienes causaron disturbios en 1988 y 1989. Babangida respondió al descontento general suavizando el régimen de reformas, pero también usando la represión contra los grupos de oposición. Según un informe de Human Rights Watch, "En sus seis años de mandato, el gobierno militar del general Ibrahim Babangida... ha dependido de la fuerza para asegurar su permanencia en el poder. En este proceso, el gobierno de Babangida fue responsable de la muerte de cientos de estudiantes y de otros que se mostraron descontentos con sus políticas, la detención sin juicio de miles de críticos al gobierno, el silenciamiento de organizaciones de oposición y la erosión del gobierno de la ley"⁷.

Después de una serie de golpes militares y dictaduras de corta duración entre 1993 y 1998, Nigeria alcanzó el equilibrio necesario para regresar al gobierno civil. En agosto de 1998 tres nuevos partidos políticos –el Partido Democrático Popular (PDP), el Partido de Todos los Pueblos de Nigeria (PPN) y la Alianza por la Democracia (AD)– se habían formado para participar en las elecciones. El PDP ganó la mayoría de los asientos en el Senado y su candidato presidencial, el ex general del ejército Olusegun Obasanjo, quien había gobernado el país como dictador militar en los años 70, ganó la presidencia en medio de reclamaciones de fraude. Cerca de dieciséis años de gobierno militar finalizaron cuando Obasanjo fue investido como presidente en mayo de 1999.

Casi inmediatamente después de asumir el poder, Obasanjo tuvo que lidiar con nuevos brotes de violencia en forma de confrontaciones étnicas que surgieron en todo el país. El nuevo presidente respondió ordenando al ejército disparar a los militantes étnicos que avistaran. Las ejecuciones arbitrarias condujeron a los grupos

7. "Human Rights Watch world report 1992", Human Rights Watch, 1992.

de derechos humanos a acusar al gobierno civil de perpetrar los mismos abusos que se habían cometido rutinariamente bajo los gobiernos militares. Desafortunadamente, durante más de cuarenta años de independencia el único comportamiento seguro que los nigerianos podían esperar de su gobierno consistía en la corrupción, ineficiencia y represión.

En Nigeria, como en muchos otros países del Sur ricos en petróleo, las compañías extranjeras y el gobierno centralizado eran los principales receptores de los beneficios de las riquezas petroleras del país, mientras las comunidades locales sufren las consecuencias medioambientales de la producción de petróleo. Tal es el caso de la región del Delta del Níger donde existe una historia de confrontaciones entre Shell, apoyada por el ejército nigeriano, y el relativamente pequeño grupo étnico ogoni, con medio millón de individuos que dependen de la agricultura y que pretenden obtener mayor autonomía y compensaciones por los daños ambientales causados a sus tierras por la quema de gases, los derrames crónicos de petróleo, los pozos de desechos tóxicos mal delimitados y la construcción de oleoductos.

En enero de 1993, una organización local llamada Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSPO) organizó la primera reunión por "el Día de los Ogoni" para llamar la atención sobre la extensa devastación medioambiental hecha por la Shell, la cual es responsable de la mitad de la producción de petróleo en Nigeria. En abril más de diez mil ogoni hicieron una manifestación cuando la empresa contratista estadounidense Willbros comenzó a construir un oleoducto para la Shell en tierras de cultivo de los ogoni. Los militares nigerianos y la policía, responsables de proteger las operaciones petroleras de las compañías extranjeras en el país, abrieron fuego sobre los manifestantes matando a uno e hiriendo a diez⁸.

8. "Nigeria's drilling fields", *Multinational Monitor*, enero/febrero de 1995.

Varios meses después de la represión militar de los manifestantes, el líder del MOSPO Kenule Saro-Wiwa fue arrestado y encarcelado por treinta y un días. El gobierno además transfirió a los oficiales de policía de la región que eran ogoni, reemplazándolos por oficiales de diferentes grupos étnicos, que más adelante lanzaron ataques contra aldeas ogoni. Según Human Rights Watch, durante los últimos cinco meses de 1993 "aproximadamente 1.000 ogoni fueron asesinados en ataques que se piensa que fueron aprobados por autoridades del gobierno. Las aldeas fueron destruidas y miles de ogoni fueron desplazados"⁹. Mientras que los disturbios civiles forzaron a la Shell a suspender las excavaciones en las tierras de los ogoni, aunque los frecuentes derrames de petróleo de los oleoductos de la Shell que corren por territorio ogoni continuaron produciéndose. En toda Nigeria entre 1976 y 1996 más de 1,8 millones de barriles de petróleo procedentes de 4.835 derrames arruinaron el medio ambiente (Human Rights Watch 1999: 59).

Tanto la Shell como el gobierno nigeriano estaban preocupados por tener que cancelar las operaciones en territorio ogoni. En mayo de 1994 un memorando firmado por el mayor Paul Okuntimo, comandante de la fuerza regional de tareas de seguridad, declaró: "Las operaciones de la Shell son todavía imposibles a menos que se emprendan despiadadas operaciones militares para permitir que comiencen las actividades económicas"¹⁰. Ese mismo día, Saro-Wiwa despachó públicamente una copia del memorando emitido por el comisionado de la policía local titulado "Orden de Operación No. 4/94 – Restauración de la ley y el orden en las tierras ogoni". La Orden 4/94 contenía los planes de una operación militar masiva en territorio ogoni concebida para proteger las operaciones de las compañías extranjeras. Como apuntó Saro-Wiwa: "El despliegue de semejante fuerza en la pequeña área de los ogoni

9. "Human Rights Watch World Report 1994: Nigeria", Human Rights Watch, 1994.

10. "Nigeria's drilling fields".

[404 millas cuadradas] está concebido para intimidar y aterrorizar a los ogoni y permitir a la Shell recomenzar sus operaciones en el área sin tener que llevar a cabo los estudios de salud, ambientales y de impacto social que los ogoni vienen exigiendo desde 1992”¹¹.

Dos semanas después, fuerzas de seguridad del Estado arrestaron a Saro-Wiwa. El líder ogoni y otros nueve activistas permanecieron en prisión durante ocho meses antes de que cada uno fuera acusado de cuatro alegaciones por homicidio. Las acusaciones indicaban que ellos eran responsables de la muerte de cuatro ogoni que estaban a favor del gobierno, asesinados a manos de la multitud el año anterior. Fueron juzgados ante un tribunal especial que incluía miembros activos del ejército nigeriano y el caso estuvo lleno de irregularidades. En octubre de 1995 el tribunal condenó a Saro-Wiwa y a ocho de los nueve activistas y dejó libre a Ledum Mitee, en aquel momento vicepresidente de MOSPO. El diez de noviembre los nueve ogoni condenados fueron ejecutados por ahorcamiento en Port Harcourt.

Las ejecuciones desataron un escándalo internacional en contra de la dictadura del general Sani Abacha. Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países retiraron a sus embajadores de Nigeria como protesta. Además la Commonwealth suspendió a Nigeria de su carácter de miembro, los británicos anunciaron una total suspensión de la venta de armas al régimen del general Abacha y el Banco Mundial decidió no entregar los 100 millones de dólares para el nuevo oleoducto de la Shell a través de la región del Delta del Níger. Estados Unidos también retuvo la ayuda militar a Nigeria.

Seis meses antes de ser ejecutado, Saro-Wiwa escribió en prisión una carta que fue publicada por el diario sudafricano *Mail & Guardian*. En la carta el líder ogoni deja claro que la lucha continuaría incluso aunque él fuera asesinado:

11. *Ibíd.*

Que yo viva o muera es accidental. Es suficiente con saber que existe gente que compromete tiempo, dinero y energía para combatir este mal como otros tantos esparcidos por el mundo. Si estas personas no tienen éxito hoy, lo tendrán mañana. Tenemos que seguir luchando para hacer del mundo un lugar mejor para toda la humanidad, contribuyendo cada uno un poquito, a su propia manera¹².

La lucha ciertamente continuó en los años siguientes, pero también la represión militar. En 1996, más de mil ogoni huyeron de los militares y se convirtieron en refugiados en Benín. Por desgracia, más de dos mil ogoni fueron asesinados por el ejército nigeriano durante la década de 1990-2000¹³. De todas formas, 20.000 personas tomaron las calles de Bori en 1998 para conmemorar la muerte de Saro-Wiwa y en mayo del siguiente año cerca de dos mil ogoni marcharon sobre las oficinas centrales de la Shell en Port Harcourt para protestar contra la devastación medioambiental dejada en sus tierras por las pasadas operaciones de la compañía.

Durante años, la Shell ha negado públicamente las reclamaciones de los ogoni de que la compañía paga al brutal ejército nigeriano para que proteja sus instalaciones y ha negado cualquier confabulación con las fuerzas de seguridad del país. Según Human Rights Watch, sin embargo, la Shell en algún momento "admitió bajo coacción haber hecho pagos directos a las fuerzas de seguridad nigerianas, al menos en una ocasión en 1993" (Human Rights Watch 1993: 3). En 1996, la Shell admitió haber comprado armas para la fuerza de policía nigeriana conocida como *Shell police*, responsables de cuidar las instalaciones de la compañía. El portavoz de la compañía Eric Nickson declaró: "la Shell ha comprado armas cortas de fuego a nombre de la fuerza de policía nigeriana que

12. "Diary: A letter from Ken Saro-Wiwa in prison", *Drillbits & Tailings*, 9 de noviembre de 1999.

13. "Vital statistics: a sampling of Shell's activities in Nigeria over the last four years", *Drillbits & Tailings*, 9 de noviembre de 1999.

defiende las instalaciones de la Shell. Pero una vez importadas, las armas serán propiedad de la policía nigeriana y ellos serán los que las almacenen, las guarden y las usen"¹⁴. Y "las usen": eso hicieron, según los ogoni que reclaman que la *Shell police* frecuentemente usa estas armas contra los aldeanos.

En 1996, una demanda llevada a juicio en la Corte Federal estadounidense, acusaba a Shell de ser cómplice de los abusos de los derechos humanos contra el pueblo ogoni, incluyendo la muerte de Saro-Wiwa. Los abogados de la Shell trataron de que el caso fuera declarado sin lugar alegando que Estados Unidos no tiene jurisdicción ya que la compañía es británica. Finalmente en febrero de 2002, el juez de la Corte Federal estadounidense Kimba Wood determinó que el caso era legal y podía proceder ya que parte del grupo Shell Oil es estadounidense. El juez Wood estableció que los cargos de los demandantes al acusar a la Shell de conspirar con el gobierno nigeriano para cometer crímenes en contra de la humanidad, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y otras violaciones de la ley internacional, cumplían los requerimientos para ser formuladas acogiéndose al Acta sobre Reclamos de Injusticias en el Extranjero de 1789¹⁵.

Desde 1979, las víctimas en el extranjero de violaciones de los derechos humanos cometidas por corporaciones estadounidenses que operan fuera del país y por regímenes brutales apoyados por Estados Unidos, han estado llevando demandas civiles a las cortes federales amparadas en el Acta sobre Reclamos de Injusticias en el Extranjero. Comenzando en julio de 2002, sin embargo, la administración Bush ha buscado la manera de reducir la posibilidad de que nacionales extranjeros busquen justicia en las cortes estadounidenses porque algunas de las demandas son contra gobiernos aliados

14. Cameron Duodu, "Shell admits importing guns for Nigerian police", *Observer*, 28 de enero de 1996.

15. *Wiwa v. Royal Dutch Shell*, Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, 28 de febrero de 2002.

de Washington en la guerra contra el terrorismo. El 29 de julio de 2002 el consejero legal del Departamento de Estado, William H. Taft IV, envió una carta al juez del caso contra ExxonMobil por abusos contra los derechos humanos en la provincia indonesia de Aceh. La carta pedía que el juez desestimara el caso pues podía comprometer los intereses de Estados Unidos evitando que el gobierno de Indonesia brindara su ayuda en la guerra contra el terrorismo¹⁶. El caso había sido presentado el 11 de junio de 2001 a nombre de once acehnenses que reclamaban que sus derechos humanos habían sido violados por las tropas indonesias responsables de proteger las instalaciones de ExxonMobil en Aceh. La demanda declaraba que ExxonMobil –por entonces Mobil Oil– había dado apoyo logístico y material a las unidades del ejército indonesio que cometieron asesinatos, torturas, abusos sexuales y secuestros.

La Casa Blanca intentó de nuevo sabotear el Acta sobre Reclamos de Injusticias en el Extranjero en mayo de 2003 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó un sumario de treinta y nueve páginas en el Noveno Circuito del Jurado de Apelaciones que se ocupaba de un caso presentado por ciudadanos birmanos en contra de la corporación Unocal radicada en California. El sumario pedía al Juzgado que se limitara a los ciudadanos extranjeros la posibilidad de buscar justicia en los Juzgados de Estados Unidos por violaciones de los derechos humanos cometidas en el extranjero, porque tales demandas estaban afectando la política exterior de Estados Unidos. Los demandantes birmanos alegaban que durante la construcción de un gaseoducto de 1,2 miles de millones de dólares Unocal y su socio en el proyecto, el brutal régimen militar birmano, fueron responsables de violaciones de los derechos humanos cometidas contra los trabajadores que

16. "US/Indonesia: Bush backtracks on corporate responsibility", Human Rights Watch, 7 de agosto de 2002. Ver también, William H. Taft IV, "Letter to Honorable Louis F. Oberdorfer", Human Rights Watch, 29 de julio de 2002.

incluían trabajo forzado, violación y asesinato¹⁷. Hasta ahora los intentos de la administración Bush de redefinir el Acta sobre Reclamos de Injusticias en el Extranjero no han tenido éxito y casos como la demanda a la Shell continúan abiertos. Con razón dice Judith Chomsky, del Centro para los Derechos Constitucionales radicado en Nueva York: "Las transnacionales no pueden eludir su responsabilidad legal con las leyes internacionales contratando ejércitos extranjeros para hacer lo que ellas saben que no deberían hacer"¹⁸.

La Shell no ha podido reparar el extenso daño medioambiental causado por sus operaciones en la región del Delta del Níger. La quema de gases, un proceso que se usa para quemar gases indeseados, ha demostrado ser particularmente peligrosa ya que frecuentemente se produce en el seno de las comunidades, arrojando acres nubes de humo negro en todas las aldeas a la redonda. En noviembre de 2005, los aldeanos alcanzaron una pequeña victoria cuando el Supremo Juzgado Federal ordenó a las compañías de petróleo dejar de utilizar el obsoleto proceso de quema de gases¹⁹. La orden, sin embargo, no enfrenta el problema de los derrames de petróleo. Según el líder comunitario Clifford Enyinda, "nuestra única fuente de agua potable, pesca y riego de tierras de cultivo de más de 300 hectáreas de tierra con vida acuática, cultivos y medios de vida, con un valor de muchos miles de millones de naira (equivalente a millones de dólares americanos) están destruidos completamente por los derrames y los tres fuegos diferentes, que se derivaron de los derrames, empeoraron la situación"²⁰.

17. Jim Lobe, "Villagers vs oil giant: Ashcroft to the rescue", Inter Press Service, 19 de mayo de 2003.

18. "Warning to the boardroom: don't buddy up to corrupt, brutal regimes", Globalvision News Network, septiembre de 2001.

19. Haider Rizvi, "Shell ordered to stop wasteful, poisonous 'gas flaring' in Nigeria", *One World*, 15 de noviembre de 2005.

20. "Behind the Shine: the other Shell report 2003", Amigos de la Tierra, 2004.

En junio de 1999, Michael Fleshman, coordinador de derechos humanos para la organización África Fund radicada en Nueva York, visitó el sitio del derrame de petróleo debido a la rotura de un oleoducto de Shell el año anterior. Citamos a Fleshman:

Sin hacer siquiera la debida investigación, la Shell declaró que la causa del derrame era un sabotaje y se negó a pagar una compensación. El impacto del derrame en la comunidad ha sido devastador, el petróleo ha envenenado su agua potable y sitios de pesca, y está poco a poco matando las palmas rafia, que son el sostén económico de la comunidad... El panorama que vimos cuando finalmente llegamos al lugar del derrame era horrendo. Una gruesa película marrón de petróleo crudo manchaba toda el área, se aglutinaba en grumos a lo largo de la costa y cubría la superficie de las tranquilas aguas. El aire húmedo estaba denso por las emanaciones del petróleo... me provocó náuseas rápidamente... Una capa aceitosa cubría el río en todas direcciones y se extendía a los canales de la región²¹.

Los residentes de la región refutaron las afirmaciones de la Shell de que la compañía había realizado fuertes inversiones en proyectos para el desarrollo comunitario. Según un informe de 2004 publicado por la organización ambientalista Amigos de la Tierra, "las comunidades productoras de petróleo en Nigeria están interesadas en saber cómo la Shell puede gastar 69 millones de dólares al año, del dinero de los accionistas, en proyectos de desarrollo social en el Delta del Níger, sin beneficios visibles para la gente que posee la tierra en la que se encuentran el petróleo y el gas"²².

La Shell ha utilizado el anuncio y construcción de proyectos comunitarios con fines propagandísticos, pero no ha podido dar los

21. Michael Fleshman, "Nigeria transition watch number 9: report from Nigeria 2", Fondo para África, 17 de junio de 1999.

22. "Behind the Shine: the other Shell report 2003".

fondos necesarios para mantenerlos. Como por ejemplo, según una investigación llevada a cabo por California Global Corporate Accountability Project, “la Shell inauguró un hospital en Gokana (Estado de Rivers) pero no ha aportado los fondos para su funcionamiento; éste se ha deteriorado hasta tal punto que los pacientes tienen que regresar a su hogar para recuperarse de enfermedades adquiridas en el hospital”²³. Mientras que las compañías petroleras sí brindan algunos buenos empleos y beneficios sociales a las comunidades, dice Emeka Duruigbo, quien realiza investigaciones en responsabilidad corporativa para Natural Heritage Institute radicado en San Francisco, la corrupción corporativa a menudo disminuye la efectividad de los proyectos de desarrollo. Según Duruigbo, “no es sólo el gobierno el que es corrupto en Nigeria; los funcionarios de las compañías también son corruptos con respecto a la distribución de beneficios a las comunidades. Por ejemplo, si la compañía da 10 millones de dólares para un proyecto comunitario, puede que 1 millón sea realmente entregado. Los funcionarios de la compañía se roban el dinero, así como los jefes comunitarios y los contratistas. Existe mucha corrupción a niveles corporativos”²⁴. En marzo de 2005, Chris Finlayson, jefe ejecutivo de la Shell para la exploración y producción en África, reconoció que la compañía experimenta una significativa corrupción entre sus empleados en lo que respecta a financiar proyectos comunitarios locales²⁵.

A finales de 2004, las operaciones de excavación en las tierras ogoni quedaron suspendidas. La compañía, sin embargo, mantiene sus oleoductos en el territorio con el apoyo del ejército nigeriano. Por su parte el pueblo ogoni continúa reclamando que el gigante

23. Emeka Duruigbo, “Oil development in Nigeria: a critical investigation of Chevron Corporation’s performance in the Niger river delta”, California Global Corporate Accountability Project, 2001.

24. Emeka Duruigbo, entrevista telefónica con el autor, 14 de abril de 2005.

25. Michael Peel, “Energy special: oil in troubled waters”, *Financial Times*, 25 de marzo de 2005.

petrolero limpie el daño ambiental causado por sus perforaciones y derrames de petróleo. Mientras tanto, a miles de millas en un Juzgado Federal de Nueva York, la Shell se defiende de acusaciones por violación de los derechos humanos del pueblo ogoni.

Con 12 millones de personas, ijaw es el mayor grupo étnico en la región del Delta del Níger. Durante la década del 90, hubo violencia entre grupos ijaw que buscaban la independencia y los militares nigerianos. Las operaciones petroleras de Chevron, que se convirtió en ChevronTexaco después de su fusión con Texaco en el 2001, no se han olvidado en el corazón de la lucha de los ijaw.

En mayo de 1998, más de cien ijaw desarmados en una manifestación del Concejo Juvenil ocuparon una plataforma marítima de Chevron, reclamando que la compañía contratara más trabajadores locales y limpiara la contaminación que provocaba el petróleo. Después de tres días de negociaciones, los manifestantes anunciaron que abandonarían la plataforma al día siguiente. Chevron, sin embargo, decidió asentar un claro precedente para evitar cualquier plan futuro de ocupación de plataformas. La compañía llamó a las fuerzas militares nigerianas que se encontraban en su nómina y los pilotos de la compañía transportaron las tropas y al jefe de seguridad de Chevron a la plataforma en los helicópteros arrendados por la compañía. En la confrontación resultante por retomar la plataforma los militares mataron a dos manifestantes e hirieron a muchos otros²⁶.

Ocho meses después, los pilotos de Chevron, en botes y helicópteros arrendados por la compañía, transportaron de nuevo tropas nigerianas para atacar dos aldeas ijaw cuando sus habitantes reclamaron una indemnización por los daños ambientales. Cuatro aldeanos fueron asesinados en el ataque y sesenta desaparecieron y

26. "Bowoto v. ChevronTexaco", EarthRights International, 29 de noviembre de 2004.

fueron dados por muertos. Además, las tropas nigerianas quemaron la mayoría de los hogares en las dos aldeas²⁷. Chevron ha admitido que controla las acciones de las fuerzas nigerianas empleadas para proteger las instalaciones de la compañía en tiempos de crisis. Según la propia compañía, la seguridad de Chevron “insiste en ejercer un control razonable sobre estas fuerzas para garantizar que sólo sea empleada el mínimo de fuerza necesaria para controlar la situación” (Human Rights Watch 1999: 119). En mayo de 1999, los sobrevivientes del ataque presentaron una demanda contra Chevron en la Corte Federal de Estados Unidos bajo el Acta sobre Reclamos de Injusticias en el Extranjero, acusando a la compañía de violar sus derechos humanos.

Los jóvenes activistas ijaw, entretanto, publicaron una declaración en diciembre de 1998 reclamando que el gobierno federal retirara inmediatamente todas las fuerzas militares del territorio ijaw y suspendiera todas las operaciones petroleras en la región del Delta del Níger. La declaración también planteaba que cualquier misión extranjera que utilice personal militar nigeriano para proteger sus operaciones será vista como enemiga por el pueblo ijaw. El gobierno respondió declarando un Estado de emergencia y en las semanas subsiguientes los militares asesinaron a cerca de treinta y cinco ijaw²⁸.

Según Human Rights Watch, el retorno del gobierno civil en 1999 condujo a un mayor deterioro de la situación en la región del Delta. Políticos inescrupulosos comenzaron a contratar pandillas de jóvenes para intimidar a sus oponentes políticos durante las campañas electorales de 1999 y 2003. La extrema pobreza de la región y el alto desempleo juvenil hacen que el reclutamiento sea fácil para las pandillas de jóvenes ijaw, particularmente para las

27. Emeka Duruigbo, “Oil development in Nigeria”.

28. “Country reports on human rights practices for 1999: Nigeria”, Departamento de Estado de Estados Unidos, febrero de 2000.

dos pandillas más grandes de la región: Níger Delta People's Volunteer Force (NDPVF) y Níger Delta Vigilante (NDV). Líderes locales del gobierno suministran apoyo logístico a los jefes de las pandillas para permitirles influir en las elecciones. Refiriéndose al líder de NDV Ateke Tom, Human Rights Watch informa que "A Tom le dieron carta blanca para realizar lucrativos contrabandos de petróleo a cambio de los servicios violentos de su grupo en las elecciones de 2003"²⁹.

En el 2003, la escalada de violencia en la región del Delta del Níger y su capital Port Harcourt, llevaron a la Shell y a ChevronTexaco a clausurar un tercio de la producción de petróleo de Nigeria. Cientos de personas resultaron muertas y decenas de miles desplazadas mientras NDPVF y NDV competían por el control de las aldeas de la región en un intento de controlar el contrabando de petróleo de la región, conocido como "oil bunkering". Los conglomerados de 'oil bunkering' frecuentemente incluyen a políticos locales, gente de negocios y personal militar, quienes pagan a grupos de jóvenes armados como NDPVF y NDV para proteger sus negocios ilegales. Usando una retórica populista para justificar sus acciones, el líder de NDPVF Alhaji Dokubo Asari declara: "Yo no me dedico al bunkering', yo tomo lo que me pertenece. Esto no es robar; el petróleo pertenece a nuestro pueblo"³⁰.

Las fuerzas de seguridad del Estado raramente intentaban proteger a la población civil de las peleas entre el NDPVF y el NDV. En las raras ocasiones en las que han intervenido, las fuerzas de seguridad han golpeado a los partidarios del NDPVF, desde que Asari cayó en desgracia con el gobernador del Estado de Rivers, Peter Odili. El 3 de septiembre de 2004, tropas nigerianas lanzaron una ofensiva contra el NDPVF que provocó la destrucción de varias

29. "Rivers and blood: guns, oil and power in Nigeria's Rivers State", Human Rights Watch, febrero de 2005.

30. *Ibid.*

aldeas de pescadores en el Estado de Rivers. Asari respondió amenazando con lanzar “la guerra total” si el gobierno federal no le cedía mayor control de los vastos recursos petroleros de la región al grupo étnico ijaw. Mientras que el gobierno considera a Asari un criminal común, muchos lugareños lo veían como a un héroe que trataba de redistribuir las riquezas petroleras de la región. Según un residente de Port Harcourt, “puedes decir que es como Robin Hood. Nuestro propio gobierno es corrupto y nos odia”³¹.

En octubre de 2004, el presidente Obasanjo se reunió con Asari y el líder del NDV Ateke Tom y llegaron a un acuerdo de cese al fuego que requería la disolución de los grupos armados como contrapartida a las negociaciones. La paz, sin embargo, permaneció frágil porque el acuerdo no pudo solucionar las verdaderas causas de la violencia: extrema pobreza, desempleo, políticos y personal militar corrupto y el contrabando de petróleo.

Las compañías petroleras extranjeras contribuyeron al aumento de las pandillas juveniles y a la violencia en la región del Delta. Las compañías pagaban rutinariamente indemnizaciones a las comunidades localizadas en áreas donde querían perforar. También prometían petróleo y trabajos seguros a los miembros de dichas comunidades. Según Human Rights Watch, “las compañías negociaban tales acuerdos y contratos con individuos que ellos identificaban como los más representativos de la comunidad, particularmente los líderes más influyentes o jefes tradicionales locales”³². Estos representantes de la comunidad, a menudo corruptos, frecuentemente usan el dinero para financiar pandillas armadas con el fin de consolidar su control sobre la región. Aquellas pandillas juveniles que no reciben dinero de los líderes de la comunidad compiten por el control de comunidades situadas sobre tierras ricas en petróleo. Como resultado, dice Human Rights Watch, “las com-

31. “Warlord targets Nigerian oil”, Associated Press, 1 de julio de 2004.

32. “Rivers and blood”.

pañías petroleras se han visto forzadas a efectuar pagos en efectivo a los jóvenes para tener acceso a instalaciones o mantener la seguridad de sus operaciones comerciales”³³.

Las mujeres nigerianas también se han organizado contra las compañías petroleras internacionales. En julio de 2002, alrededor de seiscientas mujeres ocuparon por diez días un terminal de exportaciones en Escravos, perteneciente a ChevronTexaco, como exigencia para que la compañía abandonara la región del Delta. Después que la compañía se negara a discutir la demanda de abandonar sus operaciones, las mujeres itsekiri negociaron un acuerdo con la compañía exigiendo entre otras cosas, que la compañía estableciera un cuerpo permanente para resolver problemas relacionados con el petróleo en las comunidades rurales y que contratara personal local. La compañía no cumplió sus promesas y nuevas demostraciones de las mujeres fueron enfrentadas con una represión militar. Según una mujer nigeriana involucrada en las protestas, “queremos que Chevron emplee a nuestros hijos; si Chevron hace eso, nosotras las madres sobreviviremos, tendremos comida. Nuestras granjas se han extinguido debido a que Chevron ha contaminado nuestra agua. Nosotros solíamos cultivar yuca, quimbombó, pimienta y otras cosas. Ahora todos los lugares donde cosechábamos se han hundido, no podemos cosechar” (Turner and Brownhill 2003: 8).

En su informe sobre el comportamiento de Chevron en Nigeria, el California Global Corporate Accountability Project examina de qué forma la industria del petróleo como un todo ha afectado el desarrollo de esta nación de África Occidental:

Se puede decir que el desarrollo de la industria del petróleo ha hecho más profunda la pobreza de muchos nigerianos, ha financia-

33. *Ibid.*

do una serie de gobiernos corruptos y autoritarios; ha destruido las tierras de cultivo, el agua potable y la pesca de los que depende su economía de subsistencia; ha privado a los habitantes locales de la posesión y el control de sus tierras; ha financiado y apoyado mayúsculas violaciones de los derechos humanos. Estos no son simplemente lamentables retoños o desviaciones periódicas del proceso de desarrollo, sino el proceso de desarrollo en sí³⁴.

Angola y la mercancía corruptora

Con todo lo mala que es la pobreza de Nigeria, la situación es aún peor en Angola, el séptimo proveedor de petróleo a Estados Unidos. A pesar de sus vastas reservas de petróleo y diamantes, Angola permanece en un absoluto desastre económico y social. El 82% de los angoleños vive en la pobreza y más de la mitad de la población está desempleada³⁵. La mayor parte de los treinta años de independencia de Angola han estado dominados por la guerra y una masiva corrupción gubernamental. Angola es el segundo productor de petróleo de África; este valioso producto es el origen del 90% de las ganancias del gobierno³⁶. La compañía petrolera en manos del Estado, Sonangol, ha firmado acuerdos de producción con numerosas compañías extranjeras inclusive ChevronTexaco y ExxonMobil y los gigantes británicos BP y Shell, para explotar los 5,4 miles de millones de barriles de reserva comprobada, la mayor parte de los cuales están en su litoral³⁷.

En 1974, la insurgencia armada finalmente liberó a Angola de casi cinco siglos de dominio colonial, sólo para ver al país hundir-

34. Duruigbo, "Oil development in Nigeria".

35. "A crude awakening: the role of the oil and banking industries in Angola's civil war and the plunder of state assets", Global Witness, diciembre de 1999.

36. "Country analysis briefs: Angola", Departamento de Energía de Estados Unidos, enero de 2005.

37. *Ibíd.*

se en una guerra civil que duraría más de veintisiete años y supondría más de 300.000 muertes.

La guerra por la independencia y el subsiguiente conflicto civil devastaron la economía e infraestructura angoleñas y desplazaron a casi un tercio de los trece millones de habitantes del país. La terrible situación del país se refleja en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU de 2004, en el que Angola fue el número 166 de 177 naciones y señala que la esperanza de vida de los angoleños es de apenas cuarenta años (PNUD 2004: 142).

Aunque los portugueses abandonaron Angola en 1974, el país no se convirtió oficialmente en una nación independiente hasta noviembre de 1975. Después de la partida de los portugueses surgió una guerra civil en la que se enfrentaron el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) contra el Frente Nacional para la Liberación de Angola (FNLA) y la Unión Nacional por la Independencia Total de Angola (UNITA). El MPLA era apoyado por la Unión Soviética y Cuba y era el predominante en Luanda, la capital del país. Temerosos de que el pro-soviético y socialista MPLA saliera victorioso en Angola, las tropas sudafricanas invadieron el país. Con los soviéticos que aportaban el armamento y Cuba los soldados –30.000 efectivos cubanos se desplegarían eventualmente en Angola– el MPLA rechazó la ofensiva sudafricana y se consolidó en el control del gobierno. En 1979, el FNLA había sido derrotado, pero la UNITA continuaba luchando en el sudeste de Angola apoyada por Sudáfrica y Estados Unidos. Durante la siguiente década las ganancias petroleras del país fueron utilizadas para pagar la maquinaria bélica del gobierno contra las fuerzas de la UNITA. No es sorprendente que la economía del país colapsara como resultado del conflicto y la falta de inversiones en los sectores económico y social.

En 1988, un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos condujo a la retirada de las tropas cubanas y sudafricanas de Angola.

El acuerdo no pudo lograr una paz duradera y de nuevo surgió la lucha entre el MPLA gobernante y la UNITA. En 1991, el presidente José Eduardo Dos Santos y el líder de la UNITA, Jonas Savimbi, firmaron un cese al fuego que decretaba elecciones multipartidistas al año siguiente. Dos Santos ganó las elecciones de septiembre de 1992, certificadas por observadores de la ONU como libres y justas en general. No queriendo aceptar los resultados, Savimbi y la UNITA retomaron la lucha armada. La guerra continuó durante otros diez años hasta que tropas del gobierno mataron a Savimbi en febrero de 2002. Dos meses más tarde la UNITA firmó un cese al fuego y sus tropas comenzaron a desmovilizarse poco después. A cambio, Dos Santos accedió a realizar nuevas elecciones en el 2006. Los 700.000 angoleños que fueron desplazados como resultado del conflicto comenzaron el proceso de regresar a sus hogares.

Mientras finalmente terminaba la guerra civil, continuaba un conflicto separatista en el norteño enclave costero de Cabinda. La desmovilización de las tropas de la UNITA en el sur de Angola en el 2002 permitió al gobierno enviar 30.000 efectivos a Cabinda en un intento por derrotar finalmente a los 2.000 separatistas que llevaban luchando más de veinticinco años. El pequeño enclave de Cabinda y su 300.000 habitantes están separados de Angola por una estrecha franja de territorio perteneciente al Congo. Debido a que Cabinda cuenta con más de la mitad de la producción de petróleo del país, el gobierno angoleño no quiere conceder la separación al renegado enclave. Rebeldes del Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC) han reclamado al gobierno que aumente la suma de las ganancias del petróleo que destina a Cabinda, la cual ya recibe el 20% de los fondos que se reparten entre las dieciocho provincias del país³⁸.

38. "Time for transparency: coming clean on oil, mining and gas revenues", Global Witness, marzo de 2004.

Antes de la ofensiva del ejército en el 2002, el FLEC hizo estragos en las operaciones petroleras. Consideraban a los empleados de ChevronTexaco y otras compañías extranjeras como blancos militares, forzándolos a refugiarse en recintos amurallados. Debido a los constantes ataques contra los trabajadores que viajaban por carretera, ChevronTexaco comenzó a transportar a sus empleados desde y hasta sus instalaciones en helicópteros³⁹. Para mediados de 2003, sin embargo, el ejército angoleño había debilitado drásticamente el FLEC y ganado el control sobre Cabinda. Según Human Rights Watch, el ejército mantenía el control del enclave mediante “violaciones en contra de la población civil, inclusive asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y la prohibición del acceso a las áreas de cultivo, ríos y terrenos de caza además de la restricción de libertad de movimientos impuesta a los civiles”⁴⁰.

El control militar de Cabinda se convirtió en condiciones de trabajo más seguras para los empleados de ChevronTexaco y otras compañías. Los habitantes de Cabinda en cambio viven con miedo a las tropas angoleñas y subsisten en la extrema pobreza. A escasos 100 metros del complejo habitacional de ChevronTexaco, que es denominado “Pequeña América” y está protegido por campos minados, los aldeanos se ven obligados a hurgar en busca de leña para cocinar debido a la falta de queroseno. El padre Jorge Congo, un cura católico que ha criticado la represión militar, comenta: “puedes caminar por los alrededores y no verás ninguna señal que te diga que Chevron está haciendo algo por mejorar la vida en Cabinda”. Las declaraciones del padre Congo fueron respaldadas por el residente de Cabinda Raúl Danda: “Tú no tienes gas para cocinar, pero si miras al mar, podrás ver gas que está siendo quemado”⁴¹.

39. “Is the Angolan war really over?”, *Alexander's Gas and Oil Connections*, 27 de noviembre de 2002.

40. “World Report 2005: Angola”, Human Rights Watch, enero de 2005.

41. “Angolan enclave of Cabinda blames oil for humanitarian misery”, *Alexander's Gas and Oil Connections*, 22 de abril de 2004.

Una de las principales razones por las que tan poco fruto de las riquezas del petróleo ha llegado a los empobrecidos angolanos es el sistema de corrupción profundamente arraigado que beneficia a los líderes políticos angoleños y a las compañías petroleras extranjeras. A finales de la década del 90, la disminución de la intensidad de la guerra civil condujo a las compañías BP, ExxonMobil y al gigante energético francés Total a expandir sus operaciones en Angola. Como resultado, las ganancias del Estado aumentaron significativamente entre 1997 y 2002, sumando 17,8 mil millones de dólares. Un estudio diagnóstico de Angola por el FMI, sin embargo, reveló que 4,22 mil millones de dólares de esta ganancia fiscal había desaparecido. Considerando que el gasto total del gobierno sumó 4,27 mil millones en esos años, los fondos desaparecidos doblan el monto de lo gastado en los tan necesarios programas sociales⁴².

El descubrimiento de que los fondos del petróleo angolano habían desaparecido fue el resultado del escándalo “Angolagate” que surgió en Francia en el 2000. El escándalo tenía que ver con una intriga en la que funcionarios franceses por medio de intermediarios suministraron armas ilegalmente al gobierno angolano en 1993 y 1994. Las ventas fueron hechas de forma encubierta, pues el presidente François Mitterrand sabía que algunos miembros de su gobierno que simpatizaban con la UNITA bloquearían tal tratado. Francia entregó armas y equipamiento al gobierno angolano a precios artificialmente inflados. El gobierno del presidente Dos Santos hipotecó las futuras ganancias petroleras del país para obtener préstamos que le permitieran pagar el armamento. Una porción significativa del dinero terminó en una cuenta secreta de un banco caribeño perteneciente al hombre de negocios Pierre Falcone, quien, junto al hijo del presidente francés, Jean-Christophe Mitterrand, y otros, fue arrestado por proselitismo y tráfico ilegal de armas.

42. “Angola: account for missing oil revenues”, Human Rights Watch, 13 de enero de 2004.

Falcone ayudó a orquestar los negocios de las armas francesas por más de 500 millones de dólares con funcionarios angolanos de alto rango. Según el testimonio en el Juzgado de uno de los participantes en la conspiración de las armas, Falcone y el hombre de negocios ruso Arkadi Gaydamac ganaron 300 millones de dólares en un solo trato en abril de 1994. Los dos traficantes de armas usaron parte del dinero para pagar sobornos a funcionarios angolanos que habían ayudado a facilitar el negocio⁴³.

Falcone también tenía relaciones con el presidente George W. Bush. En 1994 Falcone y su esposa fundaron una compañía de cosméticos en Estados Unidos llamada Essanté. La compañía hizo una contribución de 100.000 a la primera campaña electoral de Bush en el 2000⁴⁴. Los funcionarios de la campaña de Bush eventualmente devolvieron el dinero, declarando que no querían dar la impresión de que un traficante de armas extranjero estaba comprando influencia ante el futuro presidente de Estados Unidos. El dinero, sin embargo, no fue devuelto hasta después de la elección de Bush, y no fue sino hasta después del arresto de Falcone en Francia cuando el asunto se hizo público. Cuando la policía francesa irrumpió en el apartamento de la secretaria de Falcone, descubrió una carta invitando al entonces candidato presidencial George W. Bush a conocer al presidente angolano Dos Santos en el rancho de Falcone en Arizona. Al parecer Falcone pensaba que su contribución a la campaña había logrado comprar influencia con el futuro presidente.

Un informe especial de 2002 de la ONG británica Global Witness comparó la contribución de Falcone con la realizada por la Corporación Enron, una de las mayores compañías energéticas a nivel mundial. Según Global Witness, la influencia de Enron en la administración Bush "claramente trajo una reformulación sustan-

43. Fabrice Lhomme, "Un t moignage  claire les dessous des ventes d'armes   l'Angola", *Le Monde*, 22 de abril de 2003.

44. "All the presidents' men: the devastating story of oil and banking in Angola's privatised war", Global Witness, marzo de 2002.

cial de la política energética nacional y una disminución de las regulaciones de supervisión”⁴⁵. Al mismo tiempo que Enron (actualmente quebrada) usaba su influencia para disminuir las regulaciones de supervisión de la industria energética, se estaba aprovechando de los agujeros en las regulaciones existentes para estafar a sus accionistas decenas de miles de millones de dólares. Como dice el informe de Global Witness:

Resulta interesante que la donación del CEO de Enron, Kenneth Lay, a la campaña de Bush es extrañamente similar a la de 100.000US\$ de Falcone. Ya hemos visto lo que Enron consiguió mediante su “donación”. ¿Qué esperaba obtener Falcone? o, incluso yendo más al grano, ¿qué habrá obtenido?, ¿el bochorno de su arresto no habrá facilitado la tardía devolución de su dinero?⁴⁶.

Falcone también estuvo vinculado con compañías petroleras estadounidenses en Angola. Además de los pagos por su papel al facilitar los tratos encubiertos de armas, el gobierno angolano entregó a una firma de Falcone radicada en Panamá llamada Falcon Oil Holdings, acciones minoritarias del consorcio que opera el bloque 33 en el litoral angolano. El consorcio incluye a Sonangol y ExxonMobil. Falcone también se reunió con funcionarios de la Phillips Petroleum con sede en Oklahoma en tres diferentes ocasiones en el 2000, al mismo tiempo que el gigante estadounidense negociaba con el gobierno angolano por el bloque 34 del litoral. El trato se firmó el siguiente año, aunque no está claro el papel jugado por Falcone en esta transacción⁴⁷.

Después que la investigación del Angolagate derramó luz sobre las prácticas corruptas del gobierno angolano, el FMI recla-

45. *Ibíd.*

46. *Ibíd.*

47. *Ibíd.*

mó que el gobierno angolano abriera sus libros de cuentas a auditores independientes antes de comenzar a considerar la aprobación de un préstamo al afligido país. Fue esta auditoría la que descubrió que el gobierno angolano no ha contabilizado más de 4 mil millones de dólares en ganancias del petróleo entre 1997 y 2002. Esa especie de acuerdo internacional encubierto y venta de influencia política que reveló el Angolagate, ha jugado un importante papel en crear un ambiente de confidencialidad y corrupción con respecto al manejo de las ganancias del petróleo por parte del gobierno angolano.

Claramente, el gobierno angolano es el principal responsable por la forma en que maneja las ganancias fiscales de la nación. El comportamiento de las transnacionales, sin embargo, ha contribuido a la falta de transparencia en Angola. Mientras el gobierno angolano a regañadientes abrió sus libros para la revisión, la mayoría de las transnacionales no han sido tan serviciales. Consecuentemente, la suposición de que se habían extraviado 4,22 miles de millones de dólares de las ganancias del petróleo se basaba sólo en la contabilidad del gobierno. La suma podría ser mayor, pero resulta imposible verificar la veracidad de las cifras de las ganancias angolanas mientras las compañías petroleras extranjeras rehúsan hacer públicos sus pagos por derechos al gobierno.

Parte del problema recae en la decisión de las compañías extranjeras, incluyendo ExxonMobil, ChevronTexaco, BP-Amoco, Shell y Total, de firmar cláusulas de confidencialidad como parte de sus acuerdos con Sonangol. Mientras que las compañías a menudo afirman que estos acuerdos confidenciales no les permiten ser más transparentes, realmente no queda claro si estos acuerdos incluyen la cifra de ganancias pagadas al gobierno.

En el 2001, BP-Amoco se convirtió en la primera gran compañía en acceder a la apertura de información con relación a sus operaciones en Angola. La compañía accedió a hacer públicos sus

pagos a Sonangol y a desclasificar la suma pagada en impuestos al gobierno angolano. Sonangol respondió al anuncio de BP-Amoco enviándole una misiva que amenazaba con terminar el contrato con la compañía si revelaba información financiera relacionada con sus operaciones en Angola. Sonangol además envió copias de la carta a las demás compañías que operan en Angola, como clara advertencia para los que quisieran seguir el ejemplo de BP-Amoco. La preocupación de Sonangol respecto a que se hagan públicas las ganancias del petróleo deriva del hecho de que estaba manejando de modo ilegal las ganancias del país sin llevar contabilidad para el gobierno. Según un informe de 2002 del FMI, emitido un año después de que Sonangol amenazara a BP-Amoco, la compañía petrolera estatal “asumió hace tiempo el control total de los ingresos en moneda extranjera procedentes del sector petrolero y dejó de canalizarlos a través del banco central como estipula la ley”⁴⁸.

La mayoría de los gobiernos del Norte reclaman a las compañías que operan en su país la declaración pública de las sumas que pagan en derechos e impuestos. Global Witness ha sugerido que los gobiernos nortños vayan un paso más allá y reclamen que todas las compañías residentes en su país hagan también públicos los pagos que realizan a otros gobiernos por estos conceptos. El hecho de que las compañías sigan unas reglas de juego en los países del Norte y otro en los países del Sur las hace cómplices de la falta de transparencia con respecto al mal manejo de las ganancias del petróleo por parte de gobiernos corruptos. Con excepción de BP-Amoco, las grandes compañías extranjeras en Angola están contribuyendo a socavar la democracia en ese país al no brindar a sus ciudadanos la información que necesitan para controlar el manejo que hace el gobierno de sus riquezas.

El aumento de la transparencia podría contribuir a asegurar que una mayor porción de las ganancias del petróleo llegara a la

48. “Time for transparency”.

empobrecida población. El valor de esa riqueza, sin embargo, es cada vez menor debido a la creación de un clima favorable para las inversiones extranjeras. Entre 2000 y 2003, la parte de los ingresos totales que corresponde al gobierno disminuyó del 53 al 43%. Según el FMI, “un posible factor que origina estos cambios puede ser, entre otros, la diferencia entre los regímenes de impuestos” así como “la estructura de los acuerdos de distribución de ganancia”⁴⁹. Como resultado de la corrupción y los contratos petroleros que favorecen a las transnacionales, millones de empobrecidos angolanos continúan dependiendo de las enormes cantidades de ayuda humanitaria extranjera, mientras los corruptos funcionarios del gobierno y las compañías petroleras extranjeras se hacen ricos con las reservas petroleras del país.

El papel de Washington en África Occidental

La búsqueda de Estados Unidos por diversificar sus suministros de petróleo, ha llevado a la administración Bush a concentrar cada vez mayor atención en el Golfo de Guinea, en África Occidental. Como señaló David Goldwyn, ex asistente del secretario de energía de la administración Clinton en 2004: “No estamos, hoy, en posición de enfrentar una seria interrupción del suministro de petróleo del Golfo de Guinea. La capacidad del mercado global de petróleo se ha estrechado.”⁵⁰

Debido a la gran población musulmana de Nigeria, Estados Unidos ha visto el país como un aliado clave en la guerra contra el terrorismo y continúa brindándole ayuda militar a pesar de las flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidos por el ejército nigeriano. Según Human Rights Watch, “estas consideraciones políticas han llevado a que no critiquen el historial de derechos

49. “Angola: selected issues and statistical appendix”, Fondo Monetario Internacional, abril de 2005.

50. Nick Tattersall, “West African oil gives US new security challenge”, Reuters, 17 de diciembre de 2004.

humanos de Nigeria”⁵¹. La Casa Blanca también considera a Nigeria como un importante suministrador de petróleo y se preocupa cada vez más por los ataques de activistas y grupos étnicos armados contra instalaciones petroleras tanto en la región del Delta del Níger como en el litoral. El general de la Fuerza Aérea estadounidense Charles Wald, subcomandante de las tropas del ejército de Estados Unidos del Comando Europeo para Europa y África, visitó Nigeria en julio de 2004 para tratar sobre la seguridad en las regiones productoras de petróleo. Refiriéndose a la posibilidad de que efectivos estadounidenses fueran desplegados en Nigeria para ayudar a proteger las operaciones petroleras, Wald declaró: “Donde sea que exista el mal, queremos llegar hasta él y combatirlo... Donde tengas bienes, si no los proteges, eres vulnerable a los terroristas y a los traficantes ilegales de armas y, por lo tanto, no estás seguro”⁵². En diciembre de 2004, la administración Bush accedió a suministrar a la armada nigeriana quince botes patrulla para proteger las instalaciones petroleras en el Delta del Níger y a lo largo de la costa del país. Mientras Wald declaró que los navíos eran para proteger las instalaciones de ataques terroristas, existe una alta probabilidad de que sean usados contra los aldeanos del Delta que protesten en contra de las compañías petroleras⁵³.

Quizás más preocupante que la relativamente pequeña presencia militar de Washington en África Occidental es el aumento de la influencia económica y política en la región. A finales de los años 90 el Banco estadounidense de exportación-importación emitió garantías de préstamo a Angola que han beneficiado a las compañías petroleras estadounidenses que operan en ese país. En junio de 1998 dicho banco garantizó un préstamo de 87 millones de dólares

51. “World Report 2003: Nigeria”, Human Rights Watch, enero de 2003.

52. Gilbert Da Costa, “US general proposes help in ‘monitoring’ unstable West Africa oil gulf”, Associated Press, 12 de julio de 2004.

53. Nico Colombant, “US helps West African navies”, La Voz de América, 1 de febrero de 2005.

que hizo el SocGen Bank de Nueva York al gobierno angolano para cubrir la parte de Sonangol en el desarrollo de un pozo de petróleo en sociedad con compañías extranjeras en el problemático enclave de Cabinda.

La "garantía de préstamo" del Banco de exportación-importación significa que el SocGen Bank no enfrenta riesgos al prestar millones de dólares al corrupto y represivo régimen angolano. Si el ya fuertemente endeudado gobierno angolano no puede devolver el préstamo, entonces el Banco de exportación-importación, o para ser mas precisos, los contribuyentes estadounidenses, harán efectivos los 87 millones de dólares adeudados a SocGen. Al siguiente año el Banco de exportación-importación realizó un préstamo directo a Sonangol de 64 millones de dólares para la compra de equipos y servicios a más de veinte compañías energéticas estadounidenses, inclusive Halliburton⁵⁴. En este caso si Sonangol no devuelve el préstamo, los contribuyentes estadounidenses habrán subsidiado a más de veinte corporaciones de Estados Unidos.

En Guinea Ecuatorial, el represivo gobierno del general Teodoro Obiang Nguema ha gobernado desde que se hizo con el poder en el golpe militar de 1979. Obiang Nguema ha celebrado varias elecciones durante su gobierno, muy lejos de ser libres y justas. El Departamento de Estado estadounidense señaló que el líder de Guinea Ecuatorial fue "reelecto en diciembre de 2002 en unas elecciones llenas de fraude e intimidación"⁵⁵.

Obiang Nguema ha empleado métodos represivos para mantener el control sobre su inmensa población empobrecida. En 2004, según el Departamento de Estado, "el historial de derechos humanos del gobierno sigue siendo penoso y el gobierno continúa cometiendo serios abusos... Las fuerzas de seguridad cometen numero-

54. "A crude awakening".

55. "Africa: supporting human rights and democracy - the US record 2002-2003", Departamento de Estado de Estados Unidos, 24 de junio de 2003.

sos abusos, inclusive torturas, golpes, y otros abusos físicos con los prisioneros y sospechosos, que en ocasiones mueren”⁵⁶. En 1995, la administración Clinton respondió a estas violaciones cerrando la embajada estadounidense en Guinea Ecuatorial, que en aquel entonces no poseía sustanciales reservas comprobadas de petróleo.

A finales de la década de 1990, varias compañías extranjeras como ExxonMobil, ChevronTexaco y Amerada Hess de Estados Unidos, hicieron significativos descubrimientos de petróleo en Guinea Ecuatorial. El deseo de Estados Unidos de asegurar nuevas fuentes del hidrocarburo llevó a renovar los lazos entre Washington y el régimen de Nguema. En 2000, la Compañía para la Inversión Privada en el Extranjero (CIPE) del gobierno de Estados Unidos dio 373 millones de dólares en garantías de préstamos para la construcción de una planta de metanol de la que eran parcialmente dueñas dos compañías estadounidenses: Noble Affiliates y Marathon⁵⁷. Como el Banco de exportación-importación, CIPE, a menudo aliena el “desarrollo” de proyectos de compañías de Estados Unidos en alianza con regímenes represivos. Obiang Nguema dio la bienvenida a la nueva amistad de su gobierno con el de Estados Unidos. Durante un viaje a Washington D.C. en febrero de 2002 agradeció la buena voluntad estadounidense hacia su nación rica en petróleo, declarando: “Podemos prometer a las compañías estadounidenses que sus inversiones están garantizadas”⁵⁸.

Se han cuestionado las relaciones de las compañías petroleras extranjeras y el gobierno de Nguema. Según el Departamento de Estado, “ha habido cierta preocupación con respecto a ciertos pagos irregulares realizados por algunas compañías a cuentas de

56. “Equatorial Guinea: country reports on human rights practices - 2004”, Departamento de Estado de Estados Unidos, 28 de febrero de 2005.

57. Ken Silverstein, “US oil politics in the ‘Kuwait of Africa’”, *The Nation*, 4 de abril de 2002.

58. *Ibíd.*

banco controladas directamente por el Presidente y la elite gobernante. La mayoría de las ganancias del petróleo permanecen en manos del Estado con una pequeña porción que se distribuye a la mayoría de la población, que sigue pobre⁵⁹. De hecho Guinea Ecuatorial posee el mayor crecimiento mundial del GPD desde que se convirtió en un gran productor de petróleo a final de los años 1990 y aun así el 65% de su medio millón de habitantes permanece sumido en la pobreza⁶⁰.

Quizás lo que ilustra más claramente la voluntad del gobierno de Bush de pasar por alto la falta de democracia y las violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial fue la apertura de una nueva embajada en la nación rica en petróleo en octubre de 2003. Incluso la emisora de radio del gobierno "La Voz de América" informó cómo la administración Bush evitaba el tema sobre la situación de los derechos humanos en el país, abriendo calladamente la embajada "con poca fanfarria y sin anuncio oficial"⁶¹.

Una situación similar existe en Gabón, país rico en petróleo —entre los primeros quince suministradores de petróleo de Estados Unidos— donde la administración Bush ha dado entrenamiento militar al ejército gabonés, a pesar de la falta de democracia y las violaciones de los derechos humanos de su gobierno. El informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos de 2005 declara que el presidente Omar Bongo, que gobierna desde 1967, "fue reelecto por un término de 7 años en las elecciones de 1998, llenas de irregularidades". El informe también señala que "el historial en derechos humanos del gobierno sigue siendo penoso... Las fuerzas de seguridad en ocasiones golpean y torturan a los prisioneros, las condiciones de las prisiones son pésimas y las fuerzas de seguridad en ocasiones dispersan violentamente las manifestaciones;

59. "Equatorial Guinea: Country Reports on Human Rights Practices - 2004".

60. Alex Belida, "US re-opening of embassy in oil-rich Equatorial Guinea not without controversy". *La Voz de América*, 31 de octubre de 2003.

61. *Ibíd.*

los arrestos arbitrarios son un problema”⁶². A pesar de admitir la evidente falta de democracia y las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Gabón, el Departamento de Estado declara: “Las relaciones entre Gabón y Estados Unidos son excelentes”⁶³.

En 2004, el embajador estadounidense en Gabón, Kenneth Morefield, sugirió que el país debería diversificar su economía alejándola de la hiperdependencia del petróleo siguiendo las prescripciones del FMI. Morefield aparentemente olvidó el informe de los derechos humanos de su propio Departamento de Estado, cuando declaró que implementando medidas neoliberales en Gabón se podría “mantener la admirable estabilidad y respeto por los derechos humanos como hasta ahora”⁶⁴.

Existen pocas dudas de que Estados Unidos prefiere la estabilidad de Gabón antes que los frecuentes desórdenes que a menudo interrumpen la producción de petróleo en Nigeria. Gabón es una importante fuente de petróleo para Estados Unidos a donde dirige más de la mitad de las exportaciones del país. Las reservas comprobadas de Gabón han aumentado de 1,3 mil millones de barriles en 1996 a 2,5 mil millones de barriles en el 2004, la tercera mayor reserva en África subsahariana⁶⁵. Mientras la producción del país ha estado disminuyendo desde 1996, nuevos descubrimientos y contratos con compañías extranjeras prometen revertir esta situación en un futuro cercano.

Entre las compañías que operan en Gabón, se encuentran, Shell, Total y VAALCO Energy con sede en Houston. El 13 de junio de 2005, VAALCO anunció que había firmado un crédito de préstamos al por menor de 30 millones de dólares con la Corporación

62. “Gabon: country reports on human rights practices - 2004”, Departamento de Estado de Estados Unidos, 28 de febrero de 2005.

63. “Background note: Gabon”, Departamento de Estado de Estados Unidos, abril de 2005.

64. Andy Denwood, “Gabon’s oil boom hangover”, BBC News, 11 de octubre de 2004.

65. “Country analysis briefs: Gabon”, Departamento de Energía de Estados Unidos, noviembre de 2004.

Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, la división del banco que financia proyectos de inversión privados en el Sur globalizado. Según VAALCO, "la facilidad de préstamos financiará durante algunos años los programas de exploración, desarrollo y producción de la compañía... ayudando en los esfuerzos de la compañía por encontrar reservas adicionales"⁶⁶. La línea de crédito minorista es válida hasta octubre de 2009 y puede ser extendida por otros dos años.

Está claro que Gabón ha sido una lucrativa inversión para VAALCO. En mayo de 2005 la compañía anunció que las ganancias de su primer trimestre eran más del 223% con respecto al mismo período del año anterior. Las ventas de la compañía casi se duplicaron, debido en parte al incremento de producción en las operaciones de Gabón⁶⁷. Como en otras naciones ricas en petróleo, en Gabón existe una injusta distribución de las riquezas, con un 5% de la población que posee el dominio del más del 90% de las riquezas de la nación⁶⁸.

Está claro que la elite económica y las compañías extranjeras se están haciendo ricas a costa de las reservas petroleras de Gabón, mientras la mayoría de la población del país (1,2 millones) continúa sufriendo bajo el régimen represivo de Bongo. Por su parte, la administración Bush ha defendido el estado de cosas en Gabón manteniendo estrechos lazos con el gobierno, brindando entrenamiento militar a sus fuerzas armadas y respaldando el financiamiento del Banco Mundial a compañías que operan en la pequeña nación africana.

Estados Unidos no es el único gran consumidor que busca incrementar su presencia en África Occidental; China también se ha

66. "VAALCO Energy announces \$30 million revolving credit facility with the International Finance Corporation", VAALCO Energy, 13 de junio de 2005.

67. "VAALCO Energy announces 223% increase in first quarter 2005 results", VAALCO Energy, 2 de mayo de 2005.

68. "Background note: Gabon".

vuelto más comprometida y activa con la región. En un intento por apagar la creciente sed china de petróleo, la compañía estatal Sinopec del país comunista firmó un acuerdo con el gobierno de Gabón mediante el cual este país debe suministrar a Pekín 20.000 barriles diarios de petróleo. El acuerdo también permite que Sinopec explore en búsqueda de petróleo y construya una refinería en Gabón⁶⁹. También en el 2004, las compañías chinas llegaron a un acuerdo con el gobierno nigeriano para desarrollar dos yacimientos de petróleo y construir refinerías y oleoductos en el país⁷⁰. Al mismo tiempo, en Angola, Pekín acordó proveer al país con 2 millones de dólares en ayuda a cambio de 10.000 barriles diarios de petróleo⁷¹.

Conclusión

La administración Bush ha garantizado las presentes y futuras provisiones de petróleo de África Occidental, una prioridad de su política externa. La influencia política, económica y militar en la región se incrementa en orden a proteger los intereses económicos estadounidenses y las operaciones de sus compañías. Entretanto, compañías extranjeras como ChevronTexaco, ExxonMobil y Shell se han enriquecido a lo grande debido a una larga historia de alianzas con los regímenes represivos de la región.

Como consecuencia, los nigerianos de la región del Delta del Níger han estado sujetos a repetidos ataques por parte de las fuerzas militares que protegen las operaciones petroleras. También se han visto amenazados de no poder mantenerse mediante la agricultura de subsistencia debido a los derrames de petróleo y la destrucción ambiental que estos conllevan. La mayoría de la población

69. "Gabon: oil pact with China aims to boost falling reserves", *IRIN News*, 5 de febrero de 2004.

70. "Country analysis briefs: Nigeria", Departamento de Energía de Estados Unidos, abril de 2005.

71. Don Lee, "China barrels ahead in oil market", *Los Angeles Times*, 14 de noviembre de 2004.

de Nigeria, así como las de Angola, Gabón y Guinea Ecuatorial, continúan enfrentando la extrema pobreza mientras sus corruptos líderes políticos y las compañías extranjeras se embolsan las ganancias del petróleo. Las políticas de la administración Bush están destinadas a apoyar a sus compañías y mantener el estado de cosas con los regímenes represivos de la región. A pesar de las declaraciones del presidente Bush de que la política exterior de su administración busca expandir la libertad y la democracia por todo el planeta, existe poca evidencia de que Estados Unidos esté avanzando en la consecución de estos nobles objetivos en África Occidental.

Colombia: alimentando la adicción a Washington

En diciembre de 2000, las fuerzas antinarcótics entrenadas en Estados Unidos, helicópteros Black Hawk suministrados por Estados Unidos y aviones de fumigación pilotados por pilotos estadounidenses descendieron en el sur de Colombia para iniciar el programa antidroga conocido como Plan Colombia. Durante los primeros cuatro años de la campaña aérea de fumigación del Plan Colombia, las zonas de cultivo de coca en el Putumayo y otras regiones del sur de Colombia fueron fumigadas insistentemente. Aunque el gobierno estadounidense declaró que esta receta de fumigaciones acabaría por disminuir el cultivo de coca en el 2002 y el 2003, aún no existían evidencias de que el Plan Colombia hubiera alcanzado su principal objetivo: reducir el flujo de cocaína hacia Estados Unidos. Pero mientras el Plan Colombia no había podido afectar el precio, la pureza y la disponibilidad de la cocaína en las ciudades de Estados Unidos, su militarización de la región de Putumayo ayudó a incrementar la exploración en busca de petróleo por parte de las transnacionales en esta región rica en ese recurso. Después del 11/9 la guerra antidroga se convirtió en la guerra antiterrorismo, bajo la cual la administración Bush expandió su presencia militar en Colombia para proteger las operaciones de sus compañías petrole-

ras. Las reformas económicas neoliberales que constituían el componente económico del Plan Colombia endulzaron aún más las cosas para las compañías petroleras extranjeras.

El petróleo produce las mayores ganancias de exportación en Colombia y este país se encuentra entre los doce primeros suministradores de Estados Unidos a pesar de que cuenta con solo 1,54 mil millones de barriles de reserva comprobada¹. Se estima que Colombia podría poseer 40 mil millones de barriles de petróleo, aunque gran parte de estas reservas potenciales están en zonas de difícil acceso pues se encuentran en territorios del país controlados por los guerrilleros izquierdistas². El deseo de Washington de disminuir su dependencia del petróleo del Medio Oriente ha llevado a Estados Unidos a aumentar su intervención militar en el conflicto civil colombiano como parte de su guerra mundial contra el terrorismo. Uno de los principales objetivos del ejército de Estados Unidos en Colombia es proteger a las transnacionales, que han sido atacadas repetidamente por los dos grupos rebeldes izquierdistas: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las raíces del conflicto

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a las FARC y al ELN en su lista de organizaciones terroristas en 1997. El Departamento de Estado declara que los grupos guerrilleros son responsables de secuestros, sabotajes, asesinatos y desalojos³. Ambos movimientos han utilizado la guerra de guerrillas en contra del gobierno colombiano por más de cuarenta años. Las FARC evo-

1. "Country analysis briefs: Colombia", Departamento de Energía de Estados Unidos, junio de 2005.

2. Steven Dudley, "Colombia's hopes for great oil field likely dashed", Knight Ridder Newspapers, 26 de agosto de 2004.

3. "Colombia: country reports on human rights practices - 2004", Departamento de Estado de Estados Unidos, 28 de febrero de 2005.

lucionaron a partir de grupos campesinos de autodefensa que combatieron al ejército colombiano durante la caótica y sectaria violencia de las décadas de 1940 y 1950, conocida como *La Violencia** en la que se enfrentaron los que apoyaban el partido conservador del país contra los del partido liberal y los comunistas. En 1958, las elites de ambos partidos se unieron para formar el gobierno del Frente Nacional, que sustituyó a la dictadura militar del General Gustavo Rojas Pinilla. Bajo el Frente Nacional, los partidos conservador y liberal acordaron alternar gobiernos presidenciales de cuatro años y dividirse por igual todas las posiciones del gobierno. Esta limitada democracia duró hasta 1974 cuando los dos partidos enfrentaron candidatos nuevamente. El gobierno del Frente Nacional unificó la oligarquía del país en su lucha contra la creciente amenaza de las insurgencias armadas que ya no reconocían la legitimidad de los dos partidos dominantes ni del sistema político y económico que había mantenido la tan espantosa desigual distribución de las riquezas del país.

En 1964, un grupo de campesinos armados se convirtió oficialmente en las FARC. Abrazando la ideología marxista y reclamando radicales reformas políticas, sociales, económicas y agrarias, querían derrocar al gobierno. A finales de la década de 1990, debido a los lucrativos rescates por secuestro, extorsión de negocios y los impuestos de los cultivadores de coca, las FARC se convirtieron en una fuerza bien armada de 18.000 combatientes que controlan alrededor del 40% del territorio nacional⁴. La agenda política, económica y social de las FARC ha sido especialmente visible en áreas remotas de Colombia, donde los rebeldes han actuado como gobierno de facto durante décadas. Un ejemplo de la política de reformas agrarias del grupo rebelde se puede ver en el departamento de Meta, un antiguo baluarte de los guerrilleros al este de Colombia. Durante

* N. del T: En español en el original.

4. Ana Carrigan, "Colombia's best chance", *The Nation*, 21 de enero de 1999.

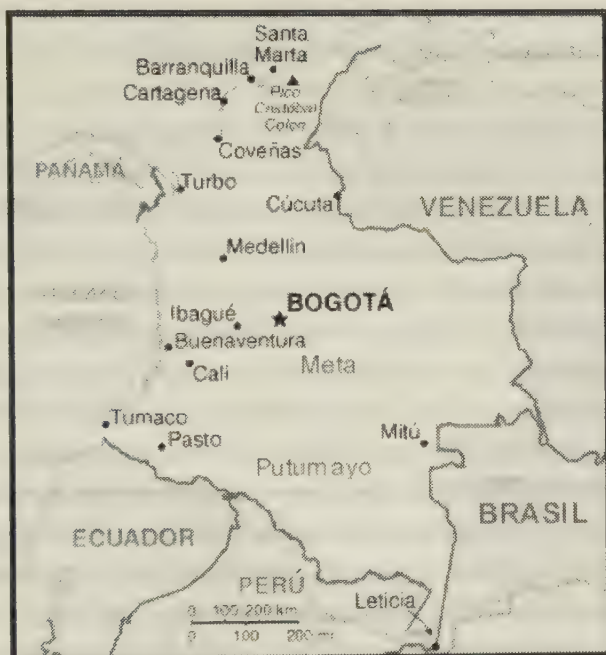
los años 2002 y 2003, las FARC desintegraron diez grandes ranchos en la parte sureña de Meta. Las pequeñas propiedades resultantes fueron redistribuidas para granjas de subsistencia⁵.

En mayo de 2003, el enviado especial de la ONU en Colombia, James LeMoyne, advirtió que, en un país donde la desigual distribución de las riquezas ha dejado al 64% de la población viviendo en la pobreza, sería “un error pensar que los miembros de las FARC son sólo traficantes de drogas y terroristas”⁶. A pesar de su agenda social, sin embargo, las FARC parecen tener una ideología comprometida en algunas regiones del país, en orden a implementar una estrategia que enfatiza el control militar sobre los recursos y el territorio. Una consecuencia de esta alternativa fue el aumento, desde principios de la década de 1990, de sus ataques a blancos civiles a través de asesinatos selectivos, sabotajes con bombas y secuestros, tácticas que han sido condenadas por organizaciones de los derechos humanos.

El ELN también se formó en 1964, pero a diferencia de las FARC sus fundadores eran intelectuales de la clase media recién regresados de Cuba. El ELN, influenciado por la Revolución Cubana y por la teología de la liberación, también reclamaba una revolución socialista. En su mayoría, los 4.000 miembros del ELN no obtenían ganancias de las drogas. En su lugar se autofinanciaban mediante el secuestro y extorsión de la industria del petróleo al norte y este de Colombia. Como las FARC, el ELN había criticado la reformas neoliberales implementadas por el gobierno desde principios de la década de 1990. En agosto de 2000, el comandante del ELN Antonio García declaró que “cualquier proyecto de cambio social debe incluir la idea de que necesitamos un modelo económico que sirva al pueblo y a la sociedad, no de ninguna otra

5. Scott Wilson, “Colombia’s rebel zone: world apart”, *Washington Post*, 18 de octubre de 2003.

6. “UN envoy triggers a debate in Colombia”, *Associated Press*, 22 de mayo de 2003.



Mapa 4: Colombia.

manera”⁷. El grupo rebelde en su papel como gobierno de facto en una región rural olvidada por el Estado fue presenciado por el foto-reportero Scott Dalton mientras rodaba con el comandante del ELN en el departamento de Arauca, en el este de Colombia:

Condujimos por más de dos horas, parando en muchos pueblecitos; la gente se aproximaba al vehículo y hablaba con el comandante, pidiéndole favores e intercambiando información. Se me ocurrió que el gobierno tendría una tarea difícil. Que para recuperar esas áreas que están bajo control rebelde, tendría que ganarse la confianza de sus habitantes, gente que nunca ha tenido contactos con la

7. Liam Craig-Best, “An interview with ELN commander Antonio García”, *Colombia Journal*, 27 de agosto de 2000.

policía o el ejército, gente que no confía en el gobierno y que siempre ha recurrido a los rebeldes en busca de ayuda⁸.

En su guerra contra las FARC y el ELN, el ejército colombiano ha trabajado estrechamente con grupos paramilitares de extrema derecha. Estos grupos de milicia fueron establecidos en los años 80 por el ejército colombiano, traficantes de drogas y terratenientes para combatir la amenaza guerrillera. La ideología de los paramilitares es fieramente anticomunista, mientras que sus tácticas han servido para proteger y perpetuar los intereses de la elite económica colombiana y de las transnacionales. A través de los años, los paramilitares han sido responsables de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos cometidas, particularmente masacres y desalojos. Durante finales de la década de los 80, virtualmente erradicaron el partido izquierdista Unión Patriótica (UP) asesinando a más de dos mil miembros, incluso a dos candidatos presidenciales y cuatro congresistas electos. En 1997, los grupos paramilitares de la región se unieron bajo una sola organización llamada Fuerzas de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC).

En esta guerra sucia, la AUC trabajó conjuntamente con el ejército colombiano tomando como blanco a los sospechosos de simpatizar con la guerrilla, incluso a líderes campesinos, organizadores comunitarios, comerciantes sindicalistas, trabajadores de los derechos humanos y maestros. Mientras las FARC y el ELN estaban inscritos en la lista de terroristas extranjeros del Departamento de Estado en 1997, la AUC no fue incluida en esta lista hasta cuatro años más tarde, aun sabiendo que eran los principales violadores de los derechos humanos en Colombia durante ese período⁹. En el

8. Scott Dalton, "Kidnapped in Arauca", *NACLA Report on the Americas*, enero/febrero de 2003.

9. "Colombia: country reports on human rights practices - 2001", Departamento de Estado de Estados Unidos, 4 de marzo de 2002.

2003, la AUC inició conversaciones de paz con el gobierno con el objetivo de desmovilizar a sus 12.000 combatientes para finales de 2005. Muchas facciones disidentes se negaron a participar en las negociaciones, hasta que los guerrilleros cesaran las hostilidades.

De las drogas al terrorismo

Estados Unidos ha estado brindando niveles relativamente bajos de ayuda militar y entrenamiento a Colombia desde los años 50, pero la ayuda estadounidense aumentó significativamente en 1989. A finales de los años 80, los traficantes de drogas –principalmente Pablo Escobar y otros líderes del Cartel de Medellín– lanzaron una campaña de atentados urbanos en un intento de forzar al gobierno colombiano a terminar con la práctica de extraditar a los señores de la droga hacia Estados Unidos para ser juzgados. Bogotá recurrió a la administración de George W. Bush en busca de ayuda militar para combatir a los narcotraficantes. Bush estuvo más que feliz de brindar la ayuda necesaria, aunque con ciertas limitaciones endosadas. En pago por la parte colombiana de los 2,2 miles de millones del paquete de ayuda antinarcóticos denominado Iniciativa Andina, Bush reclamó el desmantelamiento del sistema proteccionista colombiano y la implementación de reformas económicas “bajo las bases de políticas regidas por el mercado”¹⁰. Poco después de recibir la ayuda, la administración Gaviria inició *la apertura** de la economía colombiana, la cual llevó a un incremento del flujo de bienes e inversiones extranjeras.

La economía pronto comenzó a deteriorarse según bajaban las tarifas, dando lugar a la disminución de los precios de los artículos importados, dejando fuera del negocio a pequeños y medianos productores locales que no podían competir con las transnacionales. El

10. Presidente George H. W. Bush, “Statement on trade initiatives for the Andean region”, Museo y Biblioteca Presidencial H. W. Bush, 1 de noviembre de 1989.

* N. del T.: En español en el original.

excedente comercial colombiano de más de mil millones en 1989 se convirtió en un déficit de más de 4 mil millones en 1998¹¹. Entre tanto, el desempleo aumentó a casi un 20% y se incrementó el número de los que, para subsistir, tenían que trabajar en el sector informal. Adicionalmente, según el Banco Mundial, los niveles de pobreza aumentaron en la segunda mitad de los años 90 de un 60 a un 64% de la población¹². Para 1999, la economía colombiana se había hundido en su peor recesión en más de medio siglo. Mientras los funcionarios colombianos y de Estados Unidos culpaban al conflicto civil del deterioro de la economía durante los años 90, la responsabilidad podría atribuirse con más exactitud a las reformas neoliberales introducidas en esa década. Después de todo, la intensidad del conflicto colombiano durante finales de los años 40 y 50 supera por mucho la experimentada durante los años 90 y la economía aún creció durante ese período. De hecho este crecimiento económico continuó hasta los años 90, haciendo de Colombia uno de los países más estables económicamente de toda Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX. Solo una minoría de los colombianos, sin embargo, se benefició de este crecimiento.

Más preocupante para Washington y Bogotá que la crisis económica fue el aumento de la fuerza militar de las FARC. Por primera vez en más de treinta años de insurgencia armada, los rebeldes colombianos fueron capaces de amenazar seriamente a la elite urbana del país mediante secuestros y explosiones. Los ataques rebeldes también estaban causando estragos en las actividades de las compañías petroleras extranjeras, cuyas operaciones estaban situadas en regiones rurales vulnerables. El incremento de la capacidad militar de las FARC se debió principalmente al “éxito” de la campaña antidrogas estadounidense en la región andina. Mientras

11. “Colombia at a glance: 1999”, Grupo del Banco Mundial, 29 de mayo de 2000.

12. “Colombia poverty report”, Grupo del Banco Mundial, marzo de 2002.

los esfuerzos de erradicación en los vecinos Perú y Bolivia durante los años 90 redujeron significativamente la cantidad de coca –la planta que brinda el ingrediente principal de la cocaína– en esos países, el cultivo en Colombia se duplicó entre 1995 y el 2000, compensando el declive boliviano y peruano¹³. Aún más, el mayor aumento ocurrió en Putumayo y otros departamentos sureños controlados por las FARC, que se enriquecieron de los impuestos cobrados a los cultivadores de coca. También los dos mayores carteles de cocaína colombianos –Medellín y Cali– responsables de la mayor parte de la producción y el tráfico de cocaína, habían sido desmantelados a mediados de los años 90. Todo ello condujo a la descentralización del tráfico de drogas mientras decenas de pequeños carteles, muchos de ellos vinculados con paramilitares de derecha, llenaban el vacío.

A finales de los años 90, al igual que cuando la campaña de explosiones urbanas en su confrontación con el cartel de Medellín una década antes, el gobierno colombiano recurrió a Washington en busca de ayuda. En esta ocasión, el Presidente de Colombia, Andrés Pastrana, pensó defender al país de la escalada insurgente pidiendo ayuda para el desarrollo en orden a enfrentar algunos problemas socioeconómicos que alimentaban el conflicto. En 1999, la administración Pastrana instrumentó el Plan Colombia, que requería enormes sumas de ayuda foránea para financiar el desarrollo económico y social. El plan original no necesitaba sumas significativas para ayuda militar o antinarcóticos. La administración Clinton, sin embargo, reescribió el plan convirtiéndolo prácticamente en una campaña militar, con la intención de disminuir significativamente el tráfico de drogas, estimular la economía colombiana y terminar con el conflicto civil.

13. "Colombia, UN discussing anti-coca mycoherbicide cooperation", Departamento de Estado de Estados Unidos, 17 de julio de 2000.

En enero de 2000, el presidente Bill Clinton propuso 1,6 mil millones de dólares de ayuda en su mayoría militar para el Plan Colombia. El componente económico del plan consistía simplemente en imposiciones neoliberales acordadas un mes antes entre la administración Pastrana y el FMI a cambio de 2,7 mil millones de dólares en préstamos durante tres años. Los términos del préstamo requerían que Colombia bajara más sus tarifas, privatizara compañías estatales y redujera los gastos del gobierno. En lo fundamental, a pesar de las protestas de sindicatos, guerrilleros e incluso la Corte Constitucional de Colombia, Bogotá satisfizo las condiciones del préstamo.

En el verano de 2000, el Congreso de Estados Unidos aprobó 1,3 mil millones de dólares durante dos años como contribución inicial al Plan Colombia, haciendo de Colombia el tercer mayor receptor de ayuda militar estadounidense después de Israel y Egipto. La ayuda militar constituyó más del 70% del paquete de ayuda, que sería utilizada para la fumigación aérea de los cultivos ilegales de coca en territorios del sur de Colombia controlados por las FARC, para crear una brigada antinarcóticos en el ejército colombiano entrenada por las tropas especiales del ejército de Estados Unidos y para suministrar a las fuerzas de seguridad colombianas más de sesenta helicópteros armados Black Hawk y Huey.

Las FARC eran vistas como el principal enemigo en esta guerra contra las drogas aun cuando era sabido que los paramilitares estaban bien comprometidos en el tráfico de drogas. Las FARC cobraban impuestos a los cultivadores de coca y traficantes en las regiones que estaban bajo su control y en ocasiones actuaban como intermediarias comprando pasta de coca a los campesinos y vendiéndosela a los traficantes para procesarla en cocaína. El grupo paramilitar AUC por otra parte, estaba aún más involucrado en procesar y traficar cocaína. En el 2001, el líder de AUC Carlos Castaño admitió que una buena parte de los ingresos de su grupo provenían del narcotráfico (Aranguren Molina 2001: 205).

La campaña inicial de seis semanas de fumigación del Plan Colombia fue lanzada en el departamento de Putumayo, rico en petróleo, en diciembre de 2000. Durante los próximos dos años fueron fumigadas cientos de miles de hectáreas en Putumayo y los departamentos adyacentes. Pero los productos químicos no sólo destruyeron los cultivos de coca, sino que también devastaban los cultivos de alimentos, afectaban a la salud de los niños locales y provocaron el desplazamiento de miles de familias¹⁴. La devastación que trajo consigo la fumigación provocó las protestas de miles de campesinos y de los gobernadores de seis departamentos sureños afectados por la fumigación.

Hubo extensas acusaciones de corrupción y despilfarro con respecto al 8% de ayuda estadounidense destinada a programas alternativos de cultivo. Jair Giovani Ruiz, ingeniero agroindustrial para Corpoamazonia (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur del Amazonas) del Ministerio de Medio Ambiente declaró que los campesinos habían recibido poca parte del fondo para cultivos alternativos: "Quizás una vaca o tres pollos, pero los granjeros no pueden vivir de esto. Quizás el dinero se perdió en el camino, o tal vez [el gobierno] contrató un montón de expertos para poder suministrar vacas". Lo que pasó al final, según Ruiz, fue que "hubo un mal manejo de los recursos del Plan Colombia".¹⁵ Entre tanto, el 70% de la ayuda que constituía el componente militar del Plan Colombia había demostrado ser muy efectivo en destruir los medios de vida de los empobrecidos campesinos. Mario Cabal, de PLANTE, la agencia gubernamental a cargo del mal financiado programa de cultivos alternativos, se quejó: "Tenemos dinero para

14. Dr. Edgar Perea, entrevista con el autor, 10 de febrero de 2001, *La Hormiga*, Putumayo, Colombia. El autor presenció cultivos alimenticios destruidos por las fumigaciones aéreas en Putumayo.

15. Jair Giovani Ruiz, entrevista con el autor, 20 de agosto de 2002, Puerto Asís, Putumayo, Colombia.

helicópteros y armas para la guerra pero no tenemos dinero para programas sociales¹⁶.”

El proyecto de ayuda Plan Colombia incluía la condición del uso de parte de los fondos para crear, entrenar y armar a los tres mil efectivos de la brigada antinarcóticos del ejército colombiano, que funcionaría de modo independiente de las tropas contraguerrilleras. El propósito de crear la nueva brigada era aplacar a algunos miembros del Congreso de Estados Unidos preocupados porque la ayuda fuera a parar a manos de unidades del ejército que rutinariamente colaboraban con los paramilitares del ala derecha en la guerra sucia del país. Pronto fue evidente que su estrategia había fallado. Según Catalina Díaz, del grupo de derechos humanos Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), “resulta muy evidente que existe tolerancia y aceptación de los paramilitares por parte de esta brigada [antinarcóticos entrenada por Estados Unidos]”. Díaz dijo que ella ha recibido informaciones de colaboración entre esta brigada antinarcóticos y los paramilitares en Putumayo, que ha sido transferida a la Embajada estadounidense en Bogotá¹⁷.

Otro incidente que demuestra dicha complicidad ocurrió el 17 de agosto de 2002, en el río Putumayo, unas millas arriba del pueblo de Puerto Asís. Entrada la tarde, unos quince soldados de la brigada antinarcóticos permitieron que cuatro soldados paramilitares de la AUC armados con AK-47 y *walkie talkies* pasaran en su patrulla sin ser molestados. Los soldados entonces se quedaron parados y observaron a los paramilitares blandir sus armas abiertamente mientras se montaban en canoas y se iban río abajo en dirección a Puerto Asís¹⁸. Varias horas después, un supuesto escuadrón de la

16. Mario Cabal, entrevista con el autor, 20 de agosto de 2002, Puerto Asís, Putumayo, Colombia.

17. Catalina Díaz, entrevista con el autor, 22 de agosto de 2002, Bogotá, Colombia. Todas las solicitudes realizadas por este autor para obtener una entrevista con funcionarios de la embajada de Estados Unidos para discutir el Plan Colombia fueron rechazadas.

18. Incidente presenciado por el autor, 17 de agosto de 2002, Putumayo, Colombia.

muerte paramilitar asesinó a tres civiles desarmados en Puerto Asís. A dos de las víctimas les dispararon en la cabeza, mientras que a la tercera le dieron un tajo con un machete desde el cuello hasta el abdomen¹⁹.

Un año y medio después de su implementación, el Plan Colombia no había alcanzado sus objetivos. La economía colombiana seguía estancada, el conflicto civil proseguía y a pesar del número récord de hectáreas fumigadas, el precio, la calidad y la disponibilidad de la cocaína en Estados Unidos no se habían visto afectados. La naturaleza militar del plan estaba siendo criticada por ONG colombianas e internacionales y políticos de ambos países. Los vecinos de Colombia también criticaron la estrategia antidroga estadounidense; Brasil, Venezuela, Panamá y Ecuador estaban preocupados por los traficantes de drogas, grupos armados y refugiados que buscaban abrigo en su país. El presidente venezolano Hugo Chávez sugirió que el Plan Colombia "podría llevarnos a la vietnamización de toda la región del Amazonas".²⁰ Entretanto, en febrero de 2001, el Parlamento de la Unión Europea votó 474-1 en contra de contribuir con el Plan Colombia debido a su énfasis en la solución militar²¹. Con su política de guerra contra las drogas abriendo fuego por todos lados, los sucesos del 11/9 y la subsiguiente guerra mundial contra el terrorismo dieron una nueva justificación, más popular y más emotiva, para que Washington aumentara su escalada militar en Colombia.

Menos de tres semanas después de los sucesos del 11/9, el senador demócrata de Florida Bob Graham, presidente del Comité Selecto del Senado para Inteligencia, lanzó una campaña para dar

19. El autor fue testigo presencial de los cadáveres de las víctimas. Dos residentes locales dijeron al autor que los paramilitares eran los responsables de la masacre, 18 de agosto de 2002, Puerto Asís, Putumayo, Colombia.

20. "Clinton leaves Colombia after defending aid package", CNN, 30 de agosto de 2000.

21. "Plan Colombia: US anti drug aid fueling civil war", Oficina de Washington para Latinoamérica, 2001.

una imagen de las FARC como amenaza terrorista internacional: "Las FARC están haciendo lo mismo que los terroristas a nivel mundial, se organizan en pequeñas cédulas que no tienen contacto entre sí y dependen de un comando central para organizar sus ataques en términos de logística y financiamiento. Es el mismo estilo de operar que Bin Laden²²."

En octubre de 2001, el alto funcionario antiterrorista del Departamento de Estado Francis X. Taylor, declaró que la estrategia antiterrorista de Washington en el hemisferio occidental incluía "donde sea adecuado, como estamos haciendo en Afganistán, el uso de fuerza militar²³." Taylor dejó pocas dudas acerca del blanco "adecuado" cuando declaró que las FARC "es el grupo terrorista internacional más peligroso en este hemisferio"²⁴. Entre tanto, el jefe de Taylor, el Secretario de Estado Colin Powell dijo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que las FARC pertenecían a la misma categoría que Al-Qaeda: "No existe ninguna dificultad en identificarlo [Osama Bin Laden] como terrorista y dirigir a todo el mundo contra él. Ahora existen otras organizaciones que probablemente alcancen un nivel semejante. Las FARC en Colombia me vienen a la mente."²⁵

En la última semana de octubre, el senador Graham subió de tono sus acusaciones, declarando que Colombia debería ser el principal campo de batalla en la guerra contra el terrorismo. Según el senador de Florida, hubo casi 500 incidentes cometidos en todo el mundo en contra de ciudadanos e intereses estadounidenses en el 2000 y "de ellos, casi quinientos incidentes, el 44%, ocurrió en un

22. Ingrid Vaciuis y Adam Isacson, "The 'war on drugs' meets the 'war on terror'", Center for International Policy, febrero de 2003.

23. *Ibid.*

24. "Testimony of Francis X. Taylor, Coordinator of Counterterrorism", House Committee on International Relations, US House of Representatives, 10 de octubre de 2001.

25. Secretario Colin L. Powell, "Testimony on the international campaign against terrorism", Senate Foreign Relations Committee, Senado de Estados Unidos, 25 de octubre de 2001.

solo país. ¿Ese país fue Egipto? No. ¿Israel? No. ¿Afganistán? Difícilmente. Fue en Colombia. Ahí es donde la guerra contra el terrorismo debería intensificarse²⁶.”

Lo que Graham no mencionó fue que esa inmensa mayoría de “ataques terroristas” contra Estados Unidos por los guerrilleros colombianos consistieron en poner bombas en oleoductos utilizados por compañías de Estados Unidos, que fueron concebidas para dañar los márgenes de ganancia de las corporaciones, no a civiles estadounidenses. De hecho, el senador de Florida olvidó señalar que estos ataques no han matado ni un solo ciudadano de Estados Unidos en el 2000, el año al cual Graham se refería. De todas formas, la campaña para denigrar las FARC preparó el terreno exitosamente para el anuncio de la embajadora Anne Patterson a finales de octubre de que Estados Unidos brindaría ayuda a Colombia contra el terrorismo como parte de su guerra global contra el mismo.

Dado el extenso apoyo del público estadounidense a la guerra contra el terrorismo, no fue sorprendente que el Congreso de Estados Unidos aprobara en julio de 2002 una factura antiterrorista de 28 mil millones de dólares que incluía 35 millones de ayuda a Colombia. Más importante que los fondos adicionales fue, sin embargo, el hecho de que, junto con la nueva factura, también se eliminaban las condiciones restrictivas a los fondos para la guerra antidroga. Este cambio permitió que la ayuda militar, que había constituido más del 70% de los \$2 mil millones en fondos antinarcóticos desde el 2000 –así como los futuros fondos antidroga– fuera utilizada para operaciones de contrainsurgencia como parte de la guerra contra el terrorismo²⁷. La administración Bush trabajó duro para conectar las drogas con el terrorismo convenciendo al público y al Congreso de que los métodos de los traficantes de drogas inclu-

26. Sen. Bob Graham, “Excerpt from press conference with Sen. Bob Graham (D-Florida)”, Centro para la Política Internacional, 25 de octubre de 2001.

27. “Supplemental aid for 2002”, Centro para la Política Internacional, 1 de agosto de 2003.

los financiar a grupos terroristas. En junio de 2003, la campaña de propaganda de la administración Bush hizo la última declaración vinculando drogas y terrorismo cuando el general James Hill, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, dijo a la Comisión del Senado para el Control Internacional de Drogas, que las drogas eran un "arma de destrucción masiva"²⁸. A pesar de las repetidas declaraciones de funcionarios estadounidenses en 2000 de que la contribución de 1.3 mil millones de dólares de la administración Clinton al Plan Colombia no suponía una expansión del papel militar de Estados Unidos en Colombia al amparo de la guerra de las drogas, ahora se había producido el desvío en la dirección que los críticos habían temido. La línea entre el conflicto civil colombiano y la guerra antidrogas estadounidense, aunque era muy fina, había sido completamente borrada.

Al menos una compañía petrolera estadounidense de las que operaban en Colombia había buscado borrar esa línea durante los debates del Congreso sobre el financiamiento del Plan Colombia más de dos años antes. El 15 de febrero de 2000, el vicepresidente de Occidental Petroleum, radicada en Los Angeles, Lawrence Menage, testificaba ante el subcomité del Congreso que debatía el paquete de ayuda del Plan Colombia y recomendaba un paquete de ayuda suplementario para proteger las regiones petroleras en el norte y este de Colombia. Menage dijo al Congreso: "Esto ayudaría a aumentar la seguridad para desarrollar las operaciones petroleras, que, como ya se mencionó, son fundamentales para el éxito del Plan Colombia"²⁹. Desde la perspectiva de Menage, garantizar la seguridad de las operaciones petroleras podría muy bien haber

²⁸ General James Hill, "Regarding US narcotics policy in Colombia", Caucus del Senado para el Control Internacional de Narcóticos, Senado de Estados Unidos, 3 de junio de 2003.

²⁹ "Statement of Lawrence J. Menage, Vice President, Executive Services and Public Affairs, Occidental Oil and Gas Corporation", House Government Reform Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy and Human Resources, Cámara de Representantes de Estados Unidos, 15 de febrero de 2000.

sido fundamental para el éxito económico del Plan Colombia, pero el problema para Occidental estaba en que el Plan Colombia había sido concebido como un programa antinarcoóticos y había poca producción de coca en la región en la que Occidental operaba.

Después del levantamiento de las condiciones que limitaban la ayuda estadounidense en operaciones antinarcoóticos, Occidental finalmente obtuvo su paquete de ayuda extra como parte de la factura antiterrorista de 2002. Al año siguiente, la administración Bush suministró a Colombia 439 millones de dólares en financiamiento antidrogas más 93 millones adicionales en ayuda antiterrorista y desplegó tropas de las fuerzas especiales para entrenar a la 18.^a Brigada del ejército colombiano³⁰. La misión principal de esta brigada es la defensa del oleoducto de Caño Limón*, que en parte es propiedad y está operado por Occidental.

Las compañías petroleras extranjeras que operan en Colombia hace tiempo que se han visto implicadas en el conflicto civil. Las compañías pagan al gobierno colombiano para cubrir el costo de sus tropas que protegen su infraestructura e instalaciones. Las compañías también brindan apoyo logístico, inclusive el uso de helicópteros y vehículos de las compañías, a las unidades del ejército colombianas responsables de su protección. Los acuerdos entre las compañías y unidades específicas del ejército son y permanecen confidenciales, pero algunos detalles se filtran de acuerdos anteriores. A mediados de los años 90, según Human Rights Watch, British Petroleum realizó pagos por 11 millones de dólares durante tres años a la 16.^a Brigada por proteger sus operaciones en el departamento de Casanare. Igualmente Occidental Petroleum pagó 2 millones a la 18.^a Brigada en 1997 por la protección de sus instalaciones en Arauca. Human Rights Watch declara que ambas briga-

30. "The 2003 aid request", Centro para la Política Internacional, 24 de febrero de 2003.

* N. del T.: En español en el original.

das han sido responsables de violaciones de los derechos humanos durante el tiempo que estuvieron recibiendo estos pagos³¹.

Occidental tiene todo un historial de vínculos con unidades del ejército colombiano involucradas en violaciones de los derechos humanos. A mediados de los años 90 la compañía comenzó a explorar en el territorio tradicional de los indígenas U'wa en el departamento de Santander. Cuando más de trescientos U'wa bloquearon una carretera de acceso a un sitio de exploración de Occidental el 11 de febrero de 2000, el ejército colombiano atacó a los manifestantes desarmados y tres niños indígenas resultaron muertos en el conflicto.³² Otro incidente trágico que involucra a Occidental ocurrió el 13 de diciembre de 1998. Ese día un helicóptero del ejército colombiano arrojó una bomba de racimo de fabricación estadounidense en la aldea de Santo Domingo de Arauca, matando a dieciocho civiles y entre ellos siete niños. El piloto colombiano del helicóptero y la tripulación dijeron a los investigadores que habían planeado la operación en las instalaciones petroleras de esta compañía en Arauca. También declararon que un avión operado por la firma de seguridad AirScan apoyó al ejército colombiano en el ataque contra supuestos guerrilleros y que los tres tripulantes estadounidenses del avión suministraron las coordenadas para el fatal bombardeo. En ese tiempo AirScan era una compañía privada contratada para ayudar a proteger las operaciones de Occidental, incluso el oleoducto de Caño Limón³³.

El 24 de abril de 2003, International Labor Rights Fund radicada en Washington, D.C. y Center for Human Rights de la Facultad de Derecho de Northwestern, presentaron una demanda en el Juz-

31. "Colombia: human rights concerns raised by the security arrangements of transnational oil companies", Human Rights Watch, abril de 1998.

32. Steven Dudley, "In Colombia, a dispute fueled by oil", *Washington Post*, 21 de febrero de 2000.

33. T. Christian Miller, "Cutoff of aid a sign to Bogotá", *Los Angeles Times*, 14 de enero de 2003.

gado de Distrito a nombre de las familias de las víctimas del bombardeo de Santo Domingo. La demanda presentada bajo la Alien Tort Claims Act, declara que Occidental y AirScan fueron cómplices en la violación de los derechos humanos de las víctimas. Como en casos anteriores de demandas presentadas contra compañías estadounidenses que operan en Nigeria, Indonesia y Birmania, la administración Bush envió una carta al juez que presidía el caso pidiendo que los cargos fueran desestimados porque el caso podía afectar a la política exterior estadounidense³⁴. La administración Bush evidentemente no quería que las preocupaciones por los derechos humanos interfirieran en el suministro de ayuda antiterrorista al ejército colombiano y al despliegue de tropas especiales del ejército de Estados Unidos para la protección de las operaciones petroleras de Occidental Petroleum en Arauca.

El estado de seguridad nacional

La escalada militar de Estados Unidos coincidió con la solución militar del conflicto colombiano ideada por el nuevo presidente electo, Álvaro Uribe. Durante la campaña presidencial de 2002, la dura posición de Uribe contra los guerrilleros apelaba a aquellos colombianos desilusionados por el colapso de las conversaciones de paz del antiguo presidente Andrés Pastrana con las FARC. El derechista Uribe declaró que no negociaría con las FARC o cualquier otro grupo armado si antes no se acordaba un cese el fuego. La aproximación agresiva al asunto del nuevo Presidente colombiano también resonó en la administración Bush, ya que necesitaba desesperadamente un aliado de mano dura en Bogotá.

Desde que asumió el cargo en agosto de 2002, Uribe comenzó a implementar su estrategia de Seguridad Democrática y Defensa. Según la Ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, el objetivo de

34. Daniel Kovalik, "US State Department intervenes to protect Occidental against lawsuit for human rights crimes", ZNet, 13 de enero de 2005.

la estrategia era “nada más y nada menos que seguridad para cada ciudadano, cualquiera que sea su condición. Y la mejor garantía para la seguridad de cada ciudadano es el fortalecimiento del gobierno de la ley³⁵.” El primer paso de Uribe para “endurecer el gobierno de la ley” vino el 11 de agosto en forma de un decreto presidencial declarando un “estado de inseguridad nacional” equivalente a un estado de emergencia. Al ejército y la policía le fueron aumentados sus poderes, permitiéndoles realizar arrestos “preventivos” sin orden judicial y dando a las fuerzas de seguridad mayor flexibilidad para la conducción de investigaciones e intervención de teléfonos.

El 21 de diciembre, también como parte de su estrategia de seguridad democrática, Uribe estableció dos zonas llamadas de rehabilitación y de consolidación, en las cuales existían poderes militares mucho más allá de los concedidos bajo el estado de “inseguridad nacional”. Las zonas fueron establecidas para ayudar a consolidar el control del gobierno sobre áreas de importancia económica del país, particularmente las regiones productoras de petróleo. Una de las zonas de rehabilitación incluía parte de los departamentos de Sucre y Bolívar al norte de Colombia, mientras que otros comprendían una sección del departamento de Arauca en los llanos del este del país. La conexión entre las dos zonas era el oleoducto de Caño Limón, que comenzaba en el yacimiento de Occidental en Arauca, atravesaba la región este de los Andes y corría a través de los departamentos de Sucre y Bolívar hasta el puerto caribeño de Coveñas.

Uribe entregó a los comandantes militares en las zonas de rehabilitación el poder de exceder la autoridad de los funcionarios locales electos. Los militares podían restringir los movimientos civiles y establecer toques de queda. Todos los extranjeros, incluso

35. Marta Lucía Ramírez, “Democratic security, transnational threats and the rule of law”, Ministerio de Defensa de Colombia, 8 de octubre de 2002.

periodistas y trabajadores de los derechos humanos, tenían que pedir permiso al Ministro del Interior con ocho días de antelación para poder ingresar en las zonas. A los periodistas extranjeros se les exigió declarar para quién trabajaban, a dónde iban y por cuánto tiempo. Los detractores declararon que, al obligar a los periodistas extranjeros a pedir permiso para entrar en las zonas, se daba a la administración Uribe la oportunidad de censurar a los que intentaran criticar las políticas del gobierno. El 26 de noviembre de 2002, la estrategia de seguridad democrática de Uribe se vio en dificultades cuando la Corte Constitucional de Colombia decretó que la suspensión de las libertades civiles en estas zonas era anticonstitucional. El juez Alfredo Beltrán se sumó al decreto de la Corte declarando: "Uribe no puede actuar por encima de la Constitución; eso es dictatorial³⁶."

Entre las muchas acciones represivas emprendidas mientras existieron las zonas hay que consignar la concentración de más de dos mil residentes de Saravena, Arauca, que está localizada cerca del oleoducto de Caño Limón y era el lugar donde las tropas especiales estadounidenses iban a ser desplegadas dos meses después. Los arrestos masivos por parte del ejército colombiano se llevaron a cabo en la noche del 12 de noviembre y según Amnistía Internacional, "al terminar la noche, más de dos mil personas habían sido reunidas a punta de pistola y conducidas al estadio de Saravena donde fueron fotografiadas, filmadas, interrogadas, se controlaron sus antecedentes y fueron marcadas en los brazos con tinta indeleble... La mayoría de los defensores de los derechos humanos así como sindicalistas de una larga tradición y otros líderes comunitarios se encontraban entre los detenidos esa noche³⁷."

36. Frances Robles, "Colombian court nullifies tough security measures", *Miami Herald*, 28 de noviembre de 2002.

37. "A laboratory of war: repression and violence in Arauca", Amnistía Internacional, 20 de abril de 2004.

La administración Bush apoyó abiertamente las políticas de Uribe, a pesar de la naturaleza represiva de las tácticas del gobierno, que atacaban a sindicalistas y otros sectores civiles de la sociedad que criticaban las políticas del Presidente. En diciembre de 2002, el Secretario de Estado Colin Powell se reunió con Uribe y declaró: "Apoyamos la nueva estrategia de seguridad nacional. Es un plan comprensible para establecer una democracia saludable. Una parte clave de esa estrategia, es, de hecho, lo que hace posible todo lo demás, es el elemento del plan dirigido directamente a derrotar la fatal combinación de drogas y terrorismo³⁸."

Un año después de que Uribe asumiera su cargo, funcionarios de Washington y de Bogotá aplaudían el esfuerzo y el "éxito" de su estrategia. Funcionarios de ambos países enfatizaban la disminución de los asesinatos en un 16% durante el primer año de mandato de Uribe, pero olvidaban mencionar que el descenso en los homicidios era sólo en los comunes; los asesinatos políticos no disminuían. Según el grupo de derechos humanos CCJ, 6.978 personas fueron asesinadas por motivos sociopolíticos durante el primer año del mandato de Uribe, lo que representa la cifra de diecinueve personas diarias, la misma tasa que los dos años anteriores. El CCJ determinó que los paramilitares eran responsables de al menos el 62% de los asesinatos, más del doble de los cometidos por los guerrilleros³⁹. Los funcionarios subrayan con más acierto la caída en un 23% de los secuestros, lo que en parte se debía a la estrategia de Uribe de incrementar la protección militar de las carreteras del país, en las cuales los guerrilleros habitualmente secuestraban a los ciudadanos⁴⁰.

38. Secretario Colin Powell. "Press conference from Bogotá", Departamento de Estado de Estados Unidos, 4 de diciembre de 2002.

39. "Alerta frente a las cifras gubernamentales sobre derechos humanos en Colombia", Comisión Colombiana de Juristas, 4 de julio de 2003. Ver también "The effectiveness of the Colombian democratic security and defence policy", Ministro de Defensa de Colombia, agosto de 2003.

40. "The effectiveness of the Colombian democratic security and defence policy".

La situación de la seguridad para las personas en las ciudades colombianas había mejorado bastante, pero el conflicto proseguía en muchas regiones rurales del país. Mientras recomendaban los éxitos de Uribe, los funcionarios ignoraban las cifras récord de colombianos desaparecidos y el aumento de los desalojos. Durante los años 2002 y 2003, había 3.593 personas desaparecidas según la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES), una ONG colombiana. Este número representa un dramático incremento sobre las 3.413 personas desaparecidas entre 1994 y 2001⁴¹. En una tendencia que recuerda espantosamente la guerra sucia en Argentina, los paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado eran responsables de la mayoría de las desapariciones, según la ONU⁴². Como señaló Gloria Gómez de ASFADDES: "En Argentina, la tragedia ocurrió en poco espacio de tiempo y la imagen de la Junta con sus uniformes militares provoca fácilmente la antipatía internacional. Nuestro autoritarismo viste de traje y corbata y fue elegido democráticamente⁴³."

Mientras las políticas de seguridad de la administración Uribe lograban una disminución de los desalojos en el 2003, el número de colombianos desalojados de sus hogares y tierras por la violencia se incrementó significativamente el año siguiente. La Consultoría de Derechos Humanos y Desplazados (CODHES), una organización colombiana de los derechos humanos, notificó que 287.581 personas fueron desplazadas forzosamente en el 2004; un promedio de 780 personas diarias y un aumento del 38% sobre el pasado año⁴⁴. En total, 2,9 millones de personas o sea el 7% de la población de

41. Amaranta Wright, "In Colombia's jungles, echoes of Argentina's disappeared", *San Francisco Chronicle*, 12 de enero de 2004.

42. "UN urges Colombia rights action", BBC News, 14 de julio de 2005.

43. Wright, "In Colombia's jungles". Ver también Alfredo Castro, "Colombia's disappeared: 25 people a week go missing", *Counterpunch*, 29 de julio de 2002.

44. "Desplazamiento en cifras", Consultoría para Asuntos de Derechos Humanos y Desplazados (CODHES), 31 de marzo de 2005.

Colombia, ha sido desplazada a la fuerza desde 1985, convirtiendo al país en la segunda mayor población interna desplazada en el mundo después de Sudán⁴⁵.

La crisis del desplazamiento se ha complicado por la reducción de los fondos del gobierno para ayudar a los refugiados internos. En el 2001, la ayuda del gobierno era de 60\$ por persona desplazada, pero en el 2003 ha caído a 14\$ debido a la reducción de los programas sociales realizada por Uribe para cumplir con las demandas de ajuste estructural del FMI⁴⁶. Algunos de los desplazados colombianos fueron desalojados de sus tierras por ser sospechosos de simpatizar con alguno de los grupos armados, pero muchos fueron desplazados por los paramilitares porque sus tierras contenían valiosos recursos ambicionados por la elite económica colombiana y las transnacionales. Según Harvey Suárez Morales, director de CODHES, "el desplazamiento no es un efecto colateral de la guerra; es una estrategia central de la guerra. Es completamente funcional"⁴⁷.

A pesar de haber anunciado un cese el fuego unilateral en diciembre de 2002 en orden de comenzar conversaciones de desmovilización con el gobierno de Uribe, los paramilitares continúan siendo responsables de la mayor parte de la violencia perpetrada contra la población civil. Según Amnistía Internacional, "a pesar de la declaración de cese el fuego, los paramilitares aún siguen siendo responsables de masacres, asesinatos por encargo, 'desapariciones', torturas, secuestros y amenazas. Son supuestamente responsables por el asesinato o 'desaparición' de al menos 1.300 personas en 2003, más del 70% de todos los asesinatos y 'desapariciones' políticas no relacionados con los combates"⁴⁸.

45. "Internal displacement in the Americas", Proyecto Global IDP del Concejo de Refugiados Noruego, marzo de 2005.

46. Chip Mitchell, "Government reduces aid to the displaced", *Colombia Week*, 5 de abril de 2004.

47. Harvey Suárez Morales, entrevista con el autor, 13 de junio de 2003, Bogotá, Colombia.

48. "Amnesty International report 2004: Colombia", Amnistía Internacional, 26 de mayo de 2004.

A pesar de esta realidad, la administración Bush mantiene su enfoque antiterrorista firmemente centrado en las FARC y brinda ayuda a los militares estrechamente aliados de los paramilitares, inscritos en la lista de terroristas extranjeros del Departamento de Estado. En 2003, el Departamento de Estado de Estados Unidos en su propio informe anual sobre los derechos humanos admitió los vínculos entre el ejército colombiano y los paramilitares: "Algunos miembros de las fuerzas de seguridad colaboraron activamente con miembros de grupos paramilitares, franqueando los bloqueos de carreteras, compartiendo información, suministrando municiones y supuestamente incluso uniéndose a sus filas mientras estaban fuera de servicio". El informe añade: "La impunidad para el personal del ejército que colaboró con miembros de grupos paramilitares sigue siendo común⁴⁹."

La estrategia de seguridad democrática de Uribe también llevó a un dramático aumento de los arrestos por las fuerzas de seguridad del Estado. El 24 de agosto de 2003, alrededor de 600 soldados y policías invadieron hogares y arrestaron a 56 personas en Cajamarca, en el centro de Colombia. Entre estos detenidos estaban un anciano parapléjico y el cura local. Ese mismo mes, 128 personas fueron arrestadas en la ciudad de Sincelejo por supuestos vínculos con las FARC. Todos fueron encarcelados durante tres meses antes de ser liberados debido a la falta de evidencias⁵⁰. Las concentraciones en Cajamarca y Sincelejo fueron sólo dos ejemplos de las enérgicas medidas que aplicó la administración Uribe sobre grupos sociales civiles que critican las políticas del Presidente. Durante el primer año de mandato de Uribe, el CCJ declaró que 4.362 personas han estado sometidas a arrestos arbitrarios; casi el doble del

49. "Colombia: country reports on human rights practices - 2002", Departamento de Estado de Estados Unidos, 31 de marzo de 2003.

50. "Colombia: rights defenders under attack", Inter Press Service, 1 de septiembre de 2003.

total de los 6 años anteriores⁵¹. Según el grupo de derechos humanos colombianos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la mayoría fueron arrestados por sus actividades sociales o simplemente por vivir en áreas que las autoridades consideran “sospechosas”⁵².

El 8 de septiembre, dos semanas después de los arrestos masivos en Cajamarca, Sincelejo y otros lugares del país, Uribe lanzó un ataque verbal contra las ONG durante un discurso transmitido por la televisión nacional en una ceremonia militar en Bogotá. Durante su discurso, el Presidente acusó a grupos de derechos humanos de ser terroristas. Las acusaciones fueron hechas en respuesta a un informe de 172 páginas publicado ese mismo día por una coalición de ochenta ONG criticando las políticas del Presidente. El informe de las ONG declaraban que la situación de los derechos humanos empeoró bajo el mandato de Uribe debido a las “indiscriminadas operaciones militares” pensadas para alcanzar el “control social e implantar el terror en la población”. Como consecuencia, según el informe, el número de personas cuyos derechos humanos han sido violados debido a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias se había incrementado significativamente durante el primer año de Uribe como Presidente⁵³.

Durante su discurso, en lo que fue claramente una referencia a las ochenta organizaciones que emitieron el informe, Uribe declaró que había un grupo de ONG “haciendo política a favor del terrorismo”. Prosiguió diciendo que las ONG “se escudaban cobardemente detrás del estandarte de los derechos humanos para tratar de devolver al terrorismo el espacio que las fuerzas del orden y los ciudadanos le habían arrebatado”. El Presidente en ese momento vin-

51. “Colombia: en contravía de las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos, balance de la política de seguridad democrática y la situación de derechos humanos y derecho humanitario, agosto de 2002 a agosto de 2004”, Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), 15 de octubre de 2004.

52. “Colombia; rights defenders under attack”.

53. “El embrujo autoritario: primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, septiembre de 2003.

culó directamente a los grupos de derechos humanos con los guerrilleros cuando declaró: "Cada vez que una política de seguridad se pone en marcha en Colombia para derrotar al terrorismo, entonces es cuando los terroristas se empiezan a sentir débiles; inmediatamente lanzan a sus portavoces a hablar de derechos humanos⁵⁴."

El discurso de Uribe contradice declaraciones hechas por él mismo unos meses antes en junio de 2003 cuando, al explicar sus políticas, declaró: "Este gobierno rechaza la idea de 'seguridad nacional' de principios de siglo en Latinoamérica, que consideraba ciertos grupos ideológicos o partidos políticos como 'enemigos internos'." El Presidente también había declarado: "Seguridad y democracia no son mutuamente excluyentes. Por el contrario, la seguridad garantiza el espacio para el debate y el desacuerdo –el oxígeno de todas las democracias– de modo que esas diferencias de opinión no sean también un riesgo para la seguridad personal⁵⁵."

Tres semanas después de su ataque verbal contra las ONG, Uribe visitó Estados Unidos, donde se dirigió a la ONU y se reunió con el Secretario de Estado Colin Powell. No solamente Powell no le criticó por su reciente ataque contra los defensores de los derechos humanos, sino que le expresó todo su apoyo. Después de las declaraciones del Presidente colombiano en la ONU de que su gobierno respetaba el trabajo de los grupos de derechos humanos, Powell dijo que estaba impresionado por el "claro compromiso de Uribe con los derechos humanos en la continuación de esta guerra que estaba librando contra los terroristas y contra los señores de la droga en Colombia"⁵⁶.

54. Presidente Álvaro Uribe, "Palabras del Presidente Uribe en posesión de nuevo comandante de la FAC", Presidencia de la República, 8 de septiembre de 2003.

55. "Democratic security and defence policy", Ministerio de Defensa de Colombia, 16 de junio de 2003.

56. Presidente Álvaro Uribe, "Discurso del Presidente Uribe en la Asamblea de Naciones Unidas", Presidencia de la República, 30 de septiembre de 2003. Ver también Secretario Colin Powell, "Remarks after meeting with Colombian President Alvaro Uribe", Departamento de Estado de Estados Unidos, 30 de septiembre de 2003.

Las acusaciones de Uribe contra las ONG no hicieron más que ilustrar la actitud del Presidente colombiano con respecto a los derechos humanos; pusieron en peligro las vidas de los que trabajaban por los derechos humanos. Los paramilitares, quienes también veían a los defensores de los derechos humanos como simpatizantes de los guerrilleros, creyeron percibir que el mensaje de Uribe era una “luz verde” para atacar a los trabajadores de las ONG. La simetría entre las actitudes de Uribe y de los paramilitares con respecto a las ONG se hicieron evidentes en comentarios hechos por un comandante paramilitar de la AUC en Putumayo: “No es un secreto que las ONG están dirigidas por guerrilleros. Las ONG están dando dinero a ciertas personas para que éstas puedan demandar a los generales del ejército... Las ONG están dirigidas por los subversivos⁵⁷.”

Uribe y los paramilitares no fueron los únicos en relacionar las ONG con los guerrilleros colombianos. En febrero de 2000 el vicepresidente de Occidental Petroleum, Lawrence Meriage, testificó ante el Congreso de Estados Unidos en apoyo al Plan Colombia. Durante su testimonio, Meriage enfrentó la oposición a un proyecto petrolero de Occidental Petroleum en el norte de Colombia proclamando ante el Congreso: “Sólo dos grupos intentan bloquear el proyecto: los guerrilleros izquierdistas, quienes buscan socavar el gobierno democráticamente elegido del país, y algunas ONG de Estados Unidos. Ambos grupos están unidos en su oposición a la exploración y desarrollo del petróleo⁵⁸.”

Los peligros y obstáculos enfrentados por los trabajadores de ONG, particularmente los defensores de los derechos humanos, han sido enormes en Colombia. Según Adam Isacson, del Centro de Política Internacional radicado en Washington D.C., “en un país

57. Comandante Enrique, entrevista con el autor, 7 de febrero de 2001, *La Hormiga*, Putumayo, Colombia.

58. “Statement of Lawrence P. Meriage”.

donde más del 95% de los crímenes quedan impunes y los poderosos ponen tierra de por medio para proteger su impunidad, éste es un trabajo lleno de retos y a menudo peligroso. Aproximadamente un defensor de los derechos humanos es asesinado cada mes. Docenas de los más dinámicos activistas y expertos del país se han visto forzados al exilio en los últimos años⁵⁹.”

Mientras la estrategia de seguridad de Uribe probaba ser efectiva en cierta forma contra los grupos sociales colombianos, estaba pasando apuros en el campo de batalla. Después de algunas victorias iniciales contra los rebeldes durante sus dos primeros años de mandato, el ejército colombiano de pronto se encontró a la defensiva en el 2005. Una serie de ataques de las FARC contra unidades del ejército colombiano a través de todo el país demostraba que más de dos años de políticas de seguridad de Uribe no habían podido socavar seriamente la fuerza militar de las guerrillas. En uno de sus más intrépidos ataques desde que Uribe asumiera la presidencia, las FARC asaltaron a gran escala las bases militares y convoyes en los departamentos de Antioquia, Arauca, Santander del Norte, Putumayo y Nariño durante los primeros seis meses del año. Los ataques dejaron más de doscientos soldados muertos y provocaron la renuncia del ministro de defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe, quien no tiene relación con el presidente Uribe.

En febrero de 2005 la 17.^a Brigada respondió al ataque de las FARC, que había aniquilado a 21 de sus efectivos en Urabá, en la región de Antioquia, dirigido contra la tranquila comunidad San José de Apartadó. Los residentes habían declarado que su municipalidad era una comunidad pacífica en 1997, estableciendo que estaba fuera de los límites de todas las fuerzas armadas en conflicto: guerrilleros, paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado. La demanda de la comunidad de que los soldados del gobierno o la policía no entraran en su territorio, condujo a repetidas acusaciones

59. Adam Isacson, “Firm hand, large heart”, *Human Rights Dialogue*, Fall 2002.

por parte de los militares y los paramilitares de que los residentes de San José eran simpatizantes de los guerrilleros. El 21 de febrero de 2005, soldados de la 17.^a Brigada entraron en la aldea de Mulas de dicha municipalidad y asesinaron a cinco adultos y cuatro niños, incluso al fundador y líder de la comunidad Luis Eduardo Guerra-Guerra. Según los testigos, los soldados amenazaron con traer paramilitares para matar al resto de los residentes e incluso bromearon sobre la decapitación de una niña⁶⁰.

La estrategia de seguridad democrática de Uribe estaba claramente afectando a aquellos ciudadanos, como los residentes de San José de Apartadó, que estaban buscando activamente soluciones alternativas al conflicto colombiano. El sociólogo James Brittain señaló: “Las grotescas actividades llevadas a cabo por la 17.^a Brigada, como declararon y atestiguaron vecinos de la región, constituyen otro ejemplo de los esfuerzos antiguerilleros del Estado colombiano para inhabilitar el apoyo y la futura expansión de los movimientos sociales que luchan por cambiar Colombia⁶¹.”

Al mismo tiempo que la administración Uribe atacaba a los civiles que criticaban la política del gobierno, ofrecía una amnistía virtual a los paramilitares del país. El AUC anunció un cese el fuego en diciembre de 2002 para entrar en conversaciones de desmovilización con el gobierno. El cese el fuego demostró ser una farsa, mientras, según el CCJ, los paramilitares participantes en las conversaciones habían matado al menos 1.899 civiles en el período de 21 meses después del cese el fuego⁶². A pesar de las flagrantes violaciones del cese el fuego, el gobierno continuó negociando con el AUC, mientras que simultáneamente desmovilizaba unidades

60. “The massacre at Mulas in Colombia: an investigative report”, Red de Asistencia Social de Colombia, 26 de junio de 2005.

61. James J. Brittain, “The reactionary restriction of justice in Colombia”, *Colombia Journal*, 2 de mayo de 2005.

62. “Listado de víctimas de violencia sociopolítica en Colombia”, Comisión Colombiana de Juristas, agosto de 2004.

paramilitares, a pesar de no existir ninguna constancia legal al respecto. En junio de 2005 el Congreso Colombiano finalmente aprobó la ley de Paz y Justicia, que definía un marco legal para el proceso de desmovilización. Con la nueva ley, los líderes del AUC culpables de violaciones de los derechos humanos, incluso masacres, podían recibir la insignificante condena de 22 meses de prisión. El proceso de desmovilización tampoco pudo asegurar que los líderes paramilitares dismantelaran sus redes de tráfico de drogas⁶³.

Las negociaciones de Uribe condujeron sólo a una desmovilización parcial de los paramilitares, mientras un estimado de 3.000 combatientes de varios grupos disidentes que habían rehusado participar en el proceso permanecían activos. Aún más, en algunos casos el proceso de desmovilización falló en desmovilizar de hecho unidades paramilitares. La “desmovilización” de noviembre de 2003 del cacique de la AUC Nutibara Bloc en Medellín, por ejemplo, no terminó las actividades paramilitares de ese grupo en la segunda ciudad más grande de Colombia. Dice Amnistía Internacional, dos años después de su desmovilización:

Los paramilitares continuaron operando como una fuerza militar, asesinando y amenazando a los defensores de los derechos humanos y a los activistas comunitarios locales, reclutando y actuando en conjunto con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en vez de operar en grupos grandes, uniformados y fuertemente armados como lo hacían en el pasado, ahora estaban camuflando cada vez más sus actividades haciéndose pasar por miembros de empresas privadas de seguridad o actuando como informantes para las fuerzas de seguridad⁶⁴.

63. Juan Forero y Mónica Trujillo, “New Colombia law grants concessions to paramilitaries”, *New York Times*, 23 de junio de 2005.

64. “Colombia: new report reveals paramilitary demobilisation strategy is a deadly illusion”, Amnistía Internacional, 2 de septiembre de 2005.

El gran regalo del petróleo

Al mismo tiempo que estaba negociando con los paramilitares e intensificando la guerra contra los guerrilleros y la oposición política, Uribe pensó hacer más eficiente la economía de la nación. Sus políticas económicas estaban dictadas principalmente por el FMI que pedían, entre otras cosas, la reestructuración y privatización de las compañías estatales.

En enero de 2003, un aumento de la ayuda militar estadounidense a Colombia coincidió nuevamente con demandas para implementar reformas económicas neoliberales. El FMI suministró un préstamo a Colombia de 2,1 mil millones de dólares en dos años sólo meses después de que la administración Bush acordara suministrar ayuda contra el terrorismo y desplegar tropas especiales del ejército de Estados Unidos en Colombia. Según el FMI, en reciprocidad por el préstamo, “las autoridades colombianas intentarían tomar las medidas necesarias para asegurar el financiamiento de la deuda pública y mantener el ritmo de pagos de esta deuda. Según esto, el programa pedía... reformas estructurales claves y mejoras administrativas en el sector público”. El acuerdo de préstamo también requería que el déficit fiscal del país “fuera reducido a un 2,5% del PIB en el 2003 y a un 2,1% en el 2004 de un estimado del 4% en el 2002”⁶⁵. Para implementar estas reformas neoliberales y tener dinero para pagar la deuda externa del país –los 39,4 mil millones de dólares adeudados a instituciones internacionales de préstamos en el 2002 constituían el 46,2% del PIB del país– la administración Uribe aceptó privatizar y reestructurar compañías estatales y recortar miles de empleos en el sector público⁶⁶.

Las dos agendas de la administración Uribe –seguridad y economía– no se excluían mutuamente. Miembros de la sociedad civil

65. “IMF approves a US\$2.1 billion stand-by credit for Colombia”, Fondo Monetario Internacional, 15 de enero de 2003.

66. John Price, “Colombia: balancing war with growth”, Infoamericas Tendencias: Latin American Market Report, 5 de julio de 2002.

que criticaron las políticas económicas neoliberales de Uribe se encontraron pronto estigmatizados como “terroristas” o “subversivos” por el gobierno. Un detractor de las políticas económicas de Uribe, Hernando Hernández, secretario de asuntos internacionales de la poderosa Unión de Trabajadores del Petróleo (USO), fue acusado de mantener relaciones con organizaciones terroristas. Hernández fue arrestado en enero de 2003 y permaneció encarcelado hasta marzo de 2004, a pesar de que no se presentaron contra él acusaciones de ningún crimen.

Hernández y otros miembros de la USO fueron acerbos críticos de la implementación en Colombia de reformas neoliberales, en particular las referidas al sector petrolero. En 2001, para complacer las demandas de ajuste estructural del FMI, el gobierno colombiano estableció nuevas regulaciones que permitían a las compañías extranjeras quedarse hasta con un 70% del petróleo extraído de los nuevos yacimientos. La nueva división 70-30 de los derechos petroleros a favor de las compañías extranjeras reemplazó la de 50-50 que existía previamente en los contratos de asociación de transnacionales con la compañía de petróleo estatal Ecopetrol. Las nuevas regulaciones también extendían el período de tiempo durante el cual las compañías extranjeras retenían los derechos de producción y disminuyó sustancialmente las cifras que éstas pagaban al gobierno por los derechos sobre su parte de la producción de petróleo. Antes de las nuevas regulaciones, Colombia había exigido un alto –para Latinoamérica– 20% por los derechos, pero la nueva reglamentación incluía una escala descendente bajo la cual la mayoría de los yacimientos colombianos –los que producían menos de 5 mil barriles diarios– estaban obligados a sólo un 8% en pago por los derechos. El gobierno declaró que estos cambios eran necesarios para hacer al país más competitivo, promover la inversión extranjera y mantener la autosuficiencia petrolera. Mientras tanto, Colombia aumentó su tasa de impuestos de un 35% a un 38,5% a finales

de 2002, los impuestos adicionales sobre ganancias no comenzaron a compensar la disminución en los derechos de producción de petróleo y las pérdidas de ganancia derivadas de la reducción de la parte de la producción que correspondía a Ecopetrol⁶⁷.

El 26 de junio de 2003, para cumplir las demandas del FMI bajo el más reciente acuerdo de préstamo, Uribe emitió el Decreto Ejecutivo No. 1760 anunciando la liquidación de la compañía estatal Ecopetrol, que había obtenido 558 millones de dólares en ganancias el año anterior⁶⁸. El gobierno, anticipándose a la resistencia de los trabajadores a la reestructuración que se les venía encima, desplegó tropas en todas las instalaciones de Ecopetrol tres semanas antes para impedir que los trabajadores sindicalizados protestaran. En esa reestructuración, Ecopetrol fue dividida en tres compañías: una nueva compañía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que fue establecida para administrar y ubicar las áreas de exploración de hidrocarburos; otra nueva compañía llamada Asociación de Promoción Energética Colombiana fue creada para manejar los asuntos promocionales; y una truncada Ecopetrol iba a manejar la producción y el refinamiento.

Mientras esto no fue realmente una privatización de la compañía estatal, la reestructuración finalmente tuvo el mismo efecto cuando el Ministro de Energía colombiano, Luis Ernesto Mejía, anunció reformas adicionales ocho meses después en Houston, Texas. Con las nuevas regulaciones, las compañías extranjeras podían negociar contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos sin entrar en sociedad con Ecopetrol. Por su parte, Ecopetrol tendría que competir por los contratos con las compañías extranjeras. Los nuevos términos también eliminaban el tiempo límite

67. "Economist Intelligence Unit - executive briefing: Colombia", *Economist*, 1 de diciembre de 2004.

68. "Colombia breaks up state agencies in deficit-cutting plan", *Bloomberg News*, 27 de junio de 2003.

sobre los derechos de producción permitiendo a las compañías mantener el 100% del petróleo por el tiempo que el yacimiento fuera productivo⁶⁹. La mayoría de las compañías extranjeras continuarían pagando sólo una tasa de derecho del 8%. Está claro que los términos habían cambiado significativamente a favor de las compañías extranjeras, considerando que los contratos firmados cuatro años antes exigían sociedad en iguales condiciones con Ecopetrol, 20% de tasas de derecho y un tiempo límite de producción, después del cual todo el petróleo que quedaba y los bienes de perforación tendrían que ser devueltos a Ecopetrol.

La administración Uribe justificó sus políticas petroleras ante el pueblo colombiano declarando que era necesario evitar que el país se convirtiera en un importador neto de petróleo. Para satisfacer su creciente demanda interna y para permanecer como exportador, Colombia necesitaba producir más petróleo. Mientras las reformas de Uribe probablemente incrementarían la producción de petróleo en el futuro, el hecho de que Colombia pudiera continuar siendo autosuficiente o como exportador neto, era meramente un tecnicismo. Ecopetrol de hecho no producía todo el petróleo que el país consumía y exportaba; compraba la mayor parte a tasas de mercado a compañías extranjeras que operaban en Colombia, debido a que algunos contratos permitían a estas compañías vender parte de la producción a Ecopetrol. En el departamento de Putumayo, por ejemplo, tanto la canadiense Petrobank como Argosy Energy, radicada en Houston, vendían su petróleo a precios de mercado a Ecopetrol en cuanto estaba en la superficie. Ecopetrol entonces transportaba el petróleo a través del oleoducto Transandino hasta la costa del Pacífico para exportarlo a Estados Unidos⁷⁰.

69. Phil Stewart, "Oil declining, Colombia offers new deal in Houston", Reuters, 9 de marzo de 2004.

70. Funcionario de Ecopetrol, entrevista con el autor, 5 de marzo de 2004, Bogotá, Colombia.

Una de las primeras compañías en beneficiarse de los nuevos términos de contrato fue Harken Energy, radicada en Texas. El 4 de noviembre de 2004, Harken anunció que su sucursal Global Energy Development había firmado un contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Como consecuencia, dice Harken, la compañía “poseerá el 100% del petróleo del contrato por el pago inicial de sólo un 8% en derechos al Ministerio Colombiano de Energía”. En otras palabras, debido a que a Harken no se le exigió entrar en sociedad con Ecopetrol, poseía los derechos del 100% del petróleo. Harken proseguía diciendo que “el contrato le garantizaba la exploración exclusiva y los derechos de producción sobre 85 mil acres adyacentes al yacimiento de Palo Blanco, ya establecido y en producción” y sus “reservas comprobadas de aproximadamente 1,8 millones de barriles”⁷¹.

Mientras contratos como el firmado por Harken ayudarían a incrementar la producción petrolera de Colombia en los próximos años, el petróleo sería producido principalmente por compañías extranjeras. Aún más, como se dijo antes, Colombia entonces tendría que adquirir la mayor parte de este petróleo a los mismos precios del mercado mundial que tendría que pagar por el crudo extranjero. El petróleo extraído por compañías extranjeras, sin embargo, no se considera como importado porque es producido en Colombia. Por esta razón, aún a sabiendas de que Colombia está pagando precios internacionales por su propio petróleo, técnicamente el país permanece como exportador. A pesar de los favorables términos para las compañías extranjeras y la disminución de los beneficios financieros para Colombia en los términos de los nuevos contratos, José Armando Zamora, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, insiste en que las concesiones de los contra-

71. “Harken energy subsidiary acquires new 85,000 acre exploration and production contract for the Los Hatos area in Colombia”, Harken Energy, 4 de noviembre de 2004.

tos “no representan una pérdida de la soberanía o la venta de los recursos de la nación”⁷².

La guerra del petróleo en Arauca

Mientras las compañías petroleras extranjeras que operan en Colombia se beneficiaban económicamente de las reformas estructurales impuestas por el FMI, aún enfrentaban el problema de la falta de seguridad en las regiones productoras de petróleo. Poco después de asumir su cargo, Uribe respondió a ésta y otras preocupaciones sobre la seguridad implementando su estrategia de defensa y seguridad democrática. Mientras tanto, la administración Bush respondió a las preocupaciones con respecto a la seguridad de Occidental Petroleum en Arauca suministrando ayuda antiterrorista a Colombia y desplegando setenta soldados de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos para ayudar a proteger el oleoducto y el yacimiento de Caño Limón, uno de los pocos en el mundo que cuenta con cincuenta mil millones de barriles. El petróleo es el principal interés económico estadounidense en Colombia. Es también la exportación legal número uno de Colombia. Los departamentos orientales de Arauca y Casanare concentran la mayor parte de las reservas comprobadas de Colombia. La otra región clave en la producción de petróleo es el departamento de Putumayo, el blanco principal de la guerra estadounidense contra la droga en Colombia.

En enero de 2003, 70 soldados estadounidenses –30 radicados en la capital del departamento, Arauca City, y 40 en la ciudad de Saravena– fueron desplegados en una región que ha estado bajo la influencia de las FARC y el ELN durante largo tiempo. Los guerrilleros se beneficiaron del descubrimiento de petróleo a principios de la década de 1980 extorsionando a los contratistas que trabaja-

72. José Armando Zamora, “El contrato de asociación no da más”, *Carta Petrolera*, agosto-octubre de 2003.

ban para Occidental y a las municipalidades locales que recibían un porcentaje. Mientras que el ELN había estado promoviendo su ideología marxista en la región desde mediados de la década de 1960, las FARC no establecieron su presencia hasta la década de 1980.

En el 2001, los rebeldes demandaron que el gobierno nacionalizara totalmente la industria petrolera poniendo bombas en el oleoducto de Caño Limón unas 170 veces, cerrándolo por 240 días a lo largo del año y costando a Occidental 100 millones de dólares⁷³. La persistente presión de la compañía petrolera en apoyo a la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia dio resultados a principios de 2003 cuando la administración Bush desplegó las tropas estadounidenses en Arauca y el Congreso aprobó 93 millones de dólares en ayuda antiterrorista para la protección del oleoducto. Con el paquete de ayuda, los contribuyentes estadounidenses comenzaron a pagar 3,55\$ en costos de seguridad por cada barril de Occidental enviado a través del oleoducto. Esta cifra está en agudo contraste con los 50 centavos de seguridad por barril que dedica la compañía de sus propios costos⁷⁴. Con la guerra de Irak en el horizonte y la inestabilidad de Venezuela, Colombia se convirtió en una importante fuente alternativa de petróleo. Colombia ya se encontraba entre los principales suministradores de petróleo a Estados Unidos cuando, después del 11/9, la embajadora estadounidense en Colombia Anne Patterson declaró: “Colombia tiene potencial para exportar más petróleo a Estados Unidos, y ahora más que nunca, es importante para nosotros diversificar nuestras fuentes de petróleo⁷⁵.”

73. Portavoz de Occidental Petroleum, entrevista con el autor, 10 de febrero de 2003, Bogotá, Colombia.

74. “The real costs of pipeline protection in Arauca: corporate welfare with deadly consequences”, Testigos por la Paz, julio de 2002. La cifra de Testigos por la Paz de 3,70\$ por barril está basada en los 98 millones de dólares en ayuda pedidos por la administración Bush. El Congreso aprobó solo 93 millones, lo cual bajó los costos de subsidio a 3,55\$ por barril.

75. “Protecting the pipeline: the US military mission expands”, Oficina de Washington para Latinoamérica, mayo de 2003.

En el 2002, Occidental Petroleum extraía 100 mil barriles diarios del yacimiento de Caño Limón y se estima que algo así como 120 millones de barriles quedaban aún en la reserva comprendida en la frontera entre Venezuela y Colombia.⁷⁶ El problema para Occidental era que cada vez que se detenía el bombeo en el lado colombiano por un ataque rebelde, la producción del lado venezolano continuaba. Dado que no existían acuerdos entre Occidental y la compañía petrolera nacional venezolana PDVSA con respecto a la extracción de petróleo del yacimiento de Caño Limón, los venezolanos se beneficiaban con un incremento en la producción cada vez que Occidental se veía obligada a detener el bombeo.

Los cuarenta soldados de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos estacionados cerca del oleoducto en Saravena fueron enviados a una base militar en las afueras de la ciudad. Mientras los soldados estadounidenses llevaban a cabo su misión de brindar entrenamiento contra los guerrilleros a las tropas colombianas en los relativamente seguros confines de la base militar, los ciudadanos de Saravena permanecían indefensos ante las batidas del ejército y la policía y los frecuentes ataques rebeldes. Un firme apoyo popular en los barrios pobres permitió a los rebeldes atacar el centro de Saravena con bombas, morteros, granadas o cañones durante ochenta días distintos en 2002⁷⁷.

Poco después de su llegada a Saravena en julio de 2002, el comandante de la unidad de policía nacional de la ciudad, Mayor Joaquín Enrique Aldana, recibió un destacamento de cien carabineros* (policía militarizada) quienes habían sido especialmente entrenados por un programa a cargo del 7.º Grupo de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos en una base de Tolemaida en el centro de Colombia; la fuerza nacional de policía del país está

76. Entrevista al portavoz de Occidental Petroleum.

77. Mayor Joaquín Enrique Aldana, entrevista con el autor, 4 de febrero de 2003, Saravena, Arauca, Colombia.

* N. del T.: En español en el original.

bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa de Colombia. Este programa brinda entrenamiento militar estadounidense a unidades de policía con armamento pesado con la intención de enviarlos a zonas rurales. Saravena fue una de las primeras ciudades en recibir un destacamento de carabineros y su presencia provocó que el Mayor Aldana se jactara: “Hemos comenzado a derrotar a los terroristas que se esconden detrás del miedo que inyectan en el pueblo”⁷⁸. Como todos los oficiales del ejército y la policía colombiana desde el 11/9, el comandante, experto en política, repetidamente usaba la palabra “terrorista” al referirse a los guerrilleros.

Mientras el Mayor de Saravena, José Trinidad Sierra, dio la bienvenida al incremento de la presencia militar y policíaca en su maltratada ciudad, criticó también el fracaso del gobierno nacional para enfrentar las dolencias sociales y económicas de la región. Según Trinidad, “los habitantes de Saravena le han estado pidiendo al gobierno inversiones sociales. Creemos que los problemas del orden público no se van a resolver con la presencia de fuerzas públicas. Esto tiene que ser complementado con inversiones sociales. Le hemos pedido al gobierno que nos ayude a generar empleos. Y también hemos pedido inversiones en educación y salud”⁷⁹.

Sumado al fracaso de Washington y Bogotá de suministrar ayuda social y económica efectiva a Arauca, la administración Uribe comenzó a retener el 9,5% de su parte de las ganancias del petróleo de la nación. Las localidades municipales que se asientan sobre el yacimiento de Caño Limón fueron privadas también del 2,5% adicional de las ganancias del petróleo que recibían normalmente. Según Uribe, demasiado dinero del petróleo estaba terminando en las manos de los rebeldes a través de la extorsión o de políticos locales simpatizantes.

78. *Ibíd.*

79. Alcalde José Trinidad Sierra, entrevista con el autor, 6 de febrero de 2003, Saravena, Arauca, Colombia.

Mientras tanto, los soldados estadounidenses dieron entrenamiento contra-guerrillero a la 18.^a Brigada del Ejército colombiano. Los consejeros militares estadounidenses enseñaron a las tropas colombianas cómo llevar a cabo misiones de reconocimiento y cómo enfrentar la guerra de guerrillas, entre otras cosas. La insignia de la 18.^a Brigada incluía una torre petrolera, y su comandante, el General de Brigada Carlos Lemus, dirigía las operaciones desde una oficina llena de suvenires que llevaban el nombre de la compañía cuyo petróleo debía proteger. Occidental Petroleum contribuyó tanto con dinero como con apoyo logístico, incluyendo helicópteros de transporte, a que la 18.^a Brigada protegiera el oleoducto. El General Lemus explicó la necesidad de la ayuda militar y el entrenamiento: “Necesitamos algunas de estas cosas para ayudar a proteger el oleoducto y brindar mayor movilidad, entrenamiento y más capacidad de información que permitan a nuestras tropas responder a los ataques de forma más rápida y eficiente⁸⁰.” El programa de entrenamiento marcó un cambio significativo en la política militar estadounidense en Colombia, pasó de concentrarse exclusivamente en los cultivos de coca, los campos de amapola y los laboratorios de procesamiento de drogas a un nuevo énfasis en la contraguerrilla.

El nuevo papel de Estados Unidos significaba que los soldados estadounidenses estarían trabajando con las tropas colombianas, cercanos aliados de las tropas paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos. En el 2001, los paramilitares fueron responsables del 70% de los más de 420 asesinatos políticos –incluyendo los asesinatos de dos congresistas locales– en las cercanías de Arauca City⁸¹. Mientras el General Lemus negaba que

80. General de Brigada Carlos Lemus, entrevista con el autor, 9 de agosto de 2002, Arauca City, Arauca, Colombia.

81. Gary Marx, “Imperiled pipeline gets US troops in Colombia”, *Chicago Tribune*, 12 de noviembre de 2002.

existieran vínculos entre sus tropas y los paramilitares, Amnistía Internacional declaró haber “recibido información de una gran con-fabulación entre unidades de la 18.^a Brigada del Ejército colombiano y paramilitares, inclusive informes de operaciones conjuntas o unidades del ejército que usaban brazaletes paramilitares y se identificaban como tales”⁸². En un caso extremo de mayo de 2003, paramilitares y soldados de la 18.^a Brigada entraron en la reserva indígena de Betoyes en la municipalidad de Tame como parte de una ofensiva llamada Operación Coloso. Los asesinos violaron y mataron a una muchacha indígena de 16 años embarazada y le sacaron el feto del vientre antes de deshacerse del cuerpo en el río⁸³. Cuando le preguntaron acerca de la estrategia de los paramilitares de entrar en las aldeas y masacrar civiles desarmados acusados de ser colaboradores de los guerrilleros, un soldado de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos en Saravena replicó: “A veces eso es lo que uno tiene que hacer, supongo”⁸⁴.

Mientras los paramilitares tenían el control de Tame y Arauca City, donde estaban emplazados 30 de los soldados estadounidenses, en Saravena sólo comenzaban a afianzarse. Por tanto, era el ejército el que principalmente tenía que enfrentarse a décadas de gobierno rebelde en los barrios de Saravena. La 18.^a Brigada desplegaba regularmente su unidad de operaciones psicológicas en vecindarios marginales, ostensiblemente empeñados en la batalla por ganarse “los corazones y las mentes” de los residentes locales.

Una de estas estrategias psicológicas iba dirigida específicamente hacia los niños. En un programa denominado “Soldado por un Día” niños entre 3 y 17 años de edad eran llevados todos los jue-

82. “Fear for safety/possible disappearance: Colombia indigenous and peasant farmer communities in Tame municipality, department of Arauca”, Amnistía Internacional, 3 de junio de 2003.

83. “Amnistía Internacional Report 2004”, Amnistía Internacional, 26 de mayo de 2004.

84. Soldado de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, entrevista con el autor, 5 de febrero de 2003, Saravena, Arauca, Colombia.

ves a la base del ejército para hacer de soldados. Las actividades implicaban a tropas colombianas y a psicólogos del ejército uniformados que colocaban cintas en las cabezas de los niños y pintaban sus caras con maquillaje de camuflaje. Al mismo tiempo, dos soldados disfrazados de payaso entretenían a los niños. Durante la experiencia, los “pequeños soldados” eran continuamente bombardeados con la inevitable propaganda a favor del ejército y contra los rebeldes. Finalmente, después de una zambullida en la piscina del campamento, se paseaba a los niños alrededor del campamento en un camión de transporte de personal equipado con una ametralladora calibre 50⁸⁵.

Paola Alzate Acosta, una psicóloga del ejército vestida con traje de camuflaje, declaraba que el programa ayudaba a los niños a enfrentar los traumas provocados por la violencia que experimentaban con tanta frecuencia en Saravena. Según Alzate, los niños “sueñan con aprender a manejar un arma para matar a los hombres malos del vecindario. Sueñan con aprender a manejar un tanque que les permita destruir las bombas cilindro”⁸⁶. Pero el programa tiene otros beneficios militares más inmediatos: aleccionar a los niños de los barrios marginales controlados por los rebeldes, brindando al ejército una valiosa fuente de información sobre las actividades no sólo dentro de los barrios, sino también dentro de las propias casas y familias de los niños. Cuando se le preguntó si algunos de esos niños eran hijos de guerrilleros, Alzate respondió: “En muchos casos estos son niños cuyos padres están en las milicias y presentan problemas para distinguir lo que está bien de lo que está mal”. Y añadió: “En algunos casos, cuando les ponemos cintas de camuflaje, ellos dicen que no se las pueden llevar a sus casas porque sus padres los regañarán. Cuando pasa este tipo de cosas, tra-

85. Actividades presenciadas por el autor el 6 de febrero de 2003, Saravena, Arauca, Colombia.

86. Paola Alzate Acosta, entrevista con el autor, 6 de febrero de 2003, Saravena, Arauca, Colombia.

tamos de hablar con ellos para averiguar qué sucede en sus hogares⁸⁷.”

Los grupos locales de derechos humanos han cuestionado las tácticas utilizadas por el ejército para atraer a los niños a estos programas. Según una mujer de Saravena, quien nos pidió anonimato por razones de seguridad, ella estaba una tarde en casa de una amiga cuidándole los hijos cuando llegaron los soldados y comenzaron a invitar a los niños para ir a ver a los payasos. Los soldados les dieron dinero y dulces y acusaron a la mujer de ser guerrillera cuando ella se negó a dejarlos ir. Ella dice que los soldados “estaban preguntando a los niños acerca de su madre y su padre” y entonces “entraron y revisaron la casa, mirándolo todo”⁸⁸.

Mientras algunas de estas estrategias psicológicas y de recolección de información parecen contravenir la Convención de Ginebra con respecto a implicar a civiles, particularmente niños, en conflictos armados, éstas cuentan con el apoyo de los consejeros militares estadounidenses en Colombia. Un soldado de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos de servicio en Saravena enfatizó la importancia de las operaciones psicológicas cuando declaró: “Esta guerra no se va a ganar con balas; se va a ganar atrayendo a la gente hacia el bando del ejército colombiano. Tú no vas a derrotar a los guerrilleros metiéndote en la selva como en Vietnam”⁸⁹.

La 18.^a Brigada del Ejército colombiano no sólo ha usado esta táctica poco convencional contra los guerrilleros; también han tomado como blanco a civiles detractores de las políticas del gobierno. Durante 2003, hubo numerosos arrestos masivos de líderes sindicales, defensores de los derechos humanos y políticos de la oposición, que fueron acusados de mantener vínculos con grupos

87. *Ibíd.*

88. Entrevista realizada por un grupo colombiano de derechos humanos a un residente local el 5 de febrero de 2003 en Saravena, Arauca, Colombia.

89. Soldado de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, entrevista con el autor.

“terroristas”, particularmente guerrilleros. El 21 de agosto en Saravena, soldados de la 18ª Brigada invadieron los hogares y arrestaron a 42 sindicalistas, activistas sociales y defensores de los derechos humanos. Entre los arrestados y acusados de ser “subversivos” se encontraba Alonso Campiño Bedoya, líder de la sección regional del mayor sindicato del país, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT); y José Murillo Tobo, presidente del Comité Regional de los Derechos Humanos “Joel Sierra”. Murillo había criticado recientemente la confabulación existente entre el ejército colombiano y los paramilitares en Saravena⁹⁰. La movida fue llevada a cabo por soldados colombianos de la misma base que alberga a las fuerzas especiales estadounidenses.

Según Amnistía Internacional, “los arrestos se produjeron después de una avalancha de acusaciones contra el Comité [Regional de los Derechos Humanos Joel Sierra] de ser colaboradores subversivos, realizadas por las fuerzas de seguridad en los últimos meses⁹¹.” Sólo dos meses antes cerca de Tame –una localidad fuertemente militarizada con predominio de presencia paramilitar– el comisionado del alcalde había declarado que el Comité de Derechos Humanos y los guerrilleros eran la misma cosa. Cuando se le preguntó por las actividades de esta organización de derechos humanos, el comisionado sostuvo una amenaza de muerte de las FARC enviada por fax al alcalde Jorge Bernal y declaró: “Esto lo enviaron ellos, esto es de un grupo ilegal, de las FARC-ELN; ése es el grupo de derechos humanos⁹².”

En octubre de 2003, soldados de la 18.ª Brigada del Ejército colombiano arrestaron a más de 25 políticos en el departamento de Arauca, menos de una semana antes de las elecciones locales. Entre

90. “Colombia: trade unionists and human rights defenders under attack”, Amnistía Internacional, 27 de agosto de 2003.

91. *Ibid.*

92. Alcalde Jorge Bernal y vicealcalde, entrevista con el autor, 9 de junio de 2003, Tame, Arauca, Colombia.

los arrestados, por ser sospechosos de tener vínculos con los guerrilleros, estaba el alcalde de Arauca City, el presidente de la Asamblea Regional, un candidato para gobernador y 5 candidatos a alcalde. La Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, explicó los arrestos: “Desafortunadamente, grupos terroristas han infiltrado el departamento de Arauca a todos los niveles⁹³.” Pero Amnistía Internacional acusó a la administración Uribe de politizar los derechos humanos, declarando: “Todo eso tiene que ver con silenciar a los que hacen campaña por los derechos humanos y socioeconómicos”. La fecha de los arrestos, sólo días antes de las elecciones locales, también provocaron que un portavoz de Amnistía declarara: “Esto es parte de una estrategia para socavar la credibilidad de la oposición⁹⁴.” En marzo de 2002, el líder de la AUC Salvatore Mancuso había declarado que la AUC controlaba el 35% del Congreso colombiano. Mientras que el gobierno admitía la presencia de simpatizantes de los paramilitares en el Congreso, ninguno de estos políticos vinculados con la AUC fueron arrestados, ni siquiera cuando funcionarios de alto rango del gobierno declararon que “los terroristas han infiltrado” el gobierno nacional “a todos los niveles⁹⁵.”

El 5 de agosto de 2004, soldados colombianos de la base que albergaba los consejeros militares estadounidenses se aventuraron de nuevo en los barrios de Saravena. Esta vez, los soldados sacaron a tres líderes sindicalistas de sus camas en medio de la noche y los ejecutaron. El ejército colombiano declaró al principio que los tres sindicalistas eran guerrilleros armados muertos en combate. Una investigación conducida por grupos de derechos humanos locales e internacionales condujo a que la oficina del Fiscal General abriera su propia investigación. Un mes después de los asesinatos, el vicefiscal general Luis Alberto Santana anunció: “La evidencia muestra

93. “Colombia: mass arrests of politicians”, Associated Press, 22 de octubre de 2003.

94. “25 Colombians suspected of rebel ties”, Associated Press, 21 de octubre de 2003.

95. “Colombia cracks down”, Oficina de Washington para Latinoamérica, julio de 2002.

que se cometió un homicidio. Hemos descartado que hubiera habido combate⁹⁶." En lo que constituyó un raro ejemplo de aplicación de la justicia en la guerra sucia de Colombia, un oficial del ejército y dos soldados colombianos fueron arrestados y acusados del asesinato de los tres líderes sindicales.

Casi un año después del arresto de los soldados, aún era evidente que los miembros de la elite política colombiana seguían apoyando la guerra sucia de los militares. En julio de 2005, en un editorial publicado en el mayor diario del país, *El Tiempo*, el ex Ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño defendió el patriotismo del oficial del ejército acusado del asesinato de los líderes sindicales: "Nadie recordará al teniente segundo que mató a tres guerrilleros del ELN en Arauca, disfrazados como líderes sindicales como todos los guerrilleros que quebrantan la ley en esa zona. Ahora, en prisión, él paga el precio de su ardiente amor por Colombia⁹⁷."

El despliegue de las fuerzas especiales estadounidenses en Arauca ilustra cómo el 11/9 cambió significativamente el paisaje político, permitiendo a la administración Bush enviar tropas estadounidenses a una de las regiones más candentes de Colombia como parte de la guerra global contra el terrorismo. Durante la administración Bush se ha incrementado el papel de Estados Unidos en Colombia, convirtiendo eficazmente a soldados estadounidenses en los entrenadores del personal de seguridad de Occidental Petroleum. Los esfuerzos de estos soldados, quienes entrenaron a más de dos mil soldados colombianos en dos años, arrojaron dividendos para la compañía petrolera: el oleoducto de Caño Limón fue sabotado sólo 17 veces en el 2004⁹⁸. Los consejeros estadouni-

96. Juan Forero, "Bogotá says army killed union chiefs", *New York Times*, 8 de septiembre de 2004.

97. Fernando Londoño Hoyos, "¿Quién defiende a los defensores?", *El Tiempo*, 21 de julio de 2005.

98. T. Christian Miller, "US troops answered oil firm's pleas", *Los Angeles Times*, 30 de diciembre de 2004.

denses, sin embargo, han ayudado a asegurar las operaciones de Occidental brindando entrenamiento contra guerrilleros a una brigada del ejército colombiano que es responsable directa de grandes violaciones de los derechos humanos.

La guerra del petróleo en Putumayo

La implementación de 1,3 mil millones de dólares del Plan Colombia en Putumayo condujo a un significativo aumento del número de ataques contra la infraestructura petrolera del departamento, de 48 en 1999 a 110 en el siguiente año. Según el comandante del ejército colombiano responsable de proteger las operaciones petroleras en Putumayo, el Teniente Coronel Francisco Javier Cruz, la ayuda de Estados Unidos para la guerra contra las drogas hizo que la región fuera más segura para llevar a cabo las operaciones petroleras porque el ejército podía usar “helicópteros, tropas y entrenamiento suministrado en gran medida por el Plan Colombia”⁹⁹.

La escalada del conflicto civil en el departamento de Putumayo en el sur de Colombia durante la década del 90 ha hecho que las compañías extranjeras se resistan a explotar las vastas reservas de petróleo que están en su mayoría en regiones controladas por los rebeldes. La situación cambió con la llegada de los paramilitares a finales de la década del 90 y la implementación del Plan Colombia en el 2000, que supusieron un aumento de la seguridad para las operaciones petroleras. Al principio del Plan Colombia, la producción de petróleo en esta remota región del Amazonas había disminuido durante 20 años después de alcanzar un máximo de alrededor de 80 mil barriles al día en 1980. Y mientras la producción aún se mantenía al relativamente anémico nivel de 9.626 barriles diarios en 2003, un gran número de nuevos contratos firmados entre transnacionales y el gobierno colombiano desde el 2002 prometían un significativo aumento.

99. Teniente Coronel Francisco Javier Cruz, entrevista con el autor, 2 de marzo de 2004, Orito, Putumayo, Colombia.

La remota municipalidad de Orito, donde interconectan cuatro oleoductos, es el centro de las operaciones petroleras en Putumayo. Dos oleoductos transportan petróleo desde los yacimientos cercanos que son explotados por Ecopetrol, Argosy Energy y Petrominerales, una sucursal de Petrobank de Canadá. Otro oleoducto trae petróleo cruzando la frontera de la Amazonia ecuatoriana donde Occidental Petroleum radicada en Estados Unidos y EnCana, de Canadá, realizan operaciones. El cuarto es el oleoducto Transandino, que transporta el petróleo de los otros tres oleoductos a través de los Andes al puerto de Tumaco en la costa colombiana del Pacífico, donde es embarcado hacia Estados Unidos.

En las instalaciones de Ecopetrol en Orito existe una base del ejército que alberga al Noveno Batallón Especial, que consta de 1.200 efectivos especialmente entrenados, que tienen la misión de proteger la infraestructura petrolera de Putumayo. Guerrilleros izquierdistas han atacado repetidamente los oleoductos de la región para protestar en contra de la explotación de los recursos del país por parte de las transnacionales. En una aparente contradicción, los rebeldes también se han enriquecido al no atacar las operaciones de las compañías que han accedido a las demandas de extorsión de los guerrilleros.

Aunque ninguna de las compañías admite haber pagado directamente a los guerrilleros, el vicepresidente de Occidental, Lawrence Merriage, ha admitido que, en el pasado, contratistas empleados por su compañía habían satisfecho las demandas de extorsión en Arauca. Cuando le preguntaron acerca de las amenazas y demandas de las FARC en Putumayo, el representante de Argosy, Edgar Dyes, admitió que había habido amenazas de secuestrar empleados, pero declaró que no tenía conocimiento de si los empleados de la compañía habían pagado o no a los rebeldes.

Es interesante que las FARC dejaran intactas las operaciones de Argosy en Putumayo durante la ola de ataques en el 2003 que

dañó oleoductos y tanques de almacenamiento y prendió fuego a pozos de petróleo¹⁰⁰.

La militarización de Putumayo bajo el Plan Colombia había reducido el número de ataques a 43 en 2002, pero al año siguiente alcanzó la cifra récord de 144. Más de la mitad de los ataques de 2003 se produjeron en noviembre, cuando los guerrilleros de las FARC lanzaron una gran ofensiva contra la infraestructura petrolera de Putumayo. Para ayudar a proteger las operaciones petroleras, el Noveno Batallón Especial del Teniente Coronel Cruz tiene dos helicópteros –que pertenecen a la compañía estatal Ecopetrol y a Petrobank– a su disposición para transportar tropas en operaciones contrainsurgentes. El Teniente Coronel Cruz tiene muy clara su misión: “La seguridad es lo más importante para mí. Las compañías petroleras necesitan trabajar sin preocupaciones y los inversionistas internacionales necesitan sentir tranquilidad”¹⁰¹.

Las compañías petroleras extranjeras tienen especial interés en que las tropas de Cruz sean capaces de mantener la seguridad en Putumayo. Según Steven Benedetti, un representante de Petrobank en Bogotá, la compañía comenzó las operaciones en esa región en junio de 2002 porque “creemos que hay un gran premio en Putumayo”. Ese “premio” es el estimado de 1,1 mil millones de barriles en el yacimiento de Orito, de los que el 80% está intacto. Para seguir accediendo a las reservas no descubiertas de la región, Petrobank invirtió 50 millones de dólares en sus operaciones petroleras de Putumayo en el 2003. La inversión inmediatamente comenzó a rendir dividendos para la compañía cuando, a pesar de que muchos de sus sitios de perforación habían sido atacados durante la ofensiva de las FARC en noviembre de 2003, Petrobank incrementó la producción en un 18% sobre el año anterior¹⁰².

100. Edgar Dyes, entrevista telefónica con el autor, 15 de marzo de 2004.

101. Entrevista a Cruz.

102. Steven Benedetti, entrevista con el autor, 5 de marzo de 2004, Bogotá, Colombia.

Según Cruz, el ejército solo no puede evitar los ataques guerrilleros contra la infraestructura petrolera. Sus hombres a menudo se valen de informantes civiles que trabajan como parte de una red de informantes creada bajo el programa de Seguridad Democrática de Uribe. Cruz señaló que para cumplir su misión, era muy importante que el ejército “hiciera entender al pueblo que cuando ellos colaboran para evitar los ataques terroristas, todo el mundo gana¹⁰³.” Cruz se refería al hecho de que cuando los ataques interrumpen la producción de petróleo, existe la correspondiente disminución en los pagos de derecho de las compañías extranjeras al gobierno colombiano. La ley colombiana estipula que estos pagos de derecho sean usados para programas sociales y económicos, pero es difícil descubrir los beneficios de estos pagos en Orito. La municipalidad de Orito es en el departamento de Putumayo la de mayor ganancia petrolera, pero el grado de pobreza y subdesarrollo no es menos extremo que en otras regiones colombianas de similar tamaño que no reciben fondos del petróleo. Dentro del pueblo, sin embargo, el dramático contraste entre el estilo de vida de los trabajadores petroleros con otros residentes locales recuerda el retrato del famoso novelista colombiano Gabriel García Márquez de la presencia de la compañía extranjera de frutas en el mítico pueblo de Macondo. Cerca del centro del pueblo de Orito se asienta un enorme complejo de recreación para los empleados de Petrobank y Ecopetrol. El complejo contiene canchas de baloncesto, áreas de *picnic* y juegos, un salón para reuniones sociales y una enorme piscina con un gran tobogán. Una alta cerca de alambre de acero asegura que los residentes de las covachas cercanas no se introduzcan en el complejo que se asemeja a una fortaleza.

La razón por la que Orito no se ha beneficiado de los pagos de los derechos, de acuerdo con un residente local, es que “el petróleo

103. Entrevista a Cruz.

sale de Putumayo y los pagos van hacia los billetteros de los administradores¹⁰⁴.” Otra declaración es incluso más tajante: “Los políticos se roban el dinero”¹⁰⁵. En contraste con su decisión de cortar los pagos de derechos al departamento de Arauca porque el corrupto gobierno municipal ha demostrado simpatía por los guerrilleros, el Presidente Uribe permitió que el dinero siguiera fluyendo a los corruptos oficiales locales de los pueblos putumayos controlados por los paramilitares.

A pesar —o quizás debido a— la presencia del ejército colombiano y la policía nacional, el pueblo de Orito está controlado por paramilitares de la AUC. Los paramilitares llegaron a Putumayo a finales de la década del 90 y después de una serie de masacres se hicieron exitosamente con el control de muchos pueblos, incluyendo a Orito. Aún así, las FARC recuperaron el control de muchos pueblos en el 2003, y a pesar de las declaraciones de Cruz de que el ejército está combatiendo a los paramilitares tanto como a los rebeldes, las tácticas despiadadas de la AUC ayudaron a mantener el control de Orito. Según Javier, un habitante local que pidió que sólo fuera utilizado su primer nombre por razones de seguridad, “ellos matan *campesinos** inocentes sólo por la posibilidad de que sean guerrilleros¹⁰⁶.” Como si lo hubieran hecho para ilustrar la declaración de Javier, los paramilitares asesinaron al líder campesino local Alirio Silva en Orito el mismo día que este escritor se reunió con el Teniente Coronel Cruz.

La política estadounidense en Putumayo cambió el enfoque de la coca al petróleo. Las campañas de fumigación aérea del Plan Colombia disminuyeron el cultivo de coca en Putumayo, mientras se comenzó a cultivar en otros departamentos del país. Al mismo

104. Anónimo, entrevista con el autor, 2 de marzo de 2004, Orito, Putumayo, Colombia.

105. Javier, entrevista con el autor, 2 de marzo de 2004, Orito, Putumayo, Colombia.

* N. del T.: En español en el original.

106. Ibíd.

tiempo, la militarización de la región brindó un ambiente más seguro para que las compañías extranjeras expandieran sus operaciones. En consecuencia, el ejército, los guerrilleros y los paramilitares continúan haciendo de Putumayo un punto focal de su lucha armada. El 25 de junio de 2005, alrededor de 300 guerrilleros de las FARC lanzaron otra serie de ataques contra instalaciones petroleras, que dejaron un saldo de 21 soldados muertos¹⁰⁷. Uribe respondió a los ataques enviando a la región mil soldados adicionales respaldados por helicópteros artillados. En Putumayo muchos piensan que la producción de petróleo es lo único que sostiene un conflicto en el que la mayoría de las víctimas son civiles. Así lo declaró inocentemente un habitante de Putumayo: “Todo el mundo conoce que el conflicto en el Medio Oriente es por el petróleo; los problemas de Colombia no son diferentes. Quizás sea por la coca, pero de todas formas hay petróleo. Y si hay petróleo, entonces los grupos armados no se irán porque están interesados en lugares donde haya dinero y poder¹⁰⁸.”

Conclusiones

A pesar del resurgir de las FARC en el 2005, Uribe mantuvo índices de aprobación cercanos al 70%, según las encuestas de opinión llevadas a cabo por teléfono en las cuatro mayores ciudades del país. El método empleado para conducir las encuestas en Colombia significa que en su mayoría refleja los puntos de vista de las clases medias y altas, los principales beneficiarios de las reducciones del crimen y los secuestros. En la zona del país que está en guerra, Uribe encontró mucho más difícil ganarse los corazones y las mentes de la población campesina. La estrategia de Seguridad

107. Jason Webb, “Colombian rebels free soldier in gesture on hostages”, Reuters, 22 de julio de 2005.

108. Anónimo, entrevista con el autor, 4 de marzo de 2004, Puerto Asís, Putumayo, Colombia.

Democrática del Presidente se concentraba casi exclusivamente en acciones militares; el gobierno construyó pocas carreteras, escuelas y centros médicos para el 85% de los colombianos de la zona rural que viven en la pobreza¹⁰⁹.

A mediados de 2005 la oleada de ataques de las FARC en toda Colombia dejó claro que casi cinco años de Plan Colombia y tres años de la estrategia de Seguridad Democrática de Uribe no han podido disminuir la capacidad militar de los guerrilleros. Mientras la seguridad ha mejorado mucho en las zonas urbanas, la vida en las zonas rurales continúa plagada de violencia y pobreza. Mientras tanto, la ayuda militar estadounidense y las reformas económicas impuestas por el FMI han mejorado la seguridad y la situación económica para las compañías extranjeras que operan en Colombia. Bajo el mandato Uribe, Colombia se convirtió en un modelo neoliberal, incrementando la inversión extranjera y alcanzando un crecimiento económico respetable. Pero, como ha ocurrido siempre a través de la historia del país, la mayoría de los colombianos no se han beneficiado de esta prosperidad. Aún más, el éxito macroeconómico de Uribe se debe en parte a la represión estatal, incluso al empleo de la guerra sucia contra aquellos sectores de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo.

En agosto de 2005, la ONU criticó a la administración Uribe por practicar detenciones arbitrarias dirigidas hacia aquellos que criticaban las políticas del gobierno. El director de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Michael Frühling, anunció que su oficina “ha señalado con preocupación que las detenciones ilegales o arbitrarias constituyen, por su número y frecuencia, una de las más preocupantes violaciones de los derechos humanos reportadas en el país”. Frühling señala más adelante que a la ONU “también le preocupa que

109. “Colombia: en contravía de las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos”.

las detenciones a gran escala y los embargos individuales sin bases jurídicas afecten frecuentemente a miembros de grupos vulnerables tales como defensores de los derechos humanos, líderes de la comunidad, activistas sindicales y gente que vive en áreas donde los grupos ilegales armados están activos"¹¹⁰. Por su parte, la administración Bush ha hecho la vista gorda sobre los problemas de los derechos humanos en Colombia. Para asegurar el flujo del petróleo colombiano a Estados Unidos, Washington ha usado la guerra contra las drogas y el terrorismo para justificar grandes sumas de ayuda al aparato militar estrechamente vinculado con los paramilitares que se encuentran en la lista de terroristas extranjeros del Departamento de Estado.

110. "Colombia: UN Human Rights office calls for end to arbitrary detentions", Centro de Información de las Naciones Unidas, 18 de agosto de 2005.

Venezuela: ¿una alternativa para el siglo XXI?

El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez fue investido Presidente de Venezuela. Con su inauguración comenzaron a deteriorarse más de 70 años de estrechas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. El nuevo Presidente criticó duramente el proyecto neoliberal de Washington e implementó políticas económicas y sociales que priorizaban las necesidades de los pobres. En consecuencia, Chávez se convirtió en un símbolo de resistencia a la hegemonía estadounidense en la región, primero para los empobrecidos venezolanos y después para los millones de marginados en toda Latinoamérica. El líder venezolano pronto reemplazó al presidente cubano Fidel Castro como enemigo público número uno de Washington en América Latina. Algunos funcionarios de los Estados Unidos, como el ex funcionario del Pentágono y la Casa Blanca Douglas McKinnon, hasta llegaron a declarar que “Chávez significa una mayor amenaza para nuestra seguridad que Osama bin Laden o cualquier otro terrorista que opere en el Medio Oriente”¹.

En 1997, un año antes de que Hugo Chávez fuera electo Presidente, Venezuela era el principal suministrador de petróleo de

1. Douglas McKinnon, “Is Venezuela going nuclear? Conversations with Iran give cause for concern”, *Houston Chronicle*, 22 de mayo de 2005.

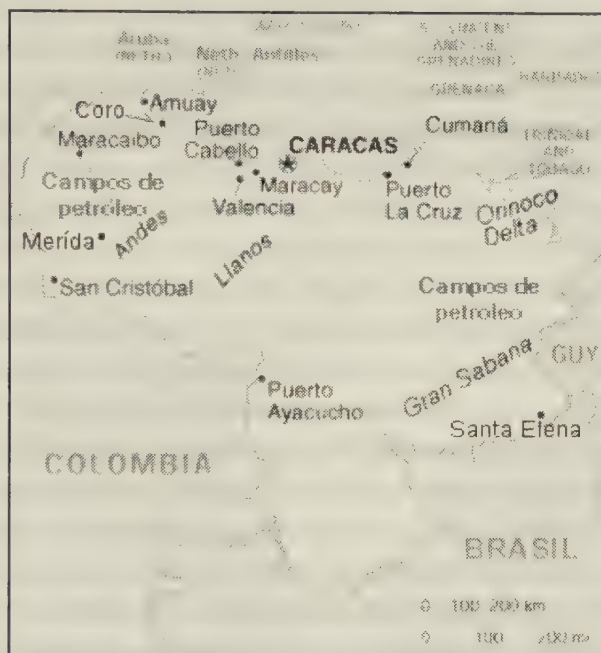
Estados Unidos, con el 17% del petróleo importado en ese año. En los años subsiguientes, Venezuela permaneció entre los cuatro primeros suministradores de petróleo al vecino del norte². Desde la perspectiva de Washington, los esfuerzos de Chávez para asegurar que un mayor porcentaje de las ganancias del petróleo venezolano beneficiaran a los empobrecidos venezolanos más que a las elites nacionales, a las compañías extranjeras y a las necesidades energéticas estadounidenses, representaba una “amenaza” a la seguridad nacional.

Petróleo en el patio trasero

Como muchas naciones del sur ricas en petróleo, la economía venezolana había dependido fuertemente de este recurso. El país posee reservas comprobadas de 78 mil millones de barriles de petróleo, las mayores reservas fuera del Medio Oriente. Las exportaciones petroleras sumaban el 50% de las ganancias del gobierno y el 80% de los beneficios de exportación³. El primer descubrimiento significativo de petróleo en Venezuela ocurrió en 1914 en la costa este del lago Maracaibo. En la década de 1930, el país se había convertido en el mayor exportador de petróleo del mundo. La presencia de compañías estadounidenses en Venezuela atrajo cada vez más al país a la esfera de influencia de Estados Unidos. En 1927, el antiguo diplomático estadounidense Jordan Herbert Stabler informó al Departamento de Estado: “El advenimiento de un gran número de americanos vinculados con la industria del petróleo ha tenido un efecto decisivo y Venezuela mira hacia Estados Unidos más que nunca para las importaciones y para cualquier necesidad financiera que pueda tener” (Ewell 1996: 122). En la década del 20

2. “Country analysis briefs: Venezuela”, Departamento de Energía de Estados Unidos, junio de 2004.

3. “OPEC revenues: country details”, Departamento de Energía de Estados Unidos, junio de 2005.



Mapa 5: Venezuela.

y principios de la del 30, Washington estaba más que feliz de apoyar al dictador Juan Vicente Gómez, particularmente a la luz del hecho de que “el tirano de los Andes” permitió que abogados de las compañías petroleras estadounidenses redactaran la legislación sobre el petróleo del país en 1921.

Durante la década del 20, muchos ex funcionarios del Departamento de Estado trabajaron para las mayores compañías petroleras estadounidenses –Exxon, Gulf y Standard– que operaban en Venezuela y en 1929 estas compañías dominaban la producción petrolera del país. Mientras tanto, las compañías implementaban un sistema de segregación en las regiones venezolanas productoras de petróleo en las que a los trabajadores extranjeros se les pagaba en dólares y a los trabajadores venezolanos no se les permitía entrar

en las instalaciones sociales de las compañías, tales como cines, teatros y clubes. La actitud racista de las compañías petroleras también se hacía evidente en los comentarios de sus funcionarios. William T. Wallace, vicepresidente de Gulf en Venezuela, declaró: "Es imposible esperar que la mente de los nativos se adapte a la forma de vida de los países de alto desarrollo después de vivir en la insalubridad durante siglos" (ibíd.: 140).

Durante la siguiente década, la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela estuvo encaminada a proteger los intereses de las transnacionales que operaban en su "propio patio trasero". De todas formas, el gobierno venezolano tuvo éxito en 1943 en implementar políticas petroleras parcialmente nacionalistas que aumentaron las concesiones a las compañías extranjeras a cambio de un 50% de las ganancias del petróleo. Durante las décadas del 40 y 50, el gobierno venezolano supervisó una rápida industrialización del país por parte de las compañías estadounidenses y proyectos financiados por el gobierno. Washington permitió que el petróleo de Venezuela entrara a los Estados Unidos libre de impuestos, mientras los inversionistas estadounidenses en Venezuela estaban motivados con la repartición de las ganancias sin restricciones, bajos impuestos y pocas regulaciones. La influencia de Estados Unidos en Venezuela se hizo tan dominante que a finales de los años 50 este país era el hogar de la mayor comunidad de expatriados estadounidenses en el mundo y el béisbol, no el fútbol, se había convertido en el deporte nacional.

En enero de 1958, sin embargo, el sentimiento contra Estados Unidos iba en aumento y un levantamiento popular apoyado por algunos sectores del ejército derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez, que contaba con el apoyo de los Estados Unidos. El apoyo de Washington al dictador derrocado motivó que la mafia de Caracas atacara violentamente a la caravana del vicepresidente estadounidense Richard Nixon en mayo de 1958. Preocupada por la presen-

cia comunista en la nueva junta de gobierno y el incremento del sentimiento contra Estados Unidos, la administración Eisenhower buscó un aliado comunista incondicional en Venezuela que pudiera unificar el país. Washington convocó a elecciones democráticas en Venezuela e hizo presión a favor del moderado Rómulo Betancourt, del partido Acción Democrática (AD), que había sido desechado por Pérez Jiménez. Betancourt ganó las elecciones de diciembre de 1958 contra Rafael Caldera, otro moderado, candidato del partido democrático cristiano (Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI).

En 1959, después de la imposición de Washington de cuotas de importación sobre el petróleo venezolano, el Ministro de Minas e Hidrocarburos Juan Pablo Pérez Alfonso, se reunió con representantes de Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. El grupo preparó el terreno para la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) el siguiente año, con el objetivo de cambiar el control del suministro de petróleo mundial de las naciones consumidoras a las productoras. Venezuela creó también la compañía estatal Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). Gobiernos sucesivos de COPEI y AD utilizaron las crecientes ganancias del petróleo para financiar programas de desarrollo durante los años 60 y 70. A la vez que las elites económicas del país eran las principales beneficiarias de las riquezas del petróleo, se desarrollaba una considerable clase media a medida que el país se industrializaba.

A inicios de los años 70, el gobierno venezolano, a pesar del disgusto de Washington, siguió el ejemplo de sus compañeros de la OPEP en el Medio Oriente y anunció que estaba incrementando su parte de las ganancias al 60%. Caracas además declaró su intención de nacionalizar el sector petrolero cuando los contratos expiraran los contratos vigentes con las multinacionales.

Después de la guerra árabe-israelí de 1973, Venezuela se encontró atrapada en medio de un conflicto económico entre sus

compañeros productores de petróleo del Medio Oriente y Estados Unidos, su antiguo aliado hemisférico y su mayor socio comercial. El gobierno venezolano escogió desafiar el embargo petrolero de la OPEP antes que enemistarse con su vecino del norte. Estados Unidos mostró poca gratitud por el desafío de Venezuela al embargo cuando en 1974, el Congreso de Estados Unidos excluyó a los países de la OPEP, incluida Venezuela, de sus tarifas preferenciales concedidas a las naciones del Sur. La consecuente batalla política entre Caracas y Washington provocó que las relaciones entre los dos países sufrieran un nuevo descenso. En 1976, cuando ya las transnacionales estaban pagando el 80% de sus ganancias en derechos e impuestos, Venezuela nacionalizó el sector petrolero.

La nacionalización de la industria petrolera y la creación de una nueva compañía estatal, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), se suponía que trajera aún mayores riquezas a los venezolanos. Para finales de los años 70, sin embargo, se hizo evidente que éste no sería el caso en la medida en que disminuían los precios del petróleo y la economía entraba en una espiral descendente que continuaría en los próximos 20 años. Aún así, la recién establecida PDVSA continuó siendo rentable y la principal fuente de ganancias del gobierno a pesar de la disminución en los precios globales del petróleo. La compañía, sin embargo, respondió a la crisis económica del país como si fuera una compañía privada más que como una entidad estatal. En vez de incrementar la suma de las ganancias del petróleo que entraba en los cofres del Estado, la nacionalización de hecho provocó una disminución de las ganancias fiscales del gobierno.

Antes de la nacionalización, el gobierno había estipulado que las operaciones en su país fueran dirigidas por venezolanos. Cuando el gobierno nacionalizó el sector petrolero, puso a los ejecutivos venezolanos que habían dirigido las tres mayores compañías extranjeras –Exxon, Shell y Gulf– a cargo de PDVSA. Más que obte-

ner ganancias para el Estado, los ejecutivos entrenados por las corporaciones buscaron distanciar a PDVSA del gobierno. Ellos podían alcanzar su objetivo porque el Ministro de Energía y Minas (MEM) no logró supervisar las actividades de PDVSA con el mismo grado de vigilancia que había aplicado a las compañías extranjeras antes de la nacionalización. Los ejecutivos de la compañía, viendo que no había razón para aumentar los beneficios sólo para brindar al gobierno ganancias fiscales, decidieron reinvertir los beneficios de PDVSA en las operaciones de la compañía. La OPEP, mientras tanto, había respondido a la caída de los precios introduciendo cuotas de producción para los países miembros. Los recortes de producción provocados por las cuotas de la OPEP hicieron difícil para PDVSA reinvertir sus ganancias en las operaciones internas de la compañía. Así que en 1983, PDVSA comenzó a implementar una política de "internacionalización", que promovía que la compañía reinvirtiera sus ganancias en proyectos extranjeros. La compañía estatal venezolana compró refinerías en Alemania, Suecia, Bélgica y Estados Unidos y desarrolló una cadena de más de 14 mil gasolineras en este último país bajo el nombre de Citgo, una sucursal completamente propia. Según el científico político César Baena, los ejecutivos de PDVSA decidieron "crear una red de operaciones internacionales que aumentara su capacidad para trabajar lejos del gobierno, de sus inesperadas demandas fiscales y de las intromisiones del Congreso"⁴.

Para restringir aún más el acceso del gobierno venezolano a sus ganancias, PDVSA implementó una política "de transferencia de precios". PDVSA vendía el petróleo a precios de descuento a sus sucursales extranjeras, que se beneficiaban al incrementar sus márgenes de ganancia. Las sucursales retenían estas ganancias en el extranjero y así PDVSA podía consignar ganancias internas más

4. César Baena, "The internationalization strategy of PDVSA: a policy-making analysis", Centre d'Etudes et de Recherches Internationales, noviembre de 1999.

bajas. En los 18 años de internacionalización y transferencia de precios, las sucursales extranjeras nunca pagaron dividendos a PDVSA. Según el científico social venezolano Bernard Mommer, “para la segunda mitad de los años 90, PDVSA estaba remitiendo, mediante la transferencia de precios, un promedio de 500 millones de dólares anuales de sus cuentas internas a sus afiliados extranjeros” (Mommer 2003:134-5). Dicho de manera simple, gran parte de las ganancias del petróleo venezolano estaban en las manos de las sucursales extranjeras de PDVSA, beneficiando la economía del país anfitrión, especialmente Estados Unidos.

Los ejecutivos de PDVSA manejaron la compañía estatal como si fuera su propia compañía privada en vez de representar los intereses de su único accionista: el gobierno nacional. En lugar de generar ganancias para el Estado y por extensión, al pueblo venezolano, PDVSA reinvertió sus ganancias para expandir sus operaciones y como un fin en sí misma. El daño que PDVSA –junto con las reformas neoliberales impuestas por el FMI– infringió a la economía venezolana fue evidente por la dramática disminución de la parte de las ganancias petroleras del gobierno. En 1981, la producción petrolera del país generó 19,7 mil millones de dólares en ganancias y PDVSA pagó 13,9 mil millones en ganancias fiscales al gobierno. En el 2000, las ganancias del petróleo se habían incrementado significativamente a 29,3 mil millones, pero PDVSA pagó sólo 11,3 mil millones al gobierno (ibíd.: 137). En términos de porcentaje, entre 1976 y 1992 el gobierno recibió un promedio anual del 71% de las ganancias de exportación de PDVSA; entre 1993 y el 2000, decayó a sólo el 36%⁵.

Durante la década del 80, PDVSA también pensó la forma de saltarse las cuotas de la OPEP. La compañía manipuló la definición de crudo declarando que su producción de crudo superpesado

5. Bernard Mommer, “Venezuelan oil politics at the crossroads”, Instituto Oxford para Estudios Energéticos, marzo de 2001.

—que se conoce como Oriemulsión cuando está procesado— y su producción de crudo sintético no era en realidad petróleo crudo y por lo tanto, no estaba sujeto al sistema de cuotas. En consecuencia, PDVSA socavó el objetivo de la OPEP de restringir la producción de petróleo para manejar sus precios globales. La sobreproducción venezolana fue un factor que contribuyó a la caída de sus precios globales por debajo de 11\$ el barril a finales de la década del 90.

Los gobiernos de AD y COPEI no sólo habían usado las ganancias del petróleo para financiar el desarrollo del país, sino que también habían solicitado fuertes sumas contra las futuras ganancias del petróleo. Mientras una parte de este dinero financiaba proyectos de desarrollo, gran parte de éste terminó en los bolsillos de venezolanos ricos vinculados con AD y COPEI. Cuando el precio global del petróleo disminuyó a principios de la década del 80, la economía se estancó y el gobierno se encontró en una severa crisis fiscal por el peso cada vez mayor de sus deudas. Se produjo una fuga de capital y los ricos del país se protegían enviando su dinero al extranjero. Sólo en 1982 salieron del país alrededor de 8 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, la corrupción en AD y COPEI facilitó la desaparición de 11 mil millones de las reservas de moneda fuerte de los cofres del gobierno (Buton 2003: 116).

El número de venezolanos que vivían en la pobreza se incrementó en la década del 80, alcanzando el 43,9% de la población hacia el final de la década. Mientras tanto, las elites de la nación continuaron invirtiendo en el extranjero las riquezas que habían obtenido mediante la corrupción. En 1989, el economista Paul Krugman señaló:

Los ciudadanos venezolanos tienen más bienes en el extranjero que cualquier otra nación deudora y todo lo que se obtuvo de la deuda externa venezolana se empleó para financiar la fuga de capital. Durante los últimos 15 años los bienes comprados en el extran-

jero por residentes venezolanos de hecho han excedido la deuda externa del país por alrededor de US \$20 mil millones. En otras palabras, si el gobierno venezolano pudiera reclamar todas las cuentas bancarias en Nueva York y los condominios de Miami que poseen los venezolanos ricos, podría pagar la deuda externa y aún le quedaría algo para gastar⁶”.

Poco después de asumir el cargo el 2 de febrero de 1989, el Presidente Carlos Andrés Pérez, de AD, anunció que había llegado a un acuerdo con el FMI para solucionar la crisis fiscal del país. Pérez acordó implantar reformas económicas neoliberales como pago por un préstamo de 3,8 mil millones de dólares con la institución financiera internacional⁷. El anuncio contradecía la promesa de su campaña de que no introduciría reformas de libre mercado. Sintiendo traicionados por Pérez, miles de venezolanos pobres respondieron a la reducción en los subsidios de combustible y la implementación de otras reformas neoliberales tomando las calles de Caracas el 27 de febrero de 1989. El alzamiento popular se propagó a otras nueve ciudades antes de que el ejército pudiera reprimir la revuelta exitosamente. La cifra oficial de muertos fue de 287, pero otros estimados declaran que más de mil murieron en lo que después se conoció como *El Caracazo*. La protesta representaba el primer alzamiento de clases en Venezuela desde la década de los años 30.

A pesar de la obvia insatisfacción expresada por miles de venezolanos durante *El Caracazo*, Pérez prosiguió con su implementación de reformas neoliberales. El gobierno recortó los gastos públicos en una época en que aumentaba el número de venezolanos con necesidades de seguridad social. La administración Pérez también privatizó compañías estatales y abrió el sector petrolero a compa-

6. Paul Krugman, “Venezuela’s debt a monument to domestic mismanagement”, archivo no oficial de Paul Krugman, 27 de marzo de 1989.

7. “Venezuela: financial position in the Fund as of april 30, 2005”, Fondo Monetario Internacional, 30 de abril de 2005.

ñas extranjeras por primera vez desde la nacionalización. Los recortes de los gastos sociales, los despidos producidos como consecuencia de la privatización, la apertura del sector petrolero y la política de PDVSA de transferencia de precios contribuyeron a que se dispararan los niveles de pobreza de un 43,9% en 1988 a un 66,5% a finales de 1989 (Buxton 2003:118).

En el sector del petróleo, el gobierno de Pérez, a instancias de PDVSA, implementó bajas tasas de derechos e impuestos para seducir a las compañías extranjeras a entrar en sociedades conjuntas con la compañía estatal en proyectos de petróleo superpesado. También permitió que compañías extranjeras, tales como Chevron, BP y Shell, firmaran acuerdos de servicios operativos con PDVSA para la exploración y producción en yacimientos marginales. Quizás más insultante para el orgullo nacional venezolano fue la aceptación del acuerdo por parte de PDVSA, por primera vez en la historia del país, de que las disputas contractuales estarían sujetas a árbitros internacionales. Según Mommer, las políticas liberales de PDVSA, que beneficiaban a las compañías extranjeras, eran "incompatibles con todo lo que el nacionalismo petrolero venezolano había alcanzado, incluyendo la fundación de la OPEP y la nacionalización. Esto es imperialismo en su definición más antigua: la conquista de la tierra extranjera y sus recursos minerales" (Mommer 2003:137-9).

El 4 de febrero de 1992, el Teniente Coronel Hugo Chávez dirigió un intento de golpe de Estado contra el cada vez más impopular Pérez. A pesar de que el golpe falló y Chávez fue encarcelado, esto atrajo la atención pública sobre el joven oficial del ejército. Además de haber recibido una educación militar tradicional, Chávez y sus cómplices del golpe también habían cursado estudios de Ciencias Políticas en las universidades públicas más progresistas. Como resultado de sus historiales de clase media baja y educación en el extranjero, algunos miembros de esta nueva generación de

funcionarios políticos venezolanos simpatizaban más con la causa de los pobres que muchos de sus contrapartes en otros aparatos militares latinoamericanos.

Cuando se acercaban las elecciones presidenciales de 1993, Venezuela estaba en medio de una crisis política debido a la disminución de los niveles de vida de la mayoría de los venezolanos, *El Caracazo*, el intento de golpe de Estado de Chávez, un segundo golpe militar fallido en noviembre de 1992 y la acusación dirigida a Pérez en 1993 por corrupción. Rafael Caldera, el fundador de COPEI, abandonó su partido para tomar ventaja del creciente descontento popular con los partidos e instituciones políticas tradicionales. Compitiendo como candidato de una coalición de pequeños partidos independientes, fue elegido Presidente en 1993. En realidad él todavía representaba el régimen político tradicional. Caldera prometió durante su campaña que no implementaría reformas neoliberales. A los dos años de su mandato, sin embargo, Caldera siguió los pasos de su predecesor Pérez y negoció un acuerdo con el FMI. En 1996, el Presidente venezolano acordó implementar reformas neoliberales a cambio de un préstamo de 975 millones de dólares⁸.

En 1998, a finales del mandato de Caldera, el grado de desigualdad con respecto a los ingresos y posesión de la tierra había alcanzado proporciones asombrosas. Según el FMI, el 20% de los venezolanos más ricos recibía el 84% de las entradas nacionales, mientras que el 20% más pobre ganaba sólo el 3%. Mientras tanto, el 3% de los terratenientes del país poseía el 76,5% del territorio nacional⁹. El PNUD informó que entre 1990 y 1998 la pobreza alcanzó a un 68% de la población, mientras el 69% de los cabezas de familia no podían sostener sus necesidades básicas. Aún más, el

8. "Venezuela: financial position in the fund as of April 30, 2005".

9. "Venezuela: statistical appendix", IMF Staff Country Report no. 99/111, Fondo Monetario Internacional, septiembre de 1999.

70% de todos los nuevos empleos se crearon en el sector informal, el promedio del salario real de todos los trabajadores en 1998 supuso sólo el 58,8% de su valor en 1990, el 44% de los jóvenes tenía bajo acceso a la educación y el mismo porcentaje de cabezas de familias venezolanas tenía al menos un miembro que sufría una enfermedad crónica¹⁰.

La economía venezolana continuó deteriorándose según bajaba el precio del petróleo hasta 11\$ el barril en 1998, el precio más bajo en los últimos 50 años. Los 24 millones de habitantes de Venezuela se habían dividido en clases, con la mayoría pobre no queriendo apoyar a ningún candidato relacionado con las instituciones o partidos políticos tradicionales. El 6 de diciembre de 1998, con el amplio apoyo del 68% de los venezolanos sumidos en la pobreza, Chávez ganó las elecciones presidenciales con un 57% de los votos, el mayor porcentaje en cuatro décadas de democracia venezolana¹¹.

Durante la década anterior Venezuela había seguido el mismo camino neoliberal que otras naciones ricas en petróleo como Kazajistán, Azerbaiyán, Nigeria y Colombia. Y en estas naciones las consecuencias socioeconómicas para la mayor parte de la población habían sido devastadoras. A diferencia de estas naciones, sin embargo, Venezuela estaba a punto de implementar un cambio ideológico sustancial con respecto al manejo de sus vastas reservas petroleras.

La reforma política

Después de ser liberado de prisión en marzo de 1994, Chávez empezó a promover el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), nombrado así en honor al héroe independentista Simón Bolívar, quien había buscado establecer una América Latina unida. Oficiales del ejército habían formado el MBR-200 a principios de la

10. "Human Development Report Venezuela, 2000: Ways to overcome poverty", Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2000.

11. "Venezuela: country report on human rights practices for 1998", Departamento de Estado de Estados Unidos, 26 de febrero de 1999.

década del 80, pero después de 1994 Chávez y otros miembros buscaron transformarlo en una organización política nacional. Comenzaron a establecer comités en las municipalidades de todo el país, llamados Círculos Bolivarianos, que se organizaron a nivel local. A pesar de algunas fricciones entre los miembros militares y el número siempre en aumento de civiles participantes, el MBR-200 pronto evolucionó hacia un movimiento nacional.

El MBR-200 decidió competir en las elecciones municipales para el Congreso y la Presidencia de 1998. Chávez estableció un partido político oficial como frente electoral del MBR-200, que fue llamado Movimiento V República (MVR) porque la Constitución venezolana prohibía que los partidos políticos usaran el nombre de Simón Bolívar. El MVR formó una coalición con muchos otros pequeños partidos alternativos con el objetivo de obtener suficientes escaños en el Congreso para forzar el establecimiento de una Asamblea Constituyente con la intención de reescribir la Constitución del país y reestructurar las instituciones políticas. Chávez ganó fácilmente las elecciones presidenciales basando su campaña en una plataforma que condenaba a los antiguos gobiernos de AD y COPEI por dirigir el país en beneficio de la minoría rica venezolana y las compañías extranjeras. Por su parte, la oposición, en su mayoría blancos de clase media y alta, quienes constituían sólo el 23% de la población, estaba horrorizada de que el nuevo líder del país fuera un "indígena" de piel oscura perteneciente a la clase media baja. La oposición pronto empezó a culpar a la política revolucionaria de Chávez de la división de clases del país. En realidad, la corrupción de AD y COPEI y la implementación de políticas económicas neoliberales habían dividido la nación casi una década antes de que Chávez fuera elegido, como demostró *El Caracazo*.

Después de tomar el poder el 2 de febrero de 1999, Chávez buscó inmediatamente la forma de satisfacer las promesas hechas en su campaña electoral de llevar a cabo elecciones para una Asam-

blea Constituyente. En abril, los venezolanos aprobaron el plan de procedimientos de Chávez para la asamblea en un referéndum nacional y tres meses después la alianza gobernante ganó 125 escaños de los 131 de la Asamblea. La recién elegida Asamblea Constituyente delineó la nueva Constitución en sólo tres meses, y fue aprobada por más del 70% de los votantes en otro referéndum nacional llevado a cabo en diciembre. La nueva Constitución cambió el nombre del país al de República Bolivariana de Venezuela, incrementó el período de presidencia de 5 a 6 años y permitió la reelección para un segundo período. Además, entre otras cosas, reemplazó el congreso bicameral por una Asamblea Nacional unicameral, a la que se le permitía revocar a cualquier funcionario electo como medio para combatir la corrupción, dio a los militares más autonomía y protegió los derechos de los indígenas y las reclamaciones medioambientales. Con respecto al sector del petróleo, la nueva Constitución prohibió la privatización de PDVSA, aunque esto no era aplicable a las sucursales de la compañía. Detractores de la nueva Constitución declararon que establecer una Asamblea unicameral y extender el mandato presidencial en un año daba un poder ejecutivo desproporcionado. Los seguidores de Chávez, por otro lado, enfatizaron los aspectos democráticos de la Constitución incluyendo el incremento de la participación pública directa en la toma de decisiones, la codificación de derechos humanos y los mecanismos para revocar a funcionarios electos, incluido el Presidente.

Mientras Chávez se centraba en implementar sus reformas políticas durante su primer año de mandato, la economía continuaba deteriorándose y la pobreza aumentando. Para hacer peores las cosas, en diciembre de 1999 el país experimentó su peor desastre natural cuando fuertes lluvias causaron serias inundaciones y deslizamientos de tierra en diez Estados norteros, que dejaron más de 20 mil muertos. El aumento en las tasas de pobreza sobre las dos

décadas anteriores había dejado a decenas de miles de venezolanos viviendo en covachas construidas en las laderas de las colinas. Estas precarias condiciones de vida resultaron ser fatales cuando cayeron las lluvias de 1999. Chávez respondió al desastre desplegando tropas venezolanas para ayudar en los esfuerzos de rescate, una experiencia que lo llevó a continuar usando al ejército para implementar proyectos sociales en todo el país, particularmente la construcción de infraestructuras.

Al mismo tiempo que lidiaba con la emergencia nacional causada por las inundaciones, Chávez también hacía campañas para las elecciones exigidas por la nueva Constitución. El 30 de julio de 2000, Chávez fue electo de nuevo Presidente, esta vez con el 59% de los votos. Su más cercano rival, Francisco Arias, del partido centro izquierdista Causa R, reunió sólo el 37% de los votos realizados.

En el 2000, habiendo completado sus reformas constitucionales, Chávez comenzó a centrarse en su revolución económica y social con el objetivo de asegurar que el petróleo venezolano beneficiara a la mayoría de la población en vez de a las elites del país y a las compañías extranjeras. Para poder financiar adecuadamente su "revolución para los pobres", Chávez necesitaba tomar las riendas de PDVSA, que según él declaró funcionaba como un "Estado dentro del Estado". Chávez puso a Alí Rodríguez Araque a la cabeza del Ministerio de Energía y Minas (MEM) en un primer paso para recuperar el control de los recursos del país e incrementar las ganancias fiscales derivadas de los mismos. Primero, Rodríguez Araque reafirmó la autoridad del MEM sobre PDVSA, forzando a la compañía a adherirse estrictamente a las cuotas de la OPEP por primera vez en más de una década y revisando el método para determinar los pagos de derechos con el objetivo de mejorar la recaudación de las ganancias de la compañía estatal. Venezuela también consideró vender algunas de sus refinerías de Citgo radicadas en Estados Unidos porque la sucursal de PDVSA vendía el

barril de petróleo a Estados Unidos en dos dólares menos que los precios del mercado internacional bajo un acuerdo firmado antes de que Chávez llegara al poder. Como Chávez señaló: “Estamos subsidiando el presupuesto de Estados Unidos”¹².

En un esfuerzo por aumentar los precios mundiales del petróleo, Chávez y Rodríguez Araque –quien se convertiría en secretario general de la OPEP al siguiente año– convencieron a los miembros de la OPEP a adoptar un sistema de banda de precios en marzo de 2000. El objetivo era mantener el precio global del petróleo entre los 22\$ y 28\$ el barril, con la posibilidad de que las naciones miembros automáticamente incrementaran o disminuyeran la producción según el precio se moviera fuera del rango. En septiembre de 2000 Venezuela fue la sede de la cumbre de los jefes de Estado de la OPEP con el objetivo del futuro fortalecimiento del cartel y la defensa de los precios globales. Sabiendo que el incremento de los precios dañaría no sólo a las economías de las naciones industrializadas sino también a las de las naciones pobres, Chávez hizo un llamamiento a los países ricos en petróleo a trabajar regionalmente para aliviar el daño hecho a sus empobrecidos vecinos. En el 2000, Venezuela comenzó a suministrar petróleo a naciones centroamericanas y del Caribe en términos financieros preferenciales, que incluían permitirles un plazo de quince años para pagar el petróleo.¹³

Al año siguiente, el gobierno de Chávez promulgó la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establecía que el sector del petróleo debía servir al “desarrollo sostenible del país” utilizando sus ganancias para financiar “salud, educación, un fondo de estabilización macroeconómica e inversiones productivas... para el bienestar del pueblo”¹⁴. La ley también decretaba que PDVSA debía

12. Nikolas Kozloff, “Venezuela’s Chávez: ‘oil is a geopolitical weapon’”, Consejo sobre Asuntos Hemisféricos, 28 de marzo de 2005.

13. “Cuba, Venezuela sign oil deal”, Associated Press, 30 de octubre de 2000.

14. “Ley Orgánica de Hidrocarburos”, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 13 de noviembre de 2001.

quedarse con la mayoría de las acciones en todas las empresas conjuntas con compañías extranjeras. Adicionalmente se aumentaron las tasas de derechos que las compañías extranjeras tenían que pagar al gobierno venezolano. Se incrementaron de 16,6% el barril a entre 20 y 30% para el petróleo convencional y del 1% al 16,6% para el crudo superpesado. Al mismo tiempo las tasas de impuestos sobre el crudo convencional se bajó del 59 al 50%, mientras las tasas de impuesto sobre el crudo superpesado permanecieron iguales, a un 32%. Finalmente, la nueva ley aseguraba el incremento de las ganancias para el gobierno debido al alza de las tasas de derechos, las cuales eran mucho más fácil de determinar y cobrar que los impuestos (Mommer 2003:141).

Los detractores afirmaron que la nueva ley deterioraría la inversión extranjera y expulsaría a las transnacionales fuera de Venezuela. En los años siguientes, sin embargo, las compañías comenzaron a renegociar sin mucho entusiasmo sus contratos con PDVSA. Después de que ocho compañías firmaran nuevos contratos, el analista industrial Roger Tissot de PFC Energy en Washington D.C., señaló: "Esto es una victoria para el gobierno venezolano porque estas ocho compañías han estado de acuerdo con términos más severos. Las compañías que faltan pueden estar tratando de lograr mejores contratos, pero no veo a nadie disputando lo que parece ser un hecho, y ciertamente no veo a ninguna compañía saliendo en estampida de Venezuela"¹⁵.

En febrero de 2002, Chávez reemplazó al presidente de PDVSA General Guacaipuro Lameda por Gastón Parra, un ex Presidente del Banco Nacional de Venezuela y un nacionalista cuyos puntos de vista coincidían más con la política del MEM. Chávez nombró también cinco nuevos miembros para la junta directiva de PDVSA. Históricamente, los miembros de la junta se seleccionaban entre los altos funcionarios de y por la propia compañía, pero los recién

15. Brian Ellsworth, "Harvest accepts oil deal", *Houston Chronicle*, 6 de agosto de 2005.

nombrados provenían de fuera de la compañía. El alto mando respondió a la destitución de Lamedo y al nombramiento de los cinco nuevos directivos acusando a Chávez de politizar PDVSA. Ellos reclamaron que Chávez destituyera a los nuevos directivos y amenazaron con unirse al paro general convocado por las mayores asociaciones de negocios de Venezuela, la Federación de Cámara de Comercio (Fedecámaras), y el mayor sindicato del país, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

A diferencia de la mayoría de los líderes izquierdistas de Latinoamérica, Chávez no contaba con mucho apoyo de los trabajadores sindicados. Pero sí tenía, sin embargo, el apoyo de más del 50% de los venezolanos que trabajaban en el sector informal del país. La mayoría de estos trabajadores habían sufrido bajo las reformas neoliberales y ahora, faltaba seguridad en sus trabajos, atención médica y planes de pensión. La CTV, que no había podido oponerse vigorosamente a la agenda neoliberal de los gobiernos de Pérez y Caldera, estaba aliada estrechamente con AD y no quería permitir que los trabajadores y sindicatos informales no afiliados a AD se unieran a la confederación. Después de la elección de Chávez, la CTV cerró filas con AD e hizo frecuentes alianzas con Fedecámaras, que representaba los intereses de la elite empresarial del país, lo que colocaba al sindicato firmemente en el campo de la oposición.

La administración de PDVSA se unió a la CTV y a Fedecámaras en el paro general del 9 de abril de 2002. Al día siguiente el general del ejército venezolano Néstor González apareció en las cinco cadenas privadas de televisión venezolanas y reclamó la renuncia de Chávez. Poco después, el Presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, apareció en televisión haciendo un llamamiento a que todos aquellos que se opusieran a Chávez marcharan hacia las oficinas centrales de PDVSA al día siguiente. Las cadenas de televisión privada de Venezuela, que controlaban el 95% de las transmi-

siones del país y eran extremadamente críticas del gobierno, repetidamente promocionaron ese día la demostración contra Chávez. En la mañana del 11 de abril, decena de miles de antichavistas marcharon desde los barrios ricos de Caracas hacia las oficinas centrales de PDVSA. El líder de la oposición Carlos Ortega, presidente de CTV, se dirigió a la multitud y los incitó a marchar hacia la residencia del Presidente en el Palacio de Miraflores para “pedir su dimisión”. Un funcionario del gobierno apareció inmediatamente en el canal estatal de televisión e imploró a los líderes de la oposición, quienes sabían que los manifestantes a favor de Chávez estaban alrededor del Palacio, que terminaran su marcha y evitaran una confrontación¹⁶.

A pesar de las súplicas del gobierno, la confrontación se produjo involucrando a ambos grupos de manifestantes, a la Guardia Nacional y a los oficiales de la policía de Caracas, que estaban controlados por el alcalde antichavista de la ciudad. Al finalizar el día, al menos 10 manifestantes habían muerto y docenas habían resultado heridos. Según el recuento de un testigo presencial, el periodista Gregory Wilpert, “se sintieron disparos dentro de la multitud y vi claramente que había tres grupos involucrados en el tiroteo: la policía de la ciudad, que es antichavista, los que apoyaban a Chávez y francotiradores desde arriba de los edificios. Una vez más, quién disparó primero es dudoso y probablemente sea imposible resolver este asunto”¹⁷. Las cadenas privadas de televisión culparon inequívocamente a los manifestantes a favor de Chávez por la violencia y transmitieron una película que había sido editada deliberadamente que les mostraba disparando pistolas mientras no permitía a los televidentes ver a los francotiradores que disparaban a la multitud chavista¹⁸.

16. Kim Bartley y Donnacha O'Brian, *The Revolution Will Not be Televised*, The Irish Film Board, 2003.

17. Gregory Wilpert, “Coup in Venezuela: an eyewitness account”, ZNet, 12 de abril de 2002.

18. *The Revolution Will Not be Televised*.

Oficiales militares simpatizantes de la oposición usaron la revuelta para hacerse con el control del palacio presidencial. Chávez, miembros de su gobierno y soldados de la Guardia Nacional de Honor, cuya misión era proteger el Palacio, se refugiaron en el interior del Palacio de Miraflores. Chávez se rindió sólo cuando los líderes golpistas amenazaron con bombardear el Palacio.

En la mañana del 12 de abril, los venezolanos despertaron con transmisiones de radio y televisión anunciando que había tenido lugar un golpe militar y Chávez había dimitido. También hubo testigos de la asombrosa admisión por la oposición de que el golpe había sido premeditado. Durante una transmisión por la mañana del programa 24 Horas de Venevisión, el líder de la oposición, Víctor Manuel García, agradeció a todas las cadenas privadas de televisión el papel que habían jugado en el golpe. Explicó cómo las demandas televisadas del General González dos días antes de que Chávez dimitiera tenían la intención de sugerir que el golpe militar estaba fraguándose. El objetivo, dijo García, era evitar que el Presidente venezolano dejara el país para asistir a una reunión planificada de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Costa Rica: "Nosotros necesitábamos a Chávez aquí en Venezuela... así que cuando Chávez no fue a Costa Rica y se quedó aquí en Venezuela activamos el plan". El almirante de la armada venezolana Carlos Molina Tamayo, también invitado a 24 Horas, describió el plan: "El plan era tener a las masas del pueblo en las calles; para obtener el apoyo social antes de desplegar las Fuerzas Armadas"¹⁹.

Varias horas después de la transmisión matutina de Venevisión, los militares tomaron juramento como Presidente al líder de Fedecámaras, Pedro Carmona. Este inmediatamente comenzó a emitir decretos que disolvían la Asamblea Nacional, destituyó al fiscal general, derogó la Constitución y revocó 49 leyes aprobadas por el gobierno de Chávez. El líder golpista cambió nuevamente el

19. *Ibíd.*

nombre del país a República de Venezuela, quitándole la palabra Bolivariana, y restituyó a Lamed a su puesto como presidente de PDVSA.

Al principio, los seguidores de Chávez estaban asombrados por la renuncia de su líder. Pero en las siguientes 24 horas conocieron, a través de estaciones de radio comunitarias y transmisiones de cables de noticias extranjeros, que la afirmación de los medios privados venezolanos de la renuncia de Chávez era falsa. Ciento de miles de chavistas tomaron las calles de Caracas y otras ciudades para demandar que el líder democráticamente electo del país regresara al poder. Se enfrentaron a la policía en Caracas hasta que finalmente se apoderaron de la estación estatal de televisión en la noche del 12 de abril. Mientras tanto, tres mil soldados de la Guardia de Honor Nacional, que aún eran leales a Chávez, retomaron el Palacio presidencial. Finalmente, para acabar de invertir los papeles, Carmona se refugió en un escondite y Chávez fue restaurado como Presidente el 14 de abril. El golpe y los sucesos que le siguieron habían causado la muerte de más de cien venezolanos.

Enseguida se alzaron preguntas acerca de la participación de Estados Unidos en el golpe. Desde su llegada al poder en enero de 2001, la administración Bush había asumido una posición mucho más antagónica con respecto al gobierno de Chávez que la que había tenido la administración Clinton. Atascada en la ideología de la guerra fría de los años de Reagan, la administración Bush no iba a permitir los planes de Chávez de manipular los precios del petróleo y crear un nuevo “socialismo del siglo XXI” sin oposición. La administración, sin embargo, ejerció poca presión sobre la economía venezolana. Primero, la subida de los precios del petróleo después de que Chávez llegara al poder facilitó que Venezuela cumpliera los plazos de pago de su deuda externa, que era relativamente baja para los estándares de América Latina. En consecuencia, Chávez no necesitaba tomar dinero prestado del FMI;

por lo tanto, la institución financiera internacional ejerció poca influencia sobre el país. Y segundo, imponer sanciones quedaba fuera de discusión porque la economía estadounidense dependía fuertemente del petróleo venezolano, que sumaba aproximadamente el 15% de todas las importaciones de petróleo de Estados Unidos. Además de la política petrolera de Chávez y sus tendencias socialistas, la administración Bush también criticaba la estrecha relación del líder venezolano con el presidente cubano Fidel Castro y no estaban felices con las mordaces críticas de Chávez al “imperialismo” estadounidense, particularmente a la agenda neoliberal de Washington.

El asistente del Secretario de Estado Otto Reich, una figura clave en los intentos de la administración Reagan de derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua, se había reunido con el líder golpista Carmona y otros líderes de la oposición venezolana en numerosas ocasiones en las semanas y meses anteriores al golpe. El mismo día en que el ejército tomaba juramento a Carmona como Presidente, Reich convocó a los embajadores de Latinoamérica a su oficina, donde culpó del golpe a las políticas de Chávez e informó que Estados Unidos apoyaría al nuevo gobierno venezolano²⁰. El respaldo de la administración Bush al régimen golpista contrastaba con la reacción de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, que condenaron categóricamente el derrocamiento del líder venezolano elegido democráticamente. Sumado a esto, la amplia mayoría de los gobiernos de la región, ignoraron abiertamente la indirecta de Estados Unidos con respecto a enviar alguna señal temprana de apoyo a los líderes golpistas.

Puede que pasen años antes de que los documentos desclasificados arrojen luz sobre la magnitud de la participación de Estados Unidos en el golpe. Entre tanto, un puñado de documentos de la CIA obtenidos a través del Acta de Liberación de Información en

20. Ed Vulliamv, “Venezuela coup linked to Bush team”, *Observer*, 21 de abril de 2002.

octubre de 2004 por la abogada Eva Golinger y el periodista Jeremy Bigwood muestran que la administración Bush tenía amplios conocimientos acerca del intento golpista. Un informe breve altamente confidencial de la CIA fechado el 11 de marzo de 2002, un mes antes del golpe, dice: "Hay señales cada vez mayores de que los dirigentes de los negocios venezolanos y líderes militares están insatisfechos con el Presidente Chávez... puede que el ejército maniobre para derrocarlo"²¹. Otro documento desclasificado de la CIA emitido el 6 de abril de 2002, sólo cinco días antes del golpe, se encabezaba así: "Venezuela: condiciones maduras para intento golpista". El documento fue bastante certero en sus predicciones del golpe de Estado:

Las facciones militares disidentes, incluyendo algunos altos oficiales y un grupo de jóvenes oficiales radicales, están uniendo esfuerzos para organizar un golpe militar contra el Presidente Chávez, posiblemente este mismo mes, [censurado] el nivel de detalle en los planes reportados [censurado] señala a Chávez y a otros diez altos funcionarios que deben ser arrestados. ... Para promover la acción militar, los confabulados pueden tratar de explotar la confusión que se derive de las demostraciones de la oposición planificadas para más adelante en este mismo mes²².

La administración Bush había financiado a grupos opositores antes del golpe a través de la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID). La NED, que está financiada por el Congreso de Estados Unidos, ha sido utilizada en

21. "Senior executive intelligence brief", Agencia Central de Inteligencia, 11 de marzo de 2002.

22. "Senior executive intelligence brief", Agencia Central de Inteligencia, 6 de abril de 2002.

el pasado para apoyar grupos pro-neoliberales aliados estrechamente a los intereses estadounidenses en Latinoamérica y en el resto del mundo. La administración Reagan usó a la NED en la década de 1980 como un componente clave para derrocar al gobierno sandinista nicaragüense. La NED dio millones de dólares a los grupos antisandinistas y también jugó un papel vital en la reestructuración neoliberal de la Nicaragua post-sandinista.

En Venezuela, la administración Bush también usó a la NED como un instrumento para alcanzar el cambio de régimen. La NED no sólo financió grupos de oposición antes de su participación en el golpe, sino que también continuó financiándolos después. Los líderes de dos organizaciones venezolanas que continuaron recibiendo financiamiento de la NED después del golpe habían sido nombrados por Carmona para posiciones del gabinete en el gobierno golpista: Leopoldo Martínez como Ministro de Finanzas y Leonardo Carvajal como Ministro de Educación. Un informe del Departamento de Estado que examina el período antes del golpe señala: "Está claro que, durante un período de seis meses, NED, el Departamento [de Estado] y el DD [Departamento de Defensa de Estados Unidos] suministraron entrenamiento, cimentaron instituciones y otros programas de ayuda encubierta por un valor de alrededor de 3,3 millones de dólares a organizaciones venezolanas e individuos, algunos de los cuales se sabe que participaron en los eventos del 12 de abril"²³.

Otro ejemplo significativo del papel político que jugaron la NED y la USAID, que están bajo la jurisdicción del Departamento de Estado, fue el financiamiento de programas "de promoción democrática" en Venezuela dirigidos por el Instituto Republicano Internacional (IRI). Al día siguiente del golpe, el presidente del IRI, George Folsom, dejó clara su posición parcializada cuando declaró:

23. "A review of US policy toward Venezuela: November 2001- April 2002", Departamento de Estado de Estados Unidos, de julio de 2002.

“Anoche, liderado por cada sector de la sociedad civil, el pueblo venezolano se alzó para defender la democracia en su país. Los venezolanos fueron provocados a la acción como resultado de la represión sistemática por parte del gobierno de Hugo Chávez”²⁴. Folsom evidentemente no considera parte de la sociedad civil a la mayoría de los venezolanos pobres que apoyan a Hugo Chávez .

Mientras que aún no existe ninguna evidencia irrefutable que pruebe que Estados Unidos estuvo involucrado en planear y orquestar el golpe, está claro que dólares de los contribuyentes estadounidenses estaban financiando a los grupos de oposición involucrados en la expulsión de Chávez. Aún más, el conocimiento anticipado del golpe por parte de la administración Bush y su rechazo a advertir al gobierno venezolano la convierten, cuando menos, en cómplice del derrocamiento de un líder elegido democráticamente.

No sorprende que los principales medios de información se hicieran eco de la posición oficial antichavista de la administración Bush y exhibieran el mismo preocupante concepto de democracia. Un editorial de *The New York Times* del 13 de abril declara: “Con la renuncia de ayer del presidente Hugo Chávez, la democracia venezolana ya no se encuentra amenazada por un posible dictador. El señor Chávez, un ruinoso demagogo, abandonó después de la intervención militar y entregó el poder al respetado líder de negocios Pedro Carmona”²⁵. Entre tanto, el *Chicago Tribune* declaraba: “No todos los días la democracia se beneficia de las intervenciones militares para destituir por la fuerza a un Presidente electo”²⁶. Aparentemente, era de poca importancia para la administración Bush y los principales medios de comunicación estadounidenses que Chávez fuera electo democráticamente dos veces, con el 57 y el 59% de

24. Declaraciones de George Folsom, “IRI President Folsom praises Venezuelan civil society’s defence of democracy”, Instituto Republicano Internacional (IRI), 12 de abril de 2002.

25. “Hugo Chávez departs”. *New York Times*, 13 de abril de 2002.

26. “US papers hail Venezuelan coup as pro-democracy move”, Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR), 18 de abril de 2002.

los votos respectivamente. Tampoco parecía importar que Chávez, como había señalado la CIA en uno de sus breves informes sólo días antes del golpe, mantuviera un amplio apoyo entre los venezolanos pobres, quienes constituían la vasta mayoría de la población²⁷.

Había dos razones principales por las que la administración Bush deseaba ver a Chávez destituido. Una eran las políticas petroleras venezolanas, que habían incrementado los precios globales y dañado los intereses de las compañías petroleras estadounidenses. La otra razón era la creciente preocupación de Washington de que la “revolución para los pobres” y la retórica anti-neoliberal de Chávez estuvieran influenciando a otros países en Latinoamérica, y de esta manera representando una amenaza para los intereses políticos y económicos de Estados Unidos en la región. El director de la CIA, George Tenet, dejó al descubierto la actitud de la administración Bush respecto a Venezuela en un testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado dos meses antes del golpe: “Venezuela es importante porque es el tercer suministrador de petróleo. Yo diría que el señor Chávez –y el Departamento de Estado puede decir esto– probablemente no tiene en cuenta los intereses de Estados Unidos en el corazón”²⁸. La declaración de Tenet encierra claramente la esencia de la política estadounidense con respecto a Latinoamérica: en primer lugar y antes que todo, los gobiernos de la región deben servir a los intereses de Estados Unidos, no a los de sus propios ciudadanos.

A pesar de que el golpe fallara, la oposición venezolana persistió en sus intentos de derrocar a Chávez. El 2 de diciembre de 2002, Fedecámaras y CTV lanzaron nuevamente un paro general en el que participó la dirección de PDVSA. En realidad, el paro nacional

27. “Senior executive intelligence brief”, 6 de abril de 2002.

28. George Tenet, “Current and projected national security threats to the United States”, Hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, 6 de febrero de 2002.

era más un paro forzado por las administraciones que una huelga de los trabajadores. Mientras que una significativa parte de los trabajadores participó inicialmente en el paro, paulatinamente comenzaron a regresar a sus trabajos, sólo que muchos se encontraron con que no podían entrar.

El paro forzado por las administraciones mutiló la industria petrolera venezolana, y por extensión la economía nacional, cuando el personal de dirección y los técnicos clausuraron la mayor parte del sector del petróleo. Al octavo día del paro, Chávez desplegó al ejército para ocupar instalaciones petroleras vitales en un intento de mantener la industria operando. Muchos cuellos azules que trabajaban en el petróleo comenzaron a regresar al trabajo, pero la dirección y la mayoría de los técnicos prometieron continuar el paro laboral hasta que Chávez dimitiera y se llevaran a cabo nuevas elecciones. La Casa Blanca de Bush se situó abiertamente junto a la oposición reclamando una "solución electoral a la crisis venezolana"²⁹.

El 3 de febrero de 2003, con los huelguistas cada vez más divididos, los líderes de la oposición terminaron el paro forzado por la administración. Durante el día número 63 de paro laboral, Chávez había despedido a cerca de 18 mil trabajadores petroleros, la mayoría de la administración, y los había reemplazado por retirados y nuevos empleados. Después de años de lucha, Chávez había tenido éxito en ganar el control de PDVSA. El líder venezolano estaba finalmente en posición de asegurar que una porción importante de las ganancias de la compañía estatal fueran empleadas para financiar proyectos económicos y sociales que beneficiaran a la mayoría de los venezolanos como se declaraba en la nueva Constitución del país.

Tres meses después de que terminara el paro, trabajadores, principalmente chavistas, establecieron la Unión Nacional de Tra-

29. "Venezuela leader vows to break strike", BBC News, 13 de diciembre de 2002.

bajadores de Venezuela (UNT). Miembros de la UNT han debatido repetidamente cuán cerca deberían aliarse al gobierno de Chávez, dada la cooptación de CTV que resultó de su estrecha relación con AD. Entretanto, la UNT reemplazó a la CTV como la federación sindical más prominente del país, contando con más de un 75% de acuerdos colectivos firmados en el 2003 y el 2004, comparado con sólo un 20% de la CTV.³⁰

No habiendo podido sacar a Chávez del poder mediante dos elecciones, un golpe de Estado y un paro general, la oposición decidió emplear la nueva Constitución para tratar de alcanzar su objetivo. El Artículo 72 de la Constitución permitía destituir a los funcionarios elegidos después de haber transcurrido la mitad del período de mandato. La Constitución requiere que la petición sea firmada por al menos el 20% de los electores registrados en el país para dar inicio al referéndum revocatorio. Las peticiones firmadas deben ser sometidas al Consejo Nacional Electoral (CNE) para el recuento y la verificación antes de que se celebre un referéndum revocatorio. Para que un funcionario elegido sea destituido en un referéndum autorizado por el CNE, deben participar al menos el 25% de los electores registrados y deben votar a favor de la destitución un número de electores igual o mayor que el número de los que habían elegido al funcionario³¹.

Transcurrido la mitad del período de mandato de Chávez, la oposición recogió exitosamente firmas suficientes para satisfacer el requisito constitucional de que el 20% de los electores registrados en el país firmaran la petición. El CNE verificó las firmas y el referéndum fue programado para el 15 de agosto de 2004. Los electores del referéndum simplemente tenían que votar *sí* si querían que

30. Jonah Gindin, "Made in Venezuela: the struggle to reinvent Venezuelan labor", *Monthly Review*, junio de 2005, p. 76.

31. "Artículo 72", Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Caracas: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 2000), p. 23.

Chávez fuera destituido y *no* si querían que terminara su mandato. Un asombroso 73% de los electores registrados rehusó emitir un voto en el referéndum. Una vez más Chávez ganó convincentemente con el 59% de los votos; salió victorioso en 22 de los 24 Estados del país. Observadores internacionales del Centro Carter y la Organización de Estados Americanos confirmaron la validez del proceso y sus resultados³².

Mientras tanto, se alzaron preguntas sobre si el papel de Estados Unidos en el proceso del referéndum constituyó una intervención en los asuntos políticos internos de Venezuela. En el 2002, María Corina Machado fundó una organización no gubernamental (Súmate) para organizar y promover el referéndum. Desde el principio estuvo claro que Súmate no era la organización no-parcializada que declaraba ser. Machado era una miembro prominente de la oposición, que había firmado el decreto emitido por el líder golpista Carmona disolviendo las organizaciones democráticas del país. Incluso el antiguo presidente Jimmy Carter se refirió a Súmate como un grupo de oposición en su informe después del referéndum, declarando que se había reunido con "Súmate y otros grupos de la oposición"³³.

La administración Bush, que ya financiaba varios grupos opositores, comenzó a financiar a Súmate a través de la NED y la USAID. La NED suministró a Súmate una donación de 53.400\$ en septiembre de 2003. Según la NED, Súmate iba a usar el financiamiento para llevar a cabo una campaña que "alentaría la participación en el proceso de votación del referéndum"³⁴.

32. "Last phase of the Venezuelan recall referendum: Centro Carter Report", Centro Carter, 21 de agosto de 2004.

33. Jimmy Carter, "President Jimmy Carter: Venezuela election trip report, Aug 13-18, 2004", Centro Carter, 19 de agosto de 2004.

34. "Grant agreement no. 2003-548.0 between National Endowment for Democracy and Súmate", Fondo Nacional para la Democracia, 29 de septiembre de 2003.

Enfrentar a los candidatos opositores entre sí en una elección general puede considerarse recomendable. Pero el proceso de referéndum era único porque la Constitución exige que al menos el 25% de los electores registrados vayan a las urnas o el intento de la oposición de destituir al Presidente fallaría automáticamente. Por lo tanto, en el contexto de un referéndum, estimular la participación era un acto político parcializado. La NED más adelante demostraría su naturaleza partidista en un editorial acerca de la polarización política en Venezuela en el texto del contrato de la donación. La NED echó la culpa de los problemas venezolanos totalmente sobre los hombros de Chávez: “Una vez en el poder, la retórica revolucionaria de Chávez, el descuido público de los procesos democráticos e instituciones y los mordaces ataques contra sus oponentes, aumentaron las tensiones políticas y sociales y endurecieron a la oposición”³⁵.

El 20 de agosto de 2003 la USAID donó 84.840\$ al programa Súmate para organizar el referéndum. La naturaleza política de la USAID se hacía evidente en el lenguaje del contrato de financiamiento que establecía lo siguiente: “Si en algún momento la USAID determina que la continuación de parte o de todo este programa de financiamiento debe ser suspendido o terminado porque esta asistencia no sea de interés nacional para Estados Unidos... entonces la USAID puede directamente... cerrar este contrato”³⁶. Dado que la administración Bush prefería ver un cambio de régimen en Venezuela, no había dudas de que apoyar a Súmate para la expulsión de Chávez era claramente la conducta política a seguir, no en nombre de la democracia, pero sí “en el interés nacional de Estados Unidos”.

La administración Bush había aplicado sin éxito varias estrategias utilizadas en el pasado para expulsar a gobiernos en América

35. *Ibíd.*

36. “Venezuela: Iniciativa para la construcción de confianza”, Democratic Alternatives Incorporated, 20 de agosto de 2003.

Latina, que incluían el apoyo a los golpes, los paros generales y los grupos de oposición. Entretanto, la oposición venezolana había quedado tambaleante después de la derrota del referéndum y el Presidente, que había sido electo por tres ocasiones –dos elecciones y un referéndum– en seis años, era más popular que nunca. En mayo de 2005, como resultado de su “revolución para los pobres” financiada por el petróleo, el índice de adhesión a Chávez sobrepasaba el 70%³⁷.

La Revolución Bolivariana

La popularidad de Chávez aumentó después de cada intento fallido por derrocarlo. Simultáneamente, su legitimidad aumentó no sólo entre la mayoría de los venezolanos sino también a los ojos de muchos en toda Latinoamérica. Sus duras críticas a las políticas neoliberales impuestas a las naciones del Sur por las instituciones financieras internacionales acrecentaron su popularidad entre los marginados. En el 2004, Chávez declaró ante la ONU: “El hambre y la pobreza son los efectos más terribles de un orden mundial basado en la globalización neoliberal... Un mundo sin hambre y pobreza sólo podrá ser alcanzado a través de un orden social y económico radicalmente diferente del que ahora prevalece”³⁸. Chávez busca alcanzar ese orden social y económico radicalmente diferente a través de la implementación de su Revolución Bolivariana.

Con el lanzamiento de varios programas financiados con el petróleo, conocidos como “misiones”, Chávez comenzó a implementar lo que llamó “socialismo del siglo XXI”. Las diferentes misiones brindaban atención médica, alimentos, educación, viviendas y formación para el empleo a venezolanos empobrecidos. Chá-

37. Peter Millard, “Venezuela Chávez’s approval rating at 70.5%”, *Dow Jones Newswires*, 2 de mayo de 2005.

38. Presidente Hugo Chávez, “Do we want to end poverty? Let us empower the poor (the Venezuelan experience)”, Naciones Unidas, septiembre de 2004.

vez también pensó en redistribuir las riquezas del país, incluso la tierra, para beneficiar al 70% de la población que vivía en la pobreza. Intercambió petróleo por médicos cubanos mediante un acuerdo concebido para llevar atención médica gratuita a todos los venezolanos. También empleó los 30 mil millones de dólares de beneficios del Estado para subsidiar comida y medicinas, mejorar las escuelas en las áreas pobres, construir albergues y brindar microcréditos a cooperativas de pequeños propietarios en todo el país.

La oposición venezolana y la administración Bush señalaron estas políticas como ejemplos de la influencia de la Cuba comunista y declararon que Chávez estaba gastando irresponsablemente las riquezas del petróleo y arruinando la economía. El petróleo nacional venezolano no era ya el grifo del dinero personal de la elite del país y las compañías petroleras estadounidenses; ahora estaba utilizándose para beneficiar a la mayoría de los ciudadanos, particularmente los que están situados en los peldaños más bajos de la pirámide socioeconómica. En febrero de 2005, el Ministro de Relaciones Exteriores, Rodríguez Araque, dijo en una reunión de la OEA que el gobierno venezolano veía "la justicia social como un componente fundamental de la democracia". Rodríguez explicó las prioridades del gobierno declarando que "la democracia en un país como Venezuela, cuya realidad concreta es la pobreza, depende de dar a la gran mayoría del país la oportunidad de participar; esto es, que derrocar a la pobreza se convierte en la primera razón de ser del gobierno"³⁹. Sin embargo, aliviar la pobreza no era la prioridad de todos los venezolanos, particularmente si era a expensas del 20% de la población que constituía la clase media y alta. Jairo González, un estudiante universitario de 19 años de los suburbios pudientes de la ciudad de Maracaibo rica en petróleo, ilustra

39. Ministro Ali Rodríguez Araque, "Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Ali Rodríguez Araque en sesión extraordinaria del Consejo Permanente", Organización de Estados Americanos, 23 de febrero de 2005.

claramente la división de clases en Venezuela cuando declara: "Odiarnos a Chávez porque sólo ayuda a los pobres; que lo apoyan. Él no ayuda a la clase media y alta"⁴⁰.

A diferencia de la Revolución Cubana, donde la economía del país fue transformada radicalmente del capitalismo al socialismo en unos pocos años, la Revolución Bolivariana venezolana ha sido mucho menos radical y ha implementado las reformas a un paso mucho más lento. En cierta forma, a pesar de la retórica de la administración Bush y de la oposición, la revolución de Chávez se asemeja más al socialismo democrático de Europa Occidental que al comunismo cubano. En el contexto del neoliberalismo, sin embargo, la Revolución Bolivariana parece ser muy radical.

Uno de los aspectos iniciales de "la revolución para los pobres" de Chávez incluía enfrentar la crisis de la medicina en el país. En 1999, Cuba envió 450 doctores y técnicos a ayudar a las víctimas de las inundaciones en el norte de Venezuela. Al año siguiente, Venezuela comenzó a enviar petróleo a Cuba y a otras naciones latinoamericanas y del Caribe en términos financieros preferenciales. El trato con Cuba también incluía un acuerdo de intercambio en el que el gobierno de Castro enviaría a Venezuela médicos, técnicos de la salud, entrenadores deportivos y expertos en alfabetización en pago parcial por los 53 mil barriles de petróleo diarios. La cifra de embarques de petróleo venezolano enviados a Cuba sumaría 90 mil barriles al día para 2005⁴¹.

En la época en que se firmó el tratado con Cuba, el sistema de salud venezolano estaba desfondado y no era realmente asequible a los venezolanos pobres que vivían en barrios insalubres de las ciudades y áreas rurales. Para la empobrecida mayoría, visitar a un doctor significaba viajar grandes distancias seguidas de filas interminables. Según el Ministro de Salud y Desarrollo Social, Francisco

40. Jairo González, entrevista con el autor, 2 de mayo de 2005, Maracaibo, Venezuela.

41. "Cuba, Venezuela sign oil deal", Associated Press, 30 de octubre de 2000.

Armada, “nosotros practicamos políticas neoliberales durante las dos últimas décadas del siglo pasado, de forma similar al resto de Latinoamérica. Esto nos fue preparando la trampa legal para un sistema de salud privado muy parecido al modelo chileno, aunque no exactamente igual”⁴². Mientras la privatización no supuso un problema para las clases media y alta, quienes ya pagaban por atención médica privada de calidad, amenazaba con hacer la atención médica aún más inasequible para los pobres. Para enfrentar la falta de equidad en los programas de salud y revertir el proceso de privatización, el Artículo 83 de la Constitución Bolivariana ratifica el derecho a la libre, universal e igualitaria atención médica para todos los venezolanos. Armada explicó que “como país, nosotros decidimos que la salud era un derecho social y humano fundamental y prioritario, incluso que estuviera por encima de otros derechos. Por ejemplo, que estuviera por encima de los derechos comerciales”⁴³.

El número de médicos cubanos que trabaja en los barrios pobres de Venezuela se incrementó significativamente después del lanzamiento de la *Misión Barrio Adentro** en abril de 2003. Barrio Adentro se inició en la empobrecida municipalidad de Libertador, localizada en las laderas de las colinas que rodean Caracas. Armada describe el proyecto:

Teníamos dificultad para lograr que los médicos venezolanos participaran en este proceso, así que empezamos a trabajar con médicos cubanos. La misma comunidad estableció los lugares donde deberían establecerse los médicos; muchas familias contribuyeron con parte de sus propios hogares. La comunidad asumió la responsabilidad en la seguridad de los médicos, compartiendo su comida y

42. Ministro Francisco Armada, entrevista con el autor, 18 de mayo de 2005, Caracas, Venezuela.

43. *Ibíd.*

* N. del T.: En Español en el original.

muchos otros aspectos del proceso. Y es este proceso, esta combinación de fuerzas lo que queremos destacar, porque en esto vemos la receta para el éxito con una comunidad organizada que no sólo hace demandas sino que también participa en su derecho a la salud⁴⁴.

El objetivo de Barrio Adentro era hacer que los servicios médicos fueran asequibles a todos los venezolanos, particularmente a los pobres marginados. El objetivo no era sólo curar la enfermedad sino también practicar la medicina preventiva. Una de las prioridades iniciales de los médicos cubanos era incrementar las bajas cifras de niños pobres venezolanos vacunados contra enfermedades pre-visibles. El gobierno estableció la construcción de miles de peculia-res clínicas de primeros auxilios, llamadas “módulos”, que eran pequeñas, de dos plantas, y de ladrillos rojos en forma de hexágo-no. Los médicos también trabajaban en nuevas clínicas de primeros auxilios establecidas en edificios que ya estaban construidos en los barrios pobres. Para finales de 2004 había más de 20.000 personas entre personal médico y entrenadores deportivos trabajando en cerca de 9.000 clínicas en toda Venezuela⁴⁵.

Para el 2005 en el Barrio 23 de Enero*, uno de los mayores vecindarios pobres de Caracas, el gobierno había usado las ganancias del petróleo para financiar más de noventa consultorios, con más de treinta de ellos ubicados en los recién construidos módulos. Los consultorios servían a los 300.000 residentes de la comunidad, muchos de los cuales vivían en pequeñas casas de ladrillos hacina-das precariamente una encima de la otra en las laderas de los cerros con vistas hacia el centro de la ciudad. Los médicos cubanos tienen horario de trabajo desde las ocho de la mañana hasta el mediodía y hacen visitas a domicilio en el horario de la tarde. Viven en el sec-

44. *Ibíd.*

45. *Ibíd.*

* N. del T.: En español en el original.

tor del barrio en el que trabajan y están localizables las veinticuatro horas del día. Según una paciente que estaba esperando para ver a un médico cubano en uno de los módulos, “el programa ha sido bueno para la comunidad. No había médicos en 23 de Enero antes de Barrio Adentro”⁴⁶. Mientras, los entrenadores deportivos eran responsables de la educación general de los ciudadanos en lo concerniente a temas de salud y cómo cuidar de sus cuerpos. Los entrenadores rutinariamente daban clases de educación física y, junto con los médicos, se reunían regularmente con los comités de salud integrados por los residentes locales para discutir las necesidades sanitarias de la comunidad. Tibisay Miranda, una residente de la sección de La Cañada del Barrio 23 de Enero, declaró que “la gente en la comunidad que antes apenas conocía a sus vecinos ahora se ha organizado”⁴⁷.

El programa de salud de la administración Chávez ha ido aún más allá de establecer módulos con médicos cubanos y entrenadores deportivos. El gobierno usaba las ganancias del petróleo para financiar un sistema de salud pública de tres niveles. Los módulos constituyen el primer nivel, brindando atención primaria en las comunidades. Para un tratamiento más especializado, los pacientes son remitidos a las “clínicas populares”, que constituyen el segundo nivel del sistema. Significativamente mayores que los módulos, las clínicas populares pueden realizar rayos X, ultrasonidos, podología, ginecología, estomatología, cirugía menor y pruebas diagnósticas. Para el 2005, la administración Chávez había construido más de 850 clínicas populares en todo el país⁴⁸. El tercer nivel del sistema consiste en hospitales para cirugía mayor y enfermedades graves. La administración Chávez también ha invertido fuertemente en formar miles de nuevos médicos venezolanos en universida-

46. Anónimo, entrevista con el autor, 29 de abril de 2005, Caracas, Venezuela.

47. Tibisay Miranda, entrevista con el autor, 17 de mayo de 2005, Caracas, Venezuela.

48. Armada, entrevista.

des del país y en Cuba para, con el tiempo, disminuir la dependencia del país del personal médico cubano.

Los cuidados médicos gratuitos constituyen sólo un componente del programa general de salud. La administración Chávez también ha empleado las ganancias del petróleo del país para establecer “farmacias populares” en las comunidades pobres. Estas farmacias, subsidiadas por el Estado, permiten que los venezolanos pobres compren medicinas con un 85% de descuento. Antes de Chávez, aún si los venezolanos pobres podían visitar a un médico, el alto precio de los fármacos imponía una formidable barrera para satisfacer sus necesidades médicas.

Otro componente del programa de medicina preventiva del gobierno consiste en asegurar que todos los venezolanos, particularmente los niños de áreas pobres, tengan acceso a los alimentos básicos que brindan una nutrición adecuada. Además de establecer “cocinas populares” o dispensarios de alimentos para los necesitados en los vecindarios pobres, la administración Chávez inició en el 2003 la Misión Mercal en respuesta al colapso económico provocado por el paro petrolero dirigido por la administración. El gobierno construyó Mercals o mercados de víveres, que venden alimentos subsidiados por el Estado en los barrios pobres. Alimentos básicos tales como arroz, frijoles, pollo, leche y pan están disponibles a precios entre un 30 y un 40% más bajos –gratis para aquellos que viven en la extrema pobreza– que en los supermercados privados, que frecuentemente están ubicados lejos de los barrios pobres. Además de brindar alimentos básicos asequibles, los Mercals también han generado empleo. Para finales de 2004, según el gobierno, los más de 13.000 Mercals subsidiados por el Estado han generado más de 41.000 empleos para los miembros de las comunidades locales⁴⁹.

49. “Misión Mercal: garantía de seguridad alimentaria”, Ministerio de Comunicación e Información, enero de 2005.

El gobierno también ha tratado de reformar el sistema educativo del país, tratando de convertir en gratuitas la educación primaria y secundaria. La administración Chávez está transformando las escuelas primarias y secundarias de instituciones tradicionales en Escuelas Bolivarianas. En el 2005, más de ochenta y cinco escuelas en Caracas habían completado esta transformación⁵⁰. Las Escuelas Bolivarianas tienen cocinas cuyo personal son padres de la comunidad que han completado un curso intensivo de nutrición financiado por el Estado. Los comedores de las escuelas brindan a los niños desayuno, almuerzo y una merienda por la tarde en un intento de disminuir los niveles de malnutrición entre los niños venezolanos pobres. Las Escuelas Bolivarianas también tienen laboratorios de informática de suerte que todos los niños venezolanos, no sólo los de familias ricas, tienen la oportunidad de instruirse en informática en el siglo XXI. En el Barrio 23 de Enero, doce de las 22 escuelas del vecindario han sido transformadas al modelo Bolivariano a principios de 2005. Según Arnaldo Sotillo, director de una de las Escuelas Bolivarianas del barrio, el objetivo general de las nuevas escuelas es enfatizar “valores sociales y formar ciudadanos diferentes para el futuro, una sociedad mejor en general. El único modo de cambiar una sociedad es a través de la educación”⁵¹.

Al mismo tiempo, el gobierno ha lanzado la Misión Robinson, una campaña de alfabetización y educación para adultos que hace los laboratorios de informática accesibles a los miembros adultos de la comunidad durante las noches. El programa de alfabetización también brinda clases gratis de informática, acceso a Internet, a librerías públicas e Infocentros que han sido establecidos en todo el país. En el 2005, la Misión Robinson había alfabetizado casi 1,5

50. Arnaldo Sotillo, director, Escuela Básica Integral Bolivariana Estado Vargas, entrevista con el autor, 17 de mayo de 2005, Caracas, Venezuela.

51. *Ibíd.*

millones de venezolanos, cerca del 90% de la población analfabeta del país⁵².

La Revolución Bolivariana, según sus propuestas, trata de crear una nueva sociedad en la que todos los ciudadanos estén facultados políticamente. Una estrategia utilizada por el gobierno para alcanzar esta meta es educar al pueblo acerca de sus derechos políticos, sociales y económicos según la nueva Constitución. En Venezuela, la Constitución está en todas partes. Es uno de los libros más vendidos. Existen descripciones en dibujos animados de la Constitución en las escuelas. En los Mercals subsidiados por el Estado, muchos envoltorios de comida están adornados con un artículo de la Constitución y una tira de dibujos ilustrando el significado de ese artículo en particular. Un paquete de azúcar, por ejemplo, trata el Artículo 113, que establece que las personas tienen derecho a una educación de calidad gratis. Encima del escrito hay una tira de dibujos en que aparece el héroe de la independencia Simón Bolívar llevando a sus dos hijos a la escuela. Otros envoltorios de alimentos contienen artículos de la Constitución que se refieren al derecho a la comida así como al derecho de no ser víctimas de la brutalidad policial y la corrupción gubernamental.

En el Barrio 23 de Enero, el representante local del gobierno, Lisandro Pérez, conocido como el *Jefe Civil**, declara que la Revolución Bolivariana busca llevar al poder a los ciudadanos que se han vuelto apasionados del cambio social. Este cambio, dice Pérez, no puede venir de arriba; debe estar enraizado en las comunidades locales. El objetivo es crear un nuevo socialismo diferente del socialismo rígido y centralizado del siglo XX: "Cuando cayó el muro de Berlín, pensamos que era la caída del socialismo, pero no era así. ¿Cuál fue el significado de la caída del muro de Berlín? En realidad, fue la caída de los viejos modelos, la vieja ortodoxia, y algo nuevo

52. Armada, entrevista con el autor.

* N. del T.: En español en el original.

se levantaba... Tenía que caer para que un nuevo proyecto político pudiera levantarse, como el Presidente Chávez que está ahora en el camino"⁵³. En otras palabras, el nuevo proyecto socialista no puede ser dictado y controlado de forma estricta por un gobierno centralizado, como ocurrió con tanta frecuencia durante el siglo XX. En su lugar, el papel del gobierno nacional es facilitar y brindar apoyo logístico para las iniciativas de la comunidad.

Como parte de sus intentos para establecer los cimientos del "socialismo del siglo XXI", la administración Chávez ha trabajado para equilibrar la desigual distribución de las tierras agrícolas. Cuando Chávez llegó al poder, un 2% de los terratenientes de Venezuela poseía más del 60% de las tierras de cultivo, la mayoría en fincas sin explotar. En noviembre de 2001⁵⁴, Chávez decretó la Ley sobre la Tierra y el Desarrollo de la Agricultura, en un intento de equiparar la desigual distribución de tierras y trabajar con el objetivo de lograr la disminución de la dependencia de los alimentos importados. El plan del gobierno para incrementar la producción agrícola también intenta diversificar la economía del país y disminuir los efectos de la Enfermedad del Holandés, que es el resultado de la dependencia excesiva de un solo renglón de exportación. A pesar de haber sido comparada con la reforma agraria cubana por la oposición, la ley agraria venezolana difiere del modelo cubano en que se reconoce el derecho a la propiedad privada. La ley limita el tamaño de la propiedad privada, sin embargo, a un máximo de cinco mil hectáreas y si más del 20% de las tierras no producen, entonces están sujetas a mayores impuestos⁵⁵.

En 2005, el gobierno había redistribuido 2,2 millones de hectáreas de tierras estatales a 130 mil familias de campesinos que ha-

53. Lisandro Pérez, entrevista con el autor, 29 de abril de 2005, Caracas, Venezuela.

54. Seth R. DeLong, "Chávez's agrarian land reform: more like Lincoln than Lenin", *Consejo sobre Asuntos Hemisféricos*, 25 de febrero de 2005.

55. "Decreta con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario", *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 9 de noviembre de 2001.

bían formado cooperativas⁵⁶. PDVSA proveyó el financiamiento para entrenamiento técnico y asistencia para asegurar que las cooperativas de campesinos serían rentables y productivas. La administración Chávez estableció también una Comisión de Intervención para evaluar los terrenos privados y determinar el tamaño de las propiedades, el grado de productividad y de legalidad de las posesiones antes de tomar decisiones sobre una posible redistribución. Al continuar reconociendo la propiedad privada mientras implementa una reforma agraria, Chávez ha intentado alcanzar un difícil equilibrio entre no desalentar la inversión privada y suplir las necesidades de las mayorías desposeídas de tierra.

No todas las cooperativas financiadas por PDVSA están en áreas rurales; algunas son cooperativas manufactureras localizadas en las ciudades. En el 2003 la compañía petrolera estatal convirtió un almacén de Caracas en desuso en el complejo comunitario llamado Fabricio Ojeda, que contiene tres cooperativas de producción: textiles, de calzado y agrícola. El complejo Fabricio Ojeda también alberga una clínica popular, una farmacia popular, un Mercal, parcelas agrícolas, variadas instalaciones para ejercicios físicos y una oficina que vende billetes de transporte urbano con descuento para los estudiantes. PDVSA brindó préstamos a la cooperativa textil creada por 280 mujeres de la comunidad local. Las mujeres usaron el financiamiento de PDVSA para construir un edificio usando mano de obra local y para comprar los materiales y la maquinaria necesaria para comenzar a producir uniformes escolares y militares, ropas, bolsos y otras producciones textiles. La cooperativa está suministrando uniformes baratos a las escuelas y al ejército y vendiendo sus restantes producciones a almacenes y vendedores de Caracas. Participando en la cooperativa, mujeres antes marginadas han logrado fortalecer su autoestima. Como declaró la

56. Seth R. DeLong, "Chávez's agrarian land reform".

miembro de la cooperativa Luisa Ruiz, “ya no nos quedamos más en la casa; ahora somos mujeres de negocios”⁵⁷.

En conjunto, con el empleo de los ingresos del petróleo para establecer cooperativas agrícolas y manufactureras, Chávez lanzó una campaña “Hecho en Venezuela” para impulsar al pueblo a adquirir las mercancías producidas en el país. El objetivo de la campaña era ayudar a diversificar la economía de la nación fuera de su hiper-dependencia del sector petrolero creando un mercado nacional para los bienes producidos por las nuevas cooperativas. Además, para proteger la industria nacional que estaba naciendo, el gobierno incrementó las tarifas de muchas importaciones. La campaña y la política proteccionista son parte de los intentos de la administración Chávez de lograr un objetivo difícil de alcanzar por muchas de las naciones del Sur ricas en petróleo: “sembrar” las ganancias petroleras para diversificar la economía del país.

La Revolución Bolivariana no ha establecido un proyecto estrictamente nacionalista; Chávez también ha puesto un gran énfasis en la integración regional como una forma más efectiva de enfrentar el proyecto global neoliberal de Washington. Venezuela ha propuesto la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) como una alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que trata de imponer Estados Unidos. El ALCA exigiría que todas las naciones de América Latina, independientemente de su nivel de desarrollo, compitan económicamente con Estados Unidos en un “libre” comercio. El ALBA, por otra parte, llama a solidarizarse con aquellos países de economía más débil a través de la creación de un “Fondo Compensatorio para la Convergencia Estructural”. Este fondo facilitaría una transferencia de ganancias desde las economías más desarrolladas a las más débiles, de forma similar al sistema de transferencia utilizado por las naciones miembros de la Unión Europea. Chávez ha demostra-

57. Luisa Ruiz, entrevista con el autor, 19 de mayo de 2005, Caracas, Venezuela.

do que su deseo de ayudar a la región a reducir su dependencia de las instituciones financieras radicadas en Washington es más que mera retórica. En julio de 2005, Venezuela prestó \$300 millones a Ecuador para que este país cumpliera con el pago de su deuda externa. El préstamo fue emitido cuando el Banco Mundial no desembolsó un préstamo previamente acordado de \$100 millones porque el FMI no estaba satisfecho con los esfuerzos ecuatorianos para implementar reformas neoliberales⁵⁸.

La alternativa regional Bolivariana también apoya políticas agropecuarias dirigidas a alcanzar la autosuficiencia alimentaria entre las naciones miembros en vez del modelo neoliberal orientado hacia la exportación agropecuaria. También se opone a los derechos de propiedad intelectual que establece el ALCA⁵⁹. En junio de 2005, como parte de su iniciativa para el ALBA, Chávez anunció la puesta en marcha de Petrocaribe, que tenía como meta asegurar la entrega de petróleo a precios asequibles a 13 naciones caribeñas, en un esfuerzo por detener el descontento social que a menudo deriva de los altos precios del combustible. Venezuela ya estaba entregando petróleo subsidiado a varias naciones del Caribe, pero bajo Petrocaribe, Caracas acordó absorber el 40% del costo siempre que el precio del petróleo sobrepase los 50\$ el barril (el precio estuvo por encima de los 60\$ el barril durante gran parte de 2005)⁶⁰. Un mes después de iniciado Petrocaribe, una nueva cadena de veinticuatro horas de noticias financiada por Argentina, Venezuela, Uruguay y Cuba comenzó a transmitir para todo el continente. La cadena de noticias radicada en Caracas, llamada Telesur, fue diseñada para brindar a los latinoamericanos una perspectiva diferente de la brindada por la cadena estadounidense CNN en español.

58. Sophia Hoffman, "Venezuela loans money to Ecuador", *Emerging Markets*, 2 de agosto de 2005.

59. Teresa Arreaza, "ALBA: Bolivarian alternative for Latin America and the Caribbean", *Venezuela Analysis*, 30 de enero de 2004.

60. "Caribbean oil initiative launched", BBC News, 30 de junio de 2005.

Venezuela también ha buscado fortalecer lazos políticos y económicos más allá del hemisferio occidental dirigidos a desarrollar alianzas estratégicas y reducir la dependencia venezolana del mercado petrolero estadounidense. En diciembre de 2004, Chávez firmó un tratado de comercio bilateral con Pekín por el que Venezuela suministra a China 120.000 barriles de petróleo al mes. El tratado también permite a la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) operar cincuenta yacimientos al este de Venezuela, que pueden producir más de un millón de barriles de petróleo y construir refinerías en el país sudamericano para procesar el crudo pesado⁶¹. El tratado fue una movida estratégica de Chávez que no sólo disminuye la dependencia de Venezuela del mercado estadounidense, sino que también intenta asegurar que cualquier intervención estadounidense en Venezuela represente una amenaza a Pekín por los intereses de las inversiones petroleras del CNPC en el país sudamericano. Para China, el acuerdo facilita al segundo mayor consumidor de petróleo del mundo un acceso muy apetecible a nuevas fuentes del vital recurso. Después que se anunciara el acuerdo, Chávez declaró: "Hemos producido y exportado petróleo por más de cien años, pero fueron cien años de dominación por Estados Unidos... Las calles de Nueva York están pavimentadas con nuestro petróleo. Nosotros les seguiremos vendiendo a ellos, pero no sólo a ellos".⁶² Desde la perspectiva de Washington, las políticas externas e internas de Chávez respecto al petróleo, la Revolución Bolivariana, las duras críticas al neoliberalismo y los llamamientos a la integración latinoamericana representan un serio desafío a la hegemonía estadounidense en la región.

61. "Venezuela and China sign oil deal", BBC News, 24 de diciembre de 2004.

62. "Chávez seals strategic alliance with Beijing", MercoPress, 28 de diciembre de 2004.

La respuesta de Estados Unidos

La respuesta de la administración Bush a la política petrolera de Chávez y a su Revolución Bolivariana no se limitó a respaldar el golpe, el paro general y alentar a la oposición para que convocara un referéndum, como se mencionó anteriormente. También trabajó para socavar el gobierno venezolano tratando de crear la impresión tanto en Venezuela como internacionalmente de que Chávez, a pesar de que había sido elegido democráticamente, no gobernaba de una forma democrática. En el 2003, el Secretario de Estado Colin Powell declaró: "El Presidente Chávez ha llevado a cabo algunas acciones durante el transcurso de su presidencia que nosotros no hemos aprobado. En ocasiones tiene algunas ideas con respecto al sistema democrático que no concuerdan completamente con las nuestras o, según consideramos, con los puntos de vista del pueblo venezolano"⁶³. Condoleezza, sucesora de Powell, continuó hablando del tema en junio de 2005 cuando, refiriéndose al líder venezolano, sugirió que "si usted es elegido democráticamente, usted debe gobernar democráticamente"⁶⁴.

Tanto la administración Bush como la oposición venezolana han señalado el empleo de decretos ejecutivos por parte de Chávez para introducir las leyes de los hidrocarburos y de reforma agraria como un ejemplo de su comportamiento autoritario. Lo que falta en su razonamiento es el hecho de que presidentes anteriores también promulgaron leyes por decreto bajo la antigua Constitución del país. En años recientes, muchos líderes elegidos democráticamente han promulgado, de forma rutinaria y constitucional, leyes por decreto para implementar reformas neoliberales. En Argentina, por ejemplo, el Presidente Carlos Menem, que fue el principal responsable de convertir a Argentina en un modelo de neoliberalismo, promulgó

63. Secretario Colin Powell, "Powell says terrorist arrests illustrate US, Russian cooperation", Departamento de Estado de Estados Unidos, 13 de abril de 2003.

64. Glenn Kessler, "Rice urges OAS to back democracy", *Washington Post*, 6 de junio de 2005.

336 decretos entre 1989 y 1994.⁶⁵ Los funcionarios de Estados Unidos también olvidaron mencionar que el Presidente Bush promulgó un decreto ejecutivo en el 2001 para implementar aspectos del plan nacional de energía desarrollado por el Vicepresidente Cheney⁶⁶.

Chávez también fue censurado por su propósito de incrementar la Corte Suprema de veinte a treinta y dos jueces, cuando los detractores afirmaban que ésta era una táctica antidemocrática para llenar la Corte con jueces fieles al gobierno. Sin embargo, el Presidente venezolano no implementó el cambio de la Corte a través de un decreto; la ampliación de la Corte fue aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional en diciembre de 2004. Los miembros de la oposición, sin embargo, argumentaron que sólo una nueva Asamblea Constituyente debía tener la autoridad para realizar tales cambios.

Hubo una respuesta similar a un nuevo proyecto de ley del gobierno con respecto a los medios de comunicación, denominado como Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en noviembre de 2004. La ley establecía que los medios de comunicación privados debían difundir programas gubernamentales de educación y de información durante sesenta minutos a la semana. También estipulaba que las compañías de los medios de comunicación podían ser multadas o incluso cerradas por transmitir programas cuyo contenido promuevan al desorden público. Human Rights Watch criticó la nueva ley por su falta de claridad: "Estas restricciones redactadas de forma vaga y las fuertes penalizaciones son una fórmula para la autocensura mediante la presión y las arbitrariedades de las autoridades del gobierno"⁶⁷. La Asamblea Nacional aprobó la ley como

65. Monica Barczak, "Representation by consultation? The rise of direct democracy in Latin America", *Latin American Politics and Society*, 43(3): 46.

66. "Executive Order 13211 of may 18, 2001: Actions concerning regulations that significantly affect energy supply, distribution, or use", *Federal Register*, 22 de mayo de 2001.

67. "Venezuela: media law undercuts freedom of expression", Human Rights Watch, 24 de noviembre de 2004.

respuesta a los repetidos ataques contra el gobierno por parte de los medios de comunicación privados, que incluían promover manifestaciones antigubernamentales, y el papel que estos jugaron en el golpe de abril de 2002 y el apoyo al régimen golpista durante su corta vida. En sus críticas a la nueva ley, Human Rights Watch reconoció la posición antigubernamental de los medios de comunicación privados: "Las compañías privadas de televisión frecuentemente han adoptado una posición abiertamente parcializada y sus noticias y programas de debate han sido extremadamente hostiles al gobierno de Chávez"⁶⁸. Muchos detractores tampoco señalaron que durante el tiempo que Chávez había estado en el cargo ni un solo periodista había sido encarcelado y no habían sido cerradas ninguna estación de televisión y radio ni ningún periódico, cosas que ocurrían comúnmente bajo los gobiernos anteriores⁶⁹.

A la vez que los detractores de las nuevas regulaciones de los medios de comunicación acusaban al gobierno de censura, la administración Chávez estaba trabajando para democratizar los medios de comunicación en Venezuela. Chávez buscó ayuda para agilizar el desarrollo de organizaciones comunitarias de los medios de comunicación como una fuente alternativa de información a las emisiones de los medios de comunicación corporativos, que todos eran opuestos al gobierno. Bajo las regulaciones gubernamentales, para calificar como una emisora comunitaria la estación de televisión o radio no debía generar ganancias y los miembros de la comunidad debían producir al menos el 70% del contenido transmitido. Como señala el periodista Gregory Wilpert: "El papel principal de los medios de comunicación comunitarios de Venezuela ha sido suministrar una cobertura periodística que refleja a la comunidad. ...Por el contrario, los medios de comunicación de la oposición, que

68. *Ibíd.*

69. Edgard Hernandez, "The Inter-American Dialogue Institute's report on Venezuela: another unjustified attack on Chavez", *Venezuela Analysis*, 22 de julio de 2005.

representan los intereses de las grandes compañías privadas, se sustraen completamente de las comunidades pobres y representan un conjunto de intereses diametralmente opuestos"⁷⁰.

La administración Bush ha respaldado regímenes dictatoriales en los países ricos en petróleo que apoyan los intereses políticos y económicos de Estados Unidos, tales como Arabia Saudita, Kuwait, Kazajistán, Azerbaiyán, Guinea Ecuatorial y Gabón. Paradójicamente, esa misma administración ha cuestionado repetidamente las credenciales democráticas de un Presidente que ha sido electo popularmente en dos elecciones libres e imparciales y en un referéndum nacional en un intervalo de seis años. Washington ha optado por ignorar los aspectos más democráticos y transparentes de la presidencia de Chávez, tales como las reuniones móviles del Consejo de Ministros que se celebraban en todo el país. Chávez y sus ministros viajan a diferentes lugares de Venezuela para realizar reuniones públicas del gabinete en las que dan respuesta a las preguntas que plantean los residentes de esa región en particular. De forma semejante al programa semanal de televisión y radio *Aló Presidente**, estas reuniones frecuentemente duraban cinco o más horas y se transmitían en vivo a la nación por el canal estatal de televisión. Como señalaba Richard Gott, biógrafo de Chávez, el Presidente venezolano trabaja duro para debatir las cuestiones que son de interés de los venezolanos de todo el país:

Él nunca para de hablar y nunca para de trabajar. Él tiene tiempo para todos y nunca olvida un aspecto. Durante varios años viajó incesantemente por todo el país, para estar muy al corriente de lo que ocurría. Esto no era una simple campaña electoral, dado que hablaría durante horas a los que a duras penas darían un voto. Él

70. Gregory Wilpert, "Community airwaves in Venezuela", *NACLA Report on the Americas*, enero/febrero 2004.

* N. del T.: En español en el original.

agotaba a su grupo directivo, a sus secretarías y a sus ministros. Yo he viajado con él hacia el interior de los más profundos rincones del país, y entonces, después de un día de 16 horas, podía reunir de improviso al Consejo de Ministros, con sus caras largas, para analizar qué habían descubierto y que medidas debían tomarse⁷¹.

Las afirmaciones de la administración Bush de que los criterios de Chávez no concordaban “con los puntos de vista del pueblo venezolano” están en completo contraste con los índices, superiores al 70%, de la aceptación pública del Presidente venezolano. Realmente, muchos venezolanos, en especial los pobres, se identifican muy estrechamente con el estilo de comunicación de Chávez y le ven como a uno de ellos. Como señalaba Otamendi Widmark, un taxista de Caracas: “Chávez habla con claridad; no emplea términos técnicos que muchas personas no pueden entender”⁷².

La administración Bush también ha acusado a Chávez de “interferir” en los asuntos de política interna de los vecinos de Venezuela. En particular, la Casa Blanca afirmó, sin pruebas, que Chávez ha apoyado al movimiento pacífico de cultivadores de coca liderados por Evo Morales y al grupo de guerrilleros izquierdistas colombianos, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Condoleezza Rice, nominada a la Secretaría de Estado, refiriéndose a Venezuela durante su audiencia de confirmación en enero de 2005, señaló que “nosotros sí que tenemos que estar vigilantes y demostrar que conocemos las dificultades que el gobierno está causando a sus vecinos”⁷³. En marzo, Roger Pardo-Maurer, subsecretario asistente para los asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Defensa de Estados Unidos, se hizo eco de las preocupaciones de Rice: “Chávez es un problema debido a que él evidentemente está usando

71. Richard Gott, “Two fingers to America”, *Guardian*, 25 de agosto de 2005.

72. Otamendi Widmark, entrevista con el autor, 28 de abril de 2005, Caracas, Venezuela.

73. “Transcript: confirmation hearing of Condoleezza Rice”, *New York Times*, 18 de enero de 2005.

su dinero del petróleo e influencia para introducir su estilo conflictivo en las políticas de otros países. Está cosechando en aquellos países cuya contextura social es más débil. En algunos casos ésta es una subversión abierta”⁷⁴. El mismo mes el Secretario Asistente de Estado, Roger Noriega, dijo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos que “estamos preocupados de que la agenda privada del presidente Hugo Chávez pueda socavar las instituciones democráticas en su país y entre sus vecinos”⁷⁵.

La Secretaria de Estado Rice y el Secretario de Defensa Rumsfeld recorrieron Sudamérica por separado a principios de 2005 en un intento de ganarse el apoyo de los gobiernos regionales en contra del hombre que Rumsfeld declaró que estaba “promoviendo el radicalismo e intentando sublevar los gobiernos democráticos de la región”⁷⁶. El problema que enfrentaba la administración Bush era que la mayoría de los gobiernos sudamericanos, incluyendo Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y Chile, no sólo mantenían buenas relaciones con Chávez sino que también simpatizaban con su Revolución Bolivariana.

En junio de 2005, a pesar de la falta de apoyo regional, Rice trajo a colación una propuesta estadounidense invitando a la creación de un nuevo cuerpo en la OEA para monitorizar la democracia en el hemisferio occidental. La misión del nuevo cuerpo sería asegurar que líderes elegidos democráticamente gobernarán de forma democrática o enfrentarán una intervención de la OEA. Chávez inmediatamente respondió a la propuesta, declarando: “Si hay algún gobierno que debería ser monitorizado por la OEA ése debería ser el gobierno de Estados Unidos, un gobierno que apoya terro-

74. Andy Webb-Vidal, “Bush orders policy to ‘contain’ Chávez”, *Financial Times*, 14 de marzo de 2005.

75. Roger E. Noriega, “Assistant Secretary Noriega’s statement before the Senate Foreign Relations Committee”, Departamento de Estado de Estados Unidos, 2 de marzo de 2005.

76. Secretario Donald Rumsfeld, “Hemisphere’s security tied to CAFTA’s passage”, *Duluth News Tribune*, 11 de junio de 2005.

ristas, invade naciones, pisotea a su propio pueblo y busca instalar una dictadura global”⁷⁷. La mayoría de las naciones latinoamericanas, incluso Brasil, Argentina y México, percibiendo la propuesta estadounidense como un intento poco velado de establecer el marco para una intervención en Venezuela, la rechazaron firmemente. Conociendo el historial de intervenciones de Washington en la región, los líderes latinoamericanos se comprometieron a apoyar la política de no intervención de la OEA a menos que fuera a petición del propio gobierno.

También en junio de 2005, protestas anti-neoliberales de mineros, campesinos y grupos de indígenas en Bolivia llevaron a la renuncia del presidente Carlos Mesa. La administración Bush sugirió que Chávez estaba detrás de la crisis cuando Noriega, asistente del Secretario de Estado, declaró: “La influencia de Chávez en Bolivia ha sido evidente desde el principio”⁷⁸. Ciertamente Evo Morales, el líder de las protestas, es un confeso admirador de Chávez, y los mineros bolivianos demandaron que el gobierno emulara Venezuela nacionalizando el petróleo y el gas del país. Existe una gran diferencia, sin embargo, entre “interferencia” e “influencia”⁷⁹. El antiguo Presidente boliviano Mesa declaró, después de su renuncia, que no había visto evidencias de que Venezuela hubiese intervenido en la crisis⁸⁰. Por su parte, Chávez culpó de los problemas bolivianos a las políticas neoliberales impuestas por el FMI que han provocado penurias económicas a la mayoría de los bolivianos.

Dada la historia de intervenciones estadounidense en Latinoamérica, las acusaciones a Chávez por parte de la administración

77. Kessler, “Rice urges OAS to back democracy”, *Washington Post*, 6 de junio de 2005.

78. Jane Bussey, “Washington and Venezuela trade barbs over Bolivia at OAS conference in Fort Lauderdale”, *Miami Herald*, 7 de junio de 2005.

79. Teo Ballvé, “Is Venezuela the new Cuba?”, *NACLA Report on the Americas*, julio/agosto de 2005.

80. “US behind Bolivia crisis - Chávez”, *BBC News*, 13 de junio de 2005.

Bush se han convertido en un caso de la cazuela que llama negro al caldero. Rodríguez Araque, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, advirtió a la OEA, muchos meses antes de la crisis boliviana, de la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en Venezuela basado en las repetidas críticas de la administración Bush hacia Chávez:

Lo absurdo de las acusaciones levantadas contra nuestro gobierno no nos molestaría en lo más mínimo si una gran cantidad de otros hechos no existieran para probar que cuando se hacen tales declaraciones, es porque, tarde o temprano, les seguirá un ataque. Esto fue lo que ocurrió cuando estimularon el golpe contra el gobierno en abril de 2002, y también contra el ataque a la industria petrolera y la economía venezolana en diciembre del mismo año. Esto es lo que pasó con Allende. Esto es lo que pasó en la República Dominicana. Es lo que pasó en Guatemala y otros incontables casos. Por esta misma razón, no podemos desclasificar información de nuestros servicios de inteligencia relacionadas con la eliminación física de nuestro Presidente, el mismo hombre que ha sido legitimado cada vez que ha estado sujeto al escrutinio del pueblo venezolano⁸¹.

La política de la administración Bush hacia Venezuela recuerda misteriosamente el respaldo de Estados Unidos al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y Salvador Allende en Chile en 1973, elegidos democráticamente, a los que se refería Rodríguez Araque. Tanto Arbenz como Allende implementaron políticas sociales y económicas que beneficiaban a los pobres. Estas políticas incluían imponer estrictas regulaciones a las compañías extranjeras, interfiriendo con los intereses económicos estadounidenses. En ambos casos, Estados Unidos respondió lanzando cam-

81. Rodríguez Araque, "Canciller de la República Bolivariana de Venezuela ...".

pañías de propaganda para demonizar a los líderes elegidos democráticamente. En Chile, la CIA financió una huelga dirigida por las administraciones para paralizar la economía del país. Entonces el gobierno estadounidense apoyó los golpes que finalmente derrocaron a Arbenz y a Allende. Las resultantes dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos inmediatamente rescindieron las reformas económicas y sociales. Finalmente, en Chile, la brutal dictadura respaldada por Estados Unidos del General Augusto Pinochet introdujo el neoliberalismo en América Latina bajo la tutoría de los *Chicago boys*, un grupo de discípulos del economista estadounidense Milton Friedman.

En agosto de 2005, el evangelista cristiano Pat Robertson, un antiguo candidato republicano a la presidencia y fundador de la Coalición Cristiana de América, confirmó las preocupaciones del Ministro del Exterior de Venezuela Rodríguez Araque con respecto a la “posible eliminación física de nuestro Presidente”. Durante una emisión televisiva de su programa religioso, *The 700 Club*, Robertson aclaró la actitud de los conservadores de Estados Unidos hacia la Revolución Bolivariana de Chávez cuando hizo un llamamiento al asesinato del líder venezolano. El evangelista dijo a más de un millón de televidentes que “si [Chávez] piensa que nosotros estamos tratando de asesinarlo, yo pienso que nosotros realmente debemos ir y hacerlo. Esto es mucho más barato que iniciar una guerra”. Robertson vinculó los intereses energéticos de Estados Unidos a su llamada a la eliminación de Chávez: “Y sin ninguna duda, este peligroso enemigo del Sur, controla una enorme piscina de petróleo, que nos puede lastimar mucho. Tenemos la posibilidad de eliminarlo, y yo creo que ha llegado el momento de poner en práctica esta posibilidad”.⁸² Mientras que Sean McCormack, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, tildó de “ina-pro-

82. “Robertson is pilloried for assassination call”, *New York Times*, 23 de agosto de 2005.

piado" el llamamiento de Robertson, no condenó al evangelista por pedir el asesinato de Chávez⁸³.

La administración Bush ha declarado en repetidas ocasiones que está especialmente preocupada por la naturaleza "autoritaria" de Chávez y su "entrometimiento" en la región. En verdad, han sido las políticas petroleras del líder venezolano, sus críticas al neoliberalismo y a la política exterior de Estados Unidos y el "mal ejemplo" que está sentando para otras naciones latinoamericanas lo que le ha convertido en la Némesis de Washington. En abril de 2005, Rice, Secretaria de Estado, aludió a la verdadera naturaleza del problema de la administración Bush con el gobierno de Chávez. Para apoyar su reclamo de que "no existían razones por las que Estados Unidos no pudiera tener buenas relaciones con gobiernos elegidos democráticamente de cualquier espectro político", Rice apuntó las buenas relaciones de Washington con los regímenes "izquierdistas" de Brasil y Chile. La Secretaria de Estado también señaló: "Pienso que en casos como los de Brasil o Chile, que son gobiernos izquierdistas, usted puede ver exitosos programas económicos, políticas económicas estables y acertadas"⁸⁴. "Las políticas económicas estables y acertadas" a las que se refería Rice eran las políticas neoliberales impuestas por el FMI y el Banco Mundial que han sido implementadas por estos dos gobiernos "izquierdistas". En otras palabras, no existe ninguna razón por la que Estados Unidos no pueda tener buenas relaciones con gobiernos elegidos democráticamente de cualquier espectro político siempre y cuando implementen las políticas neoliberales que Washington promueve. El crimen de Venezuela no es tanto que su gobierno sea izquierdista como que es anti-neoliberal, por lo que actúa en contra de los intereses políticos y económicos de Estados Unidos.

83. Sean Mc Cormack, "Daily press briefing", Departamento de Estado de Estados Unidos, 23 de agosto de 2005.

84. "Rice outlines US vision for western hemisphere", Departamento de Estado de Estados Unidos, 28 de abril de 2005.

A Rice también le faltó mencionar que la economía venezolana estaba funcionando mejor que los “muy exitosos programas económicos” de Brasil y Chile, incluso según los indicadores macroeconómicos tenidos en tan alta estima por Washington y las instituciones financieras internacionales. Después de afrontar un declive económico a causa de las huelgas generales de la oposición en el 2002 y el 2003, la economía venezolana resurgió en el 2004 con un récord de tasa de crecimiento del 17,3%, la mayor de Latinoamérica. Lo que es aún más impresionante para una nación exportadora de petróleo del Sur fue que el sector no petrolero de la economía venezolana creció en un 17,8% en comparación con la tasa de crecimiento del 8,7% de su sector petrolero⁸⁵.

El gobierno de Chávez ha alcanzado crecimiento económico no por implementar políticas neoliberales que reducen el gasto del gobierno y abren el país a las corporaciones multinacionales, sino haciendo exactamente lo contrario. Aún más importante que los indicadores macroeconómicos fue el hecho de que la calidad de vida para muchos venezolanos pobres mejoró. Según estadísticas de 2002 del Banco Mundial –los datos no gubernamentales más recientes de que se dispone– incluso en las primeras etapas de la “revolución para los pobres” de Chávez estaba marcando una diferencia según aumentaba en los registros del país el porcentaje de niños inscritos en escuelas primarias y el número de personas con acceso a agua potable⁸⁶. Un factor importante que las estadísticas no contemplan es el palpable incremento de la autoestima y la esperanza que muchos pobres venezolanos han comenzado a experimentar.

85. Venezuela's oil revenue fuels record growth", *Dow Jones Newswires*, 17 de febrero de 2005.

86. "Millennium Development Goals", Banco Mundial, abril de 2004. Las cifras del 2002 fueron las estadísticas no gubernamentales de Venezuela más recientes de que se disponía.

Conclusiones

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2004 sobre la democracia en América Latina muestra que cada vez era mayor el número de personas en la región que se desencantaban con líderes elegidos democráticamente y que no enfrentaban sus problemas económicos y sociales⁸⁷. En vez de responsabilizarse por sus constituyentes, los líderes elegidos que habían heredado enormes deudas externas y economías devastadas por dictaduras corruptas y guerras civiles más bien asumían los dictámenes del FMI y del Banco Mundial. En consecuencia, por más de dos décadas los funcionarios elegidos en América Latina estuvieron implementando las políticas neoliberales que exigían las instituciones financieras internacionales.

El resultado ha sido el incremento de la desigualdad, la inseguridad laboral debido a la expansión de la economía informal, un colapso de las redes de seguridad social y el predominio de la desilusión con la democracia en muchos países latinoamericanos. En Venezuela, la administración Chávez abandonó el modelo neoliberal y se preocupó más por el bienestar de los pobres que por el desempeño macroeconómico a la hora de elaborar las prioridades de sus políticas. Como resultado, Chávez ha sido vindicado repetidamente en las urnas y mantiene índices de aprobación más altos que cualquier otro líder del hemisferio occidental, incluyendo al Presidente Bush.

La administración Bush ha encontrado mucho más difícil denigrar a Chávez ante la comunidad internacional que demonizar a Saddam Hussein. El hecho de que Chávez fuera elegido democráticamente, tenga un enorme apoyo popular, no represente una amenaza militar para Estados Unidos y que no haya cometido crímenes contra la humanidad ha demostrado ser un problema para la Casa

87. "Informe sobre la democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos", Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, abril de 2004.

Blanca en sus intentos de aislar al líder venezolano. Han sido las políticas económicas y sociales del gobierno de Chávez las que han representado la amenaza real para los intereses estadounidenses y los sectores privilegiados de Venezuela. Y es el deseo de proteger estos intereses lo que ha llevado a la administración Bush y a las elites venezolanas a reaccionar con tanta fuerza ante la Revolución Bolivariana. Así lo señaló el científico político Terry Gibbs:

Ellos están obligados a ver el proceso de redistribución de riquezas como algo doloroso y las políticas asociadas con el mismo como "autoritarias". Es interesante que no se diga que ésta es la medicina más amarga que los ricos tienen que tragar para lograr una sociedad más justa y humana. Mientras que a los pobres, por otra parte, se les ha pedido que traguén la amarga medicina de la austeridad neoliberal durante más de dos décadas con la vana esperanza de que algo de la riqueza les salpique en algún momento⁸⁸.

Es cada vez más evidente en toda Latinoamérica que las riquezas que genera el neoliberalismo no salpican a las empobrecidas mayorías de la región. El gobierno de Chávez ha respondido a esta realidad implementando su "revolución para los pobres". Cuando esto se escribía, la Revolución Bolivariana aún se encontraba en estado de formación, pero era evidente que estaba a la vanguardia del creciente desafío al neoliberalismo en Latinoamérica. Mientras la pobreza en el 2004 en Venezuela permanecía al mismo nivel que cuando Chávez asumió el cargo cinco años antes, la calidad de vida de los venezolanos pobres ha mejorado significativamente. La Misión Barrio Adentro ha hecho que los cuidados médicos y las medicinas sean asequibles a la población pobre de la nación. Adicionalmente, la Misión Mercal suministra bienes subsidiados ase-

88. Terry Gibbs, "Business as unusual: what the Chávez era tells us about democracy under globalization", *Third World Quarterly*, 25(4): 2006, agosto de 2005.

gurando que los venezolanos pobres puedan adquirir los alimentos básicos. Debido a que la pobreza a menudo se determina por el ingreso per cápita, subsidiar cosas esenciales como la comida y los cuidados médicos pueden mejorar mucho el estándar de vida de gente pobre que, técnicamente, aún permanecen en la pobreza. A su propio estilo, Venezuela ha alcanzado parcialmente lo que el emir de Jordania Hassan, en su papel de Presidente del Club de Roma, pedía cuando preguntaba: “¿No podemos redefinir la pobreza en términos de bienestar humano en vez de en términos de dólares y centavos? Humanizar la economía y la política, poniendo el bienestar humano en el centro de la toma de decisiones políticas tanto nacionales como globales”⁸⁹.

Los propulsores de la Revolución Bolivariana afirman que asegurando que todos lo venezolanos tengan acceso a cuestiones básicas tales como comida, cuidados médicos y educación y que haciéndolos partícipes de la economía de la nación a través del establecimiento de cooperativas agrarias y manufactureras, el crecimiento económico experimentado en 2004 no sólo continuará, sino que también mejorará significativamente la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos y disminuirá las grandes desigualdades que marcaron la era neoliberal. Es demasiado temprano para determinar si el modelo Bolivariano se convertirá en una alternativa económica al neoliberalismo verdaderamente viable. Lo que sí ya es evidente, sin embargo, es que Chávez ha desafiado la doctrina tradicional bajo la cual los gobiernos del Sur ricos en petróleo manejan sus valiosos recursos naturales. Venezuela ha demostrado que el petróleo no tiene por qué ser una maldición que recaiga sobre la mayoría de la población trabajadora del país; que no sólo existe para servir a los intereses de las elites nacionales, compañías extranjeras y a las economías de las naciones ricas e industrializadas del Norte.

89. Príncipe El Hassan bin Talal, “A new world order without ideologies”, Club de Roma, 4 de febrero de 2003.

Conclusión

En la mayor parte de las dos últimas décadas, Estados Unidos ha tenido un éxito relativo imponiendo reformas neoliberales a las naciones del Sur ricas en petróleo para poder abrir sus economías y recursos a compañías energéticas transnacionales. En países en los que las reformas neoliberales no eran posibles o demostraron ser insuficientes, tales como Irak y Colombia, llevó a cabo intervenciones militares y económicas. Bajo el mandato del presidente George W. Bush, los vínculos históricos entre la política energética y la política exterior de los Estados Unidos se hicieron todavía más estrechos. La política exterior unilateral y militarista de la administración Bush ha evidenciado las grietas en el nuevo orden mundial. De hecho, ante la creciente resistencia global al proyecto neoliberal conducido por Estados Unidos, las políticas militares y económicas de la administración Bush han contribuido a un nuevo desorden mundial. Las intervenciones militares estadounidenses han desestabilizado aún más naciones que ya tenían problemas internos, mientras que el apoyo de la administración Bush a regímenes autoritarios y su insistencia en promover reformas de “libre mercado” ha incitado el descontento social entre la mayoría de los pueblos del Sur que se oponen firmemente a tales políticas.

En Irak, la administración Bush evidentemente subestimó el grado de resistencia que se derivaría de su invasión y ocupación a

esa nación. No sólo ha tenido que combatir contra una gran insurgencia local, apoyada por actividades terroristas extranjeras, sino también con la elección de un gobierno en su mayoría chiita que se inclina de forma natural a fortalecer las relaciones con Irán, adversario de Estados Unidos, y que es profundamente suspicaz sobre los designios estadounidenses a largo plazo para el país y la región. Paradójicamente, la guerra de Washington contra el terrorismo en Irak convirtió al país en un lecho singular para el terrorismo. En Asia Central, Estados Unidos casi tuvo un éxito completo en incorporar a la mayor parte de la región al sistema de capitalismo global en la década de los 90, a pesar del gran costo para la población local que ha enfrentado un dramático incremento de la pobreza. Entonces la administración Bush utilizó su guerra global contra el terrorismo para establecer una presencia militar en varias naciones de Asia Central; a pesar de todo, su apoyo a regímenes autoritarios ha conducido al descontento popular y, en algunos casos, a rebeliones.

En África Occidental, la administración Bush ha apoyado regímenes corruptos y brutales aparatos militares cuyas actividades, junto a las operaciones de las compañías petroleras extranjeras, han tenido consecuencias devastadoras para los derechos humanos y el medio ambiente en las regiones productoras de petróleo. De igual forma, en Colombia las compañías petroleras extranjeras se han beneficiado de las políticas estadounidenses llevadas a cabo bajo la ambigua bandera de la guerra contra las drogas y el terrorismo, lo que contribuyó a la peor catástrofe de los derechos humanos en el hemisferio occidental.

Mientras que la oposición a las políticas de Estados Unidos es evidente en muchas naciones, ésta es más pronunciada en Venezuela, donde el pueblo rechazó a las elites políticas y económicas del país apoyadas por Estados Unidos al elegir en 1998 a Hugo Chávez como Presidente. Chávez ha criticado abiertamente la política exterior estadounidense, particularmente el proyecto neoliberal de

Washington. También ha comenzado a modificar radicalmente la forma en la que las naciones del Sur ricas en petróleo manejan sus recursos naturales. Como consecuencia, Chávez se ha convertido en un símbolo de esperanza para las amplias masas empobrecidas de la región, que han sufrido dos décadas de neoliberalismo. No es sorprendente que Chávez haya provocado la indignación de la administración Bush, que ha empleado diversas tácticas para intentar conseguir un cambio de régimen en Venezuela y para erradicar su inoportuno experimento de justicia económica y social antes de que se extienda el contagio.

Desde el final de la guerra fría, Estados Unidos ha tenido éxito al usar reformas neoliberales impuestas por el FMI para presionar a muchas naciones del Sur ricas en recursos para que firmen contratos a favor de las corporaciones transnacionales. En Kazajistán, las compañías petroleras pagan entre el 2 y el 6% por barril en concepto de derechos. En Colombia pagan el 8%, excepto en dos de los yacimientos del país. En agudo contraste, el gobierno anti-neoliberal venezolano cobra por derechos entre el 20 y el 30% por barril, lo que, debemos señalar, es similar al 25% que las compañías petroleras que operan en Alaska tienen que pagar al gobierno estadounidense¹. Por todo ello, el aumento de las ganancias estatales de Venezuela ha permitido a la administración Chávez financiar programas económicos y sociales dirigidos a satisfacer las necesidades de la mayor parte del pueblo. Por supuesto, la soberanía económica que permite a un gobierno nacional aumentar sus ganancias no se traduce automáticamente en que esas ganancias se distribuyan equitativamente. En el pasado, muchos gobiernos nacionalistas en el Sur global hicieron poco para ayudar a la mayor parte de sus

1. "Alaska Petroleum Taxes", División de Impuestos, Estado de Alaska, 20 de noviembre de 2005. En Alaska, las compañías petroleras pagan unas tasas de derecho del 12,5% sobre los yacimientos en los primeros cinco años y un 15% después. Además pagan un 12% de impuestos sobre producción, lo cual es otra forma de derechos.

poblaciones, que subsisten en la pobreza. En su lugar, han servido a los intereses de las elites nacionales. La soberanía económica debe estar acompañada por un sistema democrático que refleje las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos de un país².

Desde la perspectiva de Washington, a pesar de la retórica oficial estadounidense que promueve la democracia y el desarrollo, la soberanía económica y la democracia participativa en las naciones del Sur ricas en petróleo generalmente entran en conflicto con los intereses económicos estadounidenses, como se evidencia en los casos analizados en este libro. La dependencia estadounidense del combustible fósil no renovable para saciar su siempre creciente sed de energía ha colocado a Estados Unidos en una dirección en la que colisionará con China en algún momento, cuyo surgimiento como una potencia económica global puede conducir a un mundo bipolar en las siguientes décadas.

La administración Bush ha optado por una política energética nacional que no es sostenible desde el punto de vista económico ni del medio ambiente. Según se consumen las reservas mundiales de combustible fósil no renovable, los precios del petróleo, el gas y la hulla aumentarán inevitablemente. En consecuencia, la dependencia estadounidense de los combustibles fósiles no renovables disparará el costo de la gasolina, la electricidad y la calefacción hasta el punto de que no seguirán siendo económicamente sostenibles. Algunos estudios plantean que la producción de petróleo alcanzará un máximo en el 2012 o poco después, y que los suministros comenzarán a escasear para el 2050. Tal escenario hace evidente que las fuentes alternativas de energía tienen que ser desarrolladas, inevitablemente, en un futuro no muy lejano. Añadiendo otra dimensión a la crisis, como confirman las evidencias, la continua quema de combustible fósil es cada vez más devastadora para el

2. Terry Gibbs, "Business as unusual: what the Chávez era tells us about the theory and practice of democracy under globalization", artículo sin publicar, agosto de 2005.

medio ambiente. Si Estados Unidos, China, India y otros mantienen sus actuales tasas de incremento con respecto al uso de combustible fósil, no hay forma de predecir cuán irreparable será el daño ambiental para cuando se terminen las reservas mundiales de combustible fósil.

De manera dramática, parece poco probable que se realice, más pronto que tarde, una reevaluación sustancial de las políticas energéticas estadounidenses mientras las diversas administraciones mantengan sus estrechos vínculos con las compañías energéticas estadounidenses. Si esto fuera a ocurrir, tal reevaluación llevaría probablemente a que Estados Unidos intensifique sus esfuerzos para desarrollar formas alternativas de energía. La tecnología para desarrollar fuentes de energías renovables seguras y limpias ya existe; el único recurso del que carecemos es la voluntad política. Entre el 2000 y el 2004, la Unión Europea aumentó su producción de electricidad eólica en cerca de 24.500 megavatios; en ese mismo período, se realizó un incremento de sólo 4.500 megavatios en Estados Unidos³. Para el 2003, el viento había suministrado el 20% de la electricidad que se emplea en Dinamarca. En agudo contraste, el viento produce menos de la mitad del 1% de la electricidad que se emplea en Estados Unidos, a pesar del hecho de que el 24% del territorio de Estados Unidos es adecuado para la obtención de energía eólica. Aún más, los expertos declaran que la energía eólica podría satisfacer más del 30% de las necesidades estadounidenses de electricidad en un costo del kilovatio hora similar al del petróleo, el carbón y el gas natural⁴. Mientras que el empleo de la energía eólica no cubriría todas las necesidades energéticas estadounidenses, ésta se podría emplear con efectividad en conjunto con otras formas renovables de energía, tales como la solar y la bioma-

3. Michael Parfit, "Future power: where will the world get its next energy fix?", *National Geographic*, agosto de 2005.

4. Dawn Levy, "Harnessing the wind: one quarter of the United States is suited for wind power production, researchers find", *Stanford Report*, 21 de mayo de 2003.

sa, de la misma forma en que se usa actualmente la combinación de petróleo, gas y carbón.

Es poco probable que se produzca una transición a fuentes renovables de energía sin intervención directa del gobierno de la forma en que ha ocurrido en la Unión Europea. Tal transición no se puede dejar a las fuerzas del mercado pues podría ser muy tarde, tanto para el medio ambiente como para los desesperados y oprimidos pobres del Sur, que son las principales víctimas de la política exterior de Washington. Lo ha señalado el físico Martin Hoffert: "La mayor parte de la tecnología moderna que ha estado sosteniendo a la economía de Estados Unidos no surgió espontáneamente de las fuerzas del mercado. Internet fue mantenida durante veinte años por los militares y diez o más años por la Fundación Nacional de Ciencia antes de que Wall Street la descubriera⁵." Hoffert advirtió que si el gobierno estadounidense no puede desarrollar fuentes alternativas de energía, probablemente se producirá un incremento del empleo de combustibles fósiles más contaminantes después de que las reservas mundiales de petróleo se hayan agotado: "Si no tenemos una política energética más eficiente, comenzaremos a usar hulla, luego esquistos, después arena con alquitrán, y habrá un continuo retroceso y en algún momento nuestra civilización colapsará. Pero no tiene que terminar de esa forma. Tenemos otras opciones"⁶.

La imposibilidad de Estados Unidos de reducir su dependencia de los combustibles fósiles lo ha llevado a implementar una política exterior que a menudo socava tanto la democracia como la economía de las naciones del Sur ricas en petróleo. Si disminuye su dependencia de los combustibles fósiles, Estados Unidos ya no necesitará una política exterior parcializada que se base en la explotación de los recursos. Para que las naciones del Sur ricas en petró-

5. Parfit, "Future power".

6. *Ibíd.*

leo obtengan plenos beneficios, este cambio debe ocurrir junto a una ruptura con las políticas que buscan incorporar forzosamente a los países a un sistema capitalista global, y que benefician principalmente a las naciones industrializadas del Norte. En su lugar, Washington podría iniciar una política exterior que apoye las democracias que prioricen las necesidades de sus ciudadanos en vez de los intereses económicos de Estados Unidos, que están muy lejos de buscar la estabilidad y la paz. Adicionalmente, debido a que el mercado mundial del petróleo no desaparecerá de la noche a la mañana, tal ruptura con las políticas estadounidenses brindaría una oportunidad a las naciones del Sur ricas en recursos de usar sus riquezas para beneficiar a sus empobrecidas poblaciones en lugar de a las elites nacionales, compañías transnacionales y a las necesidades energéticas de las naciones del Norte.

Desafortunadamente, la insistencia de la administración Bush en usar combustibles fósiles para satisfacer las necesidades energéticas estadounidenses —una posición que difícilmente será desafiada en su raíz por cualquier administración futura, sea republicana o demócrata— significa que probablemente continúen las intervenciones económicas y militares en las naciones del Sur ricas en petróleo. Indudablemente, tales intervenciones serán enfrentadas con una resistencia cada vez mayor por el surgimiento de movimientos nacionalistas enraizados étnica, cultural, religiosa e ideológicamente. Estos movimientos desafían la creencia neoliberal de que las estructuras políticas y económicas de esas naciones deben determinarse en su mayor parte por las necesidades económicas y energéticas de Estados Unidos. Como el ejemplo venezolano ha dejado claro, las naciones del Sur están buscando incrementar su soberanía, no sólo sobre sus recursos, sino también sobre todo su sistema político y económico. La forma en que Washington decida responder a estas demandas de independencia jugará un papel enorme en determinar la clase de mundo en el que viviremos durante el siglo

XXI. Por su parte, la administración Bush ha respondido con políticas intervencionistas, particularmente con vistas a asegurarse el acceso al petróleo, que sólo han exacerbado el desorden global que tan frecuentemente se produce cuando un poder hegemónico comienza a declinar.

Bibliografía

AKINER, S. *Formation of Kazakh Identity: From Tribe to Nation-state*. Royal Institute for International Affairs. London, 1995.

ARANGUREN MOLINA, M. *Mi confesión: Carlos Castaño revela sus secretos*. Editorial La Oveja Negra. Bogotá, 2001.

BAGAROV, S.; AKHMEDOV, I. Y TSALIK, S. "State oil fund of the Azerbaijan Republic" en EBEL, R. (ED.), *Caspian Oil Windfalls: Who Will Benefit?* Open Society Institute. New York, 2003.

BUXTON, J. "Economic policy and the rise of Hugo Chávez" en ELLNER, S. Y HELLINGER, D. (EDS.), *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization and Conflict*. Lynne Rienner Publishers. Boulder, CO, 2003.

EWELL, J. *Venezuela and the United States: From Monroe's Hemisphere to Petroleum's Empire*. University of Georgia Press. Athens, 1996.

HUMAN RIGHTS WATCH. *The Price of Oil: Corporate Responsibility and Human Rights Violations in Nigeria's Oil Producing Communities*. Human Rights Watch. New York, 1999.

KLEVEMAN, L. *The New Great Game: Blood and Oil in Central Asia*. Grove Press. New York, 2003.

MAIER, K. *This House Has Fallen: Nigeria in Crisis*. Westview Press. Oxford, 2002.

MOMMER, B. "Subversive oil" en ELLNER, S. Y HELLINGER, D. (EDS.), *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization and Conflict*. Lynne Rienner Publishers. Boulder, CO, 2003.

NAKASH, Y. *The Shi'is of Iraq*. Princeton University Press. Princeton, NJ, 2003.

TRIPP, C. *A History of Iraq*. Cambridge University Press. Cambridge, 2000.

TURNER, T. E. Y BROWNHILL, L. S. *Why Women are at War with Chevron: Nigerian Subsistence Struggles against the International Oil Industry*. International Oil Working Group. New York, 2003.

UNDP (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME). *Human Development Report 1993*. Oxford University Press. Oxford, 1993.

UNDP (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME). *Human Development Report 2004: Cultural Liberty in Today's Diverse World*. United Nations Development Programme. New York, 2004.

UNSC (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL). *Resolutions and Decisions of the Security Council 1986*. United Nations. New York, 1987.

Crude interventions.

CENTRAL MAIN FLOOR LANG

32520104890586

HARTFORD PUBLIC LIBRARY
500 MAIN STREET
HARTFORD, CT 06103-3075

HARTFORD PUBLIC LIBRARY
500 MAIN STREET
HARTFORD, CT 06103-3075



new
ling. Pub.

[a la izquierda]

El título inglés de este libro es significativo: *Crude Interventions*, es decir, las crudas intervenciones sobre el crudo. En efecto, se trata de un nuevo desorden mundial en el que las batallas sobre los recursos naturales adquieren un papel protagónico. La importancia del petróleo, en este escenario, está determinada por la política exterior de la primera potencia mundial en su intento de asegurar el acceso a este recurso crítico.

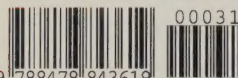
En este libro se examina la política económica y militar de la administración Bush en las diversas regiones del mundo ricas en petróleo. Con sólo el 4% de la población mundial, los EE.UU. consumen el 25% de la producción energética.



Al concentrarse en el papel de los EE.UU. en Irak, Asia Central, Africa Occidental, Colombia y Venezuela, *Crude Interventions* desvela las conexiones entre los intereses energéticos de EE.UU., la guerra contra el terrorismo, la globalización, los abusos en derechos humanos y otras innumerables injusticias sociales padecidas por los pueblos del Sur en esta frenética carrera.

Garry Leech es periodista *Colombia Journal*. También enseña mento de Ciencias Políticas de la Cape Breton y es autor de varios libros de actualidad.

ISBN 84-7884-361-2



9 788478 843619

HARTFORD
PUBLIC
LIBRARY

07-DQE-644



del
ta-
de
nas